M&A Abogados
NIT. 900623280-4

Honorable
**JUZGADO (41) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**
E.S.D.

**REFERENCIA: PROCESO PROMOVIDO POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONTRA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP Y OTROS**

**RADICACIÓN: 11001333704120220012000**

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (Cuotas partes pensionales).**

**GLORIA XIMENA ARELLANO CALDERÓN**, identificada con cédula de ciudadanía número 31.578.572 expedida en Cali, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional número 123.175 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP**, entidad pública del orden nacional, con domicilio en la ciudad de Bogotá, quien funge en este proceso en calidad de la parte demandada, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía, administrativa y patrimonio independiente, de acuerdo con lo indicado en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, persona jurídica de derecho público identificada con el NIT 900.373.913-4, de conformidad con el poder general amplio y suficiente que me fue otorgado por esta, mediante escritura pública número 172 del 17 de enero de 2023, de la Notaría Setenta y Tres (73) del Círculo de Bogotá D.C., por la cual se modificó el numeral primero de la escritura pública número 602 del 12 de febrero de 2020 de la Notaría Setenta y Tres del círculo notarial de Bogotá D.C., con el fin de señalar que la suscrita tendrá a su cargo de manera adicional representación judicial y extrajudicial en el territorio nacional, en los siguientes términos: "(…) ***PRIMERO****. Obrando en la condición indicada y con el fin de garantizar la adecuada representación judicial y extrajudicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP ante la Rama Judicial y Ministerio Público, realizando las gestiones necesarias, en los procesos o procedimientos en los cuales la Unidad intervenga como parte o tercero que se adelanten en las distintas competencias que conforman el territorio nacional en la Rama Judicial facultad ésta que se ejercerá en todas las actuaciones y diligencias que se presenten ante dichas autoridades, incluidas las audiencias de conciliación judicial y extrajudicial (…)",* por medio del presente escrito procedo a contestar la demanda con fundamento en lo siguiente:

## I. A LOS HECHOS

Con relación a los hechos fundamento de las pretensiones de la demanda, los contesto así:

**AL HECHO 1, CONTESTO.**: No me consta por varias razones: i) Es un hecho mediante el cual la parte actora se refiere a un documento ajeno, el cual no ha sido proferido por mi representada la UGPP; y ii) Es una situación ajena a mi representada la UGPP, por lo tanto, me atengo a lo que llegue a ser demostrado a través de los medios probatorios idóneos para tal fin.

**AL HECHO 2, CONTESTO.:** No me consta por varias razones: i) Es un hecho mediante el cual la parte actora se refiere a un documento ajeno, el cual no ha sido proferido por mi representada la UGPP; y ii) Es una situación ajena a mi representada la UGPP, por lo tanto, me atengo a lo que llegue a ser demostrado a través de los medios probatorios idóneos para tal fin**.**

**AL HECHO 3, CONTESTO.:** No me consta por varias razones: i) Es un hecho mediante el cual la parte actora se refiere a un documento ajeno, el cual no ha sido proferido por mi representada la UGPP; y ii) es una situación ajena a mi representada la UGPP, por lo tanto, me atengo a lo que llegue a ser demostrado a través de los medios probatorios idóneos para tal fin.

**AL HECHO 4, CONTESTO.:** No me consta, toda vez que es un hecho susceptible de comprobación y no de declaración judicial, por lo tanto, me atengo a lo que se llegue a comprobar por los medios probatorios idóneos para tal fin.

**AL HECHO 5, CONTESTO.:** No me consta, toda vez que es un hecho susceptible de comprobación y no de declaración judicial, por lo tanto, me atengo a lo que se llegue a comprobar por los medios probatorios idóneos para tal fin.

**AL HECHO 6, CONTESTO.:** No me consta, toda vez que es hecho de terceros ajeno a mi representada, situación que deberá ser demostrada por la parte demandante a través de los medios probatorios idóneos para tal fin.

**AL HECHO 7, CONTESTO.:** No me consta por varias razones: i) Es un hecho mediante el cual la parte actora se refiere a un documento ajeno, el cual no ha sido proferido por mi representada la UGPP; y ii) es una situación ajena a mi representada la UGPP, por lo tanto, me atengo a lo que llegue a ser demostrado a través de los medios probatorios idóneos para tal fin.

**AL HECHO 8, CONTESTO.:** No me consta, toda vez que es una situación ajena a mi representada la UGPP, por lo tanto, me atengo a lo que llegue a ser demostrado a través de los medios probatorios idóneos para tal fin.

**AL HECHO 9, CONTESTO.:** No me consta, toda vez que es una situación ajena a mi representada la UGPP, por lo tanto, me atengo a lo que llegue a ser demostrado a través de los medios probatorios idóneos para tal fin.

**AL HECHO 10, CONTESTO.:** No me consta, toda vez que es una situación ajena a mi representada la UGPP, por lo tanto, me atengo a lo que llegue a ser demostrado a través de los medios probatorios idóneos para tal fin.

**AL HECHO 11, CONTESTO.:** No me consta, toda vez que es un hecho susceptible de comprobación y no de declaración judicial, por lo tanto, me atengo a lo que se llegue a comprobar por los medios probatorios idóneos para tal fin.

**AL HECHO 12, CONTESTO.:** No me consta, toda vez que es un hecho susceptible de comprobación y no de declaración judicial, por lo tanto, me atengo a lo que se llegue a comprobar por los medios probatorios idóneos para tal fin.

## II. A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones, de declaraciones y de condena perseguidas por la parte demandante, por las razones que se exponen en la presente contestación y que se sintetizan en la falta de asidero jurídico, y porque mi representada ha actuado conforme lo ordenado por la ley y de buena fe. Razón por la cual me opongo a cada una de manera individual de la siguiente forma:

**A LA PRETENSIÓN PRIMERA:** Me opongo a la nulidad del artículo primero de la resolución No. 0360 de fecha 05 de abril de 1990 proferida por Caja De Previsión Social de Comunicaciones por varias razones:

i) Toda vez que resolvió reconocer y ordenar el pago a favor del señor **HUMBERTO ESPÍNDOLA CARVAJAL** pensión mensual vitalicia de jubilación, en cuantía de ($63.239.17), efectiva a partir de la fecha en que demuestra el retiro definitivo del servicio oficial.

ii) Ahora bien, de las pruebas documentales aportadas al trámite administrativo y en el acto administrativo demandado se evidencia que el señor **HUMBERTO ESPÍNDOLA CARVAJAL** prestó los siguientes servicios: Min Defensa; Cajanal (Dirección General de Aduanas); Caja de Previsión Social de Boyacá; y Telecom.

iii) Al señor **HUMBERTO ESPÍNDOLA CARVAJAL** se le aplicaron las siguientes disposiciones normativas: Decreto 1237/46; Decreto 2661/60; y Ley 33 y 62 de 1985.

iv) De conformidad al acto administrativo demandado, las cuotas parte pensionales estarán a cargo de:

- MINDEFENSA ($3.829.48)
- CAJANAL (Dirección General de Aduanas) ($1.384.24)
- CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ ($17.692.91)
- TELECOM ($40.332.54)

v) La Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom comunicó el proyecto del acto administrativo demandado Caja de Previsión Social de Boyacá hoy Departamento de Boyacá, con el fin de surtir el trámite de cuota parte pensional a esta entidad por los servicios prestados por la señora **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL**.

vi) Mediante Oficio con radicado No. 0009 con fecha 31 de enero de 1990 expedido por la extinta Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom, se procedió a consultar la cuota parte pensional a la Caja de Previsión Social de Boyacá.

vii) Mediante Oficio D.E.P. No. 020 con fecha 14 de marzo de 1990 proferido por la Caja de Previsión de Boyacá *se evidencia que la Caja de Previsión Social de Boyacá hoy Departamento de Boyacá* ***ACEPTÓ*** *la cuota parte pensional en cuantía de ($17.692.91).*

viii) Así las cosas, el acto administrativo demandado expone claramente que el valor de la pensión reconocida al señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL** estará a cargo de las entidades que concurran en la cuota parte pensional, por lo tanto, la resolución fue expedida de conformidad a la ley y el derecho, sin que por parte del Departamento de Boyacá se interpusiera recurso alguno es más **ACEPTÓ** la cuota parte pensional, así las cosas, el acto administrativo demandado goza de legalidad y firmeza.

ix) Adicionalmente la parte actora hasta el momento no ha probado causal alguna para que se declare la nulidad del acto administrativo demandado, en ese orden de ideas, la pretensión no está encaminada a prosperar.

**A LA PRETENSIÓN SEGUNDA:** Me opongo por varias razones:

i) por lo expuesto frente a la pretensión primera;

ii) Además, porque la resolución No. 1278 de fecha 29 de agosto de 1990 expedida por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom resolvió entre otras cosas, reliquidar y reajustar la pensión de jubilación reconocida al señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL.**

iii) Que fue procedente reliquidar la pensión de jubilación del peticionario, con base en los nuevos factores salariales devengados durante el último año de servicios y equivalente a la suma de ($181.767.87) incluido: sueldo, prima de navidad, semestral, anual, retiro, saturación, horas extras, dominicales; feriados; recargo nocturno; vacaciones; vacaciones en dinero.

iv) De conformidad al acto administrativo demandado, las cuotas parte pensionales se ajustaron y reajustaron en la siguiente proporción:

A CARGO DE MINDEFENSA: ($11.007.05)
CAJANAL (Dirección General de Aduanas): ($3.978.70)
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: ($50.854.61)
TELECOM: ($115.927.51)

v) La resolución demandada fue notificada personalmente y quedó debidamente ejecutoriada.

**FRENTE A LAS PRETENSIONES DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

**A LA PRETENSIÓN 1*:*** Me opongo a la condena de restablecimiento del derecho por las razones expuestas frente a la pretensión 1 y 2 de nulidad.

**A LA PRETENSIÓN 2:** Me opongo a la pretensión de restablecimiento del derecho por las razones expuestas frente a la pretensión 1 y 2 de nulidad.

**A LA PRETENSIÓN 3:** Me opongo a la pretensión de restablecimiento del derecho por las razones expuestas frente a la pretensión 1 y 2 de nulidad de nulidad.

**A LA PRETENSIÓN 4:** Me opongo a la pretensión de restablecimiento del derecho por las razones expuestas frente a la pretensión 1 y 2 de nulidad.

**A LA PRETENSIÓN 5:** Me opongo a la pretensión de restablecimiento del derecho por las razones expuestas frente a la pretensión 1 y 2 de nulidad de nulidad.

**A LA PRETENSIÓN 6:** Me opongo en virtud del principio general del derecho que reza que la suerte de lo principal le seguirá a lo accesorio, entonces si no hay lugar a que se declare la nulidad de los actos administrativos demandados, por tal razón no es procedente a que se condene a la indexación de suma alguna pretendida en la presente pretensión.

**A LA PRETENSIÓN 7*:*** Me opongo a la pretensión, por aplicación del Principio de la Buena Fe de mi representada, en la medida en que las actuaciones administrativas y en el curso de este proceso, se han proferido con base en ese principio y con apego a la normatividad aplicable al caso.

## III. EXCEPCIONES PREVIAS

- **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**

Como se observa en los hechos de la demanda y las pruebas documentales que obran dentro del proceso de la referencia, mediante oficio No. 000909 con fecha 31 de enero de 1990, la extinta **CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES –CAPRECOM**- realizo consulta de cuota parte pensional a la extinta **CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BOYACÁ (hoy DEPARTAMENTO DE BOYACÁ)**, del proyecto de Resolución "*Por medio de la cual se reconoce una pensión mensual vitalicia de jubilación"* a favor del señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL.**

Conforme a las pruebas aportadas por el demandante **CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BOYACÁ LIQUIDADA**, mediante oficio No D.E.P.020 con fecha 14 de marzo de 1990, dio por aceptada la cuota parte pensional asignada por la extinta **CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES – CAPRECOM.**

Conforme al artículo 2.2.10.12.3 del Decreto 1833 de 2016, la demanda aquí dirigida contra mi representada carece de legitimación en la causa como quiera que la norma anterior citada, las cuotas partes pensionales reconocidas a favor de dicha entidad con anterioridad al 8 de noviembre de 2011 están a cargo del Patrimonio Autónomo de Remanentes de CAPRECOM, en este caso **LA FIDUPREVISORA**. Véase la normatividad citada:

> *"En ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000, modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal EICE) en liquidación constituirá un Patrimonio Autónomo para la administración de las cuotas partes pensionales que hayan quedado a su cargo o que hayan sido reconocidas a favor de dicha entidad, derivadas de solicitudes radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011, para lo anterior, se entregará al Patrimonio Autónomo la información y documentación requerida y al Ministerio de Salud y Protección Social, copia de dicha información."*

Por las anteriores razones debe prosperar la presente excepción de falta legitimada en la causa por pasiva.

- **NO COMPRENDER LA DEMANDA TODOS LOS LITIS CONSORTE NECESARIOS**

Teniendo en cuenta que las cuotas partes pensionales que se reclaman en este proceso fueron con anterioridad al 8 de noviembre de 2011, está obligación no recae sobre mi representada la UGPP, sino exclusivamente al Patrimonio Autónomo de Remanentes de CAPRECOM, en este caso la **FIDUPREVISORA**, en consecuencia se hace necesario vincular en calidad de Litisconsorte Necesario a la **FIDUPREVISORA**, en aras de garantizar el debido proceso y futuras nulidades procesales.

- **COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA** – (Se presenta como excepción previa y excepción de fondo)

Como se observa en los hechos de la demanda y las pruebas documentales que obran dentro del proceso de la referencia, mediante oficio No. 000909 con fecha 31 de enero de 1990, la extinta **CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES –CAPRECOM**- realizo consulta de cuota parte pensional a la extinta **CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BOYACÁ (hoy DEPARTAMENTO DE**

**BOYACÁ)**, del proyecto de Resolución *"Por medio de la cual se reconoce una pensión mensual vitalicia de jubilación"* a favor del señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL.**

Conforme a las pruebas aportadas por el demandante **CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BOYACÁ LIQUIDADA** mediante oficio No D.E.P.020 con fecha 14 de marzo de 1990, dio por aceptada la cuota parte pensional asignada por la extinta **CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES – CAPRECOM,** por encontrarse ajustada a derecho, circunstancia por la cual los actos administrativos de los cuales se pretende la nulidad, se encuentran en firme como quiera que se aceptó de manera expresa el contenido a través del oficio citado, y con ello se renunció a ejercer cualquier medio de control, como quiera que no se interpusieron los correspondientes recursos, así como no se ejercieron los medios de control correspondientes dentro del término dispuesto para ello concomitante a la expedición de los actos.

Así las cosas, han transcurrido más de 20 años desde la expedición y la consolidación de la firmeza de los actos administrativos de los que aquí se pretende la nulidad, por lo que se han consolidado los efectos jurídicos de dichos actos administrativos y en ese orden los mismos hicieron tránsito a cosa juzgada al haber sido aceptados de forma expresa por la **CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BOYACÁ LIQUIDADA**, a través del oficio mencionado.

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T-382 de 1995 se pronunció al respecto citando Sentencia del 6 de mayo de 1992 de la Sección Segunda del Consejo de Estado:

> *"Conviene aclarar que la estabilidad del acto creador de derechos alcanza a toda la administración en el doble sentido de que el acto administrativo de cualquier órgano o ente administrativo pueda ser "cosa juzgada administrada", sea un ente autárquico, empresa del Estado, y de que en la medida en que se ha producido la estabilidad, el acto no puede ser revocado por el mismo órgano que lo dictó por un órgano administrativo superior; en otras palabras, que la limitación a la facultad de revocar, modificar o sustituir un acto no sólo al órgano o ente emisor del mismo, sino a toda la administración*

- **FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA**

La presente excepción tiene como fundamento la falta de agotamiento de la actuación administrativa por parte de la parte demandante, lo anterior con fundamento legal en la ley 1437 de 2011 y sustento jurisprudencial en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 54001233100020120009201 (22184), Jul. 13/17.

También es preciso recordar textualmente lo enunciado por el artículo 76 del CPACA resuelve la necesidad de interponer los recursos en el término para que sean efectivamente surtidos los trámites concernientes al proceso administrativo y artículo 87 resuelve lo relacionado con la firmeza de los actos administrativos.

> *(…)* ***CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.***
> ***ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN.*** *Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.*

*Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.*
*El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda* ***será obligatorio para acceder a la jurisdicción****.*
*Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.*
***ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.*** *Los actos administrativos quedarán en firme:*
*1.* ***Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.***
*2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.*
*3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.*
*4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.*
*5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.*"

Lo cierto es que en la actualidad subsisten unos actos administrativos en firme que son la resolución No. 0360 de 5 de abril de 1990 y la No. 1278 con fecha 29 de agosto 1990 expedida por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom**,** frente al cual la parte demandante **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** no interpuso ningún recurso o demanda administrativa que controvirtiera su legalidad.

En ese sentido se constituye ineptitud de la demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa, aun cuando mi representada dio lugar a agotar los recursos que por ley le son otorgados al demandante y este en ningún momento los interpuso. Lo anterior evidencia una clara negligencia del demandante y por consiguiente una falta de agotamiento de la vía gubernativa.

Lo anterior evidencia que por la negligencia del demandante fue imposible agotar el procedimiento administrativo o vía gubernativa, lo que hace imposible iniciar una acción judicial.

- **PRESCRIPCIÓN (se propone de fondo y previa)**

Sí eventualmente hubiese lugar al reconocimiento de las aducidas cuotas partes pensionales que reclama el demandante, debe prosperar la excepción de prescripción, toda vez que trascurrieron más de tres (3) años siguientes al pago de la mesada pensional.

Lo anterior, tiene sustento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, que indica:

"(…) ***ARTÍCULO 4o. COBRO DE INTERESES POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO.*** *Las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales causarán un interés del DTF entre la fecha de pago de la mesada pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad concurrente. El derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva. La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para cada mes de mora. (…)"*

Atendiendo a la normatividad anterior, se debe indicar que la solicitud de recobro de las cuotas partes pensionales **prescribieron a los tres (3) años siguientes de la fecha en que se realizó el primer pago de la mesada pensional** respecto del señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL**.

Lo anterior tiene sustento en la sentencia proferida el 20 de agosto de 2017 por el Honorable Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejero Ponente Doctora Stella Jeannette Carvajal Basto, radicado 217641.

En está ocasión el Consejo de Estado determinó, que para establecer desde cuándo opera la prescripción de las cuotas partes pensionales, se debe tomar desde la fecha en que se expidió el título ejecutivo que está conformado por el acto administrativo que le reconoció el derecho pensional.

Ahora bien, revisando el caso de la señora relacionado por la parte demandante, se logró determinar que en el mismo operó el fenómeno de la prescripción, pues superaron los tres (3) años exigidos por la Ley.

> *"1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Radicado número 00800123310002012002140l. Consejero Ponente STELLA JEANNETE CARVAJAL BASTOS. "Por lo tanto, la regla de prescripción aplicable a las cuotas partes causadas con anterioridad a la Ley 1066 de 2006 es el Código Civil, art. 2536 en su redacción original y con la modificación introducida por el artículo 8º de la Ley 791 de 2002, quedando como términos de prescripción los siguientes: Cuotas partes causadas con anterioridad al 27 de diciembre de 2002: prescribirán en diez (10) años. Cuotas partes causadas entre el 27 de diciembre de 2002, fecha de entrada en vigencia de la ley 791 de 2002 y el 29 de julio de 2006, fecha de entrada en vigencia de la ley 1066 de 2006: prescribirán en cinco (5) años corridos a partir de la existencia de la obligación. Cuotas partes causadas con posterioridad al 29 de julio de 2006, prescribirán en tres (3) años corridos a partir de la existencia de la obligación. El documento que se debe tener en cuenta para efectos del cómputo del término de prescripción es el mandamiento de pago, por cuanto este se notificó el 8 de febrero de 2010, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006, motivo por el cual resulta aplicable el artículo 818 del Estatuto Tributario, según el cual, el término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, como en efecto ocurrió en este caso… La Sala reitera que "el título ejecutivo de las cuotas partes pensionales está conformado por el acto administrativo en el que se reconoce el derecho a la pensión y el acto administrativo que liquide las cuotas partes pensionales respecto de las mesadas pensionales causadas y pagadas que no estén prescritas."*

De manera que, para establecer si determinadas cuotas partes pensionales son exigibles o no, es necesario verificar la existencia de la resolución de reconocimiento de la pensión, si se hicieron los pagos de las respectivas mesadas pensionales, la fecha en que se hicieron esos pagos y, a partir de esa fecha, contabilizar el término de prescripción. Luego, en criterio de esta Sala y bajo los argumentos expuestos, este es el término de prescripción de la obligación que ejecutivamente se cobra, que corre individualmente para cada cuota parte, y se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

## IV. EXCEPCIONES DE MÉRITO O DE FONDO

- **PRESCRIPCIÓN (se propone de fondo y previa)**

Se desarrolla la presente excepción conforme lo expuesto frente a la excepción previa.

- **INEXISTENCIA DEL DERECHO – ACTO ADMINISTRATIVO EN FIRME – EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL NO SE OPUSO A LA CUOTA PARTE PENSIONAL – EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ACEPTÓ LA CUOTA PARTE PENSIONAL.**

Es pertinente mencionar que toda vez que resolvió reconocer y ordenar el pago a favor del señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL** una pensión mensual vitalicia de jubilación, en cuantía de ($63.239.17), efectiva a partir de la fecha en que demuestra el retiro definitivo del servicio oficial.

Ahora bien, de las pruebas documentales aportadas al trámite administrativo y en el acto administrativo demandado se evidencia que el señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL** prestó los siguientes servicios: Mindefensa desde el 27 de abril de 1959 hasta el 1 de noviembre de 1960 // Cajanal (Dirección General de Aduanas) desde 15 de mayo de 1963 hasta el 1 de diciembre de 1963;Caja de Previsión Social de Boyacá desde el 15 de agosto de 1965 hasta 16 de enero de 1971 y desde 15 de febrero de 1971 hasta el 10 de septiembre de 1972; y Telecom desde el 15 de diciembre de 1972 hasta el 22 agosto de 1989.

Al señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL** se le aplicaron las siguientes disposiciones normativas: Decreto 1237 de 1946; Decreto 2661 de 1960; y Ley 33 y 62 de 1985.

De conformidad al acto administrativo demandado, las cuotas parte pensionales estarán a cargo de:

- MINDEFENSA ($3.829.48)
- CAJANAL (Dirección General de Aduanas) ($1.384.24)
- CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ ($17.692.91)
- TELECOM ($40.332.54)

La Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom comunicó el proyecto del acto administrativo demandado Caja de Previsión Social de Boyacá hoy Departamento de Boyacá, con el fin de surtir el trámite de cuota parte pensional a esta entidad por los servicios prestados por la señora **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL**.

Mediante Oficio con radicado No. 0009 con fecha 31 de enero de 1990 expedido por la extinta Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom, se procedió a consultar la cuota parte pensional a la Caja de Previsión Social de Boyacá.

Mediante Oficio D.E.P. No. 020 con fecha 14 de marzo de 1990 proferido por la Caja de Previsión de Boyacá *se evidencia que la Caja de Previsión Social de Boyacá hoy Departamento de Boyacá* ***ACEPTÓ*** *la cuota parte pensional en cuantía de ($17.692.91).*

Así las cosas, el acto administrativo demandado expone claramente que el valor de la pensión reconocida al señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL** estará a cargo de las entidades que concurran en la cuota parte pensional, por lo tanto, la resolución fue expedida de conformidad a la ley y el derecho, sin que por parte del Departamento de Boyacá se interpusiera recurso alguno es más **ACEPTÓ** la cuota parte pensional, así las cosas, el acto administrativo demandado goza de legalidad y firmeza.

Adicionalmente la parte actora hasta el momento no ha probado causal alguna para que se declare la nulidad del acto administrativo demandado, en ese orden de ideas, la pretensión no está encaminada a prosperar

**Por otro lado**, la resolución No. 1278 de fecha 29 de agosto de 1990 expedida por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom resolvió entre otras cosas, reliquidar y reajustar la pensión de jubilación reconocida al señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL.**

Que fue procedente reliquidar la pensión de jubilación del peticionario, con base en los nuevos factores salariales devengados durante el último año de servicios y equivalente a la suma de ($181.767.87) incluido: sueldo, prima de navidad, semestral, anual, retiro, saturación, horas extras, dominicales; feriados; recargo nocturno; vacaciones; vacaciones en dinero.

De conformidad al acto administrativo demandado, las cuotas parte pensionales se ajustaron y reajustaron en la siguiente proporción:

A CARGO DE MINDEFENSA: ($11.007.05)
CAJANAL (Dirección General de Aduanas): ($3.978.70)
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: ($50.854.61)
TELECOM: ($115.927.51)

La resolución demandada fue notificada personalmente y quedó debidamente ejecutoriada.

Así las cosas, los actos administrativos demandados exponen claramente que el valor de la pensión reconocida al señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL** estará a cargo de las entidades que concurran en la cuota parte pensional, por lo tanto, la resolución fue expedida de conformidad a la ley y el derecho, sin que por parte del Departamento de Boyacá se interpusiera recurso alguno, además la cuota parte pensional fue aceptada, así las cosas, los actos administrativos demandados gozan de legalidad y firmeza.

Finalmente, la parte actora hasta el momento no ha probado causal alguna para que se declare la nulidad de los actos administrativos demandados, en ese orden de ideas, las pretensiones de la demanda no están encaminadas a prosperar.

- **PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP.**

Los actos administrativos se encuentran amparados por la presunción de legalidad y le corresponde a la parte demandante asumir la carga de la prueba para desvirtuar la mencionada presunción, para lo cual, el CPACA, establece claramente las causales, debiéndose aclarar que las mencionadas causales, deben probarse.

En ese sentido, el acto administrativo es la forma en que el Estado manifiesta su voluntad y de conformidad con la ley, esta manifestación de voluntad tiene presunción de legalidad. Dicha presunción cobija tanto las formalidades requeridas para su formación, como la materia objeto del acto en lo que atañe a los fundamentos de hecho y de derechos.

➢ **BUENA FE**

Mi representada, en la presente contestación ha obrado de buena fe, en estricto cumplimiento de la Constitución Política y de la Ley.

➢ **INNOMINADA**

Todas aquellas que por no requerirse formulación expresa y que sean encontradas en el trámite del proceso, deban ser declaradas por el señor juez.

## V. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE LA DEFENSA

1. Como ya se ha señalado con anterioridad, en el caso sub examine los actos administrativos se encuentran debidamente ejecutoriados y en firme.

2. Es pertinente mencionar que toda vez que resolvió reconocer y ordenar el pago a favor del señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL** una pensión mensual vitalicia de jubilación, en cuantía de ($63.239.17), efectiva a partir de la fecha en que demuestra el retiro definitivo del servicio oficial.

3. Ahora bien, de las pruebas documentales aportadas al trámite administrativo y en el acto administrativo demandado se evidencia que el señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL** prestó los siguientes servicios: Mindefensa desde el 27 de abril de 1959 hasta el 1 de noviembre de 1960 // Cajanal (Dirección General de Aduanas) desde 15 de mayo de 1963 hasta el 1 de diciembre de 1963;Caja de Previsión Social de Boyacá desde el 15 de agosto de 1965 hasta 16 de enero de 1971 y desde 15 de febrero de 1971 hasta el 10 de septiembre de 1972; y Telecom desde el 15 de diciembre de 1972 hasta el 22 agosto de 1989.

4. Al señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL** se le aplicaron las siguientes disposiciones normativas: Decreto 1237 de 1946; Decreto 2661 de 1960; y Ley 33 y 62 de 1985.

5. De conformidad al acto administrativo demandado, las cuotas parte pensionales estarán a cargo de:

    - MINDEFENSA ($3.829.48)
    - CAJANAL (Dirección General de Aduanas) ($1.384.24)
    - CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ ($17.692.91)
    - TELECOM ($40.332.54)

6. La Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom comunicó el proyecto del acto administrativo demandado Caja de Previsión Social de Boyacá hoy Departamento de Boyacá, con el fin de surtir el trámite de cuota parte pensional a esta entidad por los servicios prestados por la señora **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL**.

7. Mediante Oficio con radicado No. 0009 con fecha 31 de enero de 1990 expedido por la extinta Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom, se procedió a consultar la cuota parte pensional a la Caja de Previsión Social de Boyacá.

8. Mediante Oficio D.E.P. No. 020 con fecha 14 de marzo de 1990 proferido por la Caja de Previsión de Boyacá *se evidencia que la Caja de Previsión Social de Boyacá hoy Departamento de Boyacá* ***ACEPTÓ*** *la cuota parte pensional en cuantía de ($17.692.91).*

9. Así las cosas, el acto administrativo demandado expone claramente que el valor de la pensión reconocida al señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL** estará a cargo de las entidades que concurran en la cuota parte pensional, por lo tanto, la resolución fue expedida de conformidad a la ley y el derecho, sin que por parte del Departamento de Boyacá se interpusiera recurso alguno es más **ACEPTÓ** la cuota parte pensional, así las cosas, el acto administrativo demandado goza de legalidad y firmeza.

10. Adicionalmente la parte actora hasta el momento no ha probado causal alguna para que se declare la nulidad del acto administrativo demandado, en ese orden de ideas, la pretensión no está encaminada a prosperar

11. **Por otro lado**, la resolución No. 1278 de fecha 29 de agosto de 1990 expedida por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom resolvió entre otras cosas, reliquidar y reajustar la pensión de jubilación reconocida al señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL.**

12. Que fue procedente reliquidar la pensión de jubilación del peticionario, con base en los nuevos factores salariales devengados durante el último año de servicios y equivalente a la suma de ($181.767.87) incluido: sueldo, prima de navidad, semestral, anual, retiro, saturación, horas extras, dominicales; feriados; recargo nocturno; vacaciones; vacaciones en dinero.

13. De conformidad al acto administrativo demandado, las cuotas parte pensionales se ajustaron y reajustaron en la siguiente proporción:

    A CARGO DE MINDEFENSA: ($11.007.05)
    CAJANAL (Dirección General de Aduanas): ($3.978.70)
    CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: ($50.854.61)
    TELECOM: ($115.927.51)

14. La resolución demandada fue notificada personalmente y quedó debidamente ejecutoriada.

15. Así las cosas, los actos administrativos demandados exponen claramente que el valor de la pensión reconocida al señor **HUMBERTO ESPINDOLA CARVAJAL** estará a cargo de las entidades que concurran en la cuota parte pensional, por lo tanto, la resolución fue expedida de conformidad a la ley y el derecho, sin que por parte del Departamento de Boyacá se interpusiera recurso alguno, además la cuota parte pensional fue aceptada, así las cosas, los actos administrativos demandados gozan de legalidad y firmeza.

16. Finalmente, la parte actora hasta el momento no ha probado causal alguna para que se declare la nulidad de los actos administrativos demandados, en ese orden de ideas, las pretensiones de la demanda no están encaminadas a prosperar.

17. Por otro lado, la parte actora quiere olvidar la obligación de las cuotas partes pensionales, debate que fue cerrado con el pronunciamiento del H. Corte Constitucional mediante la sentencia C-895 de 2009 en donde se estableció que:

> *"Las cuotas partes pensionales son un importante soporte financiero para la seguridad social en pensiones, con un origen que antecede al sistema de seguridad social previsto en la ley 100 de 1993, y que representan un esquema de concurrencia para el pago de las mesadas pensionales, a prorrata del tiempo laborado en diferentes entidades o de las contribuciones efectuadas, que constituyen obligaciones de contenido crediticio a favor de la entidad encargada de reconocer y pagar la pensión, con las siguientes características: (i) se determinan en virtud de la ley, mediante un procedimiento administrativo en el que participan las diferentes entidades que deben concurrir al pago; (ii) se consolidan cuando la entidad responsable reconoce el derecho pensional; y (iii) se traducen en obligaciones de contenido crediticio una vez se realiza el pago de la mesada al ex trabajador."*

18. En ese orden de ideas, la obligación de cuotas partes pensionales es una obligación de contenido crediticio entre las entidades que participan del trámite, pero que no pertenecen al ámbito del reconocimiento pensional y por lo tanto no pueden ser trasladadas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP para su gestión.

19. **De otro modo.-** Sí eventualmente hubiese lugar al reconocimiento de las aducidas cuotas partes pensionales que reclama la parte demandante, debe prosperar la excepción de prescripción, toda vez que trascurrieron más de tres (3) años siguientes a los pagos de la mesada pensional.

20. Lo anterior, tiene sustento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, que indica:

> "(…) ***ARTÍCULO 4o. COBRO DE INTERESES POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO.*** *Las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales causarán un interés del DTF entre la fecha de pago de la mesada pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad concurrente. El derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva. La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para cada mes de mora. (…)"*

21. Tal artículo fue declarado exequible por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C 895 de 2009, en la que señaló:

> *"El artículo 4º de la Ley 1066 de 2006 establece que el derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada respectiva, esto es, que el derecho al recobro de las cuotas partes pensionales, así como la obligación correlativa de su pago por cada una de las entidades concurrentes, si bien sólo nace cuando el desembolso de cada mesada se ha hecho efectivo al jubilado, son razones de orden público y seguridad jurídica las que exigen que estas obligaciones tengan un plazo extintivo o liberatorio, entendiéndose que lo se extingue es el derecho subjetivo de la entidad a recobrar, sin que ello signifique la autorización a un destino diferente de los recursos de la*

*seguridad social, ni el desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional."*

22. Me permito extraer de la providencia precitada los cuatro argumentos centrales de la Corte Constitucional para considerar exequible la prescripción del derecho de recobro de las cuotas partes pensionales.

> *"En primer lugar, es conveniente recordar que el precepto bajo examen fue incluido por el Congreso de la República como respuesta a dos necesidades puntuales: (i) definir cuál era la tasa de interés exigible durante el tiempo transcurrido entre el pago de la mesada pensional y la fecha del reembolso de la cuota parte de cada entidad, y (ii) precisar el término de prescripción de dichas obligaciones. En este sentido, aunque la norma no fue propuesta en el proyecto inicial presentado por el Gobierno, sí fue incluida como un artículo nuevo en la ponencia para primer debate en Cámara, es decir, al iniciar el trámite legislativo (…)*
>
> *En segundo lugar, es necesario diferenciar las cuotas partes pensionales y el derecho al recobro de las mesadas. Las cuotas partes constituyen el soporte financiero para la seguridad social en pensiones, sustentado en el concepto de concurrencia, mientras que el recobro es un derecho crediticio a favor de la entidad que ha reconocido y pagado una mesada pensional, quien puede repetir contra las demás entidades obligadas al pago a prorrata del tiempo laborado o de los aportes efectuados. (…)*
>
> *En tercer lugar, la Corte considera que la prescripción del derecho al recobro no significa autorizar un destino diferente de los recursos de la seguridad social, pues las expresiones demandadas se limitan a reconocer, sin más, el término de prescripción de las obligaciones crediticias. Lo que se extingue es entonces el derecho subjetivo de la entidad a recobrar, pero en ningún momento se autoriza un destino de los recursos para otros fines. (…)*
>
> *En cuarto lugar, la Sala tampoco encuentra que la norma vulnere el principio de sostenibilidad del sistema pensional. En efecto, la prescripción del derecho al recobro de ciertas mesadas –las no reclamadas oportunamente- de ninguna manera extingue la obligación de concurrir al pago de las demás mesadas, ni libera a las entidades de su obligación futura de concurrencia en el pago. (…)"*

23. Como se evidencia en el presente caso, sí eventualmente se considerase que hay lugar al reconocimiento de lo pretendido por la parte demandante, lo cierto es que se ha configurado el fenómeno jurídico de la prescripción sobre el derecho de recobro de las cuotas partes pensionales por el transcurrir del tiempo.

24. Por último, en el hipotético y eventual evento se llegase a condenar a mi representada la UGPP, se presentaría el fenómeno de la falta de legitimación en la causa por pasiva.

25. Lo anterior conforme al artículo 2.2.10.12.3 del Decreto 1833 de 2016, la demanda aquí dirigida contra mi representada carece de legitimación en la causa como quiera que la norma anterior citada, las cuotas partes pensionales reconocidas a favor de dicha entidad con anterioridad al 8 de noviembre de 2011 están a cargo del Patrimonio Autónomo de Remanentes de CAPRECOM, en este caso **LA FIDUPREVISORA**. Véase la normatividad citada:

> *"En ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000, modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal EICE) en liquidación constituirá un Patrimonio Autónomo para la administración de las cuotas partes pensionales que hayan quedado a su cargo o que hayan sido reconocidas a favor de dicha entidad, derivadas de solicitudes radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011, para lo anterior, se entregará al Patrimonio Autónomo la información y documentación requerida y al Ministerio de Salud y Protección Social, copia de dicha información."*

26. Finalmente, los actos administrativos expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se encuentran amparados por la presunción de legalidad y le corresponde a la parte demandante asumir la carga de la prueba para desvirtuar la mencionada presunción, para lo cual, el CPACA, establece claramente las causales, debiéndose aclarar que las mencionadas causales, deben probarse.

27. Así las cosas, solicito respetuosamente al Honorable Despacho despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, tener en cuenta las excepciones propuestas con la contestación de la demanda por parte de mi representada la UGPP y la absuelva de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

## VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1. Ley 1066 de 2006
2. Decreto 1833 de 2016
3. Sentencia C 895 de 2009
4. Las demás normas o jurisprudencias que su Señoría, dentro de la importante labor de administrar justicia, considere aplicables al caso particular.

## VII. MEDIOS DE PRUEBA.

En esta oportunidad, solicito que se tengan como pruebas los medios probatorios que obran en el expediente. De igual manera le solicito se decreten las siguientes:

**Documentales:**

- Expediente administrativo que reposa en la entidad. https://drive.google.com/drive/folders/1HbU1GUoSW-yicNsdK-_X0VaTeai5pOGd?usp=sharing

## VII. ANEXOS

- Los documentos enlistados en el acápite de pruebas.

- Poder General.

## VIII. PETICIONES

*Primera,* Solicito que se me reconozca personería para actuar en el presente proceso como apoderada de la entidad demandada.

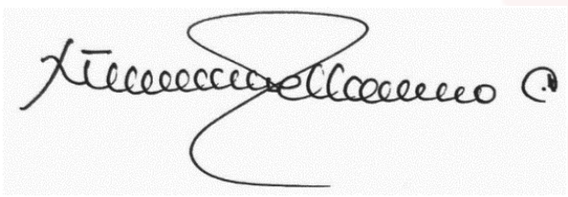
*Segunda,* Solicito que se denieguen todas y cada una de las pretensiones hechas por la parte demandante y prosperen las excepciones propuestas.

## BUZÓN ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIONES

Recibiré sus notificaciones al correo electrónico: garellano@ugpp.gov.co
Puedo ser contactada a los siguientes celulares: 3014583379

Del Honorable Despacho

Cordialmente,



**GLORIA XIMENA ARELLANO CALDERÓN**
**C. C. 31578572 de Cali.**
**T. P. 123175 C. S. de la J.**

*LISSY CIFUENTES SANCHEZ*
*Abogada Especializada en Seguridad Social*

*.*

*Señores*
***JUZGADO 41 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA***
*Vía correo electrónico*
*correscanbt@cendoj.ramajudicial.gov.co*

*Referencia: Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho*
*Radicación : 11001333704120220012000*
*Demandante: Departamento de Boyacá, Fondo de Pasivo Pensional . Extrabajador: Humberto Espíndola Carvajal*
*Demandado: Fiduagraria S.A.Vocera PAR TELECOM , y otros*

***LISSY CIFUENTES SANCHEZ**,, mayor de edad, vecina de ésta ciudad identificada con C.C. No. 34.043.774 de Pereira (Rda.), abogada en ejercicio, con Tarjeta profesional No. 27.779 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando de conformidad con el poder otorgado por la doctora **HILDA TERÁN CALVACHE,** mayor de edad, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 25.281.164 de Popayán, obrando en calidad de Apoderada General, de acuerdo al poder conferido mediante escritura pública No 2852 del 15 de julio 2016, por el Consorcio Remanentes TELECOM, conformado por **FIDUAGRARIA S.A.** y **FIDUCIAR S.A.,** en representación del **Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR,** constituido mediante contrato de Fiducia Mercantil del 30 de diciembre de 2005, me permito **CONTESTAR** y presentar **EXCEPCIONES** a la demanda de la referencia, solicitando que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se absuelva a las Fiduciarias integrantes del Consorcio, de las pretensiones de la demanda y se condene en costas al demandante, previaslas siguientes consideraciones:*

## *NATURALEZA JURÍDICA y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CONSORCIO REMANENTES TELECOM*

*Fiduagraria S.A. es una sociedad de Servicios Financieros con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, constituida mediante Resolución No. 4142 del 6 de octubre de 1.992, expedida por la Superintendencia Bancaria, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.*

*Fiduagraria S.A. conformó conjuntamente con Fidupopular S.A., hoy FIDUCIAR S.A, un Consorcio Financiero con el objeto de administrar los bienes dejados por la extinta Telecom en Liquidación, en cumplimiento del Decreto 4781 del 30 de diciembre de 2005, mediante el cual el Gobierno Nacional decretó la terminación para todos los efectos legales de la existencia jurídica de la*

*Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM EN LIQUIDACION, a 31 de enero de 2006.*

*En esta fecha se firmó el Acta de Cierre Definitivo de la Liquidación de Telecom. En virtud del artículo Primero del citado Decreto, se declara la terminación del proceso liquidatorio y en consecuencia, desaparece la persona jurídica de Telecom.*

*El Consorcio Remanentes Telecom, fue creado por documento privado suscrito por la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario* ***"FIDUAGRARIA S.A."*** *y la Sociedad Fiduciaria Popular S.A.*

*"****FIDUPOPULAR*** *" a fin de cumplir con el contrato de Fiducia Mercantil suscrito el 30 de diciembre de 2005 con la Fiduciaria La Previsora S.A. (Liquidadora de Telecom y Teleasociadas).*

*El consorcio Fiduciario integrado por Fiduagraria S.A, y Fidupopular S.A., constituyeron un PATRIMONIO AUTÓNOMO con los bienes recibidos de Telecom en Liquidación de acuerdo con lo establecido en el contrato de Fiducia Mercantil, en consecuencia, la participación de Fiduagraria S.A. , en este proceso, es la de tercero cuya obligación es la defensa de los bienes y recursos fideicomitidos, en la medida que una decisión adversa los afectaría en perjuicio de la cabal administración que le corresponde cumplir al Fiduciario.*

*El sustento jurídico de ésta posición está contenida en el artículo 1.234 del C.Co., que establece los deberes del fiduciario, dentro de los cuales está el de " llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente.*

***HECHOS***

***1.-*** *Es cierto, el documento figura en las pruebas aportadas con la demanda.*

***2.-*** *Es cierto que la Caja de Previsión acepta la Cuota parte Pensional con que concurre en la Pensión de Jubilación, pero no es cierto el condicionamiento sobre el salario a que hace mención el demandante.*

***3.-*** *Es cierto porque el documento obra en el expediente pero se aclara que es un hecho de terceros en el cual no intervino mi poderdante*

***4.****- Es cierto conforme al contenido de las Resoluciones.*

***5.-**, NO es cierto como lo plantea el demandante. El régimen reconocido al señor HUMBERTO ESPÍNDOLA CARVAJAL, se otorgaba con 25 años de servicio sin consideración a la edad, lo que equivale a 9.000 días, no era necesario tener en cuenta los otros días laborados.*

***6.-** No es cierto como está planteado ya que la pensión se conforma con el tiempo trabajado en las diferentes entidades hasta concurrencia del tiempo exigido en la legislación aplicable, por tanto no puede afirmarse que el tiempo laborado en el Departamento de Boyaca no se podía computar para la pensión.*

*De otra parte, afirma el demandante que el Departamento solo reconoce la pensión a partir del 1 de mayo de 1990, que coincide con el retiro del servicio, tal como aparece en la Resolución No 1278 y a partir de la cual se comenzó a hacer el pago respectivo.*

***7.**- Es cierto y se aclara que en esta Resolución se mantuvo el mismo número de días laborados en cada entidad; para el departamento de Boyacá se reliquidó con 2518 días laborados y para Telecom los mismos 5.740 de la resolución 0360 de 1990.*

***8.**- No es cierto como está planteado, se aclara que el acto administrativo atacado no fue expedido por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM, toda vez que esta función no estaba a su cargo ni antes ni después de su liquidación; sin embargo se explica al despacho que esta Resolución no tenía que ser consultada, solo se comunicaba y se enviaba copia de la misma a la Caja del Departamento de Boyacá, como consta en el artículo 5º. Del Acto administrativo. Pese a que contra esta decisión procedían los recursos de ley, el Departamento no hizo uso de los mismos.*

*LA reliquidación se hace de conformidad con lo devengado en el último año de servicio y se reitera que se hace hasta concurrencia de los 25 años de servicio o sea 9.000 días.*

***9**.- Es un hecho ejecutado por un tercero que no le consta a mi poderdante, sin embargo se aclara que para la determinación de las cuotas partes pensionales para el momento en que se liquida la pensión en estudio, se tiene en cuenta el tiempo laborado en cada entidad y lo devengado en el último año de servicio, de conformidad con el parágrafo final del artículo 3º. De la Ley 33 de 1985*

*10.- Es un hecho ejecutado por un tercero en el que no intervino mi poderdante,*

*sin embargo de conformidad con la normatividad vigente para el momento de expedición de las Resoluciones impugnadas, las cuotas partes se liquidan a prorrata del tiempo laborado con cada empleador y sobre lo devengado en el último año de servicio, tal como se liquidó esta pensión.*

***11.-** Es un hecho de terceros que no le consta a mis poderdantes y se atiene a lo probado en el proceso, dado que uno de los ejes de la demanda es la afirmación conforme a la cual los factores tomados para la liquidación de la cuota parte no son los que efectivamente debieron aplicarse ; en lo referente al porcentaje de cuota parte a cargo del Departamento, este punto debe ser probado.*

***12.-** No es un hecho propiamente sino las consideraciones del Actor y la propuesta de cómo debería liquidarse la cuota parte pensional, pero que no corresponde con la normatividad aplicable al momento de su reconocimiento.*

***PRETENSIONES Y CONDENAS***

*Desde ahora me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la parte actora, con sus consecuencias reconocimientos y condenas consignadas en la demanda por carecer de fundamentos legales y de hecho y máxime teniendo en cuenta que la entidad que represento no es la encargada del reconocimiento de pensiones ni reliquidación de las mismas.*

*Para efectos de fundamentar la oposición anterior, estaré formulando dentro de esta contestación las respectivas excepciones, donde se consignan las razones de la defensa, por lo tanto solicito se* ***ABSUELVA*** *a* ***FIDUAGRARIA S.A.*** *y a* ***FIDUCIARIA POPULAR S.A. "FIDUCIAR S.A." como integrantes del Consorcio de Remanentes Telecom, encargada de manejar el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR,*** *de las pretensiones formulados por el demandante.*

*Tiene asidero jurídico la oposición a las pretensiones, toda vez que el objeto de la constitución del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES - PAR -, no es otro que el de mantener y administrar los remanentes con ocasión del cierre de la liquidación de TELECOM, pero en ningún momento está a su cargo el estudiar, aprobar o negar prestaciones de los extrabajadores de TELECOM y/o con cargo al Patrimonio Autónomo.*

*Me refiero a cada una de ellas en particular así:*

***PRIMERA:** Me Opongo a esta pretensión por improcedente frente al*

*PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES - PAR -, toda vez, que el empleador del demandante, fue la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM y NO FIDUAGRARIA S.A. ni FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A. integrantes del Consorcio de Remanentes de Telecom, del cual forman parte mis defendidas,*

*La entidad que represento es un negocio fiduciario sin personería jurídica como tal, encargado de cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato de fiducia suscrito entre Fiduciaria La Previsora S.A. y el Consorcio de Remanentes Telecom, que en últimas es la administración de unos activos, bienes y derechos no afectos al servicio.*

*También es improcedente porque se trata de un acto administrativo ejecutoriado y en firme , expedido de conformidad con las normas vigentes para el momento de reconocimiento de la pensión y que además fueron aceptados por el Departamento de Boyacá; además, no fueron objeto de recurso por tanto se trata de un acto administrativo en firme.*

*Respecto al tiempo de servicio tenido en cuenta para la pensión, esta se hizo sobre 9.000 días correspondientes a 25 años de servicio por tanto no es cierto que se haya reconocido la pensión por un tiempo inferior al requerido por el régimen que le era aplicable.*

*El hecho de reconocer una pensión convencional no es causal de nulidad del acto administrativo.*

***SEGUNDA:** Me opongo por improcedente porque no se incluyeron menores tiempos de servicio del extrabajador Humberto Espíndola Carvajal, y los factores tenidos en cuenta para la reliquidación corresponde al régimen pensional aplicable, por tanto no son causales de nulidad del acto administrativo.*

***FRENTE A LAS PRETENSIONES CONSECUENCIALES:***

***1º.** Me opongo en primer término por que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom, no fue la entidad que profirió los actos administrativos atacados y mal podría modificar un acto administrativo expedido por otra entidad.*

*De otra parte, porque la pensión se liquida con el tiempo de servicio requerido por el régimen aplicable al momento de obtener el extrabajador el Status de pensionado*

***2º.*** *Me opongo porque el artículo 1º. De la Resolución No. 0360, indica que la pensión se reconoce al señor Espíndola, a partir del 1 de mayo de 1990, fecha en que demostró haber quedado fuera del servicio, que coincide con la fecha que se reclama en esta pretensión. .*

***3º.*** *Me opongo por improcedente ya que con ella se desconoce las competencias de cada entidad. Antes de su liquidación, TELECOM nunca tuvo a su cargo el reconocimiento de pensiones, por tanto se reitera, es improcedente la pretensión frente a esta parte procesal.*

*En este momento el PAR TELECOM no tiene dentro de sus funciones, por ser una entidad de carácter privado, reconocer o pagar pensiones o la reliquidación de la pensión de los extrabajadores de Telecom, mucho menos modificar resoluciones que no han sido expedidas por ella misma, obligación que estaba a cargo de CAPRECOM y hoy de la UGPP.*

***4****.- Me opongo a esa pretensión porque el cobro de las cuotas partes pensionales se hace con fundamento en los Actos administrativos que reconocen la pensión, y no pueden ser modificados a discrecionalidad del ente responsable del pago.*

***5º.-*** *Me opongo a esta pretensión porque el recaudo de la cuota parte desde 1987 y hasta el 2015, se surtió por parte de la hoy liquidada CAPRECOM EICE, por lo que este Patrimonio no tiene la obligación de indexar y reintegrar dineros que no percibió a ningún título, caso contrario se estaría constituyendo un cobro de lo no debido lo que derivaría en un detrimento patrimonial del erario; adicionalmente, sea válido señalar que los recobros se efectúan en apego a actos administrativos vigentes y ejecutoriados, cuyo desconocimiento se podría tener como falta disciplinaria.*

***6.-*** *Me opongo por improcedente frente al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM, toda vez que el reconocimiento pensional y el recaudo de la cuota parte desde 1987 y hasta el 2015 se surtió por parte de la hoy liquidada CAPRECOM EICE; además, los cobros se hacen de conformidad con lo establecido en las Resoluciones respectivas que gozan de presunción de legalidad.*

*7.- Las costas las paga la parte vencida.*

***FRENTE AL CONCEPTO DE VIOLACIÓN***

*En este acápite aclaro al despacho que los argumentos que se presentan se hacen con fundamento en los documentos que conoce el PAR TELECOM y que obran en el expediente, pues se reitera, que antes de su liquidación la Empresa Nacional de Telecomunicaciones no tenía a su cargo el reconocimiento de pensiones, pues la función estaba asignada a CAPRECOM hoy la UGPP.*

*Solo tiene en su poder las resoluciones que obran en la historia laboral del extrabajador.*

***1.1.1. Violación al principio de Igualdad:***

*Las consideraciones consignadas en este acápite de la demanda, no corresponden con el principio de Igualdad, ya que precisamente lo que se está pidiendo es el trato diferencial entre la Empresa de Teléfonos de Boyacá y Telecom, aduciendo, que esta última, hoy liquidada, debe concurrir con un mayor valor del aporte pensional y aquella con un menor valor.*

*Si las pretensiones están en este sentido, es claro que el principio de igualdad no es el llamado a sustentar el concepto de violación.*

***1.1.2.- Vulneración al debido proceso:***

*Entre las amplias consideraciones que se presentan en este acápite, se encuentra que los motivos de inconformidad se circunscriben al hecho que el Acto Administrativo que Reliquidó la pensión del señor HUMBERTO ESPÍNDOLA CARVAJAL , no fue notificada y que en consecuencia la Caja de Previsión Social de Boyacá, no tuvo la oportunidad de cuestionarla y por otra parte, que la Resolución no tuvo en cuenta todo el tiempo laborado por el trabajador y solo se tuvo en cuenta 9.000 días laborados.*

*Este argumento se desvirtúa fácilmente ya que como se ha explicado en la respuesta a los hechos de la demanda y lo explica la lógica, el hecho que un trabajador labore por más tiempo del que la ley contempla no implica que la liquidación de la pensión de jubilación se haga sobre todo ese lapso que es mayor al que exige la ley; en consecuencia está ajustada a derecho la decisión de CAPRECOM, cuando concede la pensión de jubilación del señor HUMBERTO ESPÍNDOLA CARVAJAL, con 25 años de servicio que tal como figura en el Resolución de reconocimiento teniendo en cuenta hasta 9.000 días laborados*

*La posibilidad de liquidar la pensión con todo el tiempo de servicio es una disposición de la Ley 100 de 1993, para quienes se encuentren en régimen de transición pero es una disposición posterior a los hechos que nos ocupan*

*Respecto de no haberse consultado la Resolución de reliquidación de pensión No. 1278 del 29 de agosto de 1990, hay que aclarar que de conformidad con la el Artículo 2º. De la Ley No. 33 de 1985, esta disposición es aplicable únicamente al proyecto de liquidación, como en efecto se hizo.*

*Frente a la Resolución de Reliquidación, esta se notifica mediante el envío del acto administrativo a la Caja de Previsión respectiva, tal como consta en el artículo 5º, de la Resolución No. 1278 del 29 de agosto de 1990; frente a esta decisión la Caja podía interponer los recursos respectivos.*

*No puede olvidarse que la Resolución No. 0360 de 1990 fue consultada con la Caja de Previsión Social de Boyacá y esta la aceptó mediante oficio D.E.P. 020 del 14 de marzo de 1990, documentos que reposan en el expediente y fueron entregados por el mismo demandante.*

***1.1.3.- Sostenibilidad financiera del sistema :***

*Para controvertir este argumento hay que indicar que la liquidación de la pensión en estudio, se hizo bajo las normas aplicables para el año 1990, cuando no existía aún la ley 100 y no se hablaba del equilibrio financiero del sistema ya que para esta época los regímenes y cajas de previsión eran independientes entre sí y obedecían a normatividades propias de cada uno.*

***1.1.4.- Violación artículo 356 de la C.P. por asignar cuotas partes que deben ser financiadas por la nación.***

*La pensión otorgada a la señora HUMBERTO ESPÍNDOLA CARVAJAL, se hizo sobre 25 años de servicio sin consideración a la edad y se liquidaba con el promedio de lo devengado en el último año de servicio; para la época las normas eran más simples, pero así debían aplicarse*

*De igual manera, estas disposiciones indicaban que para el pago de la pensión había concurrencia de las entidades donde había prestado sus servicios el trabajador y se hacía de conformidad con los tiempos laborados en cada uno de ellos y lo devengado en el último año de servicio.*

*Frente a los aportes a que se hace mención también en la demanda hay que*

*aclarar que en el sector público prácticamente para la época no había aportes para pensión y el poco porcentaje que se trasladaba a la Caja de Previsión Social correspondiente, era para el pago de salud.*

***2.- Frente a las disposiciones Legales quebrantadas:***

*En este punto hay que indicar que para la liquidación de la pensión se tiene en cuenta los años de servicio hasta concurrencia del tiempo exigido por el régimen pensional aplicable al momento en que el trabajador adquiere el Status de pensionado.*

*En términos generales, respecto de las normas citadas por el actor en este segmento de la demanda, hay que reiterara que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom antes de su liquidación no tenía la función de reconocer las pensiones de sus trabajadores. Hoy lo que existe es un PATRIMONIO AUTÓNOMO, que es una fiducia, que administra los remanente de la liquidada empresa y en consecuencia solo puede hacer mención a la normas que se citan en los actos administrativos demandados y que fueron indicados con anterioridad.*

***3.- Frente a la Falsa Motivación***

*3.1.- Se equivoca el demandante cuando pretende que se tengan en cuenta todos los días laborados por el señor HUMBERTO ESPÍNDOLA CARVAJAL; la pensión reconocida fue de 25 años de servicio que equivale a 9.000 días de servicio y se liquidaba con el salario devengado en el último año.*

*Amparado bajo estas disposiciones, es claro que la expedición de las Resoluciones impugnadas se ajustan a derecho y no controvierten el orden jurídico en materia de pensiones para el año 1990 y 1991, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.*

***4.- Frente a la expedición irregular de los actos administrativos**,:*

*Se reitera que la Resolución No.0360 de 1990, fue consultada con la Caja de Previsión Social del Departamento de Boyacá y la misma aceptó las cuotas partes asignadas a cada una de las empresas concurrente al pago, documentos que obran en el expediente; por su parte la Resolución No. 1278 del mismo año, que reliquida la pensión no debía consultarse, por eso en el artículo quinto se ordenó su remisión la Empresa de Teléfonos de Boyacá; este acto administrativo*

*era susceptible de recursos, pero el Departamento no hizo uso de ellos.*

***ARGUMENTOS DE LA DEFENSA***

*Se reitera en esta acápite que de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Decreto 1615 de 2003, CAPRECOM era la Administradora encargada del reconocimiento y pago de las pensiones y de las indemnizaciones sustitutivas de los trabajadores de la extinta Telecom, esto en el evento que no se haya dado un traslado de Administradora de Pensiones, caso en el cual, corresponde a esa nueva Administradora donde se encuentre afiliado el extrabajador, el reconocimiento de las prestaciones pensionales a que haya lugar. Función esta que hoy le corresponde a la UGPP en virtud de lo establecido en los Decretos 169 de 2008 y 2408 de 2018*

*Frente al recobro de cuotas partes pensionales se explica es una potestad legal reglada, conforme a lo instituido en los Decretos 2921 de 1948, 1848 de 1969, en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988. El sistema de cuotas partes pensionales se instituyó con la finalidad de que las entidades en las cuales el empleado o trabajador había servido o cotizado para su pensión, contribuyeran, a prorrata del tiempo servido o cotizado, con la caja o la entidad pagadora de la pensión. Hubo varios antecedentes normativos de este sistema, siendo de destacar para la época de operación de CAPRECOM EICE, el Decreto 1848 del 4 de noviembre de 1969, "Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968", referente al régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales, el cual contempló las cuotas partes pensionales cuando previó en la siguiente forma, mediante el artículo 72, la acumulación de los tiempos de servicios en distintas entidades oficiales, con la finalidad de alcanzar el tiempo exigido para la pensión de jubilación:*

*Luego, el artículo 2º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985, "Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público", reforzó la fijación del valor de las cuotas partes pensionales con el establecimiento de un silencio administrativo positivo, consistente en que si los organismos deudores no objetaban en el plazo perentorio de quince (15) días la liquidación de la pensión, se entendía que la habían aprobado y por lo tanto, quedaban obligados a asumir las cuotas determinadas por la entidad pagadora. Dijo así la norma:*

*"Artículo 2º. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas cajas de previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere*

*servido o aportado a ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince (15) días para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por ellos.*

*Para los efectos previstos en este artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará anualmente las compensaciones a que haya lugar, con cargo a los giros que les correspondan a los organismos o Cajas, por concepto de aportes del presupuesto nacional; cuando se trate de entidades del orden departamental, intendencial, comisarial, municipal o del Distrito Especial de Bogotá, la compensación anual se efectuará con cargo a las correspondientes transferencias de impuestos nacionales".*

*Posteriormente, la Ley 71 del 19 de diciembre de 1988, "Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones", estableció, en su artículo 7º, la llamada pensión de jubilación por aportes, consistente en que los empleados oficiales y los trabajadores privados que acreditaran veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias entidades de previsión social del orden nacional o territorial, y en el Instituto de Seguros Sociales, tenían derecho a una pensión de jubilación a los sesenta (60) años de edad o más los hombres y cincuenta y cinco (55) años o más las mujeres, para la cual las entidades involucradas debían contribuir con las cuotas partes correspondientes.*

*El Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, "Por el cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 71 de 1988", estableció respecto de dichas cuotas partes lo siguiente:*

*"Artículo 11. Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente.*

*Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.*

*La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de la pensión por el tiempo aportado a esta entidad, dividido por el tiempo total de aportación".*

*En síntesis, se aprecia que la cuota parte pensional es la suma con que una entidad concurre o contribuye, a prorrata del tiempo servido o cotizado en ella, al pago de una pensión a cargo de una caja o entidad pagadora de la misma.*

*La cuota parte es la suma equivalente al porcentaje del monto de la pensión con que debe contribuir una entidad, de acuerdo con lo establecido al respecto en el acto administrativo de reconocimiento de la pensión dictado por la caja o entidad pagadora, que se encuentre en firme. Dicho porcentaje está en función del valor de la pensión, de manera que si esta se reajusta, la cuota parte se debe reajustar en la proporción correspondiente.*

*Es claro que la obligación de la Caja para adelantar los recobros era la de consultar la resolución de reconocimiento pensional, consulta que en efecto CAPRECOM efectuó y a la cual el Departamento de Boyacá respondió aceptando la asignación cuotapartista, como el demandante señala en su escrito y como se demuestra en la documental que se aporta.*

*DECRETO N° 2921 DE 1948, ARTICULO 2o. La Caja de Previsión Social que reciba una solicitud de pago de una pensión de jubilación que sea de su cargo y de varias entidades, la pondrá en conocimiento de éstas y les remitirá copia del proyecto de resolución que elabore, y de los documentos que sean necesarios para que cada una de tales entidades pueda establecer si son correctos, si está obligada a la cuota que se le asigna y si se ajusta a las disposiciones legales que la rigen. PARAGRAFO. La entidad que reciba las copias a que se refiere este artículo, y que considere necesario el examen de los documentos presentados, podrá solicitarlos, y la Caja en cuyo poder se encuentren los desglosará y se los remitirá, pero dejando copia auténtica de ellos.*

*DECRETO N° 1848 DE 1969, ARTICULO 75 NUMERAL 3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal, se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión. El expresado término comenzará a correr desde la*

*fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de reconocimiento de la pensión.*

*LEY N° 33 DE 1985 ARTÍCULO 2º. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince (15) días para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por ellos.*

*Es claro, conforme a lo señalado en la normatividad, que la obligación de consulta se circunscribe al acto de reconocimiento pensional, los actos de reajuste o reliquidación, posteriores al reconocimiento no son objeto de consulta dado que la entidad cuotapartista ya conoce de la obligación y solo debe ser notificada de las modificaciones, sin que se reviva el termino para objetar el reconocimiento pensional y se aclara que la cuota parte asignada a las empresas no se modificó en la Resolución que reliquidó la pensión. .*

*Por otro lado, dado que la norma indica los factores para la liquidación de la obligación cuotapartista, incluyendo en estos primas y bonificaciones, no es posible excluir factores a voluntad del demandante bajo la premisa que la entidad deudora no paga estos beneficios a sus funcionarios. Menos aún, cuando la norma señala como única condición para distribución de la obligación que la misma se distribuya a prorrata del tiempo de servicio del pensionado en cada entidad concurrente, sin que refiera algo frente a los factores a aplicar.*

*Frente al tiempo de servicio tomado para el reconocimiento pensional, puesto que el régimen pensional para los trabajadores de las telecomunicaciones fue un régimen especial administrado por la hoy liquidada CAPRECOM, es entendible que solo se tomen en consideración los días laborados que entran en lo instituido para estos trabajadores, quienes se pensionaban con 20 años de servicio y 50 años de edad o con 25 años de servicio y cualquier edad. Esta es la razón por la que solo se toman 9.000 para liquidar la pensión y distribuir la cuota parte.*

## ***EXCEPCIONES DE FONDO***

### ***1.- PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS***

*De conformidad con el artículo 88 del CPACA, " Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse*

*hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.”**.***

*En esta contestación se ha demostrado que la expedición de las resoluciones No. 0360 y 1278 de 1990, respetaron el ordenamiento jurídico aplicable en ese momento y en consecuencia, deben permanecer incólumes frente a los ataques contenidos en la demanda.*

***2.- FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA PASIVA:***

*Si se tiene en cuenta que las pretensiones consecuenciales 4, 5 solicitan ordenar al PAR TELECOM a expedir un nuevo acto administrativo que modifique los valores de la cuota parte pensional correspondiente a la Caja de Previsión Social del Departamento de Boyacá y en los numerales 6 y7 se ordena la devolución de los valores recibidos.*

*Para contradecir este argumento hay que explicar que en estricto derecho solo está legitimado para modificar un acto administrativo, la misma autoridad o entidad que la expidió, por tanto al ser CAPRECOM, la Caja de Previsión que expidió los actos administrativos demandados, corresponde hoy en día a la UGPP, que hoy ocupa su lugar en este proceso, la llamada a modificarlos , en caso de una decisión adversa .*

*Frente al reintegro de dineros, también se reitera que estos recursos no los ha recibido el PAR TELECOM, por tanto no es la llamada a responder por las pretensiones de la demanda.*

***3.- IMPOSIBILIDAD PARA PROFERIR SENTENCIA DE FONDO CONTRA EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR***

*El CONSORCIO DE REMANENTES TELECOM, conformado por documento privado del 28 de Diciembre del 2005, por las Sociedades FIDUAGRARIA S.A. y FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A., con el fin de participar en la invitación pública para la constitución del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM EN LIQUIDACIÓN Y LAS TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN, el cual fue adjudicado y como consecuencia de ello la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en Calidad de Liquidador de TELECOM EN LIQUIDACIÓN Y LAS TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN, celebró el contrato de FIDUCIA MERCANTIL con el CONSORCIO DE REMANENTES TELECOM cuyo objeto es la administración de unos bienes, pero que carece de personería jurídica por lo que*

*no es persona jurídica susceptible de derechos y obligaciones.*

***4.- CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:***

*NO puede afirmarse como se indica en la demanda que a las Resolución No. 0360 del 5 de abril de 1990 y 1278 del 29 de agosto del mismo año, no les aplica la caducidad por tratarse de temas pensionales, sin embargo es claro que como el tema en esencia es sobre la forma como se liquidaron las cuotas partes pensionales y que en su momento fueron aceptadas por la Empresa de Teléfonos de Boyacá, la primera y la segunda no fue recurrida pese a que contaba con la oportunidad de debatir esta decisión, si se aplica esta excepción.*

***5.- PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO***

*Con relación al fenómeno de la prescripción, si tenemos en cuenta que HUMBERTO ESPÍNDOLA CARVAJAL, se retiró del servicio el 1 de mayo de 1990 y la demanda fue radicada el 22 de abril de 2022, queda claro que han transcurrido más de 3 años por lo que operó la prescripción trienal de las diferencias de las mesadas pensionales sobre las cuotas partes reclamada.*

*Solicito en consecuencia se declaren prescritas las cuotas partes pensionales anteriores al 22 de abril de 2019.*

***6.- INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN***

*Frente al CONSORCIO DE REMANENTES TELECOM conformado por FIDUAGRARIA S.A. Y FIDUPOPULAR S.A. que solo es una Fiducia y no tuvo injerencia en la expedición de los actos administrativos cuya nulidad se pretende.*

***7.- PAGO:***

*Tal como se acepta en los hechos de la demanda, CAPRECOM, la UGPP y el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ a través de la DIRECCIÓN DE PASIVOS PENSIONALES DE BOYACÁ aceptaron los actos administrativos hoy demandados y han cumplido con el pago de la cuota parte pensional hace más de 30 años y al señor HUMBERTO ESPÍNDOLA CARVAJAL, le fueron pagadas sus mesadas pensionales.*

***8.- COMPENSACIÓN***

*Ante una Sentencia desfavorable y sin que implique reconocimiento alguno de derecho a favor de la parte actora, se propone esta excepción para que se tenga en cuenta los dineros recibidos por la actora por cualquier concepto provenientes de TELECOM o del PAR o de CAPRECOM o de la UGPP que provengan de la cuota*

*parte pensional que le hubiere podido corresponder a la entidad que represento o por cualquier otro concepto que se haya pagado al demandante sin tener derecho a ello.*

***DECLARATORIA DE OTRAS EXCEPCIONES***

*Solicito al señor Juez que si haya probado hechos que constituyan una excepción se sirva reconocerla de oficio de conformidad con el Art. 306 del C.P.C*

***P R U E B A S***

*Solicito se decreten y tengan como pruebas en favor de la parte que represento las siguientes:*

***DOCUMENTALES.***

1. *Copia de la escritura pública No. 2852 del 15 de julio de 2016, mediante la cual se otorga poder a la doctora HILDA TERÁN CALVACHE.*
2. *Copia del decreto 1615 de 2003 mediante el cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM.*
3. *Copia del Decreto 4781 de 30 de diciembre de 2005 por medio del cual se aclara y modifica el decreto 1615 de 2003.*
4. *Copia del contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre Fiduciaria La previsora S.A., actuando en calidad de liquidador de Telecom en liquidación y Teleasociadas en Liquidación y el Consorcio Remanentes de Telecom, conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciar S.A. para la constitución del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en Liquidación PAR. con sus respectivos OTRO SI.*

***Objeción a las prueba solicitadas:***

*En el acápite de las pruebas de oficio solicita el demandante oficiar al PAR TELECOM para que remita copia auténtica de los actos acusados y de los oficios a que se hace referencia en el proceso.*

*En primer término hay que aclarar que bajo la nueva regulación procesal art. 246 del C.G.P., ya no son necesarias las copias auténticas , si estas no son desconocidas o reputadas como falsas, tienen pleno valor probatorio.*

*De otra parte, el PAR TELECOM no fue la entidad que expidió estos actos administrativos ni llevo a cabo la actuación relacionada con el reconocimiento de la pensión de HUMBERTO ESPÍNDOLA CARVAJAL solo tiene en su poder copias simples, las mismas que obran en la historia laboral como extrabajadora de la liquidada TELECOM.*

*LISSY CIFUENTES SANCHEZ*
*Abogada Especializada en Seguridad Social*

***A N E X O S***

*1.- Poder*

*2.- Escritura que contiene poder*

*3.- Prueba documental anunciada en el acápite correspondiente.*

***N O T I F I C A C I O N E S***

*El PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES- PAR TELECOM, en la calle 12 C No. 8-39 piso 4º. Edificio Sabana Royal en Bogotá,D.C.*
*Correo electrónico: notificacionesjudiciales@par.com.co*

*Las personales las recibiré en la Secretaria de su Despacho, o en la CALLE 12 C No. 8-39 piso 4º. Bogotá.*

*Habilito mi correo electrónico para notificaciones:l*
*lissy_cifuentes@yahoo.es*

***CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2213 DE 2022***
*Del texto de la demanda se remite copia a los correos electrónicos registrados en la demanda.*

*El poder cuenta con presentación personal ante Notario, por tanto no requiere pantallazo del envío .*

*Atentamente,*



***LISSY CIFUENTES SANCHEZ***
*C.C.No. 34.043.774 de Pereira*
*T.P.No. 27.779 del C.S. de la J.*

Señores
**Juzgado Cuarenta y uno (041) Administrativo de Oralidad de la Sección Cuarta de Bogotá D.C.**
Ciudad.

| | |
|---|---|
| PROCESO: | **11001333704120220016500** |
| DEMANDANTE: | **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** |
| Causante: | LISAURA GUIO DE PLAZAS |
| DEMANDADO: | Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales - UGPP y otros |
| Asunto: | Contestación de la demanda. |

**ÁLVARO GUILLERMO DUARTE LUNA** abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en calidad de apoderado sustituto de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP**, de acuerdo al poder de sustitución otorgado por el **Dr. OMAR ANDRÉS VITERI DUARTE**, en su calidad de representante legal de Viteri Abogados SAS, apoderada especial de la UGPP, mismo que al efecto adjunto a la presente, cordialmente solicito al Despacho me reconozca personería para actuar de acuerdo al poder adjunto y estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa me permito dar contestación a la demanda propuesta dentro del proceso de la referencia instaurado en contra mi representada, para que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones propuestas en la demanda y se condene en costas a la parte demandante.

## NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO.

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP -, es una entidad Pública del orden Nacional, con domicilio en la Ciudad de Bogotá.

El poder para efectos de la representación legal a favor de la firma, es otorgado mediante Escritura Pública No. 174 del 17 de Enero de 2023 de la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, por parte del Dr. Javier Andres Sosa Pérez, mayor de edad y vecino de esta ciudad, en su calidad de Subdirector de Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial De La Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social – UGPP, conforme consta en la Resolución 681 del 29 de Julio de 2020, y Acta de Posesión No. 42 del 30 de Julio de 2020 que forman parte de la escritura, en la que modifica el numeral primero de la Escritura Pública No. 0604 del 12 de febrero de 2020, suscrita en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, mediante la cual se otorga PODER GENERAL a la firma Viteri Abogados S.A.S. con el fin de señalar que el apoderado tendrá a su cargo de manera adicional la representación judicial y extrajudicial en el territorio nacional, conforme consta en la cláusula segunda de la escritura en cita.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., Av. Carrera 68 No. 13 – 37, correo: notificacionesjuidicialesugpp@ugpp.gov.co

**A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

**FRENTE A LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS 1 y 2 y CONDENATORIAS 1, 2, 3, 4, 5 y 6** Me opongo a la prosperidad de todas las pretensiones teniendo en cuenta que no es procedente la declaratoria de nulidad de las resoluciones demandas emitidas por CAPRECOM (hoy UGPP), en las cuales se establece tanto la existencia como el cobro de la cuota parte pensional a cargo del Departamento de Boyacá y a favor del causante, así como la reliquidación de la prestación económica reconocida en favor de este último, Actos administrativos que se encuentran ajustados a Derecho por reunir los requisitos y procedimientos consagrados en la ley para su nacimiento a la vida jurídica, de igual manera los actos administrativos demandados fueron expedidos por la entidad competente para realizar el reconocimiento de la pensión y ordenar el pago de las cuotas partes pensionales en favor del causante.

Siendo así, debe tenerse en cuenta que la cuota parte pensional es un mecanismo de soporte financiero de la pensión vitalicia de vejez dentro de un sistema de concurrencia para entidades públicas, ya que con este se permite el recobro a las demás entidades obligadas al pago a prorrata del tiempo laborado o los aportes efectuados, como derecho a favor de la entidad o fondo pensional que reconoció y por ende asumió el pago total de la prestación pensional en favor del pensionado.

Este sistema fue incorporado al ordenamiento jurídico antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, no obstante, la misma no hizo exclusión de éste ni de la regulación que existía en precedencia, como bien lo ha sostenido la Corte Constitucional[1] corporación que manifestó:

> *(…)"La ley 100 de 1993 no excluye a las cuotas partes como soporte financiero. En efecto, la ley 100 de 1993, en el capítulo "Traslado entre regímenes - bonos pensiónales -", en los artículos 121, 122 y 124, habla expresamente de "Bonos pensiónales y cuotas partes a cargo de la Nación", "Fondos para pago de cuotas partes y bonos pensiónales de las Cajas, Fondos o Entidades Públicas no sustituidos por el Fondo de pensiones públicas del nivel nacional" y "Fondos para pago de cuotas partes y bonos pensiónales de las Empresas que tienen a su cargo exclusivo las pensiones de sus empleados". Significa lo anterior que la ley 100 estableció el mecanismo de los bonos, pero no excluyó, en determinadas situaciones, el método que antes de su vigencia se empleaba de distribuir la mesada por cuotas partes entre las entidades que en la vida laboral del jubilado recibieron cotizaciones. No podía excluir las cuotas partes porque por ley está reconocido el régimen de transición."(…)*

Teniendo en cuenta lo citado en precedencia, la Ley 71 de 1988[2], dispone*:*

> *(…)" A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.*
>
> *El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas."(…)*

[1] C. Cont. Sent T – 235, abril 04/02. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[2] Ley 71 de 1988, art. 7

Así las cosas, el derecho al recobro de las cuotas partes pensionales se encuentra incorporado en un título complejo, el cual se conforma por el acto administrativo que reconoció la prestación económica y vinculó como deudor a la o las entidades cuotapartistas; Acto que debe cumplir a saber con dos requisitos, el primero: que debió expedirse previo al procedimiento de consulta de la cuota parte[3], y el segundo: Debe estar acreditada la realización del procedimiento posterior de comunicación a la entidad deudora.

En ese orden de ideas, la exigibilidad del derecho al recobro de la cuota parte pensional, está condicionada a que efectivamente se acredite que el pensionado recibió el pago de la mesada pensional, y a que el cobro se realice con el cumplimiento pleno de las formalidades establecidas en la ley, por lo que solamente es posible reconocer el derecho que se encuentre incorporado en un título que cumple con los requisitos exigidos por la norma[4].

Descendiendo al caso objeto de la litis se tiene que la señora LISAURA GUIO DE PLAZAS, estuvo vinculada al Departamento de Boyacá siendo empleada de la Empresa de Teléfonos de Boyacá durante el período correspondiente a 1 de agosto de 1961 al 30 de abril de 1976 para un total de 14 años y 9 meses de tiempo laborado, además de los servicios prestados para TELECOM.

Así las cosas, es innegable que la obligación de pagar la cuota parte pensional correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de agosto de 1961 al 30 de abril de 1976 se encuentra en cabeza del Departamento de Boyacá por haber fungido como empleador de la señora LISAURA GUIO DE PLAZAS. Encontrándose demostrado que durante ese intervalo de tiempo la causante fue afiliada a la Caja de Previsión Departamental de Boyacá, entidad que recibió los aportes correspondientes a la pensión de vejez, invalidez y viudez en favor de la causante y sus beneficiarios, como claramente lo evidencia el certificado de tiempos laborados expedido por la entidad ahora demandante.

Así las cosas, el reconocimiento de la prestación en favor del causante por parte de CAPRECOM se hizo en virtud la ley 33 de 1985, ley 62 de 1985, ley 4 de 1976, el Decreto 1237 de 1946 y el Decreto 2661 de 1960. Normas en las cuales se dispone taxativamente los factores salariales a tener en cuenta a efectos de la liquidación de la prestación, por lo que por principio de inescindibilidad de la norma fue necesario aplicar íntegramente la misma liquidando la prestación y no hacer uso de otras disposiciones para discriminar los factores salariales devengados en las diferentes entidades públicas en las cuales laboró la señora LISAURA GUIO DE PLAZAS entre las cuales se encuentra el Departamento de Boyacá.

Es importante indicar que al momento de realizar la liquidación pensional de la señora LISAURA GUIO DE PLAZAS se tuvieron en cuenta los diferentes periodos y factores salariales devengados durante el periodo de tiempo señalado con anterioridad, en esa medida, para calcular la mesada pensional a la que tiene derecho, por parte de CAPRECOM se incluyeron la totalidad de los factores salariales devengados en vigencia de todas y cada una de sus vinculaciones laborales de conformidad con las certificaciones laborales aportadas por la demandante. Siendo que, al Departamento de Boyacá solamente se le impuso la cuota parte pensional en relación con el tiempo de servicio prestado por esta para el mismo y la inclusión del mencionado factor salarial obedece al objetivo de la cuota parte pensional como sistema de concurrencia.

[3] Decreto 2921 de 1948, art. 9
[4] Código de procedimiento civil, art. 488

Por lo tanto, no es procedente la pretensión de la parte demandante en cuanto a discriminar los días y factores salariales puesto que como se manifestó con anterioridad en aplicación del principio de inescindibilidad de la ley, es necesario aplicar integralmente la norma en virtud de la cual se realizó el reconocimiento pensional, recordando que de conformidad con la normatividad legal vigente para el momento de la liquidación de la mesada de la causante, al tratarse de una empleada oficial los factores salariales con los cuales se calculó el IBL son aquellos determinados en el art. 3 de la ley 33 de 1985 modificado por la ley 62 de 1985 razón por la cual la demandante no puede fundamentar la presente demanda en el presunto desconocimiento de los factores salariales frente a los cuales se liquidó la pensión de la señora LISAURA GUIO DE PLAZAS, siendo que dentro de nuestro sistema jurídico es claro que la ignorancia de la Ley no puede servir de excusa para su incumplimiento.

En igual sentido, CAPRECOM aplicó lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto 2921 de 1948, norma que, regula el procedimiento para realizar el cobro de la cuota parte pensional:

*(…)" La Caja de Previsión Social que reciba una solicitud de pago de una pensión de jubilación que sea de su cargo y de varias entidades, la pondrá en conocimiento de éstas y les remitirá copia del proyecto de resolución que elabore, y de los documentos que sean necesarios para que cada una de tales entidades pueda establecer si son correctos, si está obligada a la cuota que se le asigna y si se ajusta a las disposiciones legales que la rigen" (…)*

Así mismo, el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, dispone:

*(…) "Dentro de los quince días hábiles siguientes la Caja o la entidad en cuyo conocimiento es puesta la solicitud deberá manifestar si la acepta o si la objeta con fundamento legal. En caso de que guardare silencio, la Caja que inicialmente recibió la solicitud de reconocimiento de la pensión le exigirá la devolución de los documentos originales que le hubiere remitido, si es el caso, y dictará la providencia que decida sobre la solicitud del empleado." (…)*

Teniendo en cuenta las normas en cita y dando su aplicación al caso que nos ocupa, en su momento CAPRECOM cumplió de manera cabal con el procedimiento exigido por la normatividad vigente a fin de determinar la cuota parte pensional a cargo de cada una de las entidades públicas en las cuales laboró la causante y en estricto apego a la normatividad puso en conocimiento el Proyecto de Resolución 000096 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 1987 a la Caja de Previsión de Boyacá (hoy Departamento de Boyacá), mismo que se le notificó mediante oficio No. 014791 del 5 de diciembre de 1986, en ese sentido, el mismo disponía de un término de quince días para objetar el proyecto, término dentro del cual la Caja de Compensación del Departamento de Boyacá ACEPTÓ la cuota parte pensional , asignada por la extinta CAPRECOM mediante oficio D.E.P 0085 del 26 de enero de 1987.

Así mismo, posteriormente mediante Resolución N.° 2172 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 1988, CAPRECOM ordenó reliquidar la prestación reconocida a la señora LISAURA GUIO DE PLAZAS, reliquidación que se le puso en conocimiento de la Caja de Compensación de Boyacá (hoy Departamento de Boyacá) por medio de la notificación del acto administrativo, no obstante, el Departamento no hizo manifestación alguna de su inconformidad, ni hizo uso de los recursos de ley de los cuales fue susceptible la aludida resolución, quedando así en firme el Acto Administrativo.

Dicha aceptación por parte Departamento de Boyacá genera varios efectos jurídicos, en primer lugar deja en firme del Acto Administrativo permitiendo así a

CAPRECOM (hoy UGPP) realizar todos los actos necesarios para ejecutar las órdenes allí contenidas, en segundo lugar se entiende renunciada la vía gubernativa (ahora procedimiento administrativo) ya que, frente al mismo no se interpuso recurso alguno, especialmente el recurso de apelación que es requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y finalmente se encuentra demostrado con la aceptación por parte del ahora demandante fue libre y voluntaria misma ante la cual no puede contravenir ya que en derecho nadie puede nadie "*puede variar de comportamiento injustificadamente cuando ha generado en otros una expectativa de comportamiento futuro*"[5] por lo que pretender la nulidad de los actos administrativos demandados treinta años después de haber aceptado los mismo no puede tener vocación de prosperidad.

Finalmente, se tiene que CAPRECOM hoy UGPP, ha actuado conforme a derecho y con base en los principios de buena fe y confianza legítima, por lo que sí se ha generado algún perjuicio de orden jurídico y económico, este recae únicamente en cabeza del hoy demandante por su propia negligencia, pues como quedó acreditado la Caja de Previsión de Boyacá (hoy Departamento de Boyacá) aceptó de manera libre y voluntaria la cuota parte pensional impuesta a su cargo en los actos ahora demandados, tornando en abiertamente improcedente que después de casi 30 años de la emisión de las Resoluciones demandadas se le endilgue la responsabilidad de su propio actuar a mi representada.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito de forma respetuosa al Despacho no acceder a las pretensiones de la demanda y en consecuencia absolver a mi representada de todas y cada una de las pretensiones presentes en esta y en igual sentido declarar apegadas a Derecho la RESOLUCIÓN 000096 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 1987 y la RESOLUCIÓN 2172 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 1988, pues estas fueron dictadas con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente para la fecha de su expedición, se encuentran debidamente motivadas, fueron emitidas por la autoridad competente y en el debido cumplimiento de los procedimientos legalmente dispuestos para su emisión y con respeto a los derechos de defensa y contradicción.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN CONDENATORIA 7:** Me opongo dado que es improcedente la condena en costas toda vez que, que mi poderdante resolvió la prestación en los términos legales, con fundamento en los elementos probatorios y jurisprudenciales vigentes a la fecha de la solicitud. Mal podría condenarse en costas, cuando el asunto relacionado con la cuota parte ha sido asunto de debate y controversia al interior de los juzgados, Tribunales, y altas Cortes.

De otro lado, ha establecido el Consejo de Estado que la condena en costas procede cuando al valorar la conducta de la parte vencida se pueda determinar que existió temeridad y mala fe en sus actuaciones[6]. Sin embargo, en nuestro caso no existe ninguna actuación temeraria o de mala fe.

En este caso, no se ha hecho uso temerario del recurso judicial, ni está demostrado que la Administración haya desconocido los deberes que le impone el artículo 10 del C.P.A.C.A., razón por la cual se debe relevar a la Entidad de la condena en costas rectificando la postura adoptada en casos semejantes bajo la nueva interpretación del Consejo de Estado del artículo 188 del C.P.A.C.A. Cabe aún contemplar en este procedimiento argumentos distintos a ser vencido en juicio,

---

[5] López Mesa, Marcelo, "La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia", Edición Desalma, 1997.

[6] CE. Sec. Segunda. Sentencia radicado No. 41001233300020150074101 (2982-2017) de fecha febrero 7/2019. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

debiendo el juez estudiar las características particulares de cada debate antes de condenar en costas.

En materia de costas, no cabe la conducta automática a la parte vencida, sino que habrá que considerar la naturaleza de los conflictos que se resuelven en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que no tienen un contenido puramente económico, sino que está involucrado el interés público. Siendo este un ámbito distinto al de la jurisdicción civil, así como las circunstancias particulares del caso.

Así las cosas, una eventual condena en costas se encontraría injustificada.

**PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS**

1. Es cierto.
2. No es cierto, toda vez que afectos de la liquidación de la prestación de la causante se tuvieron en cuenta todos los tiempos laborados conforme los certificados existentes en el expediente administrativo de la entidad, siendo que la demandante no allegó ninguna certificación válida que soportara su afirmación.
3. Es cierto.
4. Es cierto.
5. No es cierto, toda vez que deben verificarse los días tenidos en cuenta a efectos del reconocimiento pensional, conforme al expediente administrativo obrante en la entidad al momento del reconocimiento pensional.
6. No es cierto, toda vez que CAPRECOM, debía liquidar y reconocer la prestación conforme a la ley aplicable y vigente para su beneficiario y por principio de inescindibilidad de la norma debía aplicar íntegramente la misma y no conforme a las diversas vinculaciones laborales del causante, recordando que en materia de seguridad social en Colombia se encuentra proscrita la realización de Ley tercia entre las diferentes normas aplicables a un trabajador, por tanto el fondo debe acoger de manera integral la normativa aplicable a cada uno de sus beneficiarios.
7. Es cierto.
8. No es cierto, toda vez que CAPRECOM al momento de realizar la liquidación pensional del causante tuvo en cuenta todos los factores salariales devengados por este de conformidad con la ley aplicable y vigente para su beneficiario de conformidad a la información contenida en los certificados aportados por la causante a la entidad, siendo que en aplicación del principio de inescindibilidad de la norma CAPRECOM estaba obligado a aplicar íntegramente la misma y no conforme a las diversas vinculaciones laborales del causante, por tanto al tratarse de factores salariales del orden legal los deben ser conocidos por cada uno de los empleadores tanto para el pago de los correspondientes aportes al fondo pensional como para la liquidación de las pensiones de sus trabajadores, encontrando que la ignorancia de la Ley no puede servir de excusa ante su incumplimiento.
9. Es cierto, siendo un actuar apegado a la legalidad por parte de CAPRECOM, entidad que debía liquidar y reconocer la prestación conforme a la ley aplicable y vigente para su beneficiario de acuerdo con las certificaciones laborales allegadas por la causante y en aplicación del principio de inescindibilidad de la norma estaba obligada a aplicar íntegramente la misma y no conforme a las diversas vinculaciones laborales del causante, siendo obligación de los distintos empleadores realizar el pago oportuno de los aportes al fondo pensional, pago que puede ser exigido en cualquier

tiempo al tratarse de obligaciones imprescriptibles de conformidad con la normatividad legal vigente.

**10.** No es cierto, toda vez que CAPRECOM, como se ha expresado estaba obligada a liquidar y reconocer la prestación conforme a la ley aplicable y vigente para su beneficiario de acuerdo con los certificados allegados por la causante y en aplicación directa del principio de inescindibilidad de la norma debía aplicar íntegramente la misma y no conforme a las diversas vinculaciones laborales del causante, recordando que en materia de seguridad social en Colombia se encuentra proscrita la realización de Ley tercia entre las diferentes normas aplicables a un trabajador, por tanto el fondo debe acoger de manera integral la normativa aplicable a cada uno de sus beneficiarios.

**11.** No es cierto, toda vez que CAPRECOM, como se ha expresado estaba obligada a liquidar y reconocer la prestación conforme a la ley aplicable y vigente para su beneficiario de acuerdo con los certificados allegados por la causante y en aplicación directa del principio de inescindibilidad de la norma debía aplicar íntegramente la misma y no conforme a las diversas vinculaciones laborales del causante, recordando que en materia de seguridad social en Colombia se encuentra proscrita la realización de Ley tercia entre las diferentes normas aplicables a un trabajador, por tanto el fondo debe acoger de manera integral la normativa aplicable a cada uno de sus beneficiarios.

**12.** No es cierto, toda vez que CAPRECOM, como se ha expresado estaba obligada a liquidar y reconocer la prestación conforme a la ley aplicable y vigente para su beneficiario de acuerdo con los certificados allegados por la causante y en aplicación directa del principio de inescindibilidad de la norma debía aplicar íntegramente la misma y no conforme a las diversas vinculaciones laborales del causante, recordando que en materia de seguridad social en Colombia se encuentra proscrita la realización de Ley tercia entre las diferentes normas aplicables a un trabajador, por tanto el fondo debe acoger de manera integral la normativa aplicable a cada uno de sus beneficiarios..

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### Ley 77 de 1988

*ARTÍCULO 7 (...)" A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.*

*El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas"*

### Decreto 2921 de 1948

*ARTÍCULO 20. La Caja de Previsión Social que reciba una solicitud de pago de una pensión de jubilación que sea de su cargo y de varias entidades, la pondrá en conocimiento de éstas y les remitirá copia del proyecto de resolución que elabore, y de los documentos que sean necesarios para que cada una de tales entidades*

*pueda establecer si son correctos, si está obligada a la cuota que se le asigna y si se ajusta a las disposiciones legales que la rigen.*

*PARÁGRAFO. La entidad que reciba las copias a que se refiere este artículo, y que considere necesario el examen de los documentos presentados, podrá solicitarlos, y la Caja en cuyo poder se encuentren los desglosará y se los remitirá, pero dejando copia auténtica de ellos.*

*ARTÍCULO 30. Dentro de los quince días hábiles siguientes la Caja o la entidad en cuyo conocimiento es puesta la solicitud deberá manifestar si la acepta o si la objeta con fundamento legal. En caso de que guardare silencio, la Caja que inicialmente recibió la solicitud de reconocimiento de la pensión le exigirá la devolución de los documentos originales que le hubiere remitido, si es el caso, y dictará la providencia que decida sobre la solicitud del empleado.*

*ARTÍCULO 40. Conocido el concepto de las demás entidades y devuelto por éstas el proyecto de resolución, ésta será elaborada de acuerdo con lo que ellas hubieren manifestado. Si ocurriere el caso de que guardaren silencio se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.*

**Sentencia T – 235 de 2002**

*(…)"La ley 100 de 1993 no excluye a las cuotas partes como soporte financiero. En efecto, la ley 100 de 1993, en el capítulo "Traslado entre regímenes - bonos pensiónales -", en los artículos 121, 122 y 124, habla expresamente de "Bonos pensiónales y cuotas partes a cargo de la Nación", "Fondos para pago de cuotas partes y bonos pensiónales de las Cajas, Fondos o Entidades Públicas no sustituidos por el Fondo de pensiones públicas del nivel nacional" y "Fondos para pago de cuotas partes y bonos pensiónales de las Empresas que tienen a su cargo exclusivo las pensiones de sus empleados". Significa lo anterior que la ley 100 estableció el mecanismo de los bonos, pero no excluyó, en determinadas situaciones, el método que antes de su vigencia se empleaba de distribuir la mesada por cuotas partes entre las entidades que en la vida laboral del jubilado recibieron cotizaciones. No podía excluir las cuotas partes porque por ley está reconocido el régimen de transición."(…)*

**Corte Constitucional en Sentencia C-895 de 2009, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio**

*"Las cuotas partes constituyen el soporte financiero para la seguridad social en pensiones, sustentado en el concepto de concurrencia, en tanto que el recobro es un derecho crediticio a favor de la entidad que ha reconocido y pagado una mesada pensional, la que a su vez puede repetir contra las demás entidades obligadas al pago a prorrata del tiempo laborado o de los aportes efectuados.*"

**Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección cuarta, Radicación número: 52001-23-33-000-2014-00200-01(22116) MP. Milton Chavés García**

*El procedimiento que debe adelantarse para el recobro de las cuotas partes pensionales es el establecido por el artículo 2 del Decreto 2921 de 1948 y la Ley 1066 de 2006 , según las cuales la Caja de Previsión Social que reciba la solicitud de pago de una pensión compartida, debe elaborar un proyecto de resolución y comunicarlo a las otras entidades obligadas a contribuir en el pago de las mesadas pensionales, para que planteen sus observaciones y objeciones. Una vez agotado el procedimiento puede conformarse el título ejecutivo de las cuotas*

*partes pensionales que da lugar al cobro. La Sala ha señalado que el título ejecutivo idóneo para el cobro de cuotas partes pensionales está conformado por (i) el acto administrativo en el que se reconoce el derecho a la pensión, y (ii) el acto administrativo que liquide las cuotas partes pensionales respecto de las mesadas pensionales causadas y pagadas que no estén prescritas. (…) Entonces, para que el cobro ejecutivo de las cuotas partes pensionales pudiera llevarse a cabo, debió integrarse un título ejecutivo conformado por la resolución que reconoce el derecho a la pensión, y el acto administrativo que liquida las cuotas partes pensionales respecto de las mesadas pensionales causadas y pagadas que no estén prescritas, expedidas conforme al procedimiento establecido por la ley. Para el caso de las cuotas partes pensionales a cargo de las entidades públicas, no basta con la presentación de una liquidación certificada de la deuda, en los términos del artículo 24 de la ley 100 de 1993 , comoquiera que para ello debe agotarse un procedimiento especial, para conformar un título ejecutivo compuesto por los documentos antes reseñados, que den plena cuenta del carácter claro, expreso y exigible de las cuotas partes pensionales objeto de cobro.*

Pido al Señor Juez se sirva declarar probadas las siguientes excepciones a favor de la parte demandada:

**EXCEPCIÓN PREVIA**

1. **INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES/INDEBIDO AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA**

En este caso se encuentra probada la falta de agotamiento de la vía gubernativa establecida en el artículo 6 del Código de Procedimiento laboral en concordancia con el numeral 2 del artículo 161 del del C.P.A.C.A., toda vez que previo a acudir a la jurisdicción para demandar la prestación cualquiera que esta sea, es menester agotar la solicitud administrativa junto con los recursos a que haya lugar ante la entidad, pues en este caso nos encontramos frente a una entidad de derecho público, por lo cual las actuaciones desplegadas en sede administrativa deben acogerse a lo dispuesto en el C.P.A.C.A, siendo imperativo para el ejercicio a la defensa y debido proceso, que a la administración se le dé la oportunidad de pronunciarse de fondo sobre la solicitud, por lo que el recurso de apelación en sede administrativa debe interponerse de manera obligatoria para poder acceder a la sede judicial incluso si es a la jurisdicción ordinaría.

Para el caso, las resoluciones de las que se pretende su nulidad y las cuales generan un efecto jurídico son la RESOLUCIÓN 000096 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 1987 y la RESOLUCIÓN No. 2172 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 1988, las cuales eran susceptibles del recurso obligatorio de apelación, recursos que no fueron ejercidos por la parte demandante dentro de la oportunidad legal para ella, en esa medida, no se ha cumplido los requerimientos legales para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa conforme lo dispone el artículo 76 del C.P.A.CA.

Por lo anterior, debe declararse probada esta excepción, pues de no ser así se vulneraría el derecho al debido proceso, a la defensa y contradicción y a la firmeza del acto administrativo, que ostenta la entidad e incluso, el pensionado, dentro del trámite administrativo previo a acudir ante la jurisdicción como último recurso legal.

**2. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN**

La excepción se encuentra probada teniendo en cuenta que por obvias razones han pasado más cuatro (4) meses de que trata la norma desde que fue proferida la RESOLUCIÓN No 000096 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 1987 y la RESOLUCIÓN No. 2172 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 1988, objeto de la presente demanda sin que fuera objeto de réplica por la parte actora. Para el caso el acto administrativo se encuentra en firme en la medida que fue aceptado de manera expresa por el demandante.

En este caso debe entenderse que el acto administrativo respecto a la parte demandada al pago de la cuota parte pensional es de ejecución inmediata, en la medida que se aceptó la calidad de deudor, y en tal sentido la obligación de mi poderdante era expedir el acto administrativo en concordancia con el proyecto aprobado por el cuotapartista como en efecto se hizo.

Ahora bien, el Departamento de Boyacá dentro del término legal de vía administrativa podía no aceptar el proyecto de liquidación o una vez proferido el acto administrativo podía ejercer su derecho de acción demandando por la vía contencioso administrativa, lo que no sucedió dentro del término que la ley establece para la ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que debe declararse la caducidad de la acción conforme lo manifestado por el Consejo de Estado en Sentencia del 25 de febrero de 2016, radicado 11001-03-15-000-2016-00059-00, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve:

*(…)"Este fenómeno jurídico está fundamentado en la necesidad de señalar un plazo objetivo, sin considerar situaciones personales; es invariable para que aquella persona que considere que un acto administrativo vulnera su derecho, independientemente si ésta opta por demandar o no" (…), en ese mismo sentido el consejo de estado en sentencia del 26 de marzo de 2009, Rad No. 08001-23-31-000-2003-02500-01(1134-2007) Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve manifiesta (…) "El derecho al acceso a la administración de justicia, garantizado con el establecimiento de diversos procesos y jurisdicciones, conlleva el deber de un ejercicio oportuno, razón por la cual, se han establecido legalmente términos de caducidad para racionalizar el ejercicio del derecho de acción, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y no puedan ser ventiladas en vía judicial."(…)*

De lo anterior se tiene que la institución de la caducidad tiene como uno de sus objetivos la seguridad jurídica. En el caso que nos ocupa acceder a las pretensiones de la demanda e incluso continuar con el litigio implicaría una vulneración a la misma, pues dejaría como precedente que basta con la presentación de una nueva solicitud que implique la emisión de una nueva resolución con la que se pretenda la declaratoria de nulidad de resoluciones para las cuales la acción ya caducó con anterioridad y de las cuales se originaron efectos jurídicos que adquirieron firmeza.

En estos términos conforme lo manifestado por el Consejo de Estado, se evidencia que la caducidad supone un ejercicio oportuno de la acción, en esos términos en el caso que nos ocupa el Departamento de Boyacá no hizo presentación en tiempo de la acción y pretende que con presentar una nueva solicitud reiterando lo manifestado anteriormente se renueven los términos .

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declare la caducidad de la acción teniendo en consideración que las situaciones jurídicas que se originaron con la emisión de las resoluciones base del litigio ya se encuentran en firme y que el ejercicio no oportuno por parte del demandante no es óbice para que se genere una situación de inseguridad jurídica.

**3. FALTA DE INTEGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO**

En este caso se encuentra probada la falta de integración del litisconsorcio necesario en la medida en que en el presente asunto una eventual condena afecta directamente los intereses de la señora **LISAURA GUIO DE PLAZAS**, puesto que, conforme se evidencia en las Resoluciones demandadas, él es el beneficiario del reconocimiento prestacional que hoy es objeto de debate.

Así las cosas, en caso de una eventual condena, esta afectaría los intereses de la pensionada **LISAURA GUIO DE PLAZAS**, toda vez que las resoluciones objeto de censura son por medio de las cuales se le reconoció y posteriormente se le reliquidó la prestación.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario dentro del presente asunto vincular a la señora **LISAURA GUIO DE PLAZAS**, o a quién se le haya sustituido su prestación o a los herederos determinados o indeterminados a fin de que ejerzan su derecho a la defensa y contradicción en tanto sus intereses podrían verse afectados a consecuencia del presente trámite procesal.

**EXCEPCIONES DE MÉRITO**

1. **LEGALIDAD DE LA ACCIÓN DE COBRO DE LA CUOTA PARTE PENSIONAL**

La excepción se encuentra debidamente probada toda vez que tanto la existencia como el cobro de la cuota parte pensional a cargo del Departamento de Boyacá y a favor del causante, así como la reliquidación de la prestación económica reconocida en favor de este último, Actos administrativos que se encuentran ajustados a Derecho por reunir los requisitos y procedimientos consagrados en la ley para su nacimiento a la vida jurídica, de igual manera los actos administrativos demandados fueron expedidos por la entidad competente para realizar el reconocimiento de la pensión y ordenar el pago de las cuotas partes pensionales en favor del causante.

Siendo así, debe tenerse en cuenta que la cuota parte pensional es un mecanismo de soporte financiero de la pensión vitalicia de vejez dentro de un sistema de concurrencia para entidades públicas, ya que con este se permite el recobro a las demás entidades obligadas al pago a prorrata del tiempo laborado o los aportes efectuados, como derecho a favor de la entidad o fondo pensional que reconoció y por ende asumió el pago total de la prestación pensional en favor del pensionado.

Este sistema fue incorporado al ordenamiento jurídico antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, no obstante, la misma no hizo exclusión de éste ni de la regulación que existía en precedencia, como bien lo ha sostenido la Corte Constitucional corporación que manifestó:

(…)"La ley 100 de 1993 no excluye a las cuotas partes como soporte financiero. En efecto, la ley 100 de 1993, en el capítulo "Traslado entre regímenes - bonos pensiónales -", en los artículos 121, 122 y 124, habla expresamente de "Bonos pensiónales y cuotas partes a cargo de la Nación", "Fondos para pago de cuotas partes y bonos pensiónales de las Cajas, Fondos o Entidades Públicas no sustituidos por el Fondo de pensiones públicas del nivel nacional" y "Fondos para pago de cuotas partes y bonos pensiónales de las Empresas que tienen a su cargo exclusivo las pensiones de sus empleados". Significa lo anterior que la ley 100 estableció el mecanismo de los bonos, pero no excluyó, en determinadas situaciones, el método que antes de su vigencia se empleaba de distribuir la mesada por cuotas partes entre las entidades que en la vida laboral del jubilado recibieron

cotizaciones. No podía excluir las cuotas partes porque por ley está reconocido el régimen de transición."(…)

Teniendo en cuenta lo citado en precedencia, la Ley 71 de 1988, dispone:

*(…)" A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.*

*El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas."(…)*

Así las cosas, el derecho al recobro de las cuotas partes pensionales se encuentra incorporado en un título complejo, el cual se conforma por el acto administrativo que reconoció la prestación económica y vinculó como deudor a la o las entidades cuotapartistas; Acto que debe cumplir a saber con dos requisitos, el primero: que debió expedirse previo al procedimiento de consulta de la cuota parte, y el segundo: Debe estar acreditada la realización del procedimiento posterior de comunicación a la entidad deudora.

En ese orden de ideas, la exigibilidad del derecho al recobro de la cuota parte pensional, está condicionada a que efectivamente se acredite que el pensionado recibió el pago de la mesada pensional, y a que el cobro se realice con el cumplimiento pleno de las formalidades establecidas en la ley, por lo que solamente es posible reconocer el derecho que se encuentre incorporado en un título que cumple con los requisitos exigidos por la norma.

**2. PRINCIPIO DE INESCINDIBILIDAD DE LA LEY**

excepción que se encuentra demostrada teniendo en cuenta que, la señora LISAURA GUIO DE PLAZAS, estuvo vinculada al Departamento de Boyacá en calidad de trabajador oficial, prestando sus servicios durante el periodo comprendido entre 1° de agosto de 1961 a 30 de abril de 1976 para un total de 14 años y 9 meses de tiempo laborado, además de los servicios prestados para TELECOM.

Así las cosas, es innegable que la obligación de pagar la cuota parte pensional correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de agosto de 1961 a 30 de abril de 1976 se encuentra en cabeza del Departamento de Boyacá por haber fungido como empleador durante este periodo de tiempo de la señora MARÍA ALIETH NEGRO VDA. DE RODRÍGUEZ. Encontrándose demostrado que durante ese intervalo de tiempo la causante fue afiliado a la Caja de Previsión Departamental de Boyacá, entidad que recibió los aportes correspondientes a la pensión de vejez, invalidez y viudez en favor del causante y sus beneficiarios, como claramente lo evidencia el certificado de tiempos laborados expedido por la parte demandante.

Así las cosas, el reconocimiento de la prestación en favor del causante por parte de CAPRECOM se hizo en virtud la ley 33 de 1985, ley 62 de 1985, ley 4 de 1976, el Decreto 1237 de 1946 y el Decreto 2661 de 1960. Normas en las cuales se dispone taxativamente los factores salariales a tener en cuenta a efectos de la liquidación de la prestación, por lo que por principio de inescindibilidad de la norma fue necesario aplicar íntegramente la misma liquidando la prestación y no hacer uso de otras

disposiciones para discriminar los factores salariales devengados en las diferentes entidades públicas en las cuales laboró la señora LISAURA GUIO DE PLAZAS entre las cuales se encuentra el Departamento de Boyacá.

Es importante indicar que al momento de realizar la liquidación pensional de la señora LISAURA GUIO DE PLAZAS, esta se realizó teniendo en cuenta los diferentes periodos y factores salariales devengado durante el periodo de tiempo señalado con anterioridad, en esa medida, para calcular la mesada pensional a la que tiene derecho, por parte de CAPRECOM se incluyeron la totalidad de los factores salariales devengados en vigencia de todas y cada una de sus vinculaciones laborales. Siendo que, al Departamento de Boyacá solamente se le impuso la cuota parte pensional en relación con el tiempo de servicio prestado en el mismo y la inclusión del mencionado factor salarial obedece al objetivo de la cuota parte pensional como sistema de concurrencia.

Por lo tanto, no es procedente la pretensión de la parte demandante en cuanto a discriminar los días y factores salariales puesto que como se manifestó con anterioridad en aplicación del principio de inescindibilidad de la ley, es necesario aplicar integralmente la norma en virtud de la cual se realizó el reconocimiento, recordando que de conformidad con la normatividad legal vigente para el momento de la liquidación pensional del causante, al tratarse de una empleada oficial los factores salariales con los cuales se calculó el IBL son aquellos determinados en el art. 3 de la ley 33 de 1985 modificada por la ley 62 de 1985, razón por la cual la demandante no puede fundamentar la presente demanda en el presunto desconocimiento de los factores salariales frente a los cuales se liquidó la pensión de la señora LISAURA GUIO DE PLAZAS, siendo que dentro de nuestro sistema jurídico es claro que la ignorancia de la Ley no puede servir de excusa para su incumplimiento.

**3. FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO.**

Excepción que se encuentra probada toda vez que, CAPRECOM aplicó lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto 2921 de 1948, norma que, regula el procedimiento para realizar el cobro de la cuota parte pensional:

*(…)" La Caja de Previsión Social que reciba una solicitud de pago de una pensión de jubilación que sea de su cargo y de varias entidades, la pondrá en conocimiento de éstas y les remitirá copia del proyecto de resolución que elabore, y de los documentos que sean necesarios para que cada una de tales entidades pueda establecer si son correctos, si está obligada a la cuota que se le asigna y si se ajusta a las disposiciones legales que la rigen" (…)*

Así mismo, el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, dispone:

*(…) "Dentro de los quince días hábiles siguientes la Caja o la entidad en cuyo conocimiento es puesta la solicitud deberá manifestar si la acepta o si la objeta con fundamento legal. En caso de que guardare silencio, la Caja que inicialmente recibió la solicitud de reconocimiento de la pensión le exigirá la devolución de los documentos originales que le hubiere remitido, si es el caso, y dictará la providencia que decida sobre la solicitud del empleado." (…)*

Teniendo en cuenta las normas en cita y dando su aplicación al caso que nos ocupa, en su momento CAPRECOM cumplió de manera cabal con el procedimiento exigido por la normatividad vigente a fin de determinar la cuota parte pensional a cargo de cada una de las entidades públicas en las cuales laboró el causante y en estricto apego a la normatividad puso en conocimiento el Proyecto de Resolución 000096 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 1987 a la Caja de Previsión de Boyacá

(hoy Departamento de Boyacá), mismo que se le notificó mediante oficio No. 014791 del 5 de diciembre de 1986, en ese sentido, el mismo disponía de un término de quince días para objetar el proyecto, término dentro del cual la Caja de Compensación del Departamento de Boyacá ACEPTÓ la cuota parte pensional , asignada por la extinta CAPRECOM mediante oficio D.E.P 0085 del 26 de enero de 1987.

Así mismo, posteriormente mediante Resolución 2172 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 1988, CAPRECOM ordenó reliquidar la prestación reconocida en favor de la señora NEGRO VDA. DE RODRÍGUEZ, reliquidación que se le puso en conocimiento de la Caja de Compensación de Boyacá (hoy Departamento de Boyacá) por medio de la notificación del acto administrativo, no obstante, el Departamento no hizo manifestación alguna de su inconformidad, ni hizo uso de los recursos de ley de los cuales fue susceptible la aludida resolución, quedando así en firme el Acto Administrativo.

Dicha aceptación por parte del Departamento de Boyacá genera varios efectos jurídicos, en primer lugar deja en firme del Acto Administrativo permitiendo así a CAPRECOM (hoy UGPP) realizar todos los actos necesarios para ejecutar las órdenes allí contenidas, en segundo lugar se entiende renunciada la vía gubernativa (ahora procedimiento administrativo) ya que, frente al mismo no se interpuso recurso alguno, especialmente el recurso de apelación que es requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y finalmente se encuentra demostrado con la aceptación por parte del ahora demandante fue libre y voluntaria misma ante la cual no puede contravenir ya que en derecho nadie puede nadie “puede variar de comportamiento injustificadamente cuando ha generado en otros una expectativa de comportamiento futuro” por lo que pretender la nulidad de los actos administrativos demandados treinta años después de haber aceptado los mismo no puede tener vocación de prosperidad.

Finalmente, se tiene que CAPRECOM hoy UGPP, ha actuado conforme a derecho y con base en los principios de buena fe y confianza legítima, por lo que sí se ha generado algún perjuicio de orden jurídico y económico, este recae únicamente en cabeza del hoy demandante por su propia negligencia, pues como quedó acreditado la Caja de Previsión de Boyacá (hoy Departamento de Boyacá) aceptó de manera libre y voluntaria la cuota parte pensional impuesta a su cargo en los actos ahora demandados, tornando en abiertamente improcedente que después de casi 30 años de la emisión de las Resoluciones demandadas se le endilga la responsabilidad de su propio actuar a mi representada.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito de forma respetuosa al Despacho no acceder a las pretensiones de la demanda y en consecuencia absolver a mi representada de todas y cada una de las pretensiones presentes en esta y en igual sentido declarar apegadas a Derecho las Resoluciones 000096 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 1987 2172 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 1988, pues estas fueron dictadas con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente para la fecha de su expedición, se encuentran debidamente motivadas, fueron emitidas por la autoridad competente y en el debido cumplimiento de los procedimientos legalmente dispuestos para su emisión y con respeto a los derechos de defensa y contradicción.

**4. IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS**

La excepción se encuentra fundamentada toda vez que, es improcedente la condena en costas toda vez que, que mi poderdante resolvió la prestación en los términos legales, con fundamento en los elementos probatorios y jurisprudenciales vigentes

a la fecha de la solicitud. Mal podría condenarse en costas, cuando el asunto relacionado con la cuota parte ha sido asunto de debate y controversia al interior de los juzgados, Tribunales, y altas Cortes.

De otro lado, ha establecido el Consejo de Estado que la condena en costas procede cuando al valorar la conducta de la parte vencida se pueda determinar que existió temeridad y mala fe en sus actuaciones[7]. Sin embargo, en nuestro caso no existe ninguna actuación temeraria o de mala fe.

En este caso, no se ha hecho uso temerario del recurso judicial, ni está demostrado que la Administración haya desconocido los deberes que le impone el artículo 10 del C.P.A.C.A., razón por la cual se debe relevar a la Entidad de la condena en costas rectificando la postura adoptada en casos semejantes bajo la nueva interpretación del Consejo de Estado del artículo 188 del C.P.A.C.A. Cabe aún contemplar en este procedimiento argumentos distintos a ser vencido en juicio, debiendo el juez estudiar las características particulares de cada debate antes de condenar en costas.

En materia de costas, no cabe la conducta automática a la parte vencida, sino que habrá que considerar la naturaleza de los conflictos que se resuelven en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que no tienen un contenido puramente económico, sino que está involucrado el interés público. Siendo este un ámbito distinto al de la jurisdicción civil, así como las circunstancias particulares del caso.

Así las cosas, una eventual condena en costas se encontraría injustificada.

## 5. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL JUDICIAL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La excepción se encuentra probada teniendo en cuenta que por obvias razones han pasado más cuatro (4) meses de que trata la norma desde que fue proferida la RESOLUCIÓN No 000096 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 1987 y la RESOLUCIÓN No. 2172 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 1988, objeto de la presente demanda sin que fuera objeto de réplica por la parte actora. Para el caso el acto administrativo se encuentra en firme en la medida que fue aceptado de manera expresa por el demandante.

En este caso debe entenderse que el acto administrativo respecto a la parte demandada al pago de la cuota parte pensional es de ejecución inmediata, en la medida que se aceptó la calidad de deudor, y en tal sentido la obligación de mi poderdante era expedir el acto administrativo en concordancia con el proyecto aprobado por el cuotapartista como en efecto se hizo.

Ahora bien, el Departamento de Boyacá dentro del término legal de vía administrativa podía no aceptar el proyecto de liquidación o una vez proferido el acto administrativo podía ejercer su derecho de acción demandando por la vía contencioso administrativa, lo que no sucedió dentro del término que la ley establece para la ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que debe declararse la caducidad de la acción conforme lo manifestado por el Consejo de Estado en Sentencia del 25 de febrero de 2016, radicado 11001-03-15-000-2016-00059-00, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve:

*(…)"Este fenómeno jurídico está fundamentado en la necesidad de señalar un plazo objetivo, sin considerar situaciones personales; es invariable para que*

[7] CE. Sec. Segunda. Sentencia radicado No. 41001233300020150074101 (2982-2017) de fecha febrero 7/2019. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

*aquella persona que considere que un acto administrativo vulnera su derecho, independientemente si ésta opta por demandar o no" (…), en ese mismo sentido el consejo de estado en sentencia del 26 de marzo de 2009, Rad No. 08001-23-31-000-2003-02500-01(1134-2007) Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve manifiesta (…) "El derecho al acceso a la administración de justicia, garantizado con el establecimiento de diversos procesos y jurisdicciones, conlleva el deber de un ejercicio oportuno, razón por la cual, se han establecido legalmente términos de caducidad para racionalizar el ejercicio del derecho de acción, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y no puedan ser ventiladas en vía judicial."(…)*

De lo anterior se tiene que la institución de la caducidad tiene como uno de sus objetivos la seguridad jurídica. En el caso que nos ocupa acceder a las pretensiones de la demanda e incluso continuar con el litigio implicaría una vulneración a la misma, pues dejaría como precedente que basta con la presentación de una nueva solicitud que implique la emisión de una nueva resolución con la que se pretenda la declaratoria de nulidad de resoluciones para las cuales la acción ya caducó con anterioridad y de las cuales se originaron efectos jurídicos que adquirieron firmeza.

En estos términos conforme lo manifestado por el Consejo de Estado, se evidencia que la caducidad supone un ejercicio oportuno de la acción, en esos términos en el caso que nos ocupa el Departamento de Boyacá no hizo presentación en tiempo de la acción y pretende que con presentar una nueva solicitud reiterando lo manifestado anteriormente se renueven los términos .

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declare la caducidad de la acción teniendo en consideración que las situaciones jurídicas que se originaron con la emisión de las resoluciones base del litigio ya se encuentran en firme y que el ejercicio no oportuno por parte del demandante no es óbice para que se genere una situación de inseguridad jurídica.

## 6. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

Las decisiones contenidas en los Actos Administrativos por parte de la UGPP han sido tomadas con base en la documentación que reposa en la entidad, una vez cumplidos los requisitos de ley para su formación, por lo que adquieren fuerza obligatoria y gozan de presunción de legalidad.

Sin embargo, los actos administrativos, como decisiones unilaterales de la Administración encaminadas a producir efectos jurídicos, son susceptibles de judicialización por parte de la jurisdicción a través de las acciones establecidas en el CPACA., pero se resalta que se encuentran amparados por la presunción de legalidad derivada del sometimiento coercitivo de la actividad administrativa al ordenamiento jurídico, propio de los Estados Sociales de Derecho y, por lo mismo, su control judicial se encuentra sujeto a una carga procesal de alegación por parte de quien pretenda desvirtuar la presunción, limitando de esa forma tanto el terreno de defensa para el demandado como el ámbito de análisis para el juez y el alcance de su decisión.

## 7. BUENA FE DE LA UGPP

Mi poderdante en todas y cada una de sus actuaciones legales, actúa bajo el principio de buena, y en este asunto, en cumplimiento de dicho precepto legal acata en su integridad la normatividad vigente para efectos de reconocimiento de

derechos pensionales. Al respecto la Corte Constitucional, ha manifestado lo siguiente:

El principio de la buena fe es también principio del derecho laboral, ha sido incluido en el Código sustantivo del trabajo, en el Artículo 55 y aparece en la jurisprudencia laboral desde la época del Tribunal Supremo del trabajo: "El principio de la buena fe, que no es nuevo sino que data de las mejores tradiciones romanas, debe presidir de la ejecución de los contratos, incluido el del trabajo". Sentencia esta proferida el 09 de febrero de 1949 y que llega hasta analizar no solo la buena fe sino la mala fe, en los siguientes términos:

La mala fe ha dicho la Corte Suprema de Justicia – debe ser la deducción acertada hecha sobre la plena comprobación de hechos precisos de naturaleza incompatible con la "bona fide", como lo sería, en tratándose de la buena fe contractual, la demostración evidente de una visible ventaja pecuniaria en una negociación celebrada con un incapaz, que mostrará un aprovechamiento deshonesto del estado de inferioridad en que ocurrió una de las partes en su celebración, es decir, la prueba de que se abusó de un estado de debilidad para obtener un indebido e injusto provecho, apreciable en el desequilibrio de los valores. Sin olvidar tampoco que la calificación de la fe jurídica, el rigor con el que se exige o es exigible la buena fe en los negocios de hecho, conformada probatoriamente y adoptada en las situaciones particulares en cada caso.

Según lo anterior, la buena fe en la labor misional de UGPP, surge precisamente de la estricta aplicación de la constitución, la ley y la jurisprudencia, que permiten conceder o negar prestaciones ajustadas a derecho, por lo cual, existiendo la presunción de legalidad del acto que garantiza la seguridad jurídica en la decisión prestacional, tal circunstancia permite revestir además bajo la égida de la buena fe, el reconocimiento o negación pensional, por lo que es de carga exclusiva del demandante, controvertir tanto la presunción legal del acto, como la buena fe de la entidad administradora pensional en la decisión.

## 8. PRESCRIPCIÓN

Sin que de ninguna manera se entienda reconocidos los hechos y las pretensiones de la demanda, se propone la excepción de prescripción frente a cualquier derecho que eventualmente se hubiese causado a favor de la demandante y que de conformidad con las normas legales y con las pruebas aportadas al plenario se reconozca en la sentencia, causados con anterioridad a tres años, contados desde la presentación de la demanda, conforme lo establece el artículo 488 del C.S.T., en concordancia con el artículo 151 del C.P.T. y S.S.

Sustento la presente excepción además de los artículos citados en precedencia en la jurisprudencia de la H corte constitucional, sentencia C-624 de 2003, y la sentencia de la H corte suprema de justicia sala de casación laboral, expediente L-8109-96 que me permitió transcribir en su aparte pertinente, así:

> (…) "No obstante, así reitero la corte, una vez más, la imprescriptibilidad del derecho a reclamar una pensión.
>
> "pero, como ha sido objeto de aclaraciones en las anteriores oportunidades, la imprescriptibilidad de la pensión se refiere al derecho en sí mismo, pero no en lo atinente a las mesadas pensionales dejadas de cobrar, las cuales se someten a la regla general de prescripción de las leyes

sociales de tres (3) años, prevista en el artículo 151 de decreto –ley 2158 de 1948 (…)

(…) ahora bien, como la pensión de jubilación es vitalicia, la jurisprudencia laboral ha encontrado, con acierto, que el derecho a ella no prescribe, y que solo a las mesadas, una tras otra consideradas, puede aplicarse este medio de extinción de las obligaciones. Corte suprema de justicia- sala de casación laboral, EXP L-8109-96 M.P German Valdés Sánchez". (…)

**9. INNOMINADA O GENÉRICA.**

De conformidad con lo establecido por el artículo 282 del C.G.P., solicito al Despacho que de encontrar probados hechos que constituyan excepción los declare probados a favor de mi poderdante.

**PRUEBAS**

**DOCUMENTALES:**

- Las emitidas por la entidad que represento y que obren dentro del traslado de la demanda y las que se acompañen con el presente escrito, Expediente administrativo en formato PDF mismo que contiene todos los actos administrativos emitidos por la entidad, así como las solicitudes realizadas por el demandante y demás entidades vinculadas.

**OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS.**

Las que el Despacho a su cargo, considere decretar para obtener la certeza jurídica suficiente al momento de proferir Sentencia.

**ANEXOS**

1. Escritura Pública No. 174 del 17 de enero de 2023, de la Notaría 73 del Círculo de Bogotá
2. Escritura Pública No. 0604 del 12 de febrero de 2020, suscrita en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá.
3. Resolución 681 del 29 de Julio de 2020.
4. Acta de Posesión No. 42 del 30 de Julio de 2020
5. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, de la firma Viteri Abogados en la que consta la representación legal en cabeza del suscrito, la cual está contenida en la misma escritura.
6. Tarjeta Profesional del Dr. Omar Andrés Viteri Duarte.
7. Sustitución debidamente otorgada del Dr. Omar Andrés Viteri Duarte
8. Tarjeta Profesional de la suscrita apoderada.
9. Los documentos aludidos como prueba.
10.

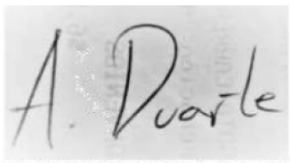
**NOTIFICACIONES**

A la ejecutante y a su apoderado(a) en la dirección aportada en la demanda.

UGPP se notifica en la Av. Carrera 68 No. 13 – 37 en Bogotá, correo: notificacionesjuidicialesugpp@ugpp.gov.co

El suscrito apoderado se notifica en la Carrera 13ª No 89-38, Edificio Nippon Center Oficina 511, en los correos electrónicos aduartel@viteriabogados.com - oviteri@ugpp.gov.co y en el abonado celular 321 434 0108.

Atentamente,



**ALVARO GUILERMO DUARTE LUNA**

C.C. 87.063.464 expedida en Pasto
T.P. 352.133 del C.S de la Jud

UNION TEMPORAL
ABACO PANIAGUA & COHEN

Señores:
**JUZGADO 41 SECCIÓN CUARTA - ORAL ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ D.C.**
E. S.D.

REFERENCIA: **ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
RADICADO: **11001333704120220029400**
DEMANDANTE: **LADRILLERA GRESVALLE S.A.**
DEMANDADO: **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA**

**DIANA MARCELA MANZANO BOJORGE,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.130.598.216 de Cali - Valle, Abogada en ejercicio, titular de la Tarjeta Profesional No. 232.810 expedida por el C.S.J., en mi condición de Apoderada Sustituta de la Doctora ANGELICA MARGOTH COHEN MENDOZA, identificada con la cedula de ciudadanía N° 32709957 y T.P N° 102275 del CSJ., quien actúa en condición de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL ABACO PANIAGUA & COHEN** distinguida con el NIT N° 901581654, quien a su vez en la Apoderada de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, tal como se desprende de la Escritura Pública N° 1955 de fecha 18 de abril de 2022 otorgada ante la Notaria setenta y dos (72) del círculo de Bogotá, acudo ante su despacho para presentar contestación de demanda en los siguientes términos:

## NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO

La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativay patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 modificatorio del artículo 48de la constitución Política, de

acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle. La representación legal la ejerce al Doctor **JAIRO DUSSÁN CALDERON**, o quien haga sus veces.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11,número telefónico 2170100.

## PRONUNCIAMIENTO EXPRESO FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a que prosperen todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, toda

vez que, las mismas no están llamadas a prosperar por carecer de sustento factico y legal, como se demostrará en el momento procesal oportuno.

En consecuencia, respetuosamente le solicito al Despacho que se abstenga de fallar de manera condenatoria en mérito del asunto, por las razones que a continuación se esgrimen en el capítulo de la oposición, hechos y razones de la defensa y fundamentos de las excepciones que se enuncian en este escrito.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN 1:** Me opongo a que prospere la nulidad de la resolución No. APP-441179 del 27/01/2021 expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, por cuanto lo misma se encuentra ajustada a derecho, y del material probatorio obrante en el expediente, se puede colegir que, la misma esta basada en la normatividad aplicable al caso.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN 2:** Me opongo por lo misma se encuentra ajustada a derecho, y del material probatorio obrante en el expediente, se puede colegir que, la misma está basada en la normatividad aplicable al caso.

UNION TEMPORAL
ABACO PANIAGUA & COHEN

## PRETENSIONES SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**PRETENSIÓN 3.** Nos oponemos a que se declare la NULIDAD PARCIAL, de los actos administrativos; Liquidación Certificada de Deuda No. APP-441179 del 27/01/2021 y la Resolución Nro. 02021-17045 con fecha del 3 de noviembre de 2021 expedidas por la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, y se ordene la prescripción del cobro efectuado en contra de la ladrillera GRESVALLE S.A, en los rangos de 1995-06 hasta 2016-09, teniendo en cuenta que dichos actos administrativos se encuentra ajustada a derecho, y del material probatorio obrante en el expediente, se puede colegir que, la misma está basada en la normatividad aplicable al caso.

**PRETENSIÓN 4.** En cuanto a la pretensión condenatoria relacionada con la imposición de Costas procesales por concepto de agencias en derecho, a cargo de la entidad AdministradoraColombiana de Pensiones - **COLPENSIONES**, debe precisarse que acorde a lo establecido en el *Acuerdo 1887 del año 2001, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura (C.S.J.)*, constituyen criterios para fijar las condenas por concepto de expensas y agencias en derecho, los principios de equidad y razonabilidad, así como factores tales como la duración del proceso, la calidad de la gestión y la naturaleza del mismo, por lo que en el caso que ocupa nuestra atención, *no resulta procedente* imponer la sanción procesal con ocasión del pago decostas procesales por concepto de agencias en derecho, ello en perjuicio y detrimento del patrimonio de Colpensiones, como quiera que la naturaleza del proceso, no permite que en caso dado de presentarse una eventual condena, se le pueda imputar la responsabilidad a laentidad demandada.

## PRONUNCIAMIENTO EXPRESO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

**1:** ES CIERTO, La administradora Colombiana de Pensiones, está ejecutando por medio de Liquidación Certificada de Deuda No. APP-441179 del 27/01/2021 una deuda por concepto de aportes pensionales.

**2**: PARCIALMENTE CIERTO, por cuanto se interpone recurso, pero con relación al tiempo de ejecutoria de los actos administrativos esto no es un hecho como tal, es una situación deprecada por el apoderado de la parte demandante, lo cual deberá ser probado dentro del plenario.

**3**: NO ES CIERTO, mi representada siempre ha respetado el principio de publicidad de los actos administrativos

**4:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente

**5:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente

**6:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente.

**7:** NO ES UN HECHO, es una apreciación subjetiva del demandante.

**8:** NO ES UN HECHO, es una apreciación subjetiva del demandante.

**9:** NO ES UN HECHO, es una apreciación subjetiva del demandante.

**10:** PARCIALMENTE CIERTO, teniendo en cuenta que Colpensiones siempre ha dejado claridad sobre el cobro coactivo que ejecuta.

**11**: PARCIALMENTE CIERTO, teniendo en cuenta que Colpensiones siempre ha dejado claridad sobre el cobro coactivo que ejecuta.

**12:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente

**13:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente.

**14:** NO ME CONSTA, pues no se encuentra aportado en las pruebas aportadas en la demanda, pero se tendrá como cierto si se prueba en el plenario.

**15:** NO ES UN HECHO, es una apreciación subjetiva del demandante, cabe anotar que Colpensiones tiene habilitado su correo electrónico para notificaciones judiciales.

**16:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente.

**17:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente.

**18:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente.

**19:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente.

**20:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente.

**21:** NO ES CIERTO, mi representada siempre ha respetado el principio de publicidad de los actos administrativos.

**22:** NO ES CIERTO, mi representada siempre ha respetado el principio de publicidad de los actos administrativos.
**23:** NO ES CIERTO, mi representada siempre ha respetado el principio de publicidad de los actos administrativos.
**24**: ES CIERTO, según documento que militan en el expediente.
**25:** PARCIALMENTE CIERTO, con relación al recurso de reposición el día 2 de noviembre de 2021.
**26** NO ES CIERTO, mi representada siempre ha respetado el principio de publicidad de los actos administrativos.
**27:** NO ME CONSTA, pues no se encuentra aportado en las pruebas aportadas en la demanda, pero se tendrá como cierto si se prueba en el plenario.
**28:** NO ME CONSTA, pues no se encuentra aportado en las pruebas aportadas en la demanda, pero se tendrá como cierto si se prueba en el plenario.
**29:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente.
**30:** NO ES UN HECHO, es una apreciación subjetiva del demandante.
**31:** NO ES UN HECHO, es una apreciación subjetiva del demandante.
**32:** NO ES UN HECHO, es una apreciación subjetiva del demandante.
**33:**NO ES UN HECHO, es una apreciación subjetiva del demandante.
**34:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente.
**35:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente.
**36:** NO ES CIERTO, mi representada siempre ha respetado el principio de publicidad de los actos administrativos.
**37:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente.
**38:** NO ES CIERTO, mi representada siempre ha respetado el principio de publicidad de los actos administrativos.
**39:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente.
**40:** ES CIERTO, según documento que militan en el expediente.
**41:** NO ME CONSTA, pues no se encuentra aportado en las pruebas aportadas en la demanda, pero se tendrá como cierto si se prueba en el plenario.
**42**: NO ME CONSTA, pues no se encuentra aportado en las pruebas aportadas en la demanda, pero se tendrá como cierto si se prueba en el plenario.
**43**: NO ME CONSTA, pues no se encuentra aportado en las pruebas aportadas en la demanda, pero se tendrá como cierto si se prueba en el plenario.

UNION TEMPORAL
ABACO PANIAGUA & COHEN

## RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA DEFENSA

El problema jurídico se resume en determinar si se debe declarar la nulidad parcial de la Liquidación Certificada de Deuda No. APP-441179 del 27/01/2021 y la Resolución Nro. 0202117045 con fecha del 3 de noviembre de 2021, expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, a si a título de restablecimiento del derecho, se debe ordenar a la entidad demandada COLPENSIONES, la prescripción del cobro efectuado en contra de Ladrillera GRESVALLE S.A, en los rangos de 1995-06 hasta 2016-09, dejando sin efectos jurídicos dichos actos administrativos conforme a la Ley.

Sea lo primero decir que la resolución aquí demandada carece de cualquier vicio, toda vez que, la misma fueexpedida por autoridad competente; gozan de la presunción de validez y legalidad; para su creación se observaron todos y cada uno de los requisitos exigidos; y la motivación plasmada en ellas es consistente y congruente con las normas superiores en las que se funda. Además, la notificación de dichas resoluciones se hizo en debida forma.

Los lineamientos establecidos en el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público y un derecho de carácter irrenunciable, el cual debe ser prestado por el Estado con fundamento en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación.

De igual forma, el Sistema General de Seguridad Social Integral está conformado por los regímenes generales para pensiones, salud, riesgos laborales y los servicios sociales complementarios definidos en la Ley 100 de 1993. Por su parte, el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones establece una amplia gama de prestaciones asistenciales y económicas que amparan los riesgos de vejez, invalidez, o muerte, así como también, el derecho a la sustitución pensional, a la pensión de sobrevivientes y a la indemnización sustitutiva, entre otras. No obstante, cuando se falta al pago de estos aportes en seguridad social nos encontramos, frente a una figura denominada cobro persuasivo, donde a través de mandato legal, se les da la facultad a las entidades estatales de iniciar el procedimiento de cobro coactivo de dichos recaudos u obligaciones de aportes pensionales, por ende, es importante citar la siguiente disposición normativa:

**Ley 1437 de 2011:**

**ARTÍCULO 98**. Deber de recaudo y prerrogativa del cobro coactivo. Las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes.

**ARTÍCULO 99.** Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado. Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.

2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.

3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual.

4. Las demás garantías que, a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación.

5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.

**ARTÍCULO 100.** Reglas de procedimiento. Para los procedimientos de cobro coactivo se aplicarán las siguientes reglas:

1. Los que tengan reglas especiales se regirán por ellas.

2. Los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en este título y en el Estatuto Tributario.

3. A aquellos relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario se aplicarán las disposiciones del Estatuto Tributario. En todo caso, para los aspectos no previstos en el Estatuto Tributario o en las respectivas normas especiales, en cuanto fueren compatibles con esos regímenes, se aplicarán las reglas de procedimiento establecidas en la Parte Primera de este Código y, en su defecto, el Código de Procedimiento Civil en lo relativo al proceso ejecutivo singular.

**ARTÍCULO101.** Control jurisdiccional. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito. La admisión de la demanda contra los anteriores actos o contra el que constituye el título ejecutivo no suspende el procedimiento de cobro coactivo. Únicamente habrá lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo:

1. Cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido suspendido provisionalmente por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y 2. A solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida las excepciones o el que ordene seguir adelante la ejecución, según el caso, esté pendiente el resultado de un proceso contencioso administrativo de nulidad contra el título ejecutivo, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Esta suspensión no dará lugar al levantamiento de medidas cautelares, ni impide el decreto y práctica de medidas cautelares.

**PARÁGRAFO.** Los procesos judiciales contra los actos administrativos proferidos en el procedimiento administrativo de cobro coactivo tendrán prelación, sin perjuicio de la que corresponda, según la Constitución Política y otras leyes para otros procesos. ARTÍCULO 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cualse declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

2. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

**FRENTE AL CASO CONCRETO:**

En cumplimiento a la resolución 2082 de 2016 emitida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP), mediante la cual estableció los estándares de cobro que debe cumplir Colpensiones y teniendo en cuenta que la(s) Liquidación(es) Certificada(s) de Deuda que se relacionan a continuación, se encuentra(n) en firme(s) y ejecutoriadas, sin obtener el pago de la obligación, le requerimos que en el término de diez (10) días hábiles al recibo de la presente comunicación cancele la deuda par concepto de aportes pensionales.

El valor de capital adeudado, genera interés moratorio, el que se liquidara conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993 Art. 23, Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 -- Art. 141, y la Circular Externa de la DIAN No. 000003 de marzo 6 de 2013, es decir, en

forma diaria a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo.

Es importante que tenga en cuenta que estas obligaciones pueden ser susceptibles de depuraci6n, razón por la cual, le indicamos que COLPENSIONES ha diseñado la herramienta totalmente gratuita "Portal Web del Aportante (PWA)", aplicativo desde el cual usted podrá reportar algunas novedades que considere se debe informar dentro de la relación laboral con los trabajadores a su cargo.

Teniendo en cuenta los antecedentes, el despacho procederá a estudiar las excepciones propuestas, para lo que se permite hacer las siguientes consideraciones:

Sea lo primero aclarar que de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional, el término para presentar excepciones es dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del Mandamiento de Pago:

**"ART. 830.- Término para pagar o presentar excepciones.**

Dentro de los quince (15) días Siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deber cancelar el monto de la deuda 4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente. 5.La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 6.La prescripción de la acción de cobro, y 7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió."

Parágrafo. Adicionado por la Ley 6 de 1992: Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederán, además, las siguientes excepciones: 1. La calidad de deudor solidario. 2. La indebida tasación del monto de la deuda"(...) Para el caso que nos ocupa, la (s) excepciones interpuestas (s) por el deudor se encuentra dentro de las taxativas señaladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario, por ende, se procedió a su estudio.

En consecuencia, resulta evidente que no le asiste derecho a la parte demandante a que su pensión sea reliquidada, ya que, al estudiar el caso dentro de los límites comprendidos en los fundamentos de la demanda, y contrastados estos con las normas y jurisprudencia que integran el ordenamiento jurídico vigente anteriormente expuesta, es notable una ausencia de sustento jurídico que permita darle luz verde a las pretensiones.

De no ser así, sería tanto como aceptar, que los intereses moratorios empiezan a causarse, cuando aún no ha vencido el plazo establecido por la ley para que la entidad pague las mesadas pensionales, lo que resulta un contrasentido jurídico, razón por la cual, como se ha venido manifestando, los intereses moratorios solamente podrán empezar a causarse a partir de los 6 meses en las pensiones de invalidez y vejez y de los 3 meses en las pensiones de sobrevivientes. Teniendo en cuenta de igual manera las sentencias T-588-03, C-1024-04 y SU-065-18.

Señora Juez al permitir o apadrinar una prestación sin cumplir los requisitos de la Ley y la jurisprudencia para hacerlo, se desconoce el principio de la sostenibilidad o equilibrio financiero y se condena al Estado a tener que asumir cargas procesales que a corto o largo plazo desencadenan en una des financiación del sistema amenazando su sostenibilidad.

## **EXCEPCIONES DE MERITO.**

**PRESCRIPCIÓN:**

Sin que de ninguna manera se entienda reconocimiento de los hechos y pretensiones aducidospor el demandante, se propone esta excepción correspondiente a cualquier derecho que eventualmente se hubiese causado en favor del demandante y que de conformidad con las normas legales y con las probanzas del juicio, quedara cobijado por el fenómeno de la prescripción, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 488 del código Sustantivo del Trabajoy 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

UNION TEMPORAL
ABACO PANIAGUA & COHEN

**COBRO DE LO NO DEBIDO:**

Por cuanto mi representada no adeuda derecho alguno al demandante por los conceptos aquídemandados, en razón a que la demandante no se encuentra afiliada al Régimen de prima media con prestación definida.

**BUENA FE:**

La entidad que represento siempre ha actuado dentro de los parámetros legales y Constitucionales, amparado en el principio de la Buena Fe tanto de esta entidad como de lasentidades o personas que acuden a ella en calidad de usuarios o afiliados y en desarrollo de lo expresado en nuestra carta magna artículo 83 que indica que "las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, lacual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

**PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:**

Las resoluciones o actos administrativos proferidos por la entidad que represento mediante los cuales resolvieron negativamente las solicitudes del accionante se encuentran amparadas legalmente con base en la documentación que reposa en la entidad, una vez llenos los requisitos para su formación adquieren fuerza obligatoria y gozan de presunción de legitimidad, Remisoria en lo laboral según lo dispuesto por el Art. 145 del C.P.L.

**FRENTE A LA CONDENA EN COSTAS**

Señor Magistrado, solicito de manera respetuosa, que de ser negadas las pretensiones y condenasy probadas las excepciones de la demanda, se condene en costas y agencias en derecho a laparte demandante, a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, en virtud de la facultad establecida en la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, artículo365.

En el evento de que prosperen parcialmente las excepciones propuestas y de ser el caso, enel presente escrito, solicito respetuosamente al señor Juez tenga en cuenta al fallar, el Numeral5 del art. 365 del Código de General del Proceso, que establece,

*"ARTÍCULO 365: CONDENA EN COSTAS; En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas: (···) 5. En caso deque prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.*

**FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR:**

La cual sustento de la siguiente manera: Toda obligación tiene una causa, pero cuando esta se ha satisfecho se extingue y por lotanto no da lugar a una reclamación por lo mismo. De conformidad con los argumentosde las anteriores expresiones no le asiste legitimidad al demandante para invocar la acción instaurada, toda vez que no existe prueba alguna que demuestre la responsabilidad de COLPENSIONES en los hechos de esta demanda.

**INEXISTENCIA DEL DERECHO RECLAMADO:**

Tal y como se sustenta en las razones de defensa, el demandante no reúne los requisitos, ni las condiciones que exige la norma invocada por este, para acceder al derecho reclamado en esta instancia, tal y como igualmente se ha venido sustentando en los actos administrativos que negaron lo solicitado, amparados de legalidad y que buscan salvaguardar el patrimonio de los coadministrados, dándole aplicación minuciosa de la norma y en conclusión haciendo prevalecer el imperio de la ley.

**DECLARATORIA DE OTRAS EXCEPCIONES INNOMINADA O GENÉRICA**

Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, las cuales deberán alegarse expresamente en la contestación de la demanda.

En tal virtud, respetuosamente solicito a su Señoría que si se encuentran probados hechos que constituyan una excepción, ésta se declare oficiosamente a favor de mi representada **COLPENSIONES**.

## MEDIOS DE PRUEBA

Solicito se tengan, decreten y practiquen como medios de pruebas de las excepcionespropuestas, las siguientes:

1. Expediente administrativo digital.

2. **OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS:** Las que el Señor Juez, considere decretar para obtenerla certeza jurídica suficiente al momento de proferir Sentencia.

## NOTIFICACIONES

La demandada: Carrera Cl. 10 # 72-33 Torre B, piso 11
Bogotá. La suscrita en el siguiente Correo electrónico:
utabacopaniaguab5@gmail.com

Celular: 318 5292145

De usted señor Juez, respetuosamente;



**DIANA MARCELA MANZANO BOJORGE.**
**C.C 1.130.598.216 de Cali, (V).**
**T.P 232.810 del C. S. de la J.**

UNION TEMPORAL
ABACO PANIAGUA & COHEN

Abril 2023

SR. JUEZ (A)
JUZGADO CUARENTA Y UNO (41) ADMINISTRATIVO ORAL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCION CUARTA
E.S.D.

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN D ENULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICADO: 11001333704120220034800
DEMANDANTE: SADINSA SA.
DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

YENNCY PAOLA BETANCOURT GARRIDO mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.130.654.412 de Cali- Valle, Abogada en ejercicio titular de la Tarjeta Profesional No. 299.229 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de Apoderada Sustituta de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, de conformidad con el poder a mí conferido, cordialmente solicito al Despacho reconocerme personería para actuar y estando dentro del término procesal correspondiente y oportuno, de manera respetuosa me permito dar CONTESTACIÓN A LA DEMANDA propuesta por SADINSA S.A. dentro del proceso de la referencia, contra mi representada judicial y otros, para que mediante Sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se ABSUELVA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES de todas y cada una de las pretensiones formuladas en el libelo demandatorio y en consecuencia se condene en costas al demandante.

## NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO

La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos Periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 modificatorio del artículo 48 de la constitución Política, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle.

La representación legal la ejerce el Doctor JUAN MIGUEL VILLA identificado con la cédula de ciudadanía 12.435.765 quien ejerce su calidad de Presidente según desde 1-11-2018.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11, número telefónico 2170100.

## PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

1. No me consta .
2. Es cierto que mi representada profirió la Resolución Liquidación Certificada de la Deuda No. AP-00541613, contra el aportante SADINSA S.A. por los períodos 2006/12 al 2016/12, por concepto de Aportes Pensionales, por valor de 29.650.271 tal y como se demuestra con los documentos que se aportan como prueba con la demanda.
3. Es cierto como se demuestra con los documentos que se aportaron como prueba con la demanda.
4. Es cierto que La Liquidación Certificada de la Deuda No. AP-00541613 expedida por mi representada, fue notificada por aviso a la sociedad SADINSA S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, el día 24 de mayo de 2022.
5. Es cierto como se demuestra con los documentos que se aportaron como prueba con la demanda.
6. Es cierto como se demuestra con los documentos que se aportaron como prueba con la demanda.
7. No es un hecho, son juicios de valor y apreciaciones que realiza el apoderado de la parte demandante.
8. No es un hecho, son juicios de valor y apreciaciones que realiza el apoderado de la parte demandante.
9. No es un hecho, son juicios de valor y apreciaciones que realiza el apoderado de la parte demandante.
10. No es un hecho, son juicios de valor y apreciaciones que realiza el apoderado de la parte demandante.
11. No es un hecho, son juicios de valor y apreciaciones que realiza el apoderado de la parte demandante.
12. No es un hecho, son juicios de valor y apreciaciones que realiza el apoderado de la parte demandante.
13. Es cierto conforme a la documental que se aporta como prueba con la demanda.
14. Es cierto que El día 08 de junio de 2022 la entidad demandante radicó Recurso de Reposición contra la Liquidación Certificada de la Deuda No. AP-00541613 del 26 de enero de 2022.
15. Es cierto que mi representada profirió la Resolución No.AP-2022_7562729 de fecha 24 de junio de 2022, notificada por aviso el día 05 de julio de 2022, en respuesta al recurso instaurado por la parte demandante.
16. Es cierto conforme a la documentación que se aporta como prueba con la demanda.
17. No es un hecho, son juicios de valor y apreciaciones que realiza el apoderado de la parte demandante.
18. No es un hecho, son juicios de valor y apreciaciones que realiza el apoderado de la parte demandante.
19. No es un hecho, son juicios de valor y apreciaciones que realiza el apoderado de la parte demandante.
20. No es un hecho, son juicios de valor y apreciaciones que realiza el apoderado de la parte demandante.
21. No es un hecho, son juicios de valor y apreciaciones que realiza el apoderado de la parte demandante.
22. No es un hecho, son juicios de valor y apreciaciones que realiza el apoderado de la parte

demandante.

23. No es cierto pues como la entidad demandante lo expuso, los actos administrativos que señalaron la obligación de reintegro de los aportes, fueron debidamente notificados y contra ellos se presentaron los recursos del procedimiento administrativo, quedando desvirtuada la causal de nulidad por violación al debido proceso administrativo, en tanto, si bien es cierto el proceso administrativo común consagra el derecho de audiencia y la obligación de informar al interesado o a terceros afectados, existiendo frente al tercero, como era en este caso SADINSA S.A.; Igualmente, el derecho de contradicción se garantizó con la debida notificación de los actos administrativos demandados y con la procedencia de los recurso en vía administrativa.

24. No es un hecho, son juicios de valor y apreciaciones que realiza el apoderado de la parte demandante.

25. Es cierto como se demuestra con la documental aportada como prueba con la demanda.

26. No es un hecho, son juicios de valor y apreciaciones que realiza el apoderado de la parte demandante.

27. Es cierto como se demuestra con la documental aportada como prueba con la demanda.

28. ES CIERTO, Con la expedición por parte de COLPENSIONES de los actos administrativos objeto de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las demás son apreciaciones subjetivas del apoderado de la parte demandante, con miras a fundamentar la tesis jurídica planteada en el escrito demandatorio. Se resalta que nunca hubo ninguna irregularidad cometida por mi representada tal como lo invoca la parte actora en este punto fáctico. Adicional a lo anterior, lo que respecta a la fecha de notificación la parte actora se encuentra en la obligación de probar tal circunstancia a través el medio idóneo para tal fin.

29. NO ME CONSTA, me atengo a lo probado en el plenario.

## FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo su señoría a que prosperen todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda contra la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, en vista de que las mismas no están llamadas a prosperar por carecer de sustento factico y legal, como se demostrará en el momento procesal oportuno. En consecuencia, respetuosamente le solicito al Despacho que se abstenga de fallar de manera condenatoria en mérito del asunto, por las razones que a continuación se esgrimen en el capítulo de la oposición, hechos y razones de la defensa y fundamentos de las excepciones que se enuncian en este escrito.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN 1:** Me opongo a que se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES en contra de SADINSA S.A. que son:

- Acto Administrativo No. AP-00541613 del 26 de enero de 2022, se expidió la Liquidación Certificada de Deuda, en contra del empleador SADINSA S.A. identificado con NIT 830116122, por los periodos 2006-12 al 2016-12, por concepto de Aportes Pensionales, por valor de VEINTINUEVE

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS. M/CTE $ 29.650.271.

- Resolución No. AP-2022_7562729 del 24 de junio de 2022 resuelve Recurso de Reposición contra Liquidación Certificada de Deuda y se Modifica la misma actualizando la deuda teniendo en cuenta el pago y/o aporte de novedades realizadas por el deudor en los ciclos y ciudadanos informados.

Se resalta que nunca hubo ninguna irregularidad cometida por mi representada tal como lo invoca la parte actora en este punto fáctico. Adicional a lo anterior, lo que respecta a la fecha de notificación la parte actora se encuentra en la obligación de probar tal circunstancia a través el medio idóneo para tal fin.

FRENTE A LA PRETENSIÓN 2: Me opongo a que se declare se declare sin validez ni efectos la Resolución Liquidación Certificada de Deuda AP-00541613 del 26 de enero de 2022 y la Resolución No. AP-2022_7562729 del 24 de junio de 2022 y, en su lugar se declare a la entidad demandante que se encuentra a paz y salvo con la entidad accionada

FRENTE A LA PRETENSION 3: Me opongo a que se ordene a COLPENSIONES a efectuar el reembolso a la sociedad SADINSA S.A. del pago total que realizó o llegue a realizar la entidad demandante junto con sus intereses moratorios cancelados, pago que fuere ordenado por la Resolución No. AP-2022_7562729 del 24 de junio de 2022 declarándose desde ahora que, el mismo NO constituye reconocimiento alguno de la deuda imputada, por lo que éste se realiza única y exclusivamente con el fin de evitar medidas cautelares en contra de los activos de la demandante. Valor este que se estima en una cuantía inicial de DOS MILLONES NOVES CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, los cuales se componen de una suma de $275.111,oo por concepto de deuda real; más la suma de $2.684.160,oo por concepto de deuda presunta, más cualquier otra suma adicional que respecto del periodo fiscalizado se ordene a la entidad demandante pagar.

Me opongo a que prosperen de forma favorable las condenas solicitadas por la parte actora, toda vez que las resoluciones expedidas por mi representada la entidad pensional se ajustan al ordenamiento jurídico, por cuanto el Artículo 128 de la Constitución Política en concordancia con el Artículo 19 de la Ley 4 de 1992, determina que nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

A LA PRETENSIÓN CUARTA: me apongo a que prospere tan pretencion encaminada a que se ordene el reconocimiento de indemnización plena de perjuicios (daño emergente y lucro cesante) causados

a la sociedad SADINSA S.A. entidad demandante, por parte de mi representada la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES con la expedición y aplicación de los actos objeto de demanda.

**A LA PRETENSIÓN QUINTA:** me opongo a que se ordene a mi representada la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES a que el pago del valor contenido en la pretensión tercera, se cancele a la entidad demandante de manera indexada y actualizada conforme al Índice de Precios al Consumidor, en los términos del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**A LA PRETENSIÓN SEXTA:** ME OPONGO a que prospere tal pretensión encaminada a que en caso de que no se acceda a lo solicitado en la pretensión tercera de restablecimiento de derecho principales que se condene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, para que de su propio peculio, cancele a la entidad demandante los valores pagados que se relacionan en dicha pretensión, siendo incluidos como parte del concepto de daño emergente a ser reconocido a la entidad demandante dentro de la indemnización plena de perjuicios que se solicita en la pretensión cuarta.

## FUNDAMENTOS Y RAZONES DE LA DEFENSA

Sea lo primero indicar que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, al estudiar el caso que nos ocupa, encontró que los actos administrativos mentados en el presente proceso fueron expedidos conforme a todos los presupuestos legales aplicables por tanto no es procedente solicitar la NULIDAD de los mismos, por tal motivo no es posible acceder a las pretensiones por no ser procedentes y no tener sustento de acuerdo a las siguientes consideraciones.

En el presente caso, la parte actora pretende que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, debe cesar el cobro coactivo iniciado en contra de SADINSA S.A., y en su defecto se declare la nulidad de las resoluciones No. AP-00541613 del 26 de enero de 2022 y AP-2022_7562729 24 de junio del 2022, de conformidad con las pruebas documentales que obran en el expediente. No obstante, lo anterior, las súplicas invocadas en la demanda no tienen vocación de prosperidad, esto de conformidad con lo siguiente:

En principio y por virtud de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 4121 de 2011, la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES, es una empresa industrial y comercial del estado organizada como ENTIDAD FINANCIERA de carácter especial, de naturaleza pública del orden nacional, que tiene por objeto administrar la operación del régimen de prima con prestación definida de sus afiliados.

En aplicación del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, "Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo. "En concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Así mismo, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procedió a proferir Liquidación Certificada de Deuda, la cual presta merito ejecutivo, lo anterior por cuanto a la fecha de constitución en mora el empleador no había cancelado el objeto del proceso de cobro.

De igual manera es necesario tener en cuenta que la normalización y/o pago de las obligaciones es deber del empleador de acuerdo a las normas vigentes para lo cual se hace mención de los artículos 17 (Modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003) y 22 de la ley 100 de 1993, que en su tenor literal indica:

"ARTÍCULO17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES: Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores y contratistas, con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen…"

"ARTÍCULO22. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. El empleador será responsable del pago de su aporte y del pago del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno. El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador".

Para el caso en particular, se logró evidenciar que la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a través de la liquidación certificada de deuda No. AP-00541613 de 03 de octubre de 2020, constituyó en mora al empleador SANDINSA S.A. con Nit No. 830116122, por los periodos 2006/12 al 2016/12 por conceptos de aportes pensionales por un valor de valor de$ 29.650.271, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, proferir Liquidación Certificada de Deuda, la cual presta merito ejecutivo.

No obstante, analizados los sistemas de información de Colpensiones, se pudo establecer que el deudor realizó pagos parciales y/o reporte de las novedades respectivas por los periodos cobrados en la Liquidación certificada de deuda (LCD) No. AP-00541613 del 26 de enero de 2022, sin embargo,

a la fecha continúa presentando deuda pendiente por aclarar por los periodos (2006/12 al 2016/12), con base en dicha información se profirió la liquidación certificada de deuda No. AP – 2022_7562729 del 24 de junio de 2022, a través de la cual se actualizo la deuda teniendo en cuenta el pago y/o reporte de novedades
realizadas por el deudor en los ciclos y ciudadanos informados; y se modificó el valor establecido en el artículo PRIMERO de la Liquidación Certificada de Deuda LCD No. AP-00541613 del 26 de enero de 2022, proferida en contra de Empleador SADINSA S.A., ya identificado, por concepto de aportes pensionales,
en el sentido de indicar que el cobro se realiza por el saldo de la obligación relacionada así:

| | INFORMACION DE LA DEUDA |
|---|---|
| TOTAL DEUDA REAL: | $ 275.111,00 |
| TOTAL DEUDA PRESUNTA: | $ 2.684.160,00 |
| TOTAL INTERESES: | $ 0,00 |
| TOTAL DEUDA: | $ 2.959.271,00 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DEUDA: | 21/06/2022 |
| FECHA CÁLCULO INTERESES: | 21/06/2022 |

En consecuencia, la Liquidación Certificada de Deuda (LCD), expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, cumple con lo establecido en la normatividad vigente y especialmente con lo indicado en el manual de cobro de esta Entidad, siendo un hecho latente que el empleador a la fecha de expedición del título ejecutivo no había cancelado la obligación objeto del proceso de cobro, por lo que fue procedente de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, proferir Liquidación Certificada de Deuda, la cual presta merito ejecutivo.

Así las cosas, debemos observar que la obligación pendiente de pago requerida y plasmada en la LCD, cumple con los presupuestos establecidos en la normatividad legal vigente, toda vez que se ha establecido de manera inequívoca que la misma corresponde a una acreencia por concepto de Aportes Pensionales, pendientes de pago o depuración, la cual se encuentra generando deuda; de igual manera se encuentra claramente establecidas las partes, es decir el acreedor y el deudor, que el actual Administrador del Régimen de Prima Media, es la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, la cual entró en operación conforme al Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012, en el que se determinó y reglamentó la entrada en operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones como Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, iniciando operaciones como tal, a partir del 28 de septiembre de 2012.

De otra parte, el Decreto 2013 expedido el 28 de septiembre de 2012, por el Ministerio de Salud y Protección Social, suprimió el Instituto de Seguros Sociales ISS, ordenó su liquidación y dictó otras disposiciones, fijando reglas y procedimientos a los trámites que adelantaba el ISS.

Respecto del valor que se registra como deuda, debemos indicar que el mismo corresponde a los periodos pendiente de pago o depuración a cargo del aportante, y se ha mantenido en todas las comunicaciones, requerimiento y LCD, en cumplimiento con lo establecido en la normatividad vigente y el manual de cobro de la entidad, aclarando que el detalle de la obligación se encuentra

discriminado en el aplicativo denominado Portal del Aportante, que para su acceso y depuración de las obligaciones se ha remitido instructivos para el registro en la herramienta tecnológica, pago de obligaciones y proceso de depuración, todo lo anterior sin ningún costo para el empleador.

Es expresa, toda vez que en el requerimiento que fue debidamente notificado se ha materializado la obligación la cual después fue el soporte de la resolución con la cual se expide la LCD, donde se identifica plenamente con el nombre de la razón social y el NIT de la entidad Deudora, para lo cual el empleador o aportante no presentó en su oportunidad procesal el respectivo soporte oponiéndose al cobro, radicando con las objeciones del caso o las pruebas que se pretenden hacer valer.

Así las cosas, se evidencia que el aportante hizo caso omiso de las recomendaciones para el pago o la depuración de la obligación, por lo que fue procedente la expedición del título ejecutivo complejo que es la LCD, cumpliendo de esta manera la administradora con lo estipulado en la normatividad vigente y en especial lo indicado en la ley 100 y todos los decretos reglamentarios.

Es exigible, toda vez que es de pleno conocimiento del empleador, que una vez realizado el pago de la nómina de los empleados, y haberse practicado las retenciones de ley con relación a los aportes de seguridad social, es obligatorio en el mes siguiente efectuar el pago y reportar o registrar las novedades que correspondan a pensión, de tal suerte que desde su omisión es exigible el pago de todas las obligaciones pendientes, las que generan intereses de mora.

Por lo anterior, se confirma que la obligación objeto de cobro cumple con todos los requisitos para poder exigir el pago de las misma, siendo clara, expresa y exigible.

Es claro entonces que, SYMRISE LTDA con Nit. No. 800196155, adeuda a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por concepto de aportes pensionales, la suma de $10.397.531 MCTE. Tal como se indicó en el artículo 3º de la Liquidación Certificada de Deuda No. GFI-DIA 2021_1739528 de 16 de febrero de 2021.

## CASO CONCRETO

De conformidad al caso concreto, luego de expuestos los anteriores postulados, se logró evidenciar que actualmente SADINSA S.A., adeuda a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones– Colpensiones, por concepto de aportes pensionales, la suma de $2.959.160.oo MCTE, por cuanto si bien se pudo establecer que el deudor realizó pagos parciales y/o reporte de las novedades respectivas por los periodos cobrados en la Liquidación Certificada de Deuda (LCD) No.AP-00541613 del 26 de enero de 2022, sin embargo, a la fecha continúa presentando deuda el cual se encuentra actualizado a corte 24 de junio de 2022, motivo por el cual se profirió la liquidación certificada de deuda No. AP-2022_ 7562729 del 24 de junio de 2022, mediante la cual se disminuyó de manera sustancial la deuda inicialmente planteada.

| Información de la deuda | |
|---|---|
| Total deuda real: | $275.111,oo |
| Total deuda presunta: | $2.684.160,oo |
| Total intereses: | $0,oo |
| Total deuda: | $2.959.271,oo |
| Fecha actualización deuda: | 21/03/2022 |
| Fecha calculo intereses: | 21/06/2022 |

Por tanto NO es posible acceder a las pretensiones solicitadas por la parte demandante y en consecuencia, la Liquidación Certificada de Deuda (LCD), expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, cumple con lo establecido en la normatividad vigente y especialmente con lo indicado en el manual de cobro de esta Entidad, siendo un hecho latente que el empleador a la fecha de expedición del título ejecutivo no había cancelado la totalidad de la obligación objeto del proceso de cobro, por lo que fue procedente de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## EXCEPCIONES

Como se aprecia en lo manifestado anteriormente, me opongo a las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en las razones de hecho y de derecho y solicito desde ahora se desvincule a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, de todas ellas conforme a lo que resulte probado en el presente proceso, para tal efecto propongo las siguientes EXCEPCIONES;

## I.EXCEPCIONES DE MÉRITO O DE FONDO:

PRIMERA: INEXISTENCIA DEL DERECHO RECLAMADO A CARGO DE COLPENSIONES

Consiste en que no ha nacido obligación contra COLPENSIONES, pero si en contra del Empresa SADINSA S.A. E.S.P, toda vez que respecto del caso relacionado, es necesario indicar que en desarrollo de su obligación de recaudo por la Resolución Liquidación Certificada de Deuda AP-00541613 del 26 de enero de 2022, suscrita por la Dirección de Ingresos y Aportes Proceso de Determinación de Deuda de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES Por medio de la cual se determina una obligación clara, expresa y exigible de pagar por concepto de aportes pensionales a favor de Colpensiones".
Por los períodos 2006/12 al 2016/12, por concepto de Aportes Pensionales, por valor de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS. MfCTE ($29.650.271,oo).
Que de conformidad con el artículo 837 del estatuto tributario en concordancia con el artículo 599 del código general del proceso previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, se puede

decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor. El registro de los embargos decretados en el proceso precitado de cobro coactivo se realizó conforme lo indica el artículo 839, 839-1 del estatuto tributario en concordancia con el artículo 593 del código general del proceso; en estos procesos de cobro coactivo existe la obligación de perseguir bienes que se encuentren embargados en otros procesos lo cual se realizó conforme lo indica el artículo 466 del código general del proceso.

Asi mismo reitero la importancia del contenido del artículo 22 de la ley 100 de 1993 enuncia:

"OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las Cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con tas correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno.

El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador."

El artículo 7o. del decreto 1406 de 1999, dice:
"DECLARACIONES DE AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Los aportantes al Sistema deberán presentar, con la periodicidad en los fugares y dentro de los plazos que corresponda conforme a su clasificación una declaración de autoliquidación de los aportes correspondientes a los diferentes riesgos cubiertos por aquél, por cada una de las entidades administradoras.
Dicha declaración deberá estar acompañada con el pago Íntegro dé los aportes autoliquidados, bien sea que tal pago se haga conjuntamente con el formulario de autoliquidación o mediante comprobante de pago. Sin el cumplimiento de esta condición, la declaración de autoliquidación de aportes así Sistema no tendrá valor alguno."

Finalmente, el artículo 39 del decreto 1406 de 1999, señala:
"DEBERES ESPECIALES DEL EMPLEADOR, Las consecuencias derivadas de la no presentación de las declaraciones de autoliquidación de aportes o de errores u omisiones en esta, que afecten el cubrimiento y operatividad del Sistema de Seguridad integral o la prestación de los servicios que él contempla con respecto a uno o más de los afiliados, serán responsabilidad exclusiva del aportante."

## SEGUNDA: BUENA FE

COLPENSIONES en todas sus actuaciones tiene que someterse al imperio de la constitución Nacional y de la Ley, conforme lo prescriben entre otros los Artículos 121, 122 y 128 de la Carta Política, siendo esto lo que ha acatado hasta el momento.
Al respecto la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

“Como principio general del derecho, (la buena fe) ha sido reconocido por la jurisprudencia colombiana especialmente desde 1935, citándose la jurisprudencia y doctrina francesa y sobre todo el artículo 1603 del Código Civil Colombiano: "Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella". Norma que tiene su correspondencia en numerosos artículos del Código Civil y que en la década del treinta también tendrá en Colombia importante tratamiento doctrinal: "De ahí que se hable de la buena fe como de un criterio primordial en la interpretación de las convenciones, gracias al cual el juez puede sacar triunfante la equidad sobre los rigores del formalismo".

“El principio de la buena fe es también principio del derecho laboral, ha sido incluido en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 55 y aparece en la jurisprudencia laboral desde la época del Tribunal Supremo del Trabajo: "El principio de la buena fe, que no es nuevo, sino que data de las mejores tradiciones romanas, debe presidir la ejecución de los contratos, incluido el de trabajo". Sentencia ésta proferida el 9 de febrero de 1949 y que llega hasta analizar no solo la buena fe sino la mala fe, en los siguientes términos:”

"La mala fe –ha dicho la Corte Suprema de Justicia- debe ser la deducción acertada hecha sobre la plena comprobación de hechos precisos de naturaleza incompatible con la bona fide, como lo sería, en tratándose de la buena fe contractual, la demostración evidente de una visible ventaja pecuniaria en una negociación celebrada con un incapaz, que mostrara un aprovechamiento inhonesto del estado de inferioridad en que ocurrió una de las partes a su celebración, es decir, la prueba de que se abusó de un estado de debilidad para obtener un indebido e injusto provecho, apreciable en el desequilibrio de los valores. Sin olvidar tampoco que la calificación de la fe jurídica, el rigor con que se exige o es exigible buena fe en los negocios de hecho, conformada probatoriamente y adoptada en las situaciones de cada caso"

Según lo anterior, la buena fe en la labor misional de COLPENSIONES surge precisamente de la estricta aplicación de la Constitución, la Ley y el precedente jurisprudencial que permite conceder o negar prestaciones ajustadas a derecho, por lo cual, existiendo la presunción de legalidad del acto que garantiza seguridad jurídica en la decisión prestacional, tal circunstancia permite revestir además bajo la égida de la buena fe el reconocimiento o negación pensional por lo que es de carga exclusiva del demandante controvertir tanto la presunción legal del acto como la buena fe en la decisión.

## CUARTA: GENÉRICA O INNOMINADA

De manera respetuosa se presenta esta excepción con el fin de que se aplique cuando se demuestre cualquier medio de defensa a favor de la entidad demandada, en ese sentido se declaren las demás excepciones que resulten dentro del procesos.

## MEDIOS DE PRUEBAS

Solicito de manera respetuosa se tengan como pruebas las siguientes:

DOCUMENTALES

• Las solicitadas por la actora son conducentes para el proceso, pero no otorgan nuevos juicios de valor que sean suficientes como para que el señor(a) juez efectúe declaración o condena alguna en contra de mi defendida.

OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS:

Las que el señor Juez considere decretar para obtener la certeza jurídica suficiente al momento de proferir Sentencia, para lo cual ruego se de aplicación al inciso final del artículo 170 del C.G.P, que reza: "Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes"

ANEXOS

1. Poder General debidamente otorgado por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones a la firma Unión Temporal Abaco Paniagua & Cohen, representada legalmente por la Dra. ANGELICA MARGOTH COHEN MENDOZA.
2. Poder de sustitución debidamente otorgado por la Abogada ANGELICA MARGOTH COHEN MENDOZA.

NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones se pueden surtir en:

- En la secretaria de su despacho.
- Correo electrónico: utabacopaniaguab4@gmail.com
- Celular 3218801570

De usted señor Juez, respetuosamente;



YENNCY PAOLA BETANCOURT GARRIDO
CC. 1.130.654.412 Cali-Valle
T.P. 299.229 del H.C.S de la Judicatura
ABOGADA EXTERNA DE COLPENSIONES- UNION TEMPORAL ABACO PANIAGUA & COHEN

Señores:
**JUZGADO CUARENTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -SECCIÓN CUARTA**
E. S.D.

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICADO: 11001333704120220037000
DEMANDANTE: HARTUNG Y COMPAÑIA SAS
DEMANDADO : ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

**Ref: CONTESTACIÓN DE DEMANDA**

**BRANDON SAMIR VERGARA JÁCOME**, mayor de edad, vecino, domiciliado y residente en el Distrito de Santa Marta, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de Apoderada Sustituta de la Doctora ANGELICA MARGOTH COHEN MENDOZA, identificada con la cedula de ciudadanía N° 32709957 y T.P N° 102275 del CSJ., quien actúa en condición de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL ABACO PANIAGUA & COHEN** distinguida con el NIT N° 901581654, quien a su vez en la Apoderada de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, tal como se desprende de la Escritura Pública N° 1955 de fecha 18 de abril de 2022 otorgada ante la Notaria setenta y dos (72) del círculo de Bogotá, acudo ante su despacho con el debido para presentar contestación de demanda en los siguientes términos:

## NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO

La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativay patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 modificatorio del artículo 48de la constitución Política, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle. La representación legal la ejerce al Doctor **JUAN MIGUEL VILLA LORA**, o quien haga sus veces.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11,número telefónico 2170100.

## PRONUNCIAMIENTO EXPRESO FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a que prosperen todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-

COLPENSIONES, toda

vez que, las mismas no están llamadas a prosperar por carecer de sustento factico y legal, como se demostrará en el momento procesal oportuno.

En consecuencia, respetuosamente le solicito al Despacho que se abstenga de fallar de manera condenatoria en mérito del asunto, por las razones que a continuación se esgrimen en el capítulo de la oposición, hechos y razones de la defensa y fundamentos de las excepciones que se enuncian en este escrito.

**PRETENSION 1.** Nos aponemos a que prospere la nulidad en contra de los artículos segundo y tercero de resolución no. 198524 radicado No. 2021_13389176 de 13 de diciembre de 2021; la resolución número 2021-148695 del 21 de septiembre de 2021*,* en lo correspondiente a los artículos primero, segundo, tercero y cuarto de la misma; y en consecuencia, ejecución de la obligación contenida en el mandamiento de pago no. 46667 de 15 de abril de 2021, y obligaciones relacionadas en liquidación certificada de deuda No. 407194 del 27 de septiembre de 2020*, por cuanto el titulo ejecutivo se encuentra ajustado a derecho y el mismo es claro*, expresos y actualmente exigibles

**Que, como restablecimiento del derecho, se reconozca:**

**a.** Nos oponemos a que prospere la pretensión de restablecimiento. pues el acto administrativo atacado no adolece de las causales de nulidad, y el mismo se encuentra ajustado a la normatividad aplicable al caso.
**b.** Nos oponemos a que prospere la pretensión de restablecimiento. pues el acto administrativo atacado no adolece de las causales de nulidad, y el mismo se encuentra ajustado a la normatividad aplicable al caso.
**c.** Nos oponemos a que prospere la pretensión de restablecimiento. pues el acto administrativo atacado no adolece de las causales de nulidad, y el mismo se encuentra ajustado a la normatividad aplicable al caso.
**d.** Nos oponemos a que prospere la pretensión de restablecimiento. pues el acto administrativo atacado no adolece de las causales de nulidad, y el mismo se encuentra ajustado a la normatividad aplicable al caso.
**e.** Nos oponemos a que prospere la pretensión de restablecimiento. pues el acto administrativo atacado no adolece de las causales de nulidad, y el mismo se encuentra ajustado a la normatividad aplicable al caso.
**f.** Nos oponemos a que prospere la pretensión de restablecimiento. pues el acto administrativo atacado no adolece de las causales de nulidad, y el mismo se encuentra ajustado a la normatividad aplicable al caso.
**g.** Nos oponemos a que prospere la pretensión de restablecimiento. pues el acto administrativo atacado no adolece de las causales de nulidad, y el mismo se encuentra ajustado a la normatividad aplicable al caso.
**h.** Nos oponemos a que prospere la pretensión de restablecimiento. pues el acto administrativo atacado no adolece de las causales de nulidad, y el mismo se encuentra ajustado a la normatividad aplicable al caso.
**i.** Nos oponemos a que prospere la pretensión de restablecimiento. pues el acto administrativo atacado no adolece de las causales de nulidad, y el mismo se encuentra ajustado a la normatividad aplicable al caso.

## PRONUNCIAMIENTO EXPRESO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

**1.** ES CIERTO.

**2.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso.

**3.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**4.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso

**5.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso

**6.** ES CIERTO, según lo aportado en las pruebas de la demanda

**7.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso

**8.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**9.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**10.** ES CIERTO, según lo aportado en las pruebas de la demanda
**11.** ES CIERTO, según lo aportado en las pruebas de la demanda
**12.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**13.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**14.** ES CIERTO, según lo aportado en las pruebas de la demanda
**15.** ES CIERTO, según lo aportado en las pruebas de la demanda
**16.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**17.** ES CIERTO, según lo aportado en las pruebas de la demanda
**18.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**19.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**20.** ES CIERTO, según lo aportado en las pruebas de la demanda
**21.** Parcialmente cierto, por cuanto se emite mandamiento de pago ajustado a derecho y a las normas vigentes.
**22.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**23.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**24.** ES CIERTO, según lo aportado en las pruebas de la demanda
**25.** ES CIERTO, según lo aportado en las pruebas de la demanda
**26.** ES CIERTO, según lo aportado en las pruebas de la demanda
**27.** ES CIERTO, según lo aportado en las pruebas de la demanda
**28.** ES CIERTO, según lo aportado en las pruebas de la demanda
**29.** ES CIERTO, según lo aportado en las pruebas de la demanda
**30.** ES CIERTO, según lo aportado en las pruebas de la demanda
**31.** Parcialmente cierto, por cuanto se emite mandamiento de pago ajustado a derecho y a las normas vigentes.
**32.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**33.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**34.** ES CIERTO, según lo aportado en las pruebas de la demanda
**35.** No es un hecho, es una apreciación subjetiva del demandante
**36.** No es un hecho, es una apreciación subjetiva del demandante

**37.** No es un hecho, es una apreciación subjetiva del demandante
**38.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**39.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**40.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**41.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**42.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**43.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso
**44.** NO ME CONSTA, que se pruebe dentro del proceso

## RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA DEFENSA

El problema jurídico se resume en determinar si es procedente o no la nulidad de los artículos segundo y tercero de resolución no. 198524 radicado No. 2021_13389176 de 13 de diciembre de 2021; la resolución número 2021-148695 del 21 de septiembre de 2021, en lo correspondiente a los artículos primero, segundo, tercero y cuarto de la misma; y en consecuencia, ejecución de la obligación contenida en el mandamiento de pago no. 46667 de 15 de abril de 2021, y obligaciones relacionadas en liquidación certificada de deuda No. 407194 del 27 de septiembre de 2020, por no contener valores claros, expresos y actualmente exigibles, sino valores presuntos, que ya han sido depurados y/o aún son objeto de depuración, según lo aportado por mi mandante.

Ahora bien, respecto al acto administrativo demandado, el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, establece:

"Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado prestará mérito ejecutivo. o. "En concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Así mismo, de conformidad con el mencionado artículo 24 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENIONES, procedió a proferir acto administrativo no. 198524 radicado No. 2021_13389176 de 13 de diciembre de 2021; la resolución número 2021-148695 del 21 de septiembre de 2021, en lo correspondiente a los artículos primero, segundo, tercero y cuarto de la misma; y en consecuencia, ejecución de la obligación contenida en el mandamiento de pago no. 46667 de 15 de abril de 2021, y obligaciones relacionadas en liquidación certificada de deuda No. 407194 del 27 de septiembre de 2020, en contra del Aportante HARTUNG Y COMPAÑIA SAS., por concepto de aportes en pensión, la cual quedó en firme y ejecutoriada respectivamente.

Es necesario tener en cuenta que la normalización y/o pago de las obligaciones es deber del empleador de acuerdo con las normas vigentes para lo cual se menciona los artículos 17 (Modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003) y 22 de la ley 100 de

1993, que en su tenor literal indica: "ARTÍCULO17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES: Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores y contratistas, con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen..."

"ARTÍCULO22. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. El empleador será responsable del pago de su aporte y del pago del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno. El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador"

Es importante precisar que dentro de los actos administrativos que se demandan dentro de la cual se les explico a detalle el valor de la deuda real y presunta así como los periodos sobre los cuales Colpensiones ejerce acciones de cobro por aportes pensionales y mora en el pago de las mismas, mismo que se encuentran en el aplicativo denominado Portal del Aportante, que para su acceso y depuración de las obligaciones se ha remitido instructivos para el registro en la herramienta tecnológica, pago de obligaciones y proceso de depuración, todo lo anterior sin ningún costo para el empleador Se hace pertinente mencionar, que para el caso la entidad ha respetado el debido proceso y derecho de contradicción y defensa, toda vez que Colpensiones en cada uno de los oficios que ha venido notificando para cada etapa, ha brindado la información necesaria para que el aportante conozca el detalle de la deuda y el proceso de la depuración con la administradora.

Así mismo, se ha brindado la información correspondiente a la deuda y proceso de depuración, indicando los canales que tiene dispuestos para que los aportantes puedan subsanar la deuda presentada con la administradora.

En consecuencia, la Liquidación Certificada de Deuda (LCD), expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, cumple con lo establecido en la normatividad vigente y especialmente con lo indicado en el manual de cobro de esta Entidad, siendo un hecho latente que el empleador a la fecha de expedición del título ejecutivo no había cancelado la obligación objeto del proceso de cobro, por lo que fue procedente de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, proferir Liquidación Certificada de Deuda, la cual presta merito ejecutivo.

De igual manera se encuentra claramente establecidas las partes, es decir el acreedor y el deudor, que el actual Administrador del Régimen de Prima Media, es la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, la cual entró en operación conforme al Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012, en el que se determinó y reglamentó la entrada en operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones como Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, iniciando operaciones como tal, a partir del 28 de septiembre de 2012.

Respecto del valor que se registra como deuda, debemos indicar que el mismo corresponde a los periodos pendiente de pago o depuración a cargo del aportante, y se ha mantenido en todas las comunicaciones, requerimiento y LCD, en cumplimiento con lo establecido en la normatividad vigente y el manual de cobro de la entidad, aclarando que el detalle de la obligación se encuentra discriminado en el aplicativo denominado Portal del Aportante, que para su acceso y depuración de las obligaciones se ha remitido instructivos para el registro en la herramienta tecnológica, pago de obligaciones y proceso de depuración, todo lo anterior sin ningún costo para el empleador.

Por lo anterior es claro que nos encontramos ante una obligación clara, expresa, exigible toda vez que el requerimiento fue debidamente notificado por lo cual se ha materializado la obligación la cual después fue el soporte de la resolución con la cual se expide la LCD, donde se identifica plenamente con el nombre de la razón social y el NIT de la entidad Deudora, para lo cual el empleador o aportante no presentó en su oportunidad procesal el respectivo soporte oponiéndose al cobro, radicando con las objeciones del caso o las pruebas que se pretenden hacer valer.

Así las cosas, se evidencia que el aportante hizo caso omiso de las recomendaciones para el pago o la depuración de la obligación, por lo que fue procedente la expedición del título ejecutivo complejo que es la LCD, cumpliendo de esta manera la administradora con lo estipulado en la normatividad vigente y en especial lo indicado en la ley 100 y todos los decretos reglamentarios.

La obligación es exigible, toda vez que es de pleno conocimiento del empleador, que una vez realizado el pago de la nómina de los empleados, y haberse practicado las retenciones de ley con relación a los aportes de seguridad social, es obligatorio en el mes siguiente efectuar el pago y reportar o registrar las novedades que correspondan a pensión, de tal suerte que desde su omisión es exigible el pago de todas las obligaciones pendientes, las que generan intereses de mora.
Es claro entonces que HARTUNG Y COMPAÑIA SAS., adeuda a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por concepto de aportes pensionales.

En esta misma línea, y en un caso similar, la Magistrada Dra NELLY YOLANDA VILLAMIZAR DE PEÑARANDA, en salvamento de voto (Asunto: REINTEGRO DE APORTES AL SISTEMA DE SALUD, enel expediente de referencia No.18-0084-01, del 04 de junio del 2020) establece lo siguiente:

"ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.

Nótese que conforme con el precepto constitucional citado, la seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio, la cual debe prestarse bajo la dirección, coordinación y control del Estado con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Además, el Estado, con la participación de los particulares, tiene la obligación de ampliar progresivamente la cobertura del servicio, de garantizar los derechos y la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, siendo este último concepto, una herramienta para asegurar la realización sostenible de los derechos fundamentales y específicamente para la efectividad del pago de las prestaciones futuras de talante pensional.

Ahora bien, también debe precisarse que los recursos destinados a la seguridad social, ya sea que provengan de aportes directos de los empleadores, de los trabajadores, del Estado o de cualquier otro actor, tienen necesariamente destinación específica, entendida esta como la necesidad de invertirlos nuevamente en el sistema, en beneficio de todos aquellos que se favorecen de él.

Por lo anterior debe decirse que respecto a las resoluciones demandadas se reitera, que, no adolecen de las causales de nulidad, y en Segundo lugar, que HARTUNG Y COMPAÑIA SAS, si está en la obligación de proceder al pago de los aportes pensionales junto con los intereses de mora en su pago, ante la omisión de realizar los aportes pensiones de su personal a cargo.

El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.

Nótese que conforme con el precepto constitucional citado, la seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio, la cual debe prestarse bajo la

dirección, coordinación y control del Estado con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Además, el Estado, con la participación delos particulares, tiene la obligación de ampliar progresivamente la cobertura del servicio, de garantizar los derechos y la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, siendo este último concepto, una herramienta para asegurar la realización sostenible de los derechos fundamentales y específicamente para la efectividad del pago de las prestaciones futuras de talante pensional.

## EXCEPCIONES DE MERITO.

**PRESCRIPCION**

Sin que de ninguna manera se entienda reconocimiento de los hechos y pretensiones aducidospor el demandante, se propone esta excepción correspondiente a cualquier derecho que eventualmente se hubiese causado en favor del demandante y que de conformidad con las normas legales y con las probanzas del juicio, quedara cobijado por el fenómeno de la prescripción, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 488 del código Sustantivo del Trabajoy 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**COBRO DE LO NO DEBIDO:**

Por cuanto mi representada no adeuda derecho alguno al demandante por los conceptos aquídemandados, en razón a que la demandante no se encuentra afiliada al Régimen de prima media con prestación definida.

**BUENA FE:**

La entidad que represento siempre ha actuado dentro de los parámetros legales y Constitucionales, amparado en el principio de la Buena Fe tanto de esta entidad como de lasentidades o personas que acuden a ella en calidad de usuarios o afiliados y en desarrollo de lo expresado en nuestra carta magna artículo 83 que indica que "las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, lacual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas" .

**PRESUNCION DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:**

Las resoluciones o actos administrativos proferidos por la entidad que represento mediante los cuales resolvieron negativamente las solicitudes del accionante se encuentran amparadas legalmente con base en la documentación que reposa en la entidad, una vez llenos los requisitos para su formación adquieren fuerza obligatoria y gozan de presunción de legitimidad, Remisoria en lo laboral según lo dispuesto por el Art. 145 del C.P.L.

**FRENTE A LA CONDENA EN COSTAS**

Señor Juez, solicito de manera respetuosa, que de ser negadas las pretensiones y condenasy probadas las excepciones de la demanda, se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandante, a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, en virtud de la facultad establecida en la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, artículo365.

En el evento de que prosperen parcialmente las excepciones propuestas y de ser el caso, enel presente escrito, solicito respetuosamente al señor Juez tenga en cuenta al fallar, el Numeral 5 del art. 365 del Código de General del Proceso, que establece, *"ARTÍCULO 365: CONDENA EN COSTAS; En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas: (⋯) 5. En caso deque prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión" .*

MEDIOS DE PRUEBA

Solicito se tengan, decreten y practiquen como medios de pruebas de las excepcionespropuestas, las siguientes:

1. Expediente administrativo

2. **OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS:** Las que el Señor Juez, considere decretar para obtenerla certeza jurídica suficiente al momento de proferir Sentencia.

ANEXOS

**a. Relacionadas en el Acápite de Medios de Prueba.**
b. Escritura Pública 1955 del 18 de abril de 2022.
**c. Poder de sustitución conferido al suscrito conforme el artículo 74 y 75 del C.G.P.**

NOTIFICACIONES

La demandada: Carrera Cl. 10 # 72-33 Torre B, piso 11 Bogotá. La suscrita: Sede Bogotá: Calle 90 No. 12 – 28 Piso 2 Centro de
.Email:utabacopaniaguab3@gmail.com

-celular 3148026807

Atentamente,



**BRANDON SAMIR VERGARA JÁCOME**
C.C N° 1.083.027.098 de Santa Marta- Magdalena
T.P N° 312.933 del C.S. de la J

T: (5) 2 75 06 44
C: (+57) 320 666 7508 - 3204779799
**NIT 901.581.654 - 7**

Señora
Lilia Aparicio Millán
**Jueza cuarenta y uno (41) Administrativo de Oralidad de Bogotá**

| | |
|---|---|
| Radicado**:** | **11001 33 37 041 2023 000038 00** |
| Demandante: | **E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja** |
| Causante: | FLORIPES PEREZ PEREZ. |
| Demandado: | Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social -UGPP |
| Asunto: | **Contestación de la demanda.** |

**LAURA NATALI FEO PELÁEZ** abogado(a) en ejercicio, identificado(a) como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de apoderado(a) sustituto de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP**, de acuerdo al poder de sustitución otorgado por el **Dr. OMAR ANDRÉS VITERI DUARTE**, en su calidad de apoderado especial, conforme consta en el poder que al efecto adjunto a la presente, cordialmente solicito al Despacho reconocerme personería para actuar de acuerdo al poder adjunto y estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa me permito dar contestación a la demanda propuesta dentro del proceso de la referencia instaurado contra mi representada, para que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones propuestas en la demanda y se condene en costas a la demandante.

**NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO.**

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP -, es una entidad Pública del orden Nacional, con domicilio en la Ciudad de Bogotá.

El poder para efectos de la representación legal es otorgado por parte del Dr. LUIS MANUEL GARAVITO MEDINA, en su calidad de Director Jurídico de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP -, conforme las facultades establecidas en el numeral 1 del artículo 11 del decreto 575 del 22 de marzo de 2013, modificado por el Decreto 681 del 26 de abril de 2017, y de apoderado de conformidad con la Escritura Publica No. 0604 del 12 de febrero de 2020, suscrita en la Notaría 73 del Circulo de Bogotá.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., Av. Carrera 68 No. 13 – 37, correo: notificacionesjuidicialesugpp@ugpp.gov.co

**A LAS PRETENSIONES:**

Me opongo a que prosperen todas y cada una de las pretensiones declarativas y condenatorias: formuladas por la parte demandante, por no encontrarse estructurados los presupuestos fácticos ni legales para la prosperidad de la nulidad de los Actos Administrativos demandados.

**FRENTE A LA PRETENSIONES 1, 2, 3 y 4** Me opongo a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones toda vez que en el caso que nos ocupa, no es procedente la

declaratoria de nulidad de las Resoluciones RDP 51585 de 2022, RDP 53011 de 2022, pues las mismas fueron originadas en la Resolución RDP 018343 de 2015, emitidas por la UGPP en cumplimiento a ordenes emitidas por medio de sentencia judicial, es decir, los actos administrativos en censura no están creando ni modificando una situación jurídica, sino que los mismos se limitan a dar cumplimiento a las ordenes emitida por autoridad judicial.

Así las cosas, nos encontramos frente a actos administrativos de cumplimiento o ejecución, es decir, en los mismos no se encuentra contenida la expresión de la voluntad de la administración, sino la orden concreta emitida en sede judicial, la cual para ser cumplida requiere la puesta en práctica por parte de la administración, es decir, la entidad debe actuar en cumplimiento a esa orden y en consecuencia emitir los actos administrativos, los cuales son un instrumento jurídico a través del cual se cumple la sentencia emitida.

En ese sentido el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera Ponente: Ligia López Díaz, providencia del 30 de marzo de 2006, Radicación número: 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784) manifestó:

> *(…) "En este orden, los actos administrativos que no crean, ni modifican la situación jurídica de una persona son considerados como actos de ejecución, los cuales están destinados a dar cumplimiento a un fallo proferido por un juez constitucional. En este sentido la Corporación ha dicho:*
>
> *Los actos de ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional se encuentran excluidos de dicho control, toda vez que a través de ellos no se decide definitivamente una actuación, pues solo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones". (…)*

En el caso que nos ocupa, la Resolución RDP 018343 de 2015, dio estricto cumplimiento al fallo emitido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, por lo que en concordancia con el criterio esbozado anteriormente, en el caso que nos ocupa el control jurisdiccional no es aplicable en la medida en que las resoluciones demandas se tratan de actos de ejecución que no modifican ni crean situaciones jurídicas, sino que se limita a dar cumplimiento a la sentencia por medio de la cual se ordena la reliquidación de la prestación reconocida a la señora **FLORIPES PEREZ PEREZ.**, con los factores salariales no incluidos en tiempo por parte del empleador, en este caso el **E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja.**

Ahora bien, la reliquidación ordenada por el TRIBUNAL, surge por la no inclusión de la totalidad de los factores salariales y el no pago en tiempo de los mismos, obligación que se encuentra en cabeza del empleador, en este caso el **E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja**. de conformidad con lo estipulado en la ley. En ese orden de ideas es al demandante a quien le corresponde acreditar el pago de los aportes.

Para el caso en concreto, el **E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja** NO realizó aportes sobre los factores salariales consagrados en el Decreto 929 de 1976, que son fundamento de la condena judicial en contra de UGPP, razón por la cual la entidad en cumplimiento dio cumplimiento de los mismos, y procedió a reliquidar las prestaciones de los afiliados conforme lo solicito cada uno, a fin de evitar posibles condenas y litigios futuros. Así las cosas, durante la vigencia de la relación laboral, el demandante no cotizo con todos los factores salariales siendo que era imperativo el cumplimiento en el pago por parte del empleador, no solo durante la vigencia de la ley, sino también con posterioridad a la entrada en vigor de la ley 100 de 1993, como consecuencia de la aplicación del régimen de transición.

Nótese, que en los recursos presentados por parte del demandante frente a las resoluciones expedidas por UGPP ordenando el pago, no tienen como fundamento de defensa el pago de los factores salariales, establecidos en la ley 33 de 1985 y 62 de esa misma anualidad, sino que se fundamentan en establecer que los fallos condenatorios contra la entidad no tienen fuerza vinculante respecto del **E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja** y/o en los casos en que no existe fallo judicial en contra de UGPP sino cumplimiento de la ley y la jurisprudencia por parte de esta con la expedición de las resoluciones de reliquidación la defensa se centra en que existió vulneración del derecho de defensa, pero el problema jurídico no es si fueron o no citados al proceso judicial, o dentro del trámite administrativo dentro del cual se hizo parte Al **E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja**, sino definir cuál es valor de los factores salariales dejados de pagar o cotizar por el empleador, o si por el contrario los mismos fueron cancelados éste, y para tal fin se adjunte el soporte de pago respecto de los factores salariales dejados u omitidos en la cotización.

En definitiva, el demandante no acredita el pago de los factores salariales dejados de pagar, sino que aún cuando existen sendos fallos respecto a este tema en los que se ordena la inclusión de los factores conforme a la ley 33 y 62 de 1985, la defensa radica en la aplicación de la ley 100 de 1993 y la vulneración del derecho de defensa, cuando existe jurisprudencia vigente en la que se establece que no es necesario vincular al empleador al proceso ordinario por falta de pago de factores salariales, en la medida en que se trata de una obligación de carácter legal y por tanto imprescriptible, pues garantiza el pago de la prestación del afiliado – trabajador, y con mayor importancia la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

De otro lado, el argumento sustentado respecto al valor de la obligación carece de fundamento legal, es necesario advertirle al demandante, que las resoluciones se expidieron en cumplimiento de fallos judiciales, en los que se determinó la obligación de incluir los factores salariales dejados de pagar por el **E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja**, con fundamento en la certificación laboral y de factores salariales expedida por su parte, y en otros casos, se expidieron las resoluciones con base en los precedentes jurisprudenciales y legales aplicables a estos casos.

Por lo anterior, los descuentos por aportes realizados fueron ordenados en razón a los principios de solidaridad y sostenibilidad presupuestal, hoy en día reconocidos en normas de rango constitucional y en razón a lo que ha expresado el Consejo de Estado, en sentencias con radicado No. 5244 del 28 de octubre de 1993, M.P Dra. Dolly Pedraza de Arenas, en la que se señaló:

> *"(…) Es pertinente aclarar que en el caso de la liquidación de una pensión, cuando el empleado oficial no haya pagado determinados aportes, la Caja de Previsión respectiva debe cobrarlos previamente para efectos de que ella se produzca sobre el monto total de dichos aportes, conforme a la previsiones consagradas en la ley"*

Así mismo, el acto legislativo 001 de 2005 Art. 1 indica: Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política:

> *(…) Para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (…)*

Cabe resaltar que en el artículo 48 de la Constitución Política establece que, para la liquidación de las pensiones, solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales se hubieren efectuado cotizaciones, en caso de que sobre alguno de los factores para tener en cuenta no se hubiesen efectuado aportes deberá establecerse la obligación de descontarlos

en principio del retroactivo, de no ser esto posible, deberá definirse un esquema que permita el descuento con cargo a las mesadas futuras.

Con el objeto de realizar el cálculo de la pensión de vejez, solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones, es decir las que constituyen salario de conformidad con el régimen aplicable y para estos casos, se tiene en cuenta como soporte probatorio las certificaciones salariales expedidas por la misma RGN, en las que se establece de manera expresa los factores salariales devengados por cada trabajador, su valor, su periodicidad, y por ende la obligación legal que le asiste al demandante en el pago de los mismos

De manera análoga, la pensión de vejez se reconoce partiendo de los aportes realizados durante la vida laboral de los afiliados y para su otorgamiento se tienen en cuenta los descuentos que para tal fin fueron consignados al fondo de pensiones respectivo. De forma tal que en cumplimiento a los fallos proferidos por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO aplicables según el caso se procede con la Reliquidación de la pensión de VEJEZ de los afiliados.

En consecuencia, y con fundamento en lo manifestado anteriormente, es importante resaltar que una vez acreditada la legalidad de la inclusión de los factores salariales y la correlativa obligación legal de pago por parte del empleador, es pertinente resaltar que con fundamento en la Ley 1151 de 2007 en su artículo 156, se establece de forma general la función de cobro coactivo que ostenta la UGPP en los siguientes términos: "*Las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social. Para este efecto, la UGPP recibirá los hallazgos que le deberán enviar las entidades que administran sistemas de información de contribuciones parafiscales de la Protección Social y podrá solicitar de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores administradores de estos recursos parafiscales, la información que estime conveniente para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas por la ley, respecto de tales recursos. Esta misma función tendrán las administraciones públicas.* ***Igualmente, la UGPP podrá ejercer funciones de cobro coactivo en armonía con las demás entidades administradoras de estos recursos. (Negrillas de la suscrita).***

Así mismo, el Decreto 169 del 23 de enero de 2008 en su artículo 1 numeral 11 establece que:

> *11. Efectuar subsidiariamente las labores de determinación y cobro disuasivo, persuasivo y coactivo, con base en los hallazgos que le remitan las administradoras, órganos de control y vigilancia y demás entidades del Sistema de la Protección Social.*

Como se puede advertir, la normatividad antes señalada establece de manera clara la competencia de mi representada para ejercer el cobro de aportes patronales, no cancelados en tiempo al sistema de seguridad social en pensiones, por tratarse de aportes que integran el sistema de protección social en Colombia, con el fin de evitar vulneración al principio general de sostenibilidad del sistema general de pensiones.

No obstante, es necesario indicar el lineamiento No. 157 A - ACTA No.1554 del 02 y 16 de agosto de 2017 del Comité de defensa Judicial de la Ugpp, respecto a la acción de cobro, en los siguientes términos:

(. . .) *TITULO EJECUTIVO: DEFINICION: Es el documento que contiene una obligación clara expresa y exigible a cargo del deudor y legitima al acreedor para hacer cumplir la obligación incluso contra la voluntad del deudor a través de un proceso ejecutivo en el que se ordena el pago y la ejecución de sus bienes.*

*La ley 1437 de 2011 no contempla un procedimiento especial para efectos del trámite del proceso ejecutivo por eso en virtud del artículo 308 para efectos no regulados en l se acude al código de procedimiento civil según se desprende del artículo 422 de la ley 1564 de 2012.*

*Artículo 422. Titulo ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia y los demás documentos que señale la ley.*

*Ley 1437 de 2011 en su artículo 99 señala: ARTÍCULO 99. DOCUMENTOS QUE PRESTAN MERITO EJECUTIVO A FAVOR DEL ESTADO.*

*Prestaran mérito ejecutivo para su cobro coactivo siempre que en ellos conste una obligación clara expresa y exigible los siguientes documentos:*

*1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104 la obligación de pagar una suma liquida de dinero en los casos previstos en la ley.*

A su vez la Ley 1437 de 2011 en su artículo 89 establece:

*ARTÍCULO 89: CARACTER EJECUTORIO DE LOS ACTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES. Salvo disposición legal en contrario los actos en firme serán suficientes para que las autoridades por si mismas puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material proceder sin mediación de otra autoridad.*

*Para tal efecto podrá requerirse si fuere necesario el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional.*

*Resolución 691 de 2013 articulo 4 y 5: ARTCULO 4o. TTULOS QUE PRESTAN MRITO EJECUTIVO.*

***Prestan mérito ejecutivo para el cobro persuasivo y coactivo por parte de la Unidad Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP los documentos mencionados en los artículos 828 del Estatuto Tributario Nacional 99 de la Ley 1437 de 2011 469 de la Ley 1564 de 2012 y demás disposiciones legales que las modifiquen o adicionen.***

*PARAGRAFO. El procedimiento para la conformación del título ejecutivo ser el que conste en la respectiva caracterización de procesos para cada rea misional.*

*ARTCULO 5o. COMPETENCIA FUNCIONAL. Corresponde a la Subdirección de Cobranzas adelantar el trámite del cobro persuasivo y coactivo para lo cual el*

*Subdirector de Cobranzas tendrá la calidad de Funcionario Ejecutor encargado de dirigir y coordinar acciones de cobro de competencia de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP. (…) Negrillas de la suscrita.*

Conforme a lo anterior se evidencia que en el presente caso el título comprende el acto administrativo objeto de demanda, fue notificado, se otorgó los recursos de Ley y señala el valor a pagar al deudor, por lo que presta merito ejecutivo, y no se ha probado el cumplimiento del pago de los aportes, que constituyen una obligación legal del demandante.

Es de precisar que no existe la falsa motivación que aduce la parte demanda, como quiera que la entidad que represento procedió a la emisión del acto administrativo cumpliendo la decisión tomada por dos Jueces de la Republica después de un estudio de la documentación y de la argumentación presentada. Acorde con ello, los motivos de un acto administrativo constituyen uno de sus fundamentos de legalidad.

Según lo precedente, el Honorable Consejo de Estado, en la Sección Primera, bajo la Sentencia No 2008-265, del 14 de abril del 2016, afirmó que la falsa motivación del acto ocurre cuando:

(…) "*- Se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública.*
*- Los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o simuladas.*
*- Porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y*
*- Porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión (C.P. María Claudia Rojas Lasso)." (…)*

Con lo anteriormente expuesto, se logra evidenciar que la Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social -UGPP – NO cumple con ninguna de las razones expuestas para haber incurrido en la falsa motivación en el acto administrativo emitido.
Se debe señalar que la UGPP mediante las resoluciones atacadas, lo que pretende es cobrar al empleador las diferencias en los aportes realizados al sistema de seguridad social, por no cotizar sobre todo los factores salariales que devengaban los afiliados, obligación esta que se circunscribe al ámbito del derecho laboral y la seguridad social, por lo que en estos casos debe aplicarse las normas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y la seguridad social y su procedimiento, y en materia contencioso Administrativa el C.P. A. C. A., para cada caso específico.

En otro orden de ideas es necesario tener en cuenta que la abundante jurisprudencia constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han señalado el carácter imprescriptible del derecho pensional, y en cuanto a los aportes en tanto configuran materialmente el derecho prestacional el Consejo de Estado en sentencia de 23 de marzo de 1979 señaló: *"Si el derecho pensional no se extingue, tampoco puede aplicarse el fenómeno prescriptivo a los factores que constituyen parte integrante del derecho. Conocido es el aforismo de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal"*

De igual forma, la Sala Laboral de la Corte Suprema en sentencia SL 738208 (33330) de marzo de 2018, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno, estableció la imprescriptibilidad de los aportes a pensión, ya que pueden ser reclamados por el interesado en cualquier tiempo, incluso después de reconocido el derecho.

De otra parte, respecto a la prescripción también se ha pronunciado El Ministerio De Trabajo mediante concepto radicado bajo el No ID 34123 - 96197 fechado 31 de julio de 2014, en el que concluyó:

*"Respecto a la prescripción de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones es preciso indicar que dicha figura no ha sido contemplada taxativamente en las normas que regulan dicho sistema. Por tanto, considera esta Oficina Jurídica que aplicar por análoga la prescripción consagrada en el Código Civil o aquella que se ocupa de las prestaciones sociales atenta y menoscaba los derechos irrenunciables de los trabajadores. En efecto la obligación de cobrar las cotizaciones al Sistema General de Pensiones sin que medie término alguno se fundamenta en el hecho de que con el recaudo de dichos recursos se garantiza que los afiliados puedan reunir los requisitos legalmente exigidos para el reconocimiento pensional. Sobre este aspecto la Superintendencia Financiera a través del Oficio 2005048381-001 del 1 de febrero de 2006 señaló … en la medida en que estas acciones involucran el recaudo de sumas que por ley están destinadas al reconocimiento de prestaciones de carácter vitalicio cuyo derecho es imprescriptible e irrenunciable para sus beneficiarios este Despacho considera que no es viable aplicar el fenómeno extintivo de la prescripción a la acción de cobro de los aportes ms cuando sus actores no pueden sustraerse de su reconocimiento y pago. " (…)*

En conclusión, de acuerdo con el anterior señalamiento si el derecho pensional no prescribe tampoco podrá prescribir la acción de cobro de dichos aportes. Frente a lo anterior se debe señalar que la posición de la UGPP en parafiscales es que no existe prescripción de la acción de cobro de aportes pensionales en tanto el derecho pensional, no tienen prescripción alguna fundamentado en la Corte Constitucional mediante Sentencia C-230 de 1981 reiterada por las Sentencias C-198 de 1999 C-624 de 2003 concordantes con las Sentencias de Tutela 410 de 2014 y 774 de 2015 ha ratificado la imprescriptibilidad del derecho pensional y por lo tanto la obligación de cotizar por lo que al constituirse en un precedente constitucional es de obligatorio cumplimiento. Si bien es cierto la entidad nominadora no hizo parte del proceso debe precisarse que este problema no se resuelve llamando en garanta a las entidades que fueron empleadoras pues muchas veces sucede que pese a solicitarlo los jueces lo rechazan y adelantan el proceso sin la participación de dichas entidades.

El Consejo de Estado - Sección Segunda- mediante Sentencia del 4 de agosto de 2010 radicado 25000-23-25- 000-2006-07509-01 señaló a propósito de las reliquidaciones donde se ordena la inclusión de factores sobre los cuales no se hicieron aportes que al momento del incremento pensional que: *"la entidad de previsión tiene la obligación de hacer los descuentos correspondientes a las cotizaciones por el factor o factores incluidos y no cotizados así: si el querer del legislador consiste en que las pensiones se liquiden tomando como base los factores sobre los cuales se han efectuado aportes a la seguridad social no puede concluirse que automáticamente los factores que no han sido objeto de las deducciones de ley deben ser excluidos del ingreso base de liquidación pensional pues siempre es posible ordenar el descuento que por dicho concepto haya lugar."*

Nótese que la prescripción no puede ser asunto de debate dentro de este trámite judicial, toda vez que la entidad demandante no propuso este argumento jurídico con la presentación del recurso de reposición dentro de los trámites administrativos, lo que implica que mi poderdante solo resolvió el citado recurso respecto del argumento esgrimido en el mismo, en el cual no fue propuesta.

Por lo anterior, se ratifica la posición de la entidad respecto a la inexistencia de prescripción respecto de los aportes a seguridad social.

**Frente a la pretensión 5** Me opongo a la condena en costas toda vez que, mi poderdante resolvió la prestación en los términos legales, con fundamento en los elementos probatorios y jurisprudenciales vigentes a la fecha de la solicitud. Mal podría condenarse en costas, cuando el asunto relacionado con el cobro por concepto de aportes, ha sido asunto de debate y controversia al interior de los juzgados, Tribunales, y altas Cortes.

De otro lado, ha establecido el Consejo de Estado que la condena en costas procede cuando al valorar la conducta de la parte vencida se pueda determinar que existió temeridad y mala fe en sus actuaciones[1]. Sin embargo, en nuestro caso no existe ninguna actuación temeraria o de mala fe.

En este caso, no se ha hecho uso temerario del recurso judicial, ni está demostrado que la Administración haya desconocido los deberes que le impone el artículo 10 del C.P.A.C.A., razón por la cual se debe relevar a la Entidad de la condena en costas rectificando la postura adoptada en casos semejantes bajo la nueva interpretación del Consejo de Estado del artículo 188 del C.P.A.C.A. Cabe aún contemplar en este procedimiento argumentos distintos a ser vencido en juicio, debiendo el juez estudiar las características particulares de cada debate antes de condenar en costas.

En materia de costas, no cabe la conducta automática a la parte vencida, sino que habrá que considerar la naturaleza de los conflictos que se resuelven en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que no tienen un contenido puramente económico, sino que está involucrado el interés público. Siendo este un ámbito distinto al de la jurisdicción civil, así como las circunstancias particulares del caso.

Así las cosas, una eventual condena en costas se encontraría injustificada.

**A LOS HECHOS:**

1. Es cierto.
2. Es cierto.
3. Es cierto.
4. Es cierto.
5. No es cierto, toda vez que deben verificarse los recursos interpuestos por la parte demandante, conforme al expediente administrativo.
6. No es cierto, toda vez que deben verificarse las resoluciones emitidas por mi representada, conforme al expediente administrativo.
7. No es cierto, toda vez que deben verificarse las resoluciones emitidas por mi representada, conforme al expediente administrativo.
8. No es cierto, toda vez que deben verificarse los recursos interpuestos por la parte demandante, conforme al expediente administrativo.
9. No es cierto, toda vez que deben verificarse los recursos interpuestos por la parte demandante, conforme al expediente administrativo.
10. No es cierto, toda vez que deben verificarse las resoluciones emitidas por mi representada, conforme al expediente administrativo.
11. No es cierto, toda vez que deben verificarse las notificaciones realizadas por mi representada, conforme al expediente administrativo.
12. No es cierto, toda vez que deben verificarse los recursos interpuestos por la parte demandante, conforme al expediente administrativo.
13. No es cierto, toda vez que deben verificarse las resoluciones emitidas por mi representada, conforme al expediente administrativo.

[1] CE. Sec. Segunda. Sentencia radicado No. 41001233300020150074101 (2982-2017) de fecha febrero 7/2019. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

14. No es cierto, toda vez que deben verificarse las resoluciones emitidas por mi representada, conforme al expediente administrativo.
15. No es cierto, toda vez que deben verificarse las resoluciones emitidas por mi representada, conforme al expediente administrativo.
16. No es cierto, toda vez que deben verificarse las notificaciones realizadas por mi representada, conforme al expediente administrativo.
17. No es cierto, toda vez que deben verificarse los recursos interpuestos por la parte demandante, conforme al expediente administrativo.
18. No es cierto, toda vez que deben verificarse las resoluciones emitidas por mi representada, conforme al expediente administrativo.
19. No es cierto, toda vez que deben verificarse las notificaciones realizadas por mi representada, conforme al expediente administrativo.
20. No es cierto, toda vez que deben verificarse los recursos interpuestos por la parte demandante, conforme al expediente administrativo.
21. No es cierto, toda vez que deben verificarse las resoluciones emitidas por mi representada, conforme al expediente administrativo.
22. No es cierto, toda vez que deben verificarse las notificaciones realizadas por mi representada, conforme al expediente administrativo.
23. No es cierto, toda vez que mi representada emitió las resoluciones en ajuste a lo ordenado por la ley.

**RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO**

LEY 33 DE 1985 EN CONCORDANCIA CON LA LEY 62 DE 1985

*(…) "ARTÍCULO 3º. Modificado por la Ley 62 de 1985. "Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión."*

*"Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio."*

*"En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes." (…)*

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL, EXPEDIENTE 24305 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2005, M.P. ISAURA VARGAS DÍAZ

*(…) "No existiendo duda que la prestación reconocida a TORO ARIAS lo fue por la prestación de sus servicios personales a la UNIVERSIDAD DEL QUINDIO del 14 de abril de 1972 al 29 de diciembre de 1990, como empleado oficial que era en esa época, la pensión que le correspondía estaba regida por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, en cuanto a monto y edad, y por el artículo 1º de la Ley 62 de ese mismo año, en lo que toca con los factores base de su liquidación, que es lo que aquí se discute. Lo anterior, por la potísima razón de que, tanto la una como la otra, regularon en esos aspectos la situación de "todos los empleados oficiales", quedando a salvo únicamente las situaciones jurídicas particulares ya consolidadas (Parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985) y*

*quienes, para efectos de la edad exigida para acceder a la prestación, fueron comprendidos por el régimen de transición allí creado (Parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985).” (…)*

*(…) “En similar sentido se pronunció recientemente la Sala, en sede de instancia, en un caso seguido por la misma demandante contra empleados que pensionó en idéntica forma, en sentencia de 25 de octubre anterior (Radicación 26659), en los siguientes términos:*

*"... El objeto de la controversia entonces, gira en torno a la determinación de la normatividad que regula el monto de la pensión y los factores salariales a tener en cuenta para su cálculo. Si bien es cierto el actor se encontraba amparado por el régimen de transición previsto en la Ley 33 citada, es de advertir que éste sólo garantizaba la aplicación de la normatividad anterior en cuanto al requisito de la edad para acceder a la pensión, más no incluía el monto que lo fijó en un "setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio", ni tampoco los factores salariales para su cálculo.*

*"En ese orden de ideas, ha de entenderse que referente al monto y a los factores salariales para el cálculo de la pensión, tenía plena aplicabilidad en el caso del actor la Ley 33 de 1985 y el artículo 1° de la Ley 62 de ese año que la modificó y que dentro de los factores que conforman la base de liquidación de la pensión, incluía de manera expresa asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio, dejando por fuera otras prestaciones como las primas de carestía, servicios y vacaciones, tenidas en cuenta por la Universidad para la liquidación de la pensión de jubilación en el sub lite.*

*"Estima la Sala que no tiene relevancia el hecho de que en las referidas disposiciones se haga referencia a los factores para la liquidación de aportes a las Caja de Previsión y en este caso el actor no haya aportado a ninguna de ellas, pues de todos modos el inciso 3° del artículo 1° de la Ley 62 de 1985 hacía alusión a que "En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes".*

*"Y como bien lo señaló el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en sentencia de 29 de abril de 2004, rad. N° 2287-03, "la estipulación final del artículo 1° de la Ley 62 citada, sobre la liquidación de la pensión de acuerdo con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, no significa una exclusión para los casos en que la entidad no haya efectuado los descuentos por tal concepto, sino la obligación, para los empleados de régimen especial, de pagar los respectivos aportes sobre todos los rubros que según la ley deben constituir factor de liquidación pensional, de manera que si no han sido objeto de descuento, ello no da lugar a su exclusión, sino a que al momento del reconocimiento la entidad de previsión efectúe los descuentos pertinentes". (…)*

Así las cosas, se puede advertir que es una obligación legal para los empleadores de cubrir el monto de los aportes dejados de cancelar u omitidos, como sucede en este asunto respeto de los factores salariales.

LEY 1151 de 2007, articulo 156:

"*Las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social. Para este efecto, la UGPP recibirá los hallazgos que le deberán enviar las entidades que administran sistemas de información de contribuciones parafiscales de la Protección Social y podrá solicitar de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores administradores de estos recursos parafiscales, la información que estime conveniente para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas por la ley, respecto de tales recursos. Esta misma función tendrán las administraciones públicas.* ***Igualmente, la UGPP podrá ejercer funciones de cobro coactivo en armonía con las demás entidades administradoras de estos recursos. (Negrillas de la suscrita).***

DECRETO 169 del 23 de enero de 2008, artículo 1 numeral 11:

> *11. Efectuar subsidiariamente las labores de determinación y cobro disuasivo, persuasivo y coactivo, con base en los hallazgos que le remitan las administradoras, órganos de control y vigilancia y demás entidades del Sistema de la Protección Social.*

Como se puede advertir, las normatividades antes señaladas establecen de manera clara la competencia de mi representada para ejercer el cobro de aportes patronales, no cancelados en tiempo al sistema de seguridad social en pensiones, por tratarse de aportes que integran el sistema de protección social en Colombia.

LINEMIENTO No. 157 A - ACTA No.1554 del 02 y 16 de agosto de 2017 del Comité de defensa Judicial de la UGPP:

> (. . .) *TITULO EJECUTIVO: DEFINICION: Es el documento que contiene una obligación clara expresa y exigible a cargo del deudor y legitima al acreedor para hacer cumplir la obligación incluso contra la voluntad del deudor a través de un proceso ejecutivo en el que se ordena el pago y la ejecución de sus bienes.*
>
> *La ley 1437 de 2011 no contempla un procedimiento especial para efectos del trámite del proceso ejecutivo por eso en virtud del artículo 308 para efectos no regulados en l se acude al código de procedimiento civil según se desprende del artículo 422 de la ley 1564 de 2012.*
>
> *Artículo 422. Titulo ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia y los demás documentos que señale la ley.*
>
> *Ley 1437 de 2011 en su artículo 99 señala: ARTÍCULO 99. DOCUMENTOS QUE PRESTAN MERITO EJECUTIVO A FAVOR DEL ESTADO.*
>
> *Prestaran mérito ejecutivo para su cobro coactivo siempre que en ellos conste una obligación clara expresa y exigible los siguientes documentos:*
>
> *1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104 la obligación de pagar una suma liquida de dinero en los casos previstos en la ley.*

LEY 1437 de 2011, artículo 89:

> *ARTÍCULO 89: CARACTER EJECUTORIO DE LOS ACTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES. Salvo disposición legal en contrario los actos en firme serán suficientes para que las autoridades por si mismas puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material proceder sin mediación de otra autoridad.*
>
> *Para tal efecto podrá requerirse si fuere necesario el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional.*
>
> *Resolución 691 de 2013 articulo 4 y 5: ARTCULO 4o. TTULOS QUE PRESTAN MRITO EJECUTIVO.*
>
> ***Prestan mérito ejecutivo para el cobro persuasivo y coactivo por parte de la Unidad Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP los documentos mencionados en los artículos 828 del Estatuto Tributario Nacional 99 de la Ley 1437 de 2011 469 de la Ley 1564 de 2012 y demás disposiciones legales que las modifiquen o adicionen.***
>
> *PARAGRAFO. El procedimiento para la conformación del título ejecutivo ser el que conste en la respectiva caracterización de procesos para cada rea misional.*
>
> *ARTCULO 5o. COMPETENCIA FUNCIONAL. Corresponde a la Subdirección de Cobranzas adelantar el trámite del cobro persuasivo y coactivo para lo cual el Subdirector de Cobranzas tendrá la calidad de Funcionario Ejecutor encargado de dirigir y coordinar acciones de cobro de competencia de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP. (…) Negrillas de la suscrita.*

Conforme a lo anterior se evidencia que en el presente caso el título comprende el acto administrativo objeto de demanda, fue notificado, se otorgó los recursos de Ley y señala el valor a pagar al deudor, por lo que presta merito ejecutivo, y no se ha probado el cumplimiento del pago de los aportes, que constituyen una obligación legal del demandante.

Decreto 1848 de 1969 establece:

*( …) Artículo 99.- Deducciones por aportes que se adeuden. Cuando un empleado oficial tenga derecho a una determinada prestación por la cual deba responder una entidad de previsión social y no haya pagado en todo o en parte los aportes correspondientes, la entidad al hacer el reconocimiento respectivo descontará el valor de los aportes, que se liquidarán con base en los diferentes salarios percibidos por el empleado en el respectivo tiempo de servicio. ( . . .).*

De conformidad con lo anterior tal y como quedo consignado en las resoluciones de reconocimiento al realizarse la reliquidación se procedió a descontar la parte correspondiente al trabajador de los factores salariales dejados de pagar al sistema.

Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003

*(…) ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen….*

*ARTÍCULO 18. BASE DE COTIZACIÓN. La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior será el salario mensual…*

*…El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señalen el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4a. de 1992…*

Así las cosas, es evidente que para el caso el demandante tiene a la fecha una obligación legal que ha incumplido, y que por ministerio de la ley debe realizar, en favor de su ex trabajador, y del sistema, el cual se vería vulnerado en la medida en que se produciría un desequilibrio del sistema, relacionado con la sostenibilidad de este.

Pido al Señor Juez se sirva declarar probadas las siguientes excepciones a favor de la parte demandada:

**EXCEPCIONES DE MERITO**

1. **IMPROCEDENCIA DE CONTROL JURISDICCIONAL SOBRE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN**

La excepción se encuentra debidamente probada no es procedente la declaratoria de nulidad de las Resoluciones RDP 51585 de 2022, RDP 53011 de 2022, pues las mismas fueron originadas en la Resolución RDP 018343 de 2015, emitidas por la UGPP en cumplimiento a ordenes emitidas por medio de sentencia judicial, es decir, los actos administrativos en censura no están creando ni modificando una situación jurídica, sino que los mismos se limitan a dar cumplimiento a las ordenes emitida por autoridad judicial.

Así las cosas, nos encontramos frente a actos administrativos de cumplimiento o ejecución, es decir, en los mismos no se encuentra contenida la expresión de la voluntad de la administración, sino la orden concreta emitida en sede judicial, la cual para ser cumplida requiere la puesta en práctica por parte de la administración, es decir, la entidad debe actuar en cumplimiento a esa orden y en consecuencia emitir los actos administrativos, los cuales son un instrumento jurídico a través del cual se cumple la sentencia emitida.

En ese sentido el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera Ponente: Ligia López Díaz, providencia del 30 de marzo de 2006, Radicación número: 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784) manifestó:

> *(…) "En este orden, los actos administrativos que no crean, ni modifican la situación jurídica de una persona son considerados como actos de ejecución, los cuales están destinados a dar cumplimiento a un fallo proferido por un juez constitucional. En este sentido la Corporación ha dicho:*
>
> *Los actos de ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional se encuentran excluidos de dicho control, toda vez que a través de ellos no se decide definitivamente una actuación, pues solo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones". (…)*

En el caso que nos ocupa, la Resolución RDP 018343 de 2015, dio estricto cumplimiento al fallo emitido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, por lo que en concordancia con el criterio esbozado anteriormente, en el caso que nos ocupa el control jurisdiccional no es aplicable en la medida en que las resoluciones demandas se tratan de actos de ejecución que no modifican ni crean situaciones jurídicas, sino que se limita a dar cumplimiento a la sentencia por medio de la cual se ordena la reliquidación de la prestación reconocida a la señora **FLORIPES PEREZ PEREZ.**, con los factores salariales no incluidos en tiempo por parte del empleador, en este caso el **E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja.**

Ahora bien, la reliquidación ordenada por el TRIBUNAL, surge por la no inclusión de la totalidad de los factores salariales y el no pago en tiempo de los mismos, obligación que se encuentra en cabeza del empleador, en este caso el **E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja**. de conformidad con lo estipulado en la ley. En ese orden de ideas es al demandante a quien le corresponde acreditar el pago de los aportes.

**2. LEGALIDAD DE LA ACCIÓN DE COBRO COACTIVO**

La excepción se encuentra probada teniendo en cuenta que no es procedente la declaratoria de nulidad de las resoluciones demandas, en el cual se establece el cobro por los aportes patronales ya que los mismos se encuentran ajustados a derecho por reunir los requisitos y procedimientos consagrados en la ley para su nacimiento a la vida jurídica e igualmente es expedido por la autoridad competente para gestionar el cobro de los aportes pensionales del sistema de seguridad social.

Decreto 929 de 1976, que son fundamento de la condena judicial en contra de UGPP, razón por la cual la entidad en cumplimiento dio cumplimiento de los mismos, y procedió a reliquidar las prestaciones de los afiliados conforme lo solicito cada uno, a fin de evitar posibles condenas y litigios futuros. Así las cosas, durante la vigencia de la relación laboral, el demandante no cotizo con todos los factores salariales siendo que era imperativo el cumplimiento en el pago por parte del empleador, no solo durante la vigencia de la ley, sino también con posterioridad a la entrada en vigor de la ley 100 de 1993, como consecuencia de la aplicación del régimen de transición.

Nótese, que en los recursos presentados por parte del demandante frente a las resoluciones expedidas por UGPP ordenando el pago, no tienen como fundamento de defensa el pago de los factores salariales, establecidos en la ley 33 de 1985 y 62 de esa misma anualidad, sino que se fundamentan en establecer que los fallos condenatorios contra la entidad no tienen fuerza vinculante respecto tiempo de los mismos, obligación que se encuentra en cabeza del empleador, en este caso el **E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja**. y/o en los casos en que no existe fallo judicial en contra de UGPP sino cumplimiento de la ley y la jurisprudencia por parte de esta con la expedición de las resoluciones de reliquidación la defensa se centra en que existió vulneración del derecho de defensa, pero el problema jurídico no es si fueron o no citados al proceso judicial, o dentro del trámite administrativo dentro del cual se hizo parte el tiempo de los mismos, obligación que se encuentra en cabeza del empleador, en este caso el **E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja**, sino definir cuál es valor de los factores salariales dejados de pagar o cotizar por el empleador, o si por el contrario los mismos fueron cancelados éste, y para tal fin se adjunte el soporte de pago respecto de los factores salariales dejados u omitidos en la cotización.

En definitiva, el demandante no acredita el pago de los factores salariales dejados de pagar, sino que aún cuando existen sendos fallos respecto a este tema en los que se ordena la inclusión de los factores conforme a la ley 33 y 62 de 1985, la defensa radica en la aplicación de la ley 100 de 1993 y la vulneración del derecho de defensa, cuando existe jurisprudencia vigente en la que se establece que no es necesario vincular al empleador al proceso ordinario por falta de pago de factores salariales, en la medida en que se trata de

una obligación de carácter legal y por tanto imprescriptible, pues garantiza el pago de la prestación del afiliado – trabajador, y con mayor importancia la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

De otro lado, el argumento sustentado respecto al valor de la obligación carece de fundamento legal, es necesario advertirle al demandante, que las resoluciones se expidieron en cumplimiento de fallos judiciales, en los que se determinó la obligación de incluir los factores salariales dejados de pagar por el tiempo de los mismos, obligación que se encuentra en cabeza del empleador, en este caso el **E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja**., con fundamento en la certificación laboral y de factores salariales expedida por su parte, y en otros casos, se expidieron las resoluciones con base en los precedentes jurisprudenciales y legales aplicables a estos casos.

Por lo anterior, los descuentos por aportes realizados fueron ordenados en razón a los principios de solidaridad y sostenibilidad presupuestal, hoy en día reconocidos en normas de rango constitucional y en razón a lo que ha expresado el Consejo de Estado, en sentencias con radicado No. 5244 del 28 de octubre de 1993, M.P Dra. Dolly Pedraza de Arenas, en la que se señaló:

> *"(…) Es pertinente aclarar que en el caso de la liquidación de una pensión, cuando el empleado oficial no haya pagado determinados aportes, la Caja de Previsión respectiva debe cobrarlos previamente para efectos de que ella se produzca sobre el monto total de dichos aportes, conforme a la previsiones consagradas en la ley"*

Así mismo, el acto legislativo 001 de 2005 Art. 1 indica: Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política:

> *(…) Para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (…)*

Cabe resaltar que en el artículo 48 de la Constitución Política establece que, para la liquidación de las pensiones, solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales se hubieren efectuado cotizaciones, en caso de que sobre alguno de los factores para tener en cuenta no se hubiesen efectuado aportes deberá establecerse la obligación de descontarlos en principio del retroactivo, de no ser esto posible, deberá definirse un esquema que permita el descuento con cargo a las mesadas futuras.

Con el objeto de realizar el cálculo de la pensión de vejez, solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones, es decir las que constituyen salario de conformidad con el régimen aplicable y para estos casos, se tiene en cuenta como soporte probatorio las certificaciones salariales expedidas por el mismo **E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja**, en las que se establece de manera expresa los factores salariales devengados por cada trabajador, su valor, su periodicidad, y por ende la obligación legal que le asiste al demandante en el pago de los mismos

De manera análoga, la pensión de vejez se reconoce partiendo de los aportes realizados durante la vida laboral de los afiliados y para su otorgamiento se tienen en cuenta los descuentos que para tal fin fueron consignados al fondo de pensiones respectivo. De forma tal que en cumplimiento a los fallos proferidos por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO aplicables según el caso se procede con la Reliquidación de la pensión de VEJEZ de los afiliados.

En consecuencia, y con fundamento en lo manifestado anteriormente, es importante resaltar que una vez acreditada la legalidad de la inclusión de los factores salariales y la correlativa obligación legal de pago por parte del empleador, es pertinente resaltar que con fundamento en la Ley 1151 de 2007 en su artículo 156, se establece de forma general la función de cobro coactivo que ostenta la UGPP en los siguientes términos: "*Las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social. Para este efecto, la UGPP recibirá los hallazgos que le deberán enviar las entidades que administran sistemas de información de contribuciones parafiscales de la Protección Social y podrá solicitar de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores administradores de estos recursos parafiscales, la información que estime conveniente para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas por la ley, respecto de tales recursos. Esta misma función tendrán las administraciones públicas.* ***Igualmente, la UGPP podrá ejercer funciones de cobro coactivo en armonía con las demás entidades administradoras de estos recursos. (Negrillas de la suscrita).***

Así mismo, el Decreto 169 del 23 de enero de 2008 en su artículo 1 numeral 11 establece que:

> *11. Efectuar subsidiariamente las labores de determinación y cobro disuasivo, persuasivo y coactivo, con base en los hallazgos que le remitan las administradoras, órganos de control y vigilancia y demás entidades del Sistema de la Protección Social.*

Como se puede advertir, la normatividad antes señalada establece de manera clara la competencia de mi representada para ejercer el cobro de aportes patronales, no cancelados en tiempo al sistema de seguridad social en pensiones, por tratarse de aportes que integran el sistema de protección social en Colombia, con el fin de evitar vulneración al principio general de sostenibilidad del sistema general de pensiones.

No obstante, es necesario indicar el lineamiento No. 157 A - ACTA No.1554 del 02 y 16 de agosto de 2017 del Comité de defensa Judicial de la Ugpp, respecto a la acción de cobro, en los siguientes términos:

> (. . .) *TITULO EJECUTIVO: DEFINICION: Es el documento que contiene una obligación clara expresa y exigible a cargo del deudor y legitima al acreedor para hacer cumplir la obligación incluso contra la voluntad del deudor a través de un proceso ejecutivo en el que se ordena el pago y la ejecución de sus bienes.*
>
> *La ley 1437 de 2011 no contempla un procedimiento especial para efectos del trámite del proceso ejecutivo por eso en virtud del artículo 308 para efectos no regulados en l se acude al código de procedimiento civil según se desprende del artículo 422 de la ley 1564 de 2012.*
>
> *Artículo 422. Titulo ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia y los demás documentos que señale la ley.*

*Ley 1437 de 2011 en su artículo 99 señala: ARTÍCULO 99. DOCUMENTOS QUE PRESTAN MERITO EJECUTIVO A FAVOR DEL ESTADO.*

*Prestaran mérito ejecutivo para su cobro coactivo siempre que en ellos conste una obligación clara expresa y exigible los siguientes documentos:*

*1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104 la obligación de pagar una suma liquida de dinero en los casos previstos en la ley.*

A su vez la Ley 1437 de 2011 en su artículo 89 establece:

*ARTÍCULO 89: CARACTER EJECUTORIO DE LOS ACTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES. Salvo disposición legal en contrario los actos en firme serán suficientes para que las autoridades por si mismas puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material proceder sin mediación de otra autoridad.*

*Para tal efecto podrá requerirse si fuere necesario el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional.*

*Resolución 691 de 2013 articulo 4 y 5: ARTCULO 4o. TTULOS QUE PRESTAN MRITO EJECUTIVO.*

***Prestan mérito ejecutivo para el cobro persuasivo y coactivo por parte de la Unidad Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP los documentos mencionados en los artículos 828 del Estatuto Tributario Nacional 99 de la Ley 1437 de 2011 469 de la Ley 1564 de 2012 y demás disposiciones legales que las modifiquen o adicionen.***

*PARAGRAFO. El procedimiento para la conformación del título ejecutivo ser el que conste en la respectiva caracterización de procesos para cada rea misional.*

*ARTCULO 5o. COMPETENCIA FUNCIONAL. Corresponde a la Subdirección de Cobranzas adelantar el trámite del cobro persuasivo y coactivo para lo cual el Subdirector de Cobranzas tendrá la calidad de Funcionario Ejecutor encargado de dirigir y coordinar acciones de cobro de competencia de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP. (…) Negrillas de la suscrita.*

Conforme a lo anterior se evidencia que en el presente caso el título comprende el acto administrativo objeto de demanda, fue notificado, se otorgó los recursos de Ley y señala el valor a pagar al deudor, por lo que presta merito ejecutivo, y no se ha probado el cumplimiento del pago de los aportes, que constituyen una obligación legal del demandante.

**3. BUENA FE DE UGPP.**

Mi poderdante en todas y cada una de sus actuaciones legales, actúa bajo el principio de buena, y en este asunto, en cumplimiento de dicho precepto legal acata en su integridad la normatividad vigente para efectos de reconocimiento de derechos pensionales. Al respecto la Corte Constitucional, ha manifestado lo siguiente:

El principio de la buena fe es también principio del derecho laboral, ha sido incluido en el Código sustantivo del trabajo, en el Articulo 55 y aparece en la jurisprudencia laboral desde la época del Tribunal Supremo del trabajo: "El principio de la buena fe, que no es nuevo, sino que data de las mejores tradiciones romanas, debe presidir de la ejecución de los contratos, incluido el del trabajo". Sentencia esta proferida el 09 de febrero de 1949 y que llega hasta analizar no solo la buena fe sino la mala fe, en los siguientes términos:

*(…) "La mala fe ha dicho la Corte Suprema de Justicia – debe ser la deducción acertada hecha sobre la plena comprobación de hechos precisos de naturaleza incompatible con la "bona fide", como lo sería, en tratándose de la buena fe contractual, la demostración evidente de una visible ventaja pecuniaria en una negociación celebrada con un incapaz, que mostrara un aprovechamiento deshonesto del estado de inferioridad en que ocurrió una de las partes en su celebración, es decir, la prueba de que se abusó de un estado de debilidad para obtener un indebido e injusto provecho, apreciable en el desequilibrio de los valores. Sin olvidar tampoco que la calificación de la fe jurídica, el rigor con el que se exige o es exigible la buena fe en los negocios de hecho, conformada probatoriamente y adoptada en las situaciones particulares en cada caso." (…)*

Según lo anterior, la buena fe en la labor misional de UGPP, surge precisamente de la estricta aplicación de la constitución, la ley y la jurisprudencia, que permiten conceder o negar prestaciones ajustadas a derecho, por lo cual, existiendo la presunción de legalidad del acto que garantiza la seguridad jurídica en la decisión prestacional, tal circunstancia permite revestir además bajo la egida de la buena fe, el reconocimiento o negación pensional, por lo que es de carga exclusiva del demandante, controvertir tanto la presunción legal del acto, como la buena fe de la entidad administradora pensional en la decisión.

## 4. INEXISTENCIA DE PRESCRIPCIÓN.

Se ratifica la posición de la entidad respecto a la inexistencia de prescripción respecto de los aportes a seguridad social teniendo en cuenta lo siguiente:

Frente al fenómeno de la prescripción se ha pronunciado El Ministerio De Trabajo mediante concepto radicado bajo el No ID 34123 - 96197 fechado 31 de julio de 2014, en el que concluyó: *"Respecto a la prescripción de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones es preciso indicar que dicha figura no ha sido contemplada taxativamente en las normas que regulan dicho sistema. Por tanto, considera esta Oficina Jurídica que aplicar por análoga la prescripción consagrada en el Código Civil o aquella que se ocupa de las prestaciones sociales atenta y menoscaba los derechos irrenunciables de los trabajadores. En efecto la obligación de cobrar las cotizaciones al Sistema General de Pensiones sin que medie término alguno se fundamenta en el hecho de que con el recaudo de dichos recursos se garantiza que los afiliados puedan reunir los requisitos legalmente exigidos para el reconocimiento pensional. Sobre este aspecto la Superintendencia Financiera a través del Oficio 2005048381-001 del 1 de febrero de 2006 señaló … en la medida en que estas acciones involucran el recaudo de sumas que por ley están destinadas al reconocimiento de prestaciones de carácter vitalicio cuyo derecho es imprescriptible e irrenunciable para sus beneficiarios este Despacho considera que no es viable aplicar el fenómeno extintivo de la prescripción a la acción de cobro de los aportes ms cuando sus actores no pueden sustraerse de su reconocimiento y pago. " (…)*

De acuerdo con el anterior señalamiento si el derecho pensional no prescribe tampoco podrá prescribir la acción de cobro de dichos aportes. Frente a lo anterior se debe señalar que la posición de la UGPP en parafiscales es que no existe prescripción de la acción de cobro de aportes pensionales en tanto el derecho pensional, no tienen prescripción alguna

fundamentado en la Corte Constitucional mediante Sentencia C-230 de 1981 reiterada por las Sentencias C-198 de 1999 C-624 de 2003 concordantes con las Sentencias de Tutela 410 de 2014 y 774 de 2015 ha ratificado la imprescriptibilidad del derecho pensional y por lo tanto la obligación de cotizar por lo que al constituirse en un precedente constitucional es de obligatorio cumplimiento. Si bien es cierto la entidad nominadora no hizo parte del proceso debe precisarse que este problema no se resuelve llamando en garanta a las entidades que fueron empleadoras pues muchas veces sucede que pese a solicitarlo los jueces lo rechazan y adelantan el proceso sin la participación de dichas entidades.

La anterior postura también ha sido ratificada por el Consejo de Estado - Sección Segunda- mediante Sentencia del 4 de agosto de 2010 radicado 25000-23-25- 000-2006-07509-01 señaló a propósito de las reliquidaciones donde se ordena la inclusión de factores sobre los cuales no se hicieron aportes que al momento del incremento pensional que: *"la entidad de previsión tiene la obligación de hacer los descuentos correspondientes a las cotizaciones por el factor o factores incluidos y no cotizados así: si el querer del legislador consiste en que las pensiones se liquiden tomando como base los factores sobre los cuales se han efectuado aportes a la seguridad social no puede concluirse que automáticamente los factores que no han sido objeto de las deducciones de ley deben ser excluidos del ingreso base de liquidación pensional pues siempre es posible ordenar el descuento que por dicho concepto haya lugar."*

Nótese que la prescripción no puede ser asunto de debate dentro de este trámite judicial, toda vez que la entidad demandante no propuso este argumento jurídico con la presentación del recurso de reposición dentro del trámite administrativo, lo que implica que mi poderdante solo resolvió el citado recurso respecto del argumento esgrimido en el mismo, en el cual no fue propuesta.

En este orden de ideas es necesario tener en cuenta que la abundante jurisprudencia constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han señalado el carácter imprescriptible del derecho pensional, y en cuanto a los aportes en tanto configuran materialmente el derecho prestacional el Consejo de Estado en sentencia de 23 de marzo de 1979 señaló: *"Si el derecho pensional no se extingue, tampoco puede aplicarse el fenómeno prescriptivo a los factores que constituyen parte integrante del derecho. Conocido es el aforismo de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal"*

De igual forma, la Sala Laboral de la Corte Suprema en sentencia SL 738208 (33330) de marzo de 2018, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno, estableció la imprescriptibilidad de los aportes a pensión, ya que pueden ser reclamados por el interesado en cualquier tiempo, incluso después de reconocido el derecho.

Por lo anterior, se ratifica la posición de la entidad respecto a la inexistencia de prescripción respecto de los aportes a seguridad social.

## 5. INAPLICABILIDAD DEL ESTATUTO TRIBUTARIO EN MATERIA DE PRESCRIPCIÓN

Teniendo en cuenta que para el caso no es procedente la prescripción, en los términos antes citados, no es procedente en esta materia aplicar el artículo 817 del Estatuto Tributario, cuando por sustracción de materia el estatuto tributario, regula derechos derivados de las obligaciones tributarias, mientras que el asunto objeto de debate respecto de la prestación de la obligación del demandante, esta se circunscribe al ámbito del derecho laboral y la seguridad social, por lo que en estos casos debe aplicarse el Código Sustantivo del Trabajo y la seguridad social y su procedimiento, y en materia contencioso Administrativa el C.P A C. A., para cada especifico.

El estatuto tributario en su artículo 817, establece:

**(…) "*ARTÍCULO 817. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO.*** *<Artículo modificado por el artículo 53 de la Ley 1739 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:*

*1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.*
*2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.*
*3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.*
*4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.*

*La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte." (…)*

De lo anterior, se puede advertir que primero aplica para obligaciones fiscales, es decir, para obligaciones derivadas del pago de impuestos o contribuciones fiscales, pero en este caso se cobran aportes de seguridad social, que son imprescriptibles, y que por unidad de materia se rigen por las normas de carácter laboral y seguridad social, en materia ordinaria laboral o contencioso administrativa, de conformidad con el ámbito de competencia para cada caso.

De otro lado, el artículo en mención fue declarado inexequible mediante la sentencia C 992 de 2001, emitida por la Corte Constitucional, en tanto no es imperativa en tratándose del cobro de los aportes en seguridad social integral.

## 6. EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE FUNDAMENTAN LA ACCIÓN DE COBRO DEL ARTÍCULO 829 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

De no ser de recibo del despacho los argumentos anteriormente expuestos, solicito se tenga en cuenta lo dispuesto en el artículo 829 del Estatuto Tributario:

> *(…)"Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:*
> *1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.*
> *2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.*
> *3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y*
> *4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso."(…)*

En el caso que nos ocupa, las Resoluciones demandadas son los actos administrativos que fundamentan la acción de cobro y que precisamente están siendo objeto de control por medio de la acción de Nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que el término de prescripción de cobro comenzará una vez haya decisión definitiva en sede judicial, en esa

medida hasta la fecha la acción de cobró sigue vigente y gozando de plenos en efectos en aplicación a lo dispuesto en el Estatuto Tributario.

Así las cosas, no es de recibo para esta defensa el argumento esbozado por la parte demandante en su escrito de demanda en el que manifiesta que el término de acción de cobro se cuenta a partir de que el causante terminará el vínculo legal con el empleador, pues ese criterio no tiene en cuenta lo dispuesto por el Estatuto Tributario frente a la ejecutoria del acto administrativo.

**7. CADUCIDAD.**

Se propone la excepción de caducidad, la cual ha sido entendida como el fenómeno jurídico procesal a través del cual: *"(…) el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia."*. Según lo señalado en la Sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001, por el M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.

Ahora bien, en relación con el requisito del término de caducidad, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

> *"Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.*
>
> *Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel".*

Igualmente, el artículo 164 de ibídem, establece la oportunidad para demandar de la siguiente manera:

> "**Oportunidad para presentar la demanda.** La demanda deberá ser presentada:
>
> (…) d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales; (…)

La anterior excepción se propone con el fin de que sea estudiada por parte del despacho, en la medida en que los actos administrativos objeto de la demanda, y el término para presentar la demanda esta vencido.

## 8. INEXISTENCIA DE FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Respecto de la falta de motivación del actos administrativo, es pertinente indicar que el H. Consejo de Estado, ha establecido que este acto jurídico se conoce como la expedición irregular del acto administrativo, y que, lo que se requiere para que el acto tenga esta consideración legal, es que no tenga aunque sea una motivación sumaria; Sin embargo de la revisión del acto administrativo que se pretende declarar nulo por el demandante, es evidente que la sustentación del mismo no solo tiene una soporte legal "sumario", sino que tiene soporte en sentencia legalmente en firme, la cual hizo tránsito a cosa juzgada, como es de conocimiento del demandante, y no solo en este elemento probatorio, sino que además existen innumerables sentencias que constituyen doctrina probable, y que amparan la constitución de la obligación en mora por parte del empleador. Para tal fin, basta con ver los documentos y recursos presentados por el demandante en el curso de la actuación administrativa, para observar que no cumplieron con el pago de los aportes del trabajador, sustrayéndose de su obligación legal e imprescriptible, por lo que UGPP, en cumplimiento de sus funciones legales, no solo tiene el deber, sino también la obligación de constituir los actos administrativos, que a su vez generan el titulo ejecutivo de la obligación en contra de los empleadores que se sustraen del pago de los aportes al Sistema de Seguridad social.

Con el fin de sustentar lo manifestado me permito hacer referencia a la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 23 de junio de 2011, radicado 11001-23-27-000-2006-00032-00(16090), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, en los siguientes términos:

*(…) "Por su parte, en cuanto a la falta o ausencia de motivación, la Sección Cuarta ha señalado lo siguiente: "La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo n la expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que: inspiraron la producción de los mismos. En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este cargo se denomina técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la forme del acto administrativo, el modo de expedirse. Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en vicio de expedición irregular y, por ende, so configura la nulidad del acto administrativo. En efecto, la expresión de los motivos por los cuales se profiere un acto administrativo de carácter particular y concreto es indispensable, pues es a partir de los mismos que el administrado puede controvertir aquellos aspectos de hecho y de derecho que considera no pueden ser el soporte de la decisión, pero cuando se prescinde de la motivación se impide que el particular afectado con la decisión pueda ejercitar cabalmente su derecho de defensa y contradicción"." (…)*

De lo anterior, se colige que, la motivación o sustento jurídico que debe tener el acto administrativo, obedece a la existencia de motivos de hecho, (los cuales deben ser ciertos, claros y objetivos), y de derecho; Respecto de los primeros se debe indicar que la ***certeza*** para el presente caso radica en la existencia de la obligación por concepto de factores salariales debidos por empleador y por el afiliado, hechos que fueron debatidos y probados en sentencia en contra de las partes, por lo que no tendrá lugar a objeción; ***Claro***, se entiende para todos los efectos los derechos deben tener sustento legal, para este asunto mediante sentencia, y respecto del valor de las obligaciones estas fueron determinadas por mi poderdante, sin que se presentara reparo alguno por el demandante en la vía gubernativa, por lo que este hecho no puede ser debatido en el proceso. Y ***objetivos,*** para el caso el acto administrativo es objetivo, ya que lo pretende la UGPP, es recuperar los dineros dejados de pagar por el empleador, con el fin de proteger el principio general de la seguridad, que radica en la sostenibilidad del sistema de seguridad social y pensiones, y evitar perjuicios al erario, pues estos costos debe asumirlos el empleador, quien quiera que este sea.

Así las cosas, el acto administrativo está debidamente motivado, y el particular afectado tenía el término legal para controvertirlo, así como las herramientas legales, sin que presentara censura alguna, por lo que cualquier queja o reparo, será objeto de controversia dentro del trámite del proceso coactivo, y no por vía ordinaria como se pretende en este asunto.

## 9. IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Y DEVOLUCIONES

No puede condenarse en costas, cuando el acto administrativo no ha generado ningún perjuicio al demandante, y debe anotarse que acude a la jurisdicción ordinaria, por su propia negligencia y aceptación de la mora en el pago de las obligaciones al sistema general de seguridad social.

La excepción se encuentra debidamente fundamentada toda vez que no es procedente condenar en costas dado que mi poderdante resolvió la prestación en los términos legales, con fundamento en los elementos probatorios y jurisprudenciales vigentes a la fecha de la solicitud.

No puede condenarse en costas, cuando el acto administrativo no ha generado ningún perjuicio al demandante, y debe anotarse que acude a la jurisdicción ordinaria, por su propia negligencia y aceptación de la mora en el pago de las obligaciones al sistema general de seguridad social.

De otro lado, ha establecido el Consejo de Estado que la condena en costas procede cuando al valorar la conducta de la parte vencida se pueda determinar que existió temeridad y mala fe en sus actuaciones[2]. Sin embargo, en nuestro caso no existe ninguna actuación temeraria o de mala fe.

En este caso, no se ha hecho uso temerario del recurso judicial, ni está demostrado que la Administración haya desconocido los deberes que le impone el artículo 10 del C.P.A.C.A., razón por la cual se debe relevar a la Entidad de la condena en costas rectificando la postura adoptada en casos semejantes bajo la nueva interpretación del Consejo de Estado del artículo 188 del C.P.A.C.A. Cabe aún contemplar en este procedimiento argumentos distintos a ser vencido en juicio, debiendo el juez estudiar las características particulares de cada debate antes de condenar en costas.

[2] CE. Sec. Segunda. Sentencia radicado No. 41001233300020150074101 (2982-2017) de fecha febrero 7/2019. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

En materia de costas, no cabe la conducta automática a la parte vencida, sino que habrá que considerar la naturaleza de los conflictos que se resuelven en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que no tienen un contenido puramente económico, sino que está involucrado el interés público. Siendo este un ámbito distinto al de la jurisdicción civil, así como las circunstancias particulares del caso.

Así las cosas, una eventual condena en costas se encontraría injustificada.

4. **INNOMINADA O GENÉRICA.**

Igualmente pido al Señor Juez se sirva declarar probadas las demás excepciones que resulten dentro del presente proceso.

**PRUEBAS**

**DOCUMENTALES:**

- Las emitidas por la entidad que represento y que obren dentro del traslado de la demanda y las que se acompañen con el presente escrito, Expediente administrativo que contiene todos los actos administrativos emitidos por la entidad, así como las solicitudes realizadas por el demandante y demás entidades vinculadas.

**OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS.**

- Las que el Despacho a su cargo, considere decretar para obtener la certeza jurídica suficiente al momento de proferir Sentencia.

**OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS.**

Las que el Despacho a su cargo, considere decretar para obtener la certeza jurídica suficiente al momento de proferir Sentencia.

**ANEXOS.**

1. Escritura Publica No. 0604 del 12 de febrero de 2020
2. Resolución 2011 del 12 de diciembre de 2019, correspondiente al nombramiento del Dr. Luis Garavito como Director Jurídico de la UGPP, la cual está contenida en la misma escritura.
3. Acta de Posesión No. 127 del 12 de diciembre de 2019, que corresponde a la posesión del Dr. Luis Garavito como Director Jurídico de la UGPP, la cual está contenida en la misma escritura.
4. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, de la firma Viteri Abogados en la que consta la representación legal en cabeza del suscrito, la cual está contenida en la misma escritura.
5. Tarjeta Profesional del Dr. Omar Andrés Viteri Duarte.
6. Sustitución debidamente otorgada del Dr. Omar Andrés Viteri Duarte
7. Tarjeta Profesional de la suscrita apoderada.
8. Los documentos aludidos como prueba.

**NOTIFICACIONES**

A la ejecutante y a su apoderado(a) en la dirección aportada en la demanda.

UGPP se notifica en la Av. Carrera 68 No. 13 – 37 en Bogotá, correo: notificacionesjuidialesugpp@ugpp.gov.co

El (la) suscrito(a) apoderado(a) se notifica en la Carrera 13A No 89 - 38 Oficina 511 – 424 Edificio Nippon Center o en los correos oviteri@ugpp.gov.co / gerencia@viteriabogados.com

Cordialmente,



**LAURA NATALI FEO PELÁEZ**
Apoderada Ugpp
C.C. 1.018.451.137 de Bogotá
T.P. 318.520 del C. S de la J.

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

GOBIERNO DE COLOMBIA

20231321872061

**Al contestar por favor cite estos datos:**
Radicado No.: **20231321872061**
Fecha: **25/05/2023**

DJ-F-005 V.8

Bogotá, D.C.

Señores
**JUZGADO 41 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -SECCIÓN CUARTA**
**correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**
**E.S.D.**

Con copia
**AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.**
notificacionesjudiciales@aguasregionales.com
melissa.salam@aguasregionales.com
**AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co
**MINISTERIO PÚBLICO**
morozco@procuraduria.gov.co

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA:** | **ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.** |
| **DEMANDANTE:** | **AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.** |
| **DEMANDADO:** | **SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.** |
| **RADICADO:** | **11001333704120230005600**[1] |

## CONTESTACIÓN DE DEMANDA

**DARÍO FERNANDO PEDRAZA LÓPEZ**, mayor de edad, abogado titulado y en ejercicio, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.183.748 de Sogamoso - Boyacá y portador de la T.P. No. 125.057 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado y por tanto en representación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, conforme con el poder remitido el pasado 17 de abril de 2023 al despacho, respetuosamente me dirijo a Usted con el objeto de dar CONTESTACIÓN A LA DEMANDA de conformidad con el artículo 175 de la Ley 1437 de 2023.

1 Radicado Demanda No. 11001333704120230005600
Expediente Virtual No. 20235290759662
Ekogui 2417586



Sede principal.
Bogotá D.C. Carrera 18 nro. 84-35
Código postal: 110221
PBX 60 (1) 691 3005. Fax 60 (1) 691 3059
sspd@superservicios.gov.co
Línea de atención 60 (1) 691 3006 Bogotá.
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
NIT: 800.250.984.6
www.superservicios.gov.co

Dirección Territoriales
Diagonal 92 # 17A – 42, Edificio Brickell Center, piso 3.
Código postal: 110221
Barranquilla. Carrera 59 nro. 75 -134. Código postal: 080001
Bucaramanga. Carrera 34 No. 54 – 92. Código postal: 680003
Cali. Calle 26 Norte nro. 6 Bis – 19. Código postal: 760046
Medellín. Avenida calle 33 nro. 74 B – 253. Código postal: 050031
Montería. Carrera 7 nro. 43-25. Código postal: 050031
Neiva. Calle 11 nro. 5 – 62. Código postal: 230001

## I. OPORTUNIDAD

Que el despacho judicial mediante el correo electrónico del día 31 de marzo de 2023, remitió el auto del 14 de marzo de 2023, por medio del cual resolvió admitir demanda y corrió traslado para contestar una vez surtida la notificación.

De conformidad con el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011[2], la notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurrido dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezaran a correr a partir al día siguiente.

En consecuencia, los dos días del envío del mensaje de correo electrónico correspondieron a los días 10 y 11 de abril de 2023 y el término para presentar contestación de la demanda inició el día 12 de abril y finalizaría el 25 de mayo de 2023[3] conforme al artículo 175 de la Ley 1437 de 2011.

## II. EN CUANTO A LOS HECHOS

**PRIMERO:** Es cierto, aclarando que el actor realiza una transcripción parcial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, así mismo, la contribución especial no solo se creo para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sino también para cada comisión.

**SEGUNDO:** Es cierto que la empresa AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. es sujeto pasivo de la contribución especial consagrada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

**TERCERO:** Es cierto que la SUPERSERVICIOS emitió acto administrativo de Liquidación Oficial de la Contribución Especial SSPD No. 20210000009356 por el servicio de Alcantarillado para Aguas Regionales EPM, en la cual determinó que el valor total por contribución especial ascendía a la suma de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($24,756,000).

**CUARTO**: Es cierto de conformidad con al acto administrativo de liquidación de contribución especial descrita en el hecho primero.

**QUINTO:** No es un hecho, es una apreciación interpretativa y subjetiva del actor, respecto de presentar una liquidación de contribución especial, sin tener en cuenta los criterios establecidos en los actos acusados que tiene fundamento legal y constitucional.

Como se puede observar en el acto acusado Liquidación Oficial de la Contribución Especial SSPD No. 20210000009356, el cálculo para la liquidación especial se tomó con base en la información reportada al SUI por el prestador para el año 2020 y en consecuencia los valores tenidos en cuenta fueron:

CÁLCULO LIQUIDACIÓN ESPECIAL

Valores estados financieros certificados en SUI 2020

| Concepto contable | ALCANTARILLADO |
|---|---|
| Total de Administración | 1,794,473,000 |
| Generales | 178,202,794 |
| Beneficios a Empleados | 378,979,138 |
| ACPM Fuel Oil | 9,181,294 |
| Productos Quimicos | 68,442,940 |
| Energía | 46,276,962 |
| TOTAL BASE GRAVABLE | 2,475,556,128 |
| TARIFA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | 1.00 % |
| TOTAL POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | 24,756,000 |
| VALOR PRIMER PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | 37,912,200 |
| TOTAL A PAGAR POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | 0 |

[2] Artículo 52 de la Ley 2080 de 2022

[3] Por vacancia judicial los días 1 al 9 de abril de 2023 no corren términos, conforme la Ley 31 de 1971

**SEXTO:** Es cierto que el prestador interpuso el recurso de reposición ante el Director Financiero y, en subsidio de apelación ante el Secretario General de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD en contra de la Liquidación Oficial de la Contribución Especial año 2021 para el servicio de Alcantarillado con radicado SSPD No. 20210000009356 del 23 de agosto de 2021.

**SÉPTIMO:** Es parcialmente cierto, teniendo en cuenta que adicional al argumento indicado en el presente hecho, sostuvo la tesis de la legalidad y certeza tributaria con ocasión de la inconstitucionalidad del artículo 18 de le Ley 1955 de 2019.

Ahora bien, la Resolución SSPD No 20215300624185 por medio del cual resolvió el recurso de reposición, mi representada sostuvo ante los argumentos generales indicados por el actor, lo siguiente:

"[…] *existe justificación para hacer uso del parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, en el sentido de adicionar para el cálculo de la base gravable, aquellos gastos operativos, asimilables a los señalados de forma expresa en dicha disposición, en la proporción de los recursos que eran necesarios para cubrir dichos faltantes presupuestales, con el propósito de llegar al total del presupuesto aprobado para la vigencia*.]"

**OCTAVO:** Es cierto que mediante Resolución SSPD No 20215300624185 del 27 de octubre de 2023 se resolvió el recurso de reposición y concedió el recurso de apelación ante la Secretaría General de la SUPERSERVICIOS.

**NOVENO:** Es cierto que la SUPERSERVICIOS profirió Resolución 20225000995055 del 26 de octubre de 2022 mediante la cual resolvió recurso de apelación.

**DÉCIMO:** Es cierto sobre las imprecisiones indicadas en el resuelve, sin embargo, la parte considerativa es completamente valida en toda su fundamentación jurídica y fáctica que resolvió el recurso de apelación, dejando claro que la liquidación de la contribución especial del año 2021, se encontraba debidamente ajustada a derecho.

**DECIMO PRIMERO:** No me consta, me atengo a lo que se pruebe y lo que contienen los antecedentes administrativos.

Es importante aclarar, como se sostuvo en el punto anterior, que si bien la parte resolutiva confirmaba la liquidación de contribución especial, los considerandos del acto atacado mantienen toda la legalidad del caso, incluyendo la parte resolutiva que confirma el acto recurrido.

**DÉCIMO SEGUNDO:** No es un hecho es una apreciación subjetiva e interpretativa del actor, como ya se mencionó en el hecho quinto y por lo tanto me remito a su mención.

**DÉCIMO TERCERO:** No es un hecho es una apreciación subjetiva e interpretativa del actor, como ya se mencionó en el hecho quinto y por lo tanto me remito a su mención.

## III. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, tanto principales como subsidiarias, por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Demostraré en el curso del proceso que los actos administrativos acusados fueron expedidos con apego a la Constitución y la ley por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La expedición de los actos acusados se observó, tanto el derecho al debido proceso, como el principio de legalidad, razón por la cual no hay lugar a la anulación de los actos, ni a la realización de una reliquidación por parte del despacho judicial.

## IV. RAZONES DE LA DEFENSA

De antemano solicito al despacho se tengan como argumentos para sustentar la posición de la Superintendencia las consideraciones de hecho y de derecho contenidas en los actos administrativos demandados, las que soporto y complemento con los argumentos que más adelante expondré, no sin antes referirme al objeto de la controversia.

Son objeto de defensa los siguientes actos Administrativos:

| No. Acto administrativo | Fecha | Clase de Acto | Dependencia que lo profiere |
|---|---|---|---|
| 20210000009356 | 23/8/2021 | Liquidación de Contribución Especial | Directora Financiera SSPD |
| 20215300624185 | 27/10/2021 | Recurso de Reposición | Directora Financiera SSPD |
| 20225000995055 | 26/10/2022 | Recurso de Apelación | Secretaría General de la SSPD |

Los cuales se encuentran ajustados a la Constitución Política, la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, tal como se expone a continuación frente a los argumentos de la demanda.

**SUSTENTO DE LA DEMANDA:**

**PRIMER CARGO: "[*5.1. VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LA LEY. DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD*]"**

El demandante sustenta el cargo así:

*"[…] la entidad demandada no podía ampliar de manera discrecional la base gravable, la cual debe fijarse teniendo en cuenta lo establecido por la Ley para tal fin y acudiendo siempre al principio de proporcionalidad.]"*

*"[La inclusión por parte de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, de costos de producción (cuentas 75) como: 7505 – beneficios a empleados, 7510- generales, 753705 – ACPM, fuel, oil, 753701– Productos químicos, 753704 – Energía, para efectos de establecer la base gravable de la contribución en el caso objeto de demanda comporta su ampliación injustificada e ilegal.]"*

*"[la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD) desbordó en el ámbito de sus competencias al establecer la base gravable de la contribución especial a través de la vía interpretación las cuentas contables para liquidar la contribución especial con la inclusión de las cuentas del Grupo 75 ya citadas.]"*

*"[En estas condiciones, es posible concluir que la entidad demandada desconoció el principio de legalidad del tributo consagrado en el citado artículo 338 de la Constitución Política, pues al conformar la base gravable incluyó cuentas que no fueron fijadas por el legislador, excediendo sus facultades.]"*

**SUSTENTO DE LA EXCEPCIÓN DE LEGALIDAD RESPECTO DE ESTE CARGO**

Sea lo primero advertir en esta etapa, que la liquidación de la contribución especial tiene su fundamento constitucional y legal, que así mismo, mi representada tomó cada uno de los criterios definidos por la ley y la jurisprudencia para la liquidación de este tributo a cargo del prestar hoy demandante.

Constitución Política, y normas legales: 142, 143 de 1994; Ley 689 de 2001; el Decreto 990 de 2002; Por lo que, en ámbito constitucional, es lo siguiente:

- **FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES**

La política pública de regulación de los diferentes Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia, se implementa a luz de unos principios constitucionales sustentados en la razón simple de que el acceso masivo a los servicios básicos es un factor fundamental en el proceso económico y social de una región. Por tanto, la calidad de vida y los niveles de salud de la población como indicadores de la eficiencia y cobertura de los servicios públicos, son realidades que obligaron a dar un rango constitucional al marco general de los Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia. De manera que en el Título XII "Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública", Capítulo 1 "De las Disposiciones Generales", Artículos 333 y 334; y el Capítulo 5 "De la Finalidad Social del Estado y de los Servicios Públicos", especialmente en los artículos 365 y 370, se institucionalizaron los principios rectores, los mecanismos de control y vigilancia, el régimen económico, ***la asistencia estatal para algunos sectores de la población y el carácter finalista del Estado, en relación con los SPD.***

Por lo que se hace cita de la norma de manera textual pertinente a la Superintendencia de Servicios Públicos:

***"Artículo 334:*** *La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Éste intervendrá, por mandato de la Ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano."*

***"ARTICULO 365.*** *Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.*

*Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita."*

***"ARTICULO 370.*** *Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten."*

Los artículos y principios expuestos anteriormente plantean que los servicios públicos se encuentran regulado, vigilado y controlado por el Estado, evitando así un monopolio estatal. Sin embargo, en desarrollo de los preceptos constitucionales, por lo que se tiene las normas legales que a continuación se hace alusión.

- **FUNDAMENTOS LEGALES**

Respecto a los fundamentos de derecho, que se traducen a la normativa legal aplicable se hace cita los siguientes:

Ley 142 de 1994, artículo 85 la cual hace referencia a las contribuciones especiales, mediante el cual se resalta y se subraya los apartes aplicables.

***"ARTÍCULO 85. Contribuciones especiales. Reglamentado por el Decreto Nacional 707 de 1995****. Con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que preste cada comisión, y los de control y vigilancia que preste el Superintendente, las entidades sometidas*

*a su regulación, control y vigilancia, estarán sujetas a dos contribuciones, que se liquidarán y pagarán cada año conforme a las siguientes reglas:*

*85.1. Para definir los costos de los servicios que presten las Comisiones y la Superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, en el período anual respectivo.*

***85.2. La superintendencia y las comisiones presupuestarán sus gastos cada año y cobrarán dentro de los límites que enseguida se señalan, solamente la tarifa que arroje el valor necesario para cubrir su presupuesto anual.***

*La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia y de las Comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su estudio fijarán la tarifa correspondiente.*

*85.3.* ***Modificado parcialmente por el Artículo 132 de la Ley 812 de 2003****. Si en algún momento las Comisiones o la Superintendencia tuvieren excedentes, deberán reembolsarlos a los contribuyentes, o abonarlos a las contribuciones del siguiente período, o transferirlos a la Nación, si las otras medidas no fueran posibles.*

*85.4. El cálculo de la suma a cargo de cada contribuyente, en cuanto a los costos de regulación, se hará teniendo en cuenta los costos de la comisión que regula el sector en el cual se desempeña; y el de los costos de vigilancia, atendiendo a los de la Superintendencia.*
*85.5. La liquidación y recaudo de las contribuciones correspondientes al servicio de regulación se efectuará por las comisiones respectivas y las correspondientes al servicio de inspección, control y vigilancia estarán a cargo de la Superintendencia.*

*85.6. Una vez en firme las liquidaciones deberán ser canceladas dentro del mes siguiente. Se aplicará el mismo régimen de sanción por mora aplicable al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de las demás sanciones de que trata esta Ley.*

***PARÁGRAFO 1****. Las Comisiones y la Superintendencia se financiarán exclusivamente con las contribuciones a las que se refiere este artículo y con la venta de sus publicaciones. Sin embargo, el gobierno incluirá en el presupuesto de la Nación apropiaciones suficientes para el funcionamiento de las Comisiones y de la Superintendencia durante los dos primeros años.*

***PARÁGRAFO 2. Al fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los gastos de funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello; y en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a éstos. Estos rubros podrán ser adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir faltantes presupuestales de las comisiones y la superintendencia****.”* (Subrayas y en negrilla fuera de texto)

- **LEY 689 DE 2001**

Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994, se establece en el artículo 13 modificando el artículo 79 de la precitada ley, las funciones de las Superintendencia.

***“Artículo 13. Modificase el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así****:*

*"Artículo 79. Funciones de la Superintendencia. Las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones de esta las siguientes:*

*1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén*

*sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad.*

*2. Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de servicios públicos y los usuarios, y apoyar las labores que en este mismo sentido desarrollan los "comités municipales de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios"; y sancionar sus violaciones.*

*3. Dar conceptos, no obligatorios, a petición de parte interesada, sobre el cumplimiento de los contratos relacionados con los servicios a los que se refiere esta ley; y hacer, a solicitud de todos los interesados, designaciones de personas que puedan colaborar en la mejor prestación de los servicios públicos o en la solución de controversias que puedan incidir en su prestación oportuna, cobertura o calidad.*

*4. Establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad que deben aplicar quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del servicio y el monto de sus activos, y con sujeción siempre a los principios de contabilidad generalmente aceptados.*

*5.* ***Definir por vía general las tarifas de las contribuciones a las que se refiere el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, liquidar y cobrar a cada contribuyente lo que le corresponda.***

- **DECRETO 990 DE 2002.**

Mediante el Decreto 990 del año 2002, se modificó la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**,** por el cual en el Capítulo II, se estipula las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

***"ARTÍCULO 5º-Funciones de la superintendencia.*** *Las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las hagan sujetos de aplicación de las leyes 142 y 143 de 1994, 689 de 2001 y demás leyes que las adicionen, modifiquen o sustituyan, estarán sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones de ésta, las siguientes:*

1. *Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad.*

   ***(…)***

*6. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de los prestadores de servicios públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia, de acuerdo con los indicadores definidos por las comisiones de regulación; publicar sus evaluaciones y proporcionar, en forma oportuna, toda la información disponible a quienes deseen hacer evaluaciones independientes.*

*7. Acordar programas de gestión con las empresas que amenacen de forma grave la prestación continua y eficiente de un servicio, cuando así lo estime*

***(…)***

*22.* ***Definir por vía general las tarifas de las contribuciones que deban pagar las entidades sujetas a su inspección, control y vigilancia a las que se refiere el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.***

***(…)***

***32. Definir por vía general, las tarifas de las contribuciones que deban pagar las***

***entidades sujetas a su inspección, control y vigilancia en los términos del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.***

Teniendo definido la normativa aplicable, se tiene que mediante la Resolución general No. **20211000355215 del 29 de julio de 2021**, siendo el acto administrativo por excelencia que desplegó las liquidaciones oficiales expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos a cargo de la demandante, cuyos actos se encuentran enmarcados dentro de la legalidad y el debido proceso según la facultad dada por la ley a mi representada.

El acto administrativo demandado correspondiente a la Resolución 20210000009356 del 23 de agosto de 2021, se encuentra debidamente motivado, y en la cual dispuso y señalo la norma que complementa y desarrolla el marco legal enunciado en líneas precedentes, indicando los siguiente:

"*El art 85 de la Ley 142 de 1994 y el art 8 numeral 5 del Decreto 1369 de 2020, facultan a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) para liquidar y cobrar anualmente una Contribución Especial a las entidades sometidas a su IVC para recuperar los costos en que incurre, con una tarifa que no puede ser superior al 1% del valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio en el que se ejercen las facultades descritas.*

*A través de la Resol SSPD 20211000355215 del 29 de julio de 2021, se fijó la tarifa de la contribución especial para el año 2021, se estableció la base gravable de liquidación, así como el procedimiento para su recaudo.*

*Que las apropiaciones presupuestales de la SSPD para la vigencia fiscal 2021, fueron establecidas en la Ley 2063 del 28/11/2020, en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación No. 1805 del 31/12/2020 y en la Resol SSPD 20211000013125 del 29/03/2021, el cual será cubierto con el recaudo de la contribución especial de que trata el art 85- Ley 142 de 1994 por valor de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MCTE ($148.694.794.129,00).*

*Que aquellas ESPD[4] que no reporten los estados financieros de la vigencia 2020 de acuerdo con lo establecido por la SSPD, se tomará como base la última información financiera certificada al SUI actualizada al 31/12/2020, aplicando el incremento del IPC a 31 de diciembre de cada año certificado por el DANE.*

*Que al conformar la base gravable para liquidar la contribución especial y al aplicar la tarifa del 1% como máxima permitida a los Gastos Administrativos (menos exclusiones establecidas en la Resol. que fija la tarifa), se recaudaría el valor de $46.370.241.425, monto inferior al aprobado por la ley del presupuesto vigencia 2021 indicada, constituyéndose así un faltante presupuestal de $102.324.552.704, el cual es necesario cubrir con los conceptos establecidos en el parágrafo 2 del artículo 85-Ley 142 de 1994, con las previsiones allí establecidas y serán adicionadas en la proporción en que sean indispensables para cubrir el faltante presupuestal de la SSPD. (subrayado fuera de texto)*

*Que como gastos operativos se obtuvo la suma de $32.840.028.924.841, valor sobre el cual se calculó la proporción necesaria que debe ser incluida en la base gravable de la Contribución Especial de la vigencia 2021 para cubrir el faltante presupuestal, cuyo resultado fue del 31.16%. Con base en lo anterior, los conceptos que integrarán la base gravable de la Contribución Especial de la vigencia 2021, son los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a IVC por la SSPD, -Gastos administrativos (menos exclusiones) y los gastos operativos a que alude el parágrafo 2 del artículo 85-Ley 142 de 1994, esto es: Para el Servicio Energía Eléctrica: Compras En Bloque y/o a Largo Plazo, Compras En Bolsa y/o a Corto Plazo, Uso De Líneas, Redes y Ductos, Gas Combustible, Carbón Mineral, ACPM, Fuel y Oil; Servicio Gas Natural: Uso De Líneas, Redes y Ductos, Gastos operativos de Distribución y/o Comercialización de GN o Combustible por redes, Gas Combustible; Servicio de GLP: Uso De Líneas, Redes y Ductos, Gastos operativos de Distribución y/o Comercialización De*

[4] Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios

*GLP, Gas Combustible, ACPM, Fuel y Oil. Servicios de AC-AL-AS: Beneficios a empleados, Generales, Gastos operativos de bienes y servicios públicos para la venta, Productos Químicos, Energía, ACPM, Fuel y Oil, Órdenes y Contratos de Mantenimiento y Reparaciones, Materiales y Otros gastos, Órdenes y Contratos por Otros Servicios, Disposición final, Peajes por interconexión de acueducto y alcantarillado, base gravable a la cual se aplicará la tarifa del 1%."*

De lo mencionado anteriormente se puede claramente desvirtuar el cargo descrito por el actor, teniendo en cuentas que, la SUPERSERVICIOS contó con la competencia y la facultad para expedir el acto administrativos demandados, por medio del cual se liquido la contribución especial al prestador, así mismo, se motivo como el acto de liquidación oficial, como todos los años lo realiza mi representada conforme lo establece el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

Así mismo, se evidencia que el acto describió los conceptos que integraron la base gravable de la contribución especial para el año 2021, teniendo en cuenta el faltante presupuestal, el cual debía ser recaudado a los prestadores conforme a las formula establecida en el parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

Se ampliará el presente cargo, en la siguiente intervención, a fin de explicar con detalle la justificación de los conceptos tenidos en cuenta para la base de la liquidación oficial, sin embargo, de lo expuesto es claro que el presente cargo no está llamado a prosperar y así lo establecerá el despacho.

**SEGUNDO CARGO: "[*5.2. VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY. ARTÍCULO 96 NUMERAL 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EN CONSECUENCIA DE LOS ARTÍCULOS 6, 121 Y 123 IBIDEM*.]"**

"[*En este estado se encuentra el acto administrativo que contiene la Liquidación Oficial de la Contribución Especial vigencia 2021 para el servicio público de Alcantarillado a Aguas Regionales EPM S.A. ESP, por dos (2) motivos básicamente, el primero, porque al conformar la base gravable se incluyó cuentas que no cumplen con los criterios fijados por el legislador.*

*El segundo, por cuanto vía interpretación la SSPD conformó la base gravable con cuentas que ella misma determinó, asumiendo por esa vía la determinación de los elementos esenciales del tributo, incluyendo cuentas que no cumplen con ese requisito de ser las fijadas expresamente por el legislador.*

*Por otra parte, la SSPD incluye cuentas del grupo 75 argumentando que las mismas se pueden incluir de acuerdo con los dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, porque, tiene un faltante presupuestal.*

*Por ello, dentro del trámite administrativo debe estar plenamente acreditado la existencia del "supuesto" faltante presupuestal alegado por la SSPD, con una explicación clara de por qué se presenta el mismo. No obstante, dentro del procedimiento no existe una prueba suficiente que dé cuenta y explique la existencia del faltante presupuestal alegado por la SSPD para la liquidación de la contribución especial del año 2021.*

*Es así que la SSPD argumentó de manera insuficiente e imprecisa la operación por medio de la cual se sustenta el alegado "faltante presupuestal", concepto incluido en el acto de liquidación SSPD No. 20210000009356 del 23 de agosto de 2021, con base en el cual aumentó de manera sustancial la base gravable de la contribución especial de AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. del servicio público de Alcantarillado para la vigencia 2021*.]"

**SUSTENTO DE LA EXCEPCIÓN DE LEGALIDAD RESPECTO DE ESTE CARGO**

Es pertinente advertir e insistir que mi representada incluyó en la base para gravar la contribución especial para la vigencia 2021 bajo la Resolución 20210000009356 del 28 de

agosto de 2021, los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a IVC por la SSPD, -Gastos administrativos (menos exclusiones) y los gastos operativos a que alude el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, esto es: para los servicios de ACUEDUCTO; ALCANTARILLADO Y ASEO: "*Beneficios a empleados, Generales, Gastos operativos de bienes y servicios públicos para la venta, Productos Químicos, Energía, ACPM, Fuel y Oil, Órdenes y Contratos de Mantenimiento y Reparaciones, Materiales y Otros gastos, Órdenes y Contratos por Otros Servicios, Disposición final, Peajes por interconexión de acueducto y alcantarillado, base gravable a la cual se aplicará la tarifa del 1%*."

Éstos rubros no se incluyeron para la liquidación de contribución especial correspondiente a la establecida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, teniendo en cuenta que, esa correspondería a la primera fase para el recaudo, sin embargo, como se ha mencionado y como se ha indicado en esta escrito como en los actos administrativos debatidos, la inclusión de los rubros descritos en el párrafo anterior, obedece a que se realiza con base en el parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, toda vez que, se encuentra debidamente justificada la inclusión de dichos rubros para liquidar la contribución especial con ocasión del **FALTANTE PRESUPUESTAL** y así lo indico el acto demandado:

"*Que al conformar la base gravable para liquidar la contribución especial y al aplicar la tarifa del 1% como máxima permitida a los Gastos Administrativos (menos exclusiones establecidas en la Resol. que fija la tarifa), se recaudaría el valor de $46.370.241.425, monto inferior al aprobado por la ley del presupuesto vigencia 2021 indicada, constituyéndose así un faltante presupuestal de $102.324.552.704, el cual es necesario cubrir con los conceptos establecidos en el parágrafo 2 del artículo 85-Ley 142 de 1994, con las previsiones allí establecidas y serán adicionadas en la proporción en que sean indispensables para cubrir el faltante presupuestal de la SSPD*."

De tal manera que se encuentra debidamente acreditado la existencia del faltante presupuestal y su debida liquidación y así lo reiteró mediante la resolución xx por medio del cual resolvió el recurso de reposición al actor en sede administrativa, en la que indicó:

"[…] *la Superservicios procedió a efectuar la liquidación de las contribuciones, tomando los "gastos de funcionamiento": Gastos de administración-menos exclusiones establecidas en la Resolución No. SSPD – 20211000355215 del 29 de julio de 2021, e identificó la imposibilidad para la Entidad de recuperar los costos de inspección, vigilancia y control para su funcionamiento con la base gravable señalada, pues a todas luces el recaudo de la contribución especial es insuficiente para su funcionamiento.*

*Ante la ocurrencia de esta situación particular, esto es, la de haberse presentado un faltante presupuestal, la Superservicios procedió a dar aplicación estricta a lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, teniendo en cuenta que éste permite, de manera excepcional, que la base gravable se engrose con otros rubros, siempre que la entidad acredite la existencia de un faltante presupuestal, situación está que fue ampliamente justificada en el estudio de la contribución 2021 y replicado en la Resolución No. SSPD – 20211000355215 del 29 de julio de 2021. situación está, que no es similar a la ocurrida respecto de la contribución vigencia 2018, como lo alega el recurrente.*

*Así las cosas, para la vigencia 2021, la Superservicios realizó el respectivo estudio de la Contribución Especial 2021, en el que se especifica la forma como se llegó a la determinación del faltante presupuestal, así como el análisis de los conceptos contables del parágrafo 2º del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, entre otros.*

*En este sentido, el estudio destaca, entre otros, que para la aplicación del parágrafo 2º en mención, se exigen tres condiciones: i) que exista un faltante presupuestal; ii) que los gastos operativos de los sectores de acueducto, alcantarillado y aseo, así como de gas se asimilen a los rubros del grupo 75, compras de electricidad, compras de combustibles y peajes del sector de energía y iii) que dichos rubros sean adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir el faltante presupuestal. Veamos cómo fueron establecidas estas condiciones por parte de la Superservicios:*

*(i) Que exista faltante presupuestal.*

*Como se indicó anteriormente, una vez calculada la tarifa máxima del 1% sobre "Gastos de administración" menos exclusiones, se calculó en el marco del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, un recaudo de $46.370.241.425, suma que comparada con el valor total del presupuesto aprobado, representaba el 31.18% del mismo, lo que claramente constituye un faltante presupuestal de $102.324.552.704, y que a su vez representa el 68.82%.*

*ii) Que los gastos operativos de los sectores de acueducto, alcantarillado y aseo, así como de gas, se asimilen a los rubros de compras de electricidad, compras de combustibles y peajes del sector de energía.*

*Como de forma expresa lo señala el parágrafo del artículo 85 referido, los gastos operativos que en el sector eléctrico, pueden ser adicionados cuando existan faltantes presupuestales, son los correspondientes a las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes.*

*En este sentido y teniendo en cuenta que el legislador determinó que en las empresas de otros sectores, (acueducto, alcantarillado, aseo y gas) los gastos de naturaleza similar a éstos rubros, podrán ser adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir los faltantes presupuestales, la Superservicios entró a determinar cuáles eran los rubros o gastos de naturaleza similar a los indicados.*

*iii) Que dichos rubros sean adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir el faltante presupuestal.*

*Esta condición fue establecida de la siguiente forma:*

*1. Teniendo en cuenta que el valor del faltante presupuestal es de $102.324.552.704, este valor debe ser recaudado acudiendo a los gastos operativos, sin que la tarifa exceda del uno por ciento (1%). Así, aplicando una regla de tres, se obtiene que el valor de los gastos operativos que deben ser adicionados es de: $10.232.455.270.374, que es el resultado de dividir $102.324.552.704 por uno por ciento (1%).*

*2. De la información financiera certificada, correspondiente a la vigencia 2020, se extraen los Gastos Operativos referidos en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, los cuales tienen un valor de $32.840.028.924.841.*

*3. Posteriormente, sobre el valor de la base gravable de Gastos Operativos del parágrafo 2 artículo 85 de la Ley 142 de 1994, el cual el cual tiene un valor de $32.840.028.924.841, se calculó la proporción necesaria (Valor base gravable de Gastos Operativos necesario para cubrir faltante presupuestal dividido sobre Valor Total de Base gravable de Gastos Operativos del parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 que debe ser incluida en la base gravable de liquidación para cubrir el faltante presupuestal, cuyo resultado fue del 31.16%, una vez determinadas aquellas a que refiere el parágrafo 2º, 3º del artículo 2 de la Resolución No. SSPD – 20211000355215 del 29 de agosto de 2021, así:*

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| 1.VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS (menos deducciones) | $4.637.024.142.526 |
| 2.VALOR TARIFA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (1%) | $46.370.241.425 |
| 3.FALTANTE PRESUPUESTAL 2021 | $102.324.552.704 |
| 4.VALOR BASE GRAVABLE DE GASTOS OPERATIVOS NECESARIO PARA CUBRIR FALTANTE PRESUPUESTAL | $10.232.455.270.374 |
| 5.BASE GRAVABLE DE GASTOS OPERATIVOS PARAGRAFO 2 ART. 85 | $32.840.028.924.841 |
| 6.PORCENTAJE NECESARIO PARA CUBRIR FALTANTE | 31.16% |

**Cuadro Resumen.**

*Es decir, los $10.232.455.270.374, necesarios para cubrir el faltante presupuestal, representan el 31.16% del total de gastos operativos que pueden ser adicionados a la base gravable, de acuerdo con lo previsto con el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Los argumentos esbozados y el estudio de la contribución 2021 sirvieron como fundamento*

*para que la Superservicios expidiera la Resolución No. SSPD – 20211000355215 del 29 de julio de 2021, a través de la cual se fijaron los parámetros para el cobro de la contribución especial de la presente vigencia.*

*En este punto, es importante reiterar dos puntos al recurrente: i) la sentencia del Consejo de Estado a la cual hizo mención en su escrito de impugnación, versa sobre hechos totalmente diferentes a los de la Contribución Especial 2021, y ii) la Resolución No. SSPD 20211000355215 del 29 de agosto de 2021, si especifica cómo se llegó a la identificación del faltante presupuestal.*

*Por lo anterior, existe justificación para hacer uso del parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, en el sentido de adicionar para el cálculo de la base gravable, aquellos gastos operativos, asimilables a los señalados de forma expresa en dicha disposición, en la proporción de los recursos que eran necesarios para cubrir dichos faltantes presupuestales, con el propósito de llegar al total del presupuesto aprobado para la vigencia*.]"

Es claro que si existió un fundamento legal que soportó la decisión administrativa en los actos debatidos sobre la justificación del faltante presupuestal, lo que haría la evidente aplicación del parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se observa que, desde el acto de liquidación oficial así fue indicado, de tal manera que el argumento del actor en este cargo no esta llamado a prosperar.

Por lo expuesto y reiterado en líneas anteriores, solicito al despacho no tener en cuenta el argumento de la demandante por carecer de fundamento legal y en consecuencia las pretensiones de la demanda y su cargo no prosperaran.

**TERCER CARGO: "[*5.3. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL*.]"**

"[*Se concluye que la Superintendencia de Servicios Públicos QUEBRANTÓ EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA contenido en el artículo 338 de la Constitución Política, al ampliar la base gravable de la contribución especial a las cuentas 75, así como, el precedente judicial uniforme sobre este tema, lo que denota que los actos acusados adolecen de falsa motivación3, expedición irregular4 e infracción de las normas en que debía fundarse por interpretación errónea*.]"

**SUSTENTO DE LA EXCEPCIÓN DE LEGALIDAD RESPECTO DE ESTE CARGO**

En este cargo se procederá a remitir los precedentes jurisprudenciales que se tiene sobre la materia, los cuales han desarrollado específicamente la liquidación de contribución especial y que a continuación se relacionan:

Para el asunto que nos ocupa en cuanto al estudio la contribución especial por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el cargo de la parte demandante, se tiene que el Honorable el Consejo de Estado en reiteradas jurisprudencias ha indicado varios aspectos los cuales fueron alegados por la accionante mediante su concepto de violación, los cuales no son congruentes con los supuestos fácticos y que por el contrario, las providencias que aquí se citan, desvirtúa el argumento de la demandante, por lo cual se procede en reseñar con los siguientes argumentos:

El sustento normativo citado por la parte demandante, por lo que supone una violación de los artículos **13, 29, 150-12, 209 y 338 de la Constitución Política**, como consecuencia de la eventual vulneración del parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

Por virtud de lo anterior, se necesitaría que existiera una relación inescindible entre las normas constitucionales citadas por la accionante y la norma legal por virtud de la cual la Superintendencia demandada fundó el acto general atacado; es decir una relación inseparable entre el fundamento legal y el precepto superior del cual emana.

Así lo ha entendido el Consejo de Estado cuya doctrina, en torno a la nulidad del acto

administrativo por violación indirecta de la Constitución, ha previsto que "…*la violación de la Carta se presenta en forma indirecta por transgresión de una norma legal o reglamentaria en virtud de la cual se haya desarrollado el precepto superior*…"[5].

Para el caso propuesto por la accionante, no existe una relación inescindible entre las normas constitucionales citadas por la demandante, artículos 13, 29, 150-12, 209 y 338 de la Constitución Política, y el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 (específicamente el parágrafo 2°), mediante el cual se establece la contribución especial, a cargo de los prestadores de los servicios públicos, tiene asidero constitucional en los artículos 150, numeral 12; 338, inciso 2; y 370 de la Carta, como a continuación se indica:

> "*ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: …*
>
> *12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente,* ***contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley***".
>
> "*ARTICULO 338…La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y* ***contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten*** *o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos*" (Se resalta).
>
> "*ARTICULO 370****. Corresponde al Presidente de la República*** *señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y* ***ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten***" (Se resalta).

El factor de competencia previsto para el legislador, por parte del artículo 338 Constitucional, trascrito, fue ejercido por este a través del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, cuyo tenor literal se reitera a continuación:

> "***Artículo 85****. Contribuciones especiales.* ***Con el fin de recuperar los costos del servicio*** *de regulación que preste cada comisión, y los* ***de control y vigilancia que preste el Superintendente****, las entidades sometidas a su regulación, control y vigilancia, estarán sujetas a dos contribuciones, que se liquidarán y pagarán cada año conforme a las siguientes reglas:*
>
> *85.1.* ***Para definir los costos de los servicios que presten*** *las Comisiones y* ***la Superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, en el período anual respectivo****.*
>
> *85.2. La superintendencia y las comisiones presupuestarán sus gastos cada año y cobrarán dentro de los límites que enseguida se señalan,* ***solamente la tarifa que arroje el valor necesario para cubrir su presupuesto anual****.*
>
> *La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia y de las Comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su estudio fijarán la tarifa correspondiente.*
>
> *85.3.* (Numeral modificado por el parágrafo del artículo 132 de la Ley 812 de 2003) ***Si***

[5] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia 2009-00614, febrero 28 de 2013, Magistrado Ponente Dr. Guillermo Vargas Ayala, citada por Legis Editores, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Pág.347.

*en algún momento las Comisiones o la Superintendencia* ***tuvieren excedentes****,* ***deberán transferirlos al Fondo Empresarial de que trata el presente artículo****.* (Se refiere al Art. 132 de la Ley 812 de 2003[6]).

*85.4.* ***El cálculo de la suma a cargo de cada contribuyente****, en cuanto a los costos de regulación,* ***se hará teniendo en cuenta los costos*** *de la comisión que regula el sector en el cual se desempeña; y el de los costos* ***de vigilancia, atendiendo a los de la Superintendencia****.*

*85.5. La liquidación y recaudo de las contribuciones correspondientes al servicio de regulación se efectuará por las comisiones respectivas y las correspondientes al servicio de inspección, control y vigilancia estarán a cargo de la Superintendencia.*

*85.6. Una vez en firme las liquidaciones deberán ser canceladas dentro del mes siguiente. Se aplicará el mismo régimen de sanción por mora aplicable al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de las demás sanciones de que trata esta Ley.*

***Parágrafo 1o****. Las Comisiones y* ***la Superintendencia se financiarán exclusivamente con las contribuciones a las que se refiere este artículo*** *y con la venta de sus publicaciones. Sin embargo, el gobierno incluirá en el presupuesto de la Nación apropiaciones suficientes para el funcionamiento de las Comisiones y de la Superintendencia durante los dos primeros años.*

***Parágrafo 2o****.* ***Al fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los gastos de funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello; y en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a éstos. Estos rubros podrán ser adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir faltantes presupuestales de las comisiones y la superintendencia***" (Se vuelve a resaltar).

De conformidad con lo anterior, si se quiere optar por el método de interpretación gramatical, como ha sido la tendencia de la Sección Cuarta a la que se dirige el presente escrito, se debe atender a la literalidad de todo el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y no solamente a la de su parágrafo 2°. Atendiendo tal método de interpretación, se advierte el verdadero sentido de la disposición.

El criterio del Consejo de Estado, esbozado en distintos fallos3, conforme a los cuales no se puede integrar la base gravable de la contribución prevista en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, con las cuentas del grupo 75, costos de producción, porque el legislador restringió dicha base a los gastos de funcionamiento, que son aquellos que tienen una relación directa o indirecta, y necesaria e inescindible, con la prestación de los servicios sometidos a vigilancia, control e inspección de la SSPD.

Se tiente que el parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 prevé que, ante la existencia de un déficit de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se puede ampliar la base gravable a " ... *los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar* a *ello; y en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar* a *estos ... ".,* normativa bajo el buen entender del Consejo de Estado, esbozada, entre varios, en auto del quince (15) de junio de 2017, radicación interna 2287[7], C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de la cual se permitió destacar:

***"…Excepción: Solo en Los casos de faltantes presupuestales de la SSPD, la base***

[6] El artículo 132 de la Ley 812 de 2003 le dio facultades a la SSPD para constituir un fondo empresarial, como patrimonio autónomo, con el objeto, entre varios, de apoyar a las empresas que contribuyen al Fondo, en los procesos de liquidación ordenados por la misma Superintendencia; financiar las actividades profesionales requeridas para prestar apoyo económico, técnico y logístico de la Superintendencia para analizar y desarrollar los procesos de toma de posesión con fines de liquidación

[7] Entre varios fallos citó el del 23 de septiembre de 2010, expediente 16874, con ponencia de La Dra. María Teresa Briceño de Valencia.

***del tribu.to podrá conformarse con los gastos de funcionamiento, y con la proporción necesaria para cubrir tales faltantes, de los rubros por gastos operativos y, las compras de energía que hubieren realizado las empresas del sector energético en el respectivo año gravable."***

El artículo 85 de la Ley 142 de 1994 El parágrafo en cuestión es del siguiente tenor:

***PARÁGRAFO 2. Al fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los gastos de funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello; y* en *las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a éstos****.***

***Estos rubros podrán ser adicionados en la misma, proporción en que sean indispensable para cubrir faltantes, presupuestales de las Comisiones y la Superintendencia****.* (Se resalta).

Al respecto del criterio del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Cuarta, en torno a la aplicación del aludido parágrafo, el cual se expuso con ocasión del análisis de la legalidad de la resolución general No. 20161300032675 del 22 de agosto de 2016.

Dicha Corporación manifestó[8]:

*"Sobre el alcance del parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se reitera lo dicho por la Sala en auto del 15 de junio de 2017[9]. En esa oportunidad precisó:*

*'2. 4. Para la Sala, la finalidad de la norma es que la contribución especial grave los gastos de funcionamiento cuando estos resulten suficientes para cubrir el presupuesto de la SSPD y,* ***en los casos de faltantes presupuestales****, además* ***recaiga sobre las compras de energía de las empresas del sector eléctrico, para cubrir en la proporción necesaria el costo del servicio de dicha entidad'*** *(Las negrillas son de la Corporación*).

*Entonces****, cuando la SSPD necesita cubrir faltantes presupuestales, la ley permite que los gastos operativos puedan ser adicionados a los gastos de funcionamiento, en la misma proporción en que sea indispensables para cubrir el faltante presupuestal de la superintendencia... "***

En dicha sentencia, teniendo en cuenta que la Corporación se refirió expresamente a la decisión del 15 de junio de 2017[10], referenciada a pie de página No. 6, vale la pena traerla a colación como sigue:

*"Esta contribución tiene por objeto la recuperación de los costos del servicio prestado por la SSPD, siendo esa entidad la facultada para definir por vía general las tarifas del tributo, así como su liquidación y cobro, conforme con los siguientes elementos de la obligación tributaria fijados en la ley[11]":*

*Sujeto activo: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.*

*Sujeto pasivo: entidades sometidas a la regulación de la SSPD.*

*Hecho generador: el servicio de control y vigilancia que presta la superintendencia a*

---

[8] Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Cuarta, proceso única instancia ND. 11001032700020170001200, demandante Gestión Energética S.A., ponencia del Dr. Milton Chaves García, SENTENCIA del 10 de mayo de 2018, notificada el 21 de mayo ídem

[9] En la sentencia del 10 de mayo, el Consejo de Estado ratificó Providencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 15 de junio de 2017, notificada por estado el 23 ídem, Dr. Jorge Octavio Ramírez, proceso 11001032700020150006500 (22873), por la cual se denegó la suspensión provisional

[10] Artículo 79.4 de la Ley 142 de 1994

[11] Inciso 1°, numeral 2 parágrafo 2 del artículo 85 ibidem

*las vigiladas.*

***Base gravable y tarifa**: Máximo el 1% del valor **de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación**. De la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro (Art. 85.2 de la ley) …*

*De tal manera que, la base gravable de la contribución especial* está *conformada con los gastos de funcionamiento de las entidades vigiladas que **estén relacionados con el servicio sometido a regulación**, detrayéndose de estos: **los gastos operativos, y en el caso particular de las empresas del sector eléctrico** como las demandantes, **las compras de electricidad**, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello.*

***Pero, la ley contempló una excepción cuando la SSPD necesite cubrir faltantes presupuestales**, en el sentido de permitir que esos rubros -gastos operativos, compras de energía, de combustibles y peajes se adicionen a la base gravable de la contribución especial.*

*A estos efectos, **debe tenerse en cuenta que cuando la ley autoriza la inclusión de las compras de energía en la base gravable para cubrir los faltantes presupuestales, lo hace de manera general sin distinguir si se trata de un gasto o un costo**. Por tanto, debe entenderse que refiere a todas las compras de energía que hubiere realizado las empresas de energía en el respectivo período gravable y,* es *sobre esas mismas, que debe determinarse la proporción necesaria para cubrir el faltante presupuestal.*

***Todo lo anterior, se encuentra en concordancia con el fin mismo de la contribución especial, que es recuperar los costos de los servicios de control y vigilancia, y guarda armonía también con el artículo 338 de la Constitución Política, que prevé que la tarifa es para la recuperación de costos de los servicios que presta la autoridad administrativa**.*

*2.4. Para la Sala, la finalidad de la norma es que la contribución especial grave los gastos de funcionamiento cuando estos resulten suficientes para cubrir el presupuesto de la SSPD y, en los casos de faltantes presupuesta/es, además recaiga sobre las compras de energía de las empresas del sector eléctrico, para cubrir en la proporción necesaria el costo de servicio de dicha entidad'.*

Ratificó el Consejo de Estado, en la decisión inicialmente comentada, es decir mediante sentencia del 10 de mayo de 2018, "... *Tratándose de empresas del sector eléctrico. la base gravable se conforma de la siguiente manera: (i) Según la regla general: De los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación se excluyen los gastos operativos, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello. (ii)* ***conforme a la regla exceptiva configurado el supuesto de hecho - el faltante presupuestal - la ley permite adicionar a esos rubros los gastos operativos en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir el faltante presupuestal de la superintendencia"*** (Se resalta).

En conclusión, respecto del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se debe apreciar su verdadero espíritu y finalidad, consistente en garantizar que una entidad como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cumpla con su **función Constitucional, delegataria del Presidente de la República, de ejercer el control, la inspección y vigilancia de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios** (Art. 370 C. P.).

Trayendo a colación nuevamente las decisiones del Consejo de Estado[12], se refirió a la

[12] Nos referimos a las enunciadas anteriormente, procesos de única instancia Nos. 11001032700020170001200, demandante Gestión Energética S.A., y 11001032700020160006500 (22873)

motivación del acto general, año 2016, específicamente el No. SSPD 20161300032675 del 22 de agosto de 2016, en torno a la ACREDITACIÓN DEL FALTANTE PRESUPUESTAL para ese año, manifestando que en dicho acto la entidad demandada había efectuado las siguientes consideraciones:

> *"Que teniendo en cuenta que el presupuesto aprobado para la entidad por concepto de "teses, multas y contribuciones" para la vigencia 2016 es de $104.530.664.817,00 y que una vez calculada la tarifa del 1 % sobre el Grupo 51 "Gastos de administración" menos 5120 "Impuestos, tasas y contribuciones", erogaciones que al amparo de las consideraciones de la sentencia referida constituyen "gastos de funcionamiento", en el marco del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, o los conceptos asimilables de acuerdo al marco normativo vigente, se calculó un recaudo de $35.489.430.881,52 que representa el 33. 95% del valor total del presupuesto aprobado, constituyéndose así un presupuestal de $69.041.233.935,49.*
>
> *Que en el parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 19941 se establece por parte del legislador que fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los gastos de funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello; y en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a éstos. Estos rubros podrán ser adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir faltantes presupuesta/es de las comisiones y la superintendencia".*
>
> *( ... )*
>
> *Que de acuerdo con lo anterior y con el fin de proyectar la tarifa para la liquidación de la contribución especial del año 2016 a cargo de las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, se tomó la• información financiera reportada y el valor del presupuesto de ingresos por concepto de "tasas, multas y contribuciones" para el año 2016 correspondiente a $104.530.664.817,00, aprobado por la Ley del presupuesto para la Superservicios.*
>
> *Que para establecer la base gravable se tuvo en cuenta los conceptos o cuentas que corresponden a la definición de gastos de funcionamiento señalada por el Consejo de Estado Grupo 51 "Gastos de administración" menos 5120 "Impuestos, tasas y contribuciones" o los conceptos asimilables de acuerdo al marco normativo vigente, dando como resultado una base gravable por valor de $3.548.943.088.151,50, la cual al aplicarle la tarifa del 1% (máxima permitida por la Ley 142 de 1994), se obtuvo un valor de contribución especial estimada de $35.489.430.881.151,50; que representa el 33,95% del presupuesto aprobado para la entidad.*
>
> *Que al restar el resultado obtenido de $35.489.430.881.151,50 al valor aprobado por la Ley del presupuesto para la Superservicios ($104.530.664.817,00), se constituye un faltante presupuesta/ de $69.041.233.935,49, el cual es necesario cubrir con las cuentas contables establecidas en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.*
>
> *Ahora, teniendo en cuenta el faltante presupuestal y la tarifa a aplicar del 1 %, se utilizó una regla de tres para calcular la base gravable de gastos operativos necesaria para cubrir dicho faltante, operación que arrojó un resultado de $6.904. 123.393. 548, 50. Posteriormente, sobre el total de los gastos operativos, los cuales ascienden a $27.681. 775.331.954,00, se calculó la proporción necesaria que debe ser incluida en la base gravable de liquidación para cubrir el faltante presupuesta/, cuyo resultado fue del 24,94% para los prestadores de servicios públicos sujetos a contribución especial.*
>
> *( ...)*
>
> ***RESUELVE:***

***ARTÍCULO 1°. TARIFA PARA LIQUIDAR LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL**.*

*Fijar la tarifa dela contribución especial que deben pagar en el año 2016 a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios las entidades sometidas a su inspección, control y vigilancia, en el uno por ciento(1%) de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio de la entidad contribuyente y de los gastos operativos a que alude el parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia a través del Sistema Único de Información (SUI) a 31 de diciembre de 2015.*

*.*

***PARAGRAFO 1°.** Para todos los efectos, se entenderán por "estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia" los reportados y certificados a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el formato complementario FC 001 Formato Complementario - Costos y Gastos de servicios públicos y los reportados en el Plan de Contabilidad y del Sistema de Costos y Gastos, a través del Sistema Único de Información (SU/) por parte de los prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, en los plazos establecidos en la Resolución SSPD No. 20121300003545 del 14 de febrero de 2012 y en la Resolución No. SSPD - 20161300019625 del 11 de julio de 2016, que modificó la Resolución SSPD 20161300013475 del 19 de mayo de 2016.*

***ARTÍCULO 2º. BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE LA VIGENCIA 2016.** Las cuentas o conceptos que integrarán la base gravable de la Contribución Especial de la vigencia 2016, de acuerdo con el servicio prestado son:*

*Servicio Energía Eléctrica:*

| NOMBRE |
|---|
| Gastos de administración (menos impuestos tasas y contribuciones) |
| Compras En Bloque y/o a Largo Plazo |
| Compras En Bolsa y/o a Corto Plazo |
| Uso De Líneas, Redes y Ductos |
| Gas Combustible |
| Carbón Mineral |
| ACPM, Fuel y Oíl |

*( .... )*

***PARÁGRAFO 1°.** La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, adicionará las cuentas o conceptos que corresponden al parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 en el 24,94%, proporción indispensable para cubrir el faltante presupuestal de la entidad, de acuerdo con lo establecido en la parte considerativa de la presente resolución".*

Después del precitado análisis del Consejo de Estado, manifestó la Sala de lo Contencioso Administrativo lo siguiente:

*"De lo anterior, **la Sala advierte que en el acto se exponen las razones que sustenta la decisión.***

*En efecto, informa que para determinar la tarifa y la base gravable de la contribución para el año 2006 (sic) - 2016- tuvo en cuenta la partida presupuestal aprobada para la SSPD, la información financiera suministrada por los prestadores al SUI y los parámetros jurisprudenciales que definen gastos de funcionamiento los que arrojan los siguientes resultados:*

| | |
|---|---|
| ***Partida presupuestal 2016*** | ***$ 104. 530. 664. 817. 00*** |

| | |
|---|---|
| *Contribución especial Base de liquidación Tarifa del 1% $3. 548. 943. 088. 151. 50* | ***$ 35.489.430.881.52*** |
| *Contribución especial Base de liquidación Tarifa del 1% $3. 548. 943. 088. 151. 50* | ***$ 35.489.430.881.52*** |
| ***Diferencia o faltante presupuestal Vigencia 2016*** | ***$ 69.041.233.935.49*** |

***Así, ante la existencia del faltante presupuestal para la vigencia 2016, la SSPD aplicó el parágrafo 2 del artículo 85 de la Lev 142 de 1994, que faculta a la entidad para incluir en la base gravable de la contribución especial a cargo de las empresas prestadoras de servicios públicos del sector eléctr.ico "los gastos operativos de Electricidad, las compras de combustibles los peajes", en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir el faltante presupuestal de la Superintendencia.*** (Resaltado por fuera del texto).

*Además, explicó que para calcular la base gravable de gastos operativos necesaria para cubrir dicho faltante, sobre el total de los gastos operativos, que ascienden a $27. 681. 775. 954, o, se calculó la proporción necesaria que debe ser incluida en la base gravable de la liquidación para cubrir el faltante presupuestal, cuyo resultado fue del 24.94% para los prestadores de servicios públicos sujetos a contribución especial*"

Ahora bien, en torno a la **ACREDITACIÓN DEL FALTANTE PRESUPUESTAL** para el año **2016**, se trae a colación nuevamente las decisiones del Consejo de Estado, cuales fueron expuestas para el acto general No. SSPD 20161300032675 del 22 de agosto de 2016 y 2017, **Y COMO QUIERA QUE LA MOTIVACIÓN DE DICHO ACTO NO DIFIERE A LA DEL AÑO 2021,** se procede a trasladar los mismos fundamentos de la decisión judicial, pero ajustados a esta última resolución, así:

*"Que las apropiaciones presupuestales de la Superservicios para la vigencia fiscal 2017, fueron establecidas en la Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016 y en el Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación No. 2170 del 27 de diciembre de 2016, por ingresos corrientes "tasas, multas y contribuciones" en CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($110.424.552.845,00), el cual debe ser cubierto con el recaudo de las contribuciones de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.*

*( ... )*

*Que de acuerdo con lo anterior y con el fin de proyectar la tarifa para la liquidación de la contribución especial del año 2017, se tomó la información financiera reportada y certificada por las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control en el Sistema Único de Información -SUI -, correspondiente al año 2016 y el valor del presupuesto por concepto de ingresos corrientes 'teses, multas y contribuciones" para el año 2017, antes indicado.*

*Que para establecer la base gravable se tuvieron en cuenta los conceptos que corresponden a la definición de gastos de funcionamiento señalada por el Consejo de Estado "Gastos de administración" menos "Impuestos, tasas y contribuciones" o los conceptos asimilables de acuerdo al marco normativo vigente, dando como resultado una base gravable por valor de $2.989. 846. 772. 171, 41, la cual al aplicarle la tarifa del 1 % (máxima permitida por la Ley 142 de 1994), se obtuvo un valor de contribución especial estimada de $29.898.467. 721, 71; que representa el 27.08% del presupuesto aprobado para la entidad por ingresos corrientes.*

***Que al restar el resultado obtenido de $ 29.898.467.721,71 al valor aprobado por***

***Ley del presupuesto por concepto de ingresos corrientes para la Superservicios ($110.424.552.845,00), se constituye un faltante. Presupuestal de $80.526.085.123.29, el cual es necesario cubrir con los conceptos establecidos en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.*** (Se resalta)

*( ...)*

*Que teniendo en cuenta el faltante presupuesta/ y la tarifa a aplicar del 1 %, se utilizó una regla de tres para calcular la base gravable de gastos operativos necesaria para cubrir dicho faltante, operación que arrojó un resultado de $8.052.608.512.328.59. Posteriormente, sobre el total de los gastos operativos, los cuales ascienden a $28.643.516.664. 794,50, se calculó la proporción necesaria que debe ser incluida en la base gravable de liquidación para cubrir el faltante presupuesta/, cuyo resultado fue del 28, 11% para los prestadores de servicios públicos y actividades complementarias sujetas a contribución especial.*

*( ...)*

***RESUELVE:***

***ARTÍCULO 1°. TARIFA PARA LIQUIDAR LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL****.- Fijar la tarifa de la contribución especial que deben pagar, en el año 2017, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios las entidades sometidas a su inspección, control y vigilancia, en el uno por ciento (1%) de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio de la entidad contribuyente y de los gastos operativos a que alude el parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia a través del Sistema Único de Información (SUI) a 31 de diciembre de 2016.*

*( ... )*

***ARTÍCULO 2º. BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE LA VIGENCIA 2017****. Los conceptos que integrarán la base gravable de la Contribución Especial de la vigencia 2017, de acuerdo con el servicio prestado son:*

***Para Energía Eléctrica, Gas Natural y Gas licuado de Petróleo: (...)***

| ***GAS NATURAL*** |
|---|
| *Uso De Líneas, Redes Ductos* |
| ***Gastos operativos de Distribución y/o Comercialización de Gas*** |
| *Gas Combustible* |

*"PARÁGRAFO 1. La Superintendencia adicionará las cuentas o conceptos que corresponden al parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 en el 28.11%, pro- porción indispensable para cubrir el faltante presupuestal de la entidad, de acuerdo con lo establecido en la parte considerativa de la presente resolución.**"***

Aplicando el mismo análisis que efectuó el Consejo de Estado para el año 2016, pero trasladado para el 2017, resulta forzoso concluir que para este último año también la SSPD expuso las razones que sustentaron su decisión, así:

| | |
|---|---|
| **Partida presupuestal 2017** | $110.424.552.845,00 |
| Contribución especial Base de liquidación $2.989.846. 772.171,41 Tarifa del 1% | $ 29.898.467. 721, 71 |
| **Diferencia o faltante presupuestal Vigencia 2016** | $ 80.526.085.123.29 |

En consecuencia, se llega a la misma conclusión del Consejo de Estado, pero trasladando la terminología al año 2017, así:

> ***"Así, ante la existencia del faltante presupuestal para la vigencia 2017, La SSPD aplicó el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que facultad a la entidad para incluir en la base gravable de la contribución especial a cargo de las empresas prestadoras., de servicios públicos del sector eléctrico "los gastos operativos de electricidad, las compras de combustibles y los peajes", en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir el faltante presupuestal de la Superintendencia* .** (Resaltado por fuera del texto).
>
> *Además, explicó que para calcular la base gravable de gastos operativos necesaria para cubrir dicho faltante, sobre el total de los gastos operativos, que ascienden a $29.898.467. 721, 71, se calculó la proporción necesaria que debe ser incluida en la base gravable de la liquidación para cubrir el faltante presupuestal, cuyo resultado fue del 28, 11% para los prestadores de servicios públicos sujetos a contribución especial."*

**Lo anterior indica que, para circunstancias presupuestales idénticas, traducidas en un faltante presupuestal, para dos años distintos, 2016 y 2017,** se les debe dar el mismo tratamiento**, teniendo como suficiencia probatoria la propia motivación de cada uno de los actos generales**, pues estos devienen de la presunción de constitucionalidad de las respectivas LEYES DEL PRESUPUESTO NACIONAL, a saber: **1769 del 24 de noviembre de 2015 y 1815 del 7 de diciembre de 2016**. Además, como quedó ampliamente analizado, el Consejo de Estado esbozó con suficiencia las razones de legalidad con ocasión de la resolución general correspondiente al año gravables 2016, razón por la cual las **conclusiones para el 2017, 2018 inclusive 2021, no pueden ser diferentes.**

Por virtud de los **PRINCIPIOS DE IGUALDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, CONFIANZA "LEGÍTIMA Y BUENA FE DEPOSITADA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**, los jueces están obligados a respetar el precedente judicial, amén de las similitudes fácticas y jurídicas que caracterizan el caso objeto de decisión. Por tanto, el juez de conocimiento se encuentra en la obligación de aplicar la Resolución general 20211000355215 del 29 de agosto de 2021, cuya motivación no difiere en nada de la esbozada para al acto general correspondiente al año 2016 y 2017, referidas a la legalidad del acto y a la prueba del presupuesto fáctico para que opere la aplicación excepcional del parágrafo 2º del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, a saber, **EL FALTANTE PRESUPUESTAL**.

Es necesario recalcar que el Consejo de Estado, en las referidas decisiones relacionadas con la contribución del año 2016 y 2017, analizó el presupuesto fáctico en mención, estimando a la Superintendencia tenía la carga probatoria de acreditar el faltante presupuestal a través de la aportación del *" **... programa anual de caja y demás documentos que lo acreditaran .."***.

Para el Consejo de Estado la prueba echada de menos, tratándose del año 2016, está inmersa en la motivación del acto general correspondiente a dicho año. Así lo explicó, y se reitera:

> *"De lo anterior, **la Sala advierte que en el acto se exponen las razones que sustenta la decisión**.*

*En efecto, informa que para determinar la tarifa y la base gravable de la contribución para el año 2006 (sic) - 2016 - tuvo en cuenta la partida presupuestal aprobada para la SSPD, la información financiera suministrada por los prestadores al SUI y los parámetros jurisprudenciales que definen gastos* ***de funcionamiento*** *los que arrojan los siguientes resultados:*

| | |
|---|---|
| ***Partida presupuestal 2016*** | ***$104.530.664.817.00*** |
| *Contribución especial*<br>*Base de liquidación $3. 548. 943. 088. 151. 50*<br>***Tarifa del 1%*** | ***$35.489.430.881.52*** |
| ***Diferencia o faltante presupuestal Vigencia 2016*** | ***$ 69.041.233.935.49*** |

***Así, ante la existencia del faltante presupuestal para la vigencia. 2016, la SSPD aplicó el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que faculta a la entidad para incluir en la base gravable de la contribución especial a cargo de las empresas prestadoras de servicios públicos del sector eléctrico "los gastos operativos de electricidad, las compras de combustibles y los peajes", en la misma proporción en que, sean indispensables para cubrir el faltante presupuestal de la Superintendencia*** (Resaltado por fuera del texto).

***Además, explicó que para calcular la base gravable de gastos operativos necesaria para cubrir dicho faltante, sobre el total de los gastos operativos, que ascienden a $27.681.775.954, se calculó la proporción necesaria que debe ser incluida en la base gravable de la liquidación para cubrir el faltante presupuesta/, cuyo resultado fue del 24.94% para los prestadores de servicios públicos sujetos a contribución especial."***

Se resalta que, el Consejo de Estado, mediante fallo de única instancia, proferido dentro del proceso No. 11001032700020160003100 (22481), demandante Generarco S.A.S y otros, ponencia del Dr. Milton Chaves García, del 26 de septiembre de 2018, avaló la legalidad del acto general 20151300019495, del 15 de julio de 2015, por el cual se fijó la tarifa de contribución especial para los prestadores de servicios públicos domiciliarios, año gravable 2015, por lo que adujo la Corporación que esta ya se había pronunciado en torno a un caso similar, dentro del proceso de única instancia No. 11001032700020170001200, demandante Gestión Energética S.A., con ponencia del Dr. Milton Chaves García, Sentencia del 10 de mayo de 2018, que como se recordará correspondió al análisis del acto general del año 2016, y lo expuso en los siguientes términos:

"*Que para establecer la base gravable se tuvieron en cuenta las erogaciones que corresponden a la definición de gastos de funcionamiento señalada por el Consejo de Estado - Grupo 51 "Gastos de administración" menos 5120 "Impuestos, tasas y contribuciones" o los conceptos asimilables de acuerdo al marco normativo vigente, dando como resultado una base gravable por valor de $2.897.143.282.345,85 a la cual al aplicarle la tarifa del 1% (máxima permitida por/a Ley 142 de 1994), se obtuvo un valor de contribución especial estimada de $28.971.432.823.,46; que representa el 31% del presupuesto aprobado para la entidad.*

*Que al restar el resultado obtenido de $28.971.432.823.,46 al valor aprobado por la Ley del presupuesto para la Superservicios ($94.309.800.000), se constituye un faltante presupuestal de $65.338.367.176,54, el cual es necesario cubrir con las cuentas contables establecidas en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.*

*Que teniendo en cuenta el faltante presupuestal y la tarifa a aplicar del 1 %, se utilizó una regla de tres para calcular la base gravable de gastos operativos necesaria para cubrir dicho faltante, operación que arrojó un resultado de $6. 533. 836. 718.000. Posteriormente, sobre el total de los gastos operativos, los cuales ascienden a $22.404.948.544. 721, se calculó la proporción necesaria que debe ser incluida en la*

*base gravable de liquidación para cubrir el faltante presupuestal, cuyo resultado fue del 29, 16% para los prestadores de servicios públicos sujetos a contribución especial, una vez determinadas aquellas que no alcanzan el costo - beneficio*.

*( ...)*

*RESUELVE:*

*ARTÍCULO 1°. TARIFA PARA LIQUIDAR LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.- Fijar la tarifa de la contribución especial que deben pagar en el año 2015 a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios las entidades sometidas a su inspección, control y vigilancia, en el uno por ciento (1%) de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio de la entidad contribuyente y de los gastos operativos a que alude el parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia a través del Sistema Único de Información (SUI) a 31 de diciembre de 2014.*

*(...)*

*ARTÍCULO 2º. BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE LA VIGENCIA 2015. Las cuentas que integraran (sic) la base gravable de la Contribución Especial de la vigencia 2015, de acuerdo con el servicio prestado son:*

| CODIGO | NOMBRE |
|---|---|
| 51 | Gastos De Administración (menos 5120) |
| (...) | (...) |

| | |
|---|---|
| 753001 | Compras En Bloque y/o a Largo o Plazo |
| 753002 | Compras En Bolsa 1/0 a Corto Plazo |
| 753005 | Uso De Líneas, Redes 1 Duetos |

Agregó la Corporación que la SSPD *" ... En efecto, informa que para determinar la tarifa y la base gravable de la contribución para el año 2015, tuvo en cuenta la partida presupuestal aprobada para la SSPD, la información financiera suministrada por los prestadores al SUI y funcionamiento los que los parámetros jurisprudenciales que arrojan los siguientes resultados: definen* ***gastos de funcionamiento*** *los que arrojan los siguientes resultados:*

| | |
|---|---|
| ***Partida presupuestal 2015*** | ***$94.309.800.000*** |
| *Contribución especial Base de liquidación $2.897.143.282. 345, 85 Tarifa del 1%* | ***$28.971.432.823,46*** |
| ***Diferencia o faltante presupuestal Vigencia 2015*** | ***$65.338.367.176,54*** |

***Así, ante la existencia del faltante presupuesta l para la vigencia 2015, la SSPD aplicó el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que faculta a la entidad para incluir en la base gravable de la contribución especial a cargo de las empresas prestadoras de servicio públicos del sector eléctrico "los gastos, operativos de Electricidad, las cámaras de combustibles y los peajes", en la misma proporción en que sean indispensables ,para cubrir e el faltante presupuestal de la Superintendencia.***" (Resaltado por fuera del texto).

Adujo también la Sala que la SSPD además "*... explicó que para calcular la base gravable de gastos operativos necesaria para cubrir dicho faltante, sobre el total de los gastos*

*operativos, que ascienden a $22.404.948.544. 721 se calculó la proporción necesaria que debe ser incluida en la base gravable de liquidación para cubrir el faltante presupuestal, cuyo resultado fue el 29.16% para los prestadores de servicios públicos sujetos a contribución especial"*

En consecuencia, es necesario resaltar que se aplica el acto general correspondiente al año 2021, debido a que la metodología, y argumentación para la acreditación del FALTANTE PRESUPUESTAL son idénticos a los de los años 2015 y 2016.

La conclusión a la que arribó el Consejo de Estado no es casual, amén de que se debe tener en cuenta que, al igual que ocurrió para los años 2015 y 2016, el acto general que fijó la contribución especial a cargo de los prestadores estuvo precedido de Ley de Presupuesto General de la Nación, es decir la Ley 2063 del 28 de noviembre de 2020, así como del Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, los cuales previeron el presupuesto para el año 2021, fue de $ 858.726.626.879,00, del cual debe ser cubierta la suma de $148.694.794.129,00, con el recaudo de las contribuciones referidas en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

En este sentido, la Superservicios procedió a efectuar la liquidación de las contribuciones, tomando los *"gastos de funcionamiento"*: Gastos de administración-menos exclusiones establecidas en la Resolución No. SSPD – 20211000355215 del 29 de julio de 2021, e identificó la imposibilidad para la Entidad de recuperar los costos de inspección, vigilancia y control para su funcionamiento con la base gravable señalada, pues a todas luces el recaudo de la contribución especial es insuficiente para su funcionamiento.

Ante la ocurrencia de esta situación particular, esto es, la de haberse presentado un faltante presupuestal, la Superservicios procedió a dar aplicación estricta a lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, teniendo en cuenta que éste permite, de manera excepcional, que la base gravable se engrose con otros rubros, siempre que la entidad acredite la existencia de un faltante presupuestal, situación está que fue ampliamente justificada en el estudio de la contribución 2021 y replicado en la Resolución No. SSPD – 20211000355215 del 29 de julio de 2021.

Así las cosas, para la vigencia 2021, la Superservicios realizó el respectivo estudio de la Contribución Especial 2021, en el que se especifica la forma como se llegó a la determinación del faltante presupuestal, así como el análisis de los conceptos contables del parágrafo 2º del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, entre otros.

En este sentido, el estudio destaca, entre otros, que para la aplicación del parágrafo 2º en mención, se exigen tres condiciones: i) que exista un faltante presupuestal; ii) que los gastos operativos de los sectores de acueducto, alcantarillado y aseo, así como de gas se asimilen a los rubros del grupo 75, compras de electricidad, compras de combustibles y peajes del sector de energía y iii) que dichos rubros sean adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir el faltante presupuestal.

Como se indicó anteriormente, una vez calculada la tarifa máxima del 1% sobre *"Gastos de administración"* menos exclusiones, se calculó en el marco del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, un recaudo de $46.370.241.425 , suma que comparada con el valor total del presupuesto aprobado, representaba el 31.18% del mismo, lo que claramente constituye un faltante presupuestal de $102.324.552.704, y que a su vez representa el 68.82%.

El ordenamiento jurídico en cuestión, en cuanto a la regulación anual del gasto de cada una de las entidades que participan de su ejecución, para el caso la SSPD, está revestido del PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO, conforme al cual ***"no hay gastos sin representación***", exigiendo que " *... todo gasto cuente con un sustento democrático", lo que implica que "... no puede darse éste sin contar, entre otros requisitos, con la aprobación ... n del Congreso. "Así como el principio de la legalidad del gasto puede ser visto como "la concreción en el campo fiscal del principio de legalidad de la actuación pública en general"*, *también puede ser visto como la contrapartida del principio de legalidad de los tributos. De forma análoga a como todas las personas ejercen su ciudadanía y participan a través del*

*sistema de representación democrática en la decisión sobre qué impuestos y en qué montos se han de pagar, participan en la decisión sobre qué gastos y en qué montos se han de hacer. En otras palabras, al grito de los revolucionarios estadounidenses 'no hay impuestos sin representación', se puede sumar su contrapartida: '**no hay gastos sin representación**."* (Se resalta).

**EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO** supone que se ***"Deben respetar plenamente la cuantía destinación del gasto aprobadas por el Congreso y precisadas en decreto de liquidación... "(***Se resalta).

También supone que, mientras no exista un cuestionamiento sobre la distribución del gasto para cada una de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), como lo es la SSPD, y una decisión de la Corte Constitucional que declare su inexequibilidad total o parcial, permanece incólume la **PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD** que se le reconoce a toda ley, y la del Presupuesto Anual de la Nación no es la excepción.

Ahora bien, en cuanto a la **PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD,** se encuentra definido que el acto general del cual se derivó la liquidación oficial a cargo de la empresa demandante goza de presunción de legalidad, y que por tanto NO CABE SU INAPLICACIÓN, se analiza la legalidad de los actos particulares objeto de demanda.

Respecto las liquidaciones oficiales No. 20210000009356 del 23 de agosto de 2021, objeto de análisis de legalidad en esta instancia, se incluyeron las siguientes partidas en el acto administrativo de carácter general, esto es, la Resolución general No. 20211000355215 del 29 de julio de 2021, para la demandante, SECTOR ALCANTARILLADO:

A juicio del Consejo de Estado, según las decisiones comentadas en este escrito, las anteriores corresponden a gastos operativos, y se reflejan en el Grupo 75, que son rubros que hacen parte de la regla exceptiva, y que, por tanto, pueden ser incluidos en la base gravable.

Dichas cuentas corresponden a: *Beneficios a empleados, Generales, Gastos operativos de bienes y servicios públicos para la venta, Productos Químicos, Energía, ACPM, Fuel y Oil, Órdenes y Contratos de Mantenimiento y Reparaciones, Materiales y Otros gastos, Órdenes y Contratos por Otros Servicios, Disposición final, Peajes por interconexión de acueducto y alcantarillado.*

CÁLCULO LIQUIDACIÓN ESPECIAL

Valores estados financieros certificados en SUI 2020

| Concepto contable | ALCANTARILLADO |
|---|---|
| Total de Administración | 1,794,473,000 |
| Generales | 178,202,794 |
| Beneficios a Empleados | 378,979,138 |
| ACPM Fuel Oil | 9,181,294 |
| Productos Quimicos | 68,442,940 |
| Energía | 46,276,962 |
| TOTAL BASE GRAVABLE | 2,475,556,128 |
| TARIFA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | 1.00 % |
| TOTAL POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | 24,756,000 |
| VALOR PRIMER PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | 37,912,200 |
| TOTAL A PAGAR POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | 0 |

| | |
|---|---|
| SALDO A FAVOR | 13,156,200 |

Ahora bien, por virtud de la naturaleza de la empresa demandante, sector de alcantarillado, se aplica en su literalidad la misma disposición que se viene comentando, es decir el parágrafo 2º del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, en cuanto que previó la misma circunstancia exceptiva para ***"... empresas de otros sectores...", con ampliación a "... los gastos de naturaleza similar... "a*** los allí descritos, como se indica a continuación en

los apartes que se subrayan:

***PARÁGRAFO 2. Al fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los gastos de funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello; y en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a éstos. Estos rubros podrán ser adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir faltantes presupuestales de las Comisiones y la Superintendencia.*** (Se resalta).

En consecuencia, la cuenta específica a la que hace alusión la empresa demandante, denominada "costos de producción", por reflejarse en el Grupo 75, y asimilarse a la denominada "Costo De Distribución y/o Comercialización De GN o Combustible por redes", hace parte de la regla exceptiva antes analizada y, por consiguiente, desvirtúa la desviación de poder endilgada por la misma.

Igualmente, El Consejo De Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Milton Chávez García. Expediente número 22972. Bogotá, D.C. 10 de mayo de 2018, Por su parte, el Consejo de Estado, en relación también con el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, pero ante un supuesto fáctico diferente al expuesto en jurisprudencia que antecede, para efectos de determinar la Base gravable de la Contribución Especial, precisó que ante la situación excepcional de faltante presupuestal para establecer dicho elemento del tributo, se podían adicionar gastos operativos. En tal sentido, la Alta Corporación, expresó:

*"El artículo 85 de la Ley 142 de 1994 determina los elementos esenciales del tributo. El sujeto activo, la SSPD. El sujeto pasivo, las entidades sometidas a control y vigilancia, es decir, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios. El hecho generador, el servicio de control y vigilancia que presta la superintendencia a las vigiladas. La tarifa, que es máximo del 1%. Y la base gravable, que es el valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro (art. 85.2 inciso segundo).*

*El parágrafo 2 del artículo 85 de esta ley dispone la manera de conformar la base gravable, pues señala que "al fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los gastos de funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles v los peajes, cuando hubiere lugar a ello; y en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a éstos". No obstante, el parágrafo 2 del artículo 85, en la parte final, consagra una excepción a esta regla, al disponer que "Estos rubros [gastos operativos] podrán ser adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir faltantes presupuéstales de las comisiones y la superintendencia". Sobre el alcance del parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se reitera lo dicho por la Sala en el auto del 15 de junio de 201710. En esa oportunidad precisó:*

*"2.4. Para la Sala, la finalidad de la norma es que la contribución especial grave los gastos de funcionamiento cuando estos resulten suficientes para cubrir el presupuesto de la SSPD y, en los casos de faltantes presupuéstales, además recaiga sobre las compras de energía de las empresas del sector eléctrico, para cubrir en la proporción necesaria el costo de servicio de dicha entidad". (Negrillas fuera de texto).*

Entonces, cuando la SSPD necesita cubrir faltantes presupuéstales, la ley permite que los gastos operativos puedan ser adicionados a los gastos de funcionamiento, en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir el faltante presupuestal de la superintendencia. (...) *La regla general y la excepción previstas por el legislador son concordantes con el fin mismo de la contribución especial, que es recuperar los costos de los servicios de control y vigilancia, y guarda armonía con el artículo 338 de la Constitución Política, que prevé que la tarifa es para la recuperación de costos de los servicios que presta la autoridad administrativa. Lo anterior desvirtúa la alegada violación del principio de la legalidad, pues fue el legislador el que consagró expresamente la excepción a la norma*

*general*" (Negrilla fuera del texto original).

**PRESUNTA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO**

Respecto al particular, la Corte Constitucional en varias providencias ha establecido interpretación del derecho fundamental del debido proceso y de defensa, estipulado en artículo 29 de la Constitución Política, que en cuanto a los asuntos administrativos implica que el Estado se sujete a las reglas definidas en el ordenamiento jurídico. La negación injustificada o la abstención del funcionario administrativo o judicial en su trámite constituyen una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, susceptible entonces, de ser amparado a través de la acción de tutela. En tal virtud, y como garantía de respeto a dichos principios, el proceso se institucionaliza y normativa, mediante estatutos escritos que contienen mandatos reguladores de la conducta de las autoridades administrativas o judiciales encaminados a asegurar el ejercicio regular de sus competencias.

Para la jurisprudencia[13] de la Honorable Corte Constitucional, el derecho al debido proceso, comprende:

> *"La Corte Constitucional ha manifestado que el debido proceso comprende: "a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo. b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley. c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso. d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables. e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo. f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas."*

En la misma providencia hace alusión a lo concerniente al debido proceso administrativo, en el siguiente sentido:

> *"Las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por este alto Tribunal, son las siguientes: "(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso."*

Ahora bien, dentro de esas garantías mínimas, existen unas previas y otras posteriores a la actuación administrativas que, en la Sentencia C-034 de 201412, dijo:

[13] Corte Constitucional, Sentencia T-051 del 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

*"La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa."*

Por otra parte, el derecho fundamental del debido proceso y el de contradicción, se tiene que la misma Corte, ha establecido que dentro del marco jurídico que enmarca las relaciones entre las empresas de servicios públicos domiciliarios y el usuario, existen garantías de las personas que no pueden ser omitidas cuando se inicia una actuación, por ejemplo, a raíz del ejercicio del derecho fundamental de petición. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha resaltado:

*"Así resulta violatorio de ese derecho constitucional que a pesar de que formalmente un procedimiento reconozca la posibilidad de contradecir una prueba, la autoridad encargada de llevar a cabo la actuación administrativa adopte la decisión final en contra del administrado* ***sin haberle permitido materialmente controvertir el fundamento probatorio de esa resolución, puesto que ello implica la posibilidad de tener un derecho y de no poderlo ejercer. De nada sirve que exista una variedad de derechos si éstos no pueden hacerse efectivos, en este sentido los procedimientos que lleven a cabo las autoridades, y dentro de ellas las empresas de servicios públicos, deben orientarse hacia el pleno desarrollo y realización de los derechos fundamentales.***

***El debido proceso, así como las demás libertades públicas son límites materiales insalvables a la acción de la administración****, que no puede reclamar para sí ningún poder general para condicionarlas o coartarlas so pretexto de buscar un fin loable, ya que en el Estado social de derecho también importan los medios que no sólo deben ser razonables y proporcionales. (…)*

***En este orden de ideas los suscriptores y usuarios de los servicios públicos domiciliarios son titulares de las garantías que se desprenden del derecho al debido proceso como: i) la necesidad que la actuación administrativa se surta sin dilaciones injustificadas, ii) conforme a la normatividad previamente establecida a su iniciación, es decir, que no sea la empresa de servicios públicos la que cree, en cada caso particular, el procedimiento a seguir, iii) que quien surta la actuación esté debidamente facultado para ello, y, iv) que en su desarrollo se observe por parte de la empresa la plenitud de las formas propias de la actuación administrativa previstas en el ordenamiento jurídico.*** *(…)*

***En este sentido, el respeto del principio de contradicción implica que tanto usuario como empresa deben estar en posición de igualdad, de forma tal que dispongan de las mismas oportunidades de alegar y probar los fundamentos de las decisiones que en desarrollo de la actuación administrativa se profieran.***

*El artículo 29 Superior incluye entre sus garantías la protección del derecho a ser oído y a disponer de todas las posibilidades de oposición y defensa en la actuación administrativa, de acuerdo con el principio Audi alteran parte, ya que de no ser así, se produciría un estado de indefensión para el administrado.*[14]

*Desde esta perspectiva, la indefensión debe entenderse entonces no sólo desde una concepción formal como la imposibilidad de contar en el procedimiento administrativo con oportunidad para impugnar o controvertir las decisiones que afecten a una*

[14] Corte Constitucional. Sentencia SU-250 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

*persona sino que a partir del principio constitucional de efectividad de los derechos debe comprenderse en su dimensión material, es decir**, la falta de protección del derecho a la defensa cuando el afectado con el acto administrativo definitivo incluso haciendo uso de los mecanismos que la autoridad administrativa le brinda, no logra eficazmente amparar su derecho defensa**. (…)*

***El derecho al debido proceso y a la defensa, a partir de lo establecido en el artículo 29 de la Carta Política, deben observarse tanto en los procedimientos de tipo administrativo como en los de naturaleza judicial**. Será el juez de tutela en cada caso el que verificando las circunstancias fácticas del asunto de que se trate determinará si el administrado se encuentra en estado de indefensión.*

*Para este fin, debe precisarse que **los medios de defensa no pueden aducirse en abstracto** sino que es deber del juez de tutela constatar si ellos efectivamente pudieron ser utilizados por el afectado en eventos en que a pesar de su diligencia frente a la administración ésta con conocimiento de que su conducta vulnera el debido proceso del particular profiere un acto administrativo definitivo en su contra, cuya constitucionalidad pretende hacer valer bajo el argumento de la presunción de legalidad que en vigencia del Estado social derecho debe entenderse como de constitucionalidad. (*Corte Constitucional. Sentencia SU-250 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero.*)*

*Lo anterior, **por cuanto no basta con que el acto administrativo esté conforme a la ley en sentido estricto sino que se hace necesario que sea compatible con el ordenamiento constitucional**, (…)"*[15] (Negrilla y subraya fuera de texto)

Una vez dado un concepto general y jurisprudencial respecto al derecho fundamental del debido proceso y de defensa, se evidencia que no existe vulneración de dicho derecho según el proceder de la SSPD, ya que se encuentra con la normativa vigente en cuanto a la facultad de expedir liquidaciones oficiales de contribución a sus vigiladas.

Previo abordar el análisis del cargo salegado por el demandante, es necesario hacer precisión del concepto de falsa motivación según lo señalado por el **CONSEJO DE ESTADO** en sentencia de 30 de agosto del 2016. NR. 2085348. M.P. **HUGO BASTIDAS BARCENAS**, al indicar que:

*"Sobre la falsa motivación, la Sala ha precisado que constituye una causal de nulidad autónoma que se relaciona con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa, es decir que alude a los hechos del caso y a la prueba. De esa forma, para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: **o bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.** De acuerdo con lo anterior, la causal de nulidad invocada por las demandantes, en realidad, está referida a la violación de la ley, concretamente por la aplicación indebida de una norma. La violación de la ley por indebida aplicación de una norma ocurre cuando el precepto o preceptos jurídicos se hacen valer, se usan o se aplican, a pesar de no ser los pertinentes para proferir el acto administrativo. (…)"*

Teniéndose en cuenta el argumento que antecede, es necesario recordar la diferencia de las causales de nulidad de un acto administrativo cuando se configura en falsa motivación y falta de motivación, por lo que el Honorable **CONSEJO DE ESTADO - SECCION CUARTA** con **M.P.: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS,** mediante sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015) **Radicación número: 11001-03-15-000-2014-04126-00,** estableció la clara diferencia entre una causal y otra, con el siguiente

[15] Sentencia T-270/04

argumento:

> **"*ACTO ADMINISTRATIVO - Motivación / EXPEDICION IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Falta de motivación / CAUSALES DE NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS - Falsa motivación / FALTA DE MOTIVACION - Diferencias respecto de la falsa motivación / ACTO ADMINISTRATIVO - No puede incurrir al tiempo en la causal de nulidad por falta de motivación y en la causal de nulidad por falsa motivación***
>
> *El motivo del acto administrativo tiene que ver con los hechos que la administración tiene en cuenta para dictarlo. La exposición de esos motivos se conoce como motivación… la exigencia de que el acto administrativo sea motivado es un problema de forma del acto. Cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, por lo menos, en forma sumaria en el texto del acto administrativo, se está condicionando el modo de expedirse, esto es, la forma del acto administrativo… La falta de motivación, entonces, es el presupuesto o una de las causas que dan lugar a la nulidad por expedición irregular del acto administrativo, que no a la nulidad por falsa motivación, como suele entenderse equivocadamente.* ***Por lo tanto, para que la pretensión de nulidad de un acto administrativo por falsa motivación prospere, se debe demostrar (I) que los hechos que la administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no se probaron en la actuación administrativa o (II) que la administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si se hubiesen considerado habrían modificado sustancialmente la decisión.*** *En conclusión, mientras la falta de motivación implica la ausencia de motivo,* ***la falsa motivación parte del supuesto de que el acto administrativo sí se motivó, pero de manera falsa, engañosa o, simplemente, con fundamento en hechos no probados****. Por obvias razones, las dos causales de nulidad no pueden concurrir en un mismo acto administrativo, como erradamente lo estimó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E."* (Subrayado en negrilla fuera del texto)

En jurisprudencia del Consejo de Estado - Sección Cuarta, C.P. Milton Chaves García, de fecha 26 de julio de 2017 Radicación número: 11001-03-27-000-2018 00006-00 (22326), hace referencia a la falsa motivación en el siguiente sentido:

> ***FALSA MOTIVACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO – Alcance / FALTA DE MOTIVACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO*** *– Alcance Sobre la falsa motivación, la Sección Cuarta ha precisado que esta "causal autónoma e independiente se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa. Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación, la Sala ha señalado que "es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente". Por su parte, en cuanto a la falta o ausencia de motivación, la Sección Cuarta ha señalado lo siguiente: "La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo n la expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que: inspiraron la producción de los mismos. En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este cargo se denomina técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, al menos en*

*forma sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la forme del acto administrativo, el modo de expedirse. Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en vicio de expedición irregular y, por ende, so configura la nulidad del acto administrativo. En efecto, la expresión de los motivos por los cuales se profiere un acto administrativo de carácter particular y concreto es indispensable, pues es a partir de los mismos que el administrado puede controvertir aquellos aspectos de hecho y de derecho que considera no pueden ser el soporte de la decisión, pero cuando se prescinde de la motivación se impide que el particular afectado con la decisión pueda ejercitar cabalmente su derecho de defensa y contradicción".*

Ahora bien, teniendo claro el concepto de cuando se configura la falsa motivación de un acto administrativo, es indispensable hacer referencia al principio de legalidad el cual es aplicable a toda actuación administrativa y judicial sin importar su índole, teniendo mayor razón, como en el caso bajo estudio, la aplicación de este principio a los actos administrativos proferidos por la SSPD. Siendo así, este principio de propio del derecho público, que tiene por objetivo garantizar la seguridad jurídica.

Con el objeto de reforzar este principio se establece la reserva de la ley, que obliga a regular la materia concreta con normas que posea rango de ley. Por lo tanto, son materias vedadas al reglamento y a las normativas emanadas del poder ejecutivo.

Este principio sirve también para dar más facultades al poder legislativo en ciertas materias, de sensibilidad especial relativas a la afectación de derechos fundamentales. Es decir, es una forma de impulsar la separación de poderes.

La Corte Constitucional[16] ha dicho referente a este principio, con el siguiente criterio (Sentencia C-713 de 2012)

*"Esta Corporación ha señalado que el principio de legalidad exige: "(i) que el señalamiento de la sanción sea hecho directamente por el legislador; (ii) que éste señalamiento sea previo al momento de comisión del ilícito y también al acto que determina la imposición de la sanción; (iii) que la sanción se determine no solo previamente, sino también plenamente, es decir que sea determinada y no determinable" y tiene como finalidad proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial, asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal y en su materialización participan, los principios de reserva de ley y de tipicidad.*

Igualmente, el principio de legalidad tiene una doble condición que la jurisprudencia16 se ha permito en definirla así:

*"El principio constitucional de la legalidad tiene una doble condición de un lado es el principio rector del ejercicio del poder y del otro, es el principio rector del derecho sancionador. Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas."*

A la mención del actor de incluir por parte de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, de costos de producción (cuentas 75) como: 7505 – beneficios a empleados, 7510- generales, 753705 – ACPM, fuel, oil, 753701– Productos químicos, 753704 – Energía, para efectos de establecer la base gravable de la contribución en el caso objeto de demanda comporta su ampliación injustificada e ilegal, se vulneraron los artículos 3° y 85 de la Ley 142 de 1994, y el artículo 338 Constitucional, este último por un eventual desplazamiento de las funciones del legislador, pierde toda fuerza

[16] Sentencia C-713 de 2012

argumentativa, cuando los actos administrativos demandados, si se encuentran debidamente fundamentados y motivados y en consecuencia dichos conceptos si corresponden a su inclusión conforme a la aplicación del párrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 .

Aun cuando la accionante no tituló el cargo como **falsa motivación** es de suponerse que pregona tal causal de anulación por virtud de una supuesta actuación engañosa, fingida o simulada de parte de la SSPD, o por virtud de una, también supuesta, emisión del acto en circunstancias de hecho y de derecho que no tienen correspondencia con la decisión adoptada, elementos que, teóricamente, configurarían dicha causal de anulación.

No es cierto que la entidad que represento no haya justificado debidamente la inclusión de las cuentas antes mencionadas, con fundamento en su soporte legal que, como arriba se indicó, corresponde al parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, cuyo tenor se reitera así:

***PARÁGRAFO 2. Al fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los gastos de funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello; y en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a éstos. Estos rubros podrán ser adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir faltantes presupuestales de las Comisiones y la Superintendencia***. (Se resalta).

A partir de la página 2 del acto administrativo objeto de demanda, acápite de consideraciones, la Superintendencia expuso las razones de tipo fiscal por las cuales era imprescindible apelar a su facultad de fijación de la contribución especial, haciendo uso de la prerrogativa del precitado parágrafo segundo, como se indica a continuación:

Adujo la entidad que que las apropiaciones presupuestales de la SSPD para la vigencia fiscal 2021, fueron establecidas en la Ley 2063 del 28/11/2020, en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación No. 1805 del 31/12/2020 y en la Resol SSPD 20211000013125 del 29/03/2021, el cual será cubierto con el recaudo de la contribución especial de que trata el art 85- Ley 142 de 1994 por valor de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MCTE ($148.694.794.129,00)..

Como se puede verificar, al esbozar las razones fácticas, todas relacionadas con la carencia presupuestal, la Superintendencia proveyó por la razón jurídica, para lo cual invocó el parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, arriba transcrito y subrayado. A partir de la facultad prevista en dicha disposición, procedió la entidad a relacionar las cuentas para cada uno de los sectores (energía eléctrica, gas natural, gas licuado del petróleo y acueducto y alcantarillado) que, pese al precedente jurisprudencial, relacionado con la exclusión de las cuentas del Grupo 75 de la base gravable, podrían ser adicionadas "…***en la misma proporción en que*** – fueran - ***indispensables para cubrir faltantes presupuestales de … la Superintendencia***…".

Siguiendo con el soporte del acto demandado, con el fin de descartar una eventual falsa motivación derivada de la simulación de las circunstancias fácticas, la entidad argumentó haber tomado la información financiera cargada por los mismos prestadores al SUI[17] para la vigencia 2021, y el valor de los ingresos por conceptos de tasas, multas y contribuciones para la vigencia 2020, tal como lo prevé la regla general del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

---

[17] **SUI: Sistema Único de Información**, previsto por el artículo 14 de la Ley 689 de 2001, la cual adicionó la 142 de 1994, y dispuso que corresponde a la SSPD, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, establecer, administrar, mantener y operar un **sistema de información que se surtirá de la proveniente de los prestadores de servicios públicos** sujetos a su control, inspección y vigilancia; así como que el artículo 53 de la Ley 142, antes citada, reitera esa función en cabeza de la SSPD y a cargo de los prestadores. En ejercicio de la precedente facultad, la Superintendencia, de conformidad con el numeral 22 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, tiene la función de verificar la consistencia y calidad de la información, **la cual sirve de base para** efectuar la evaluación permanente de la gestión y resultados de las personas que prestan servicios públicos y **establecer las contribuciones a cargo de estas**.

Nótese que la demandante en el cargo no explicó, por ende no acreditó, en qué funda la falta de justificación de la Superintendencia demandada para incluir, con fundamento en el parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, cuentas del Grupo 75, costos de producción; como tampoco estableció cuáles son las razones por las cuales considera que las cuentas seleccionadas vulneran, por vía directa o indirecta, los ordenamientos Constitucional, legal y jurisprudencial que citó en la demanda, y que arriba se relacionaron.

No obstante, la mencionada falencia argumentativa de la demandante, vale la pena precisar que la Superintendencia demandada esbozó otras razones de tipo constitucional y legal que permiten inferir que no incurrió en vulneración del artículo 338 Constitucional, por supuesta suplantación de las facultades del legislador, como se indica a continuación:

La contribución especial, a cargo de los prestadores de los servicios públicos, prevista en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, tiene asidero constitucional en los artículos 150, numeral 12; 338, inciso 2; y 370 de la Carta, como a continuación se indica:

> "*ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: …*
>
> *12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente,* ***contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley***".
>
> "*ARTICULO 338…La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y* ***contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten*** *o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos*" (Se resalta).
>
> "*ARTICULO 370****. Corresponde al Presidente de la República*** *señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y* ***ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten***" (Se resalta).

El factor de competencia previsto para el legislador, por parte del artículo 338 Constitucional, transcrito, fue ejercido por este a través del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, cuyo tenor literal se reitera a continuación:

> "***Artículo 85****. Contribuciones especiales.* ***Con el fin de recuperar los costos del servicio*** *de regulación que preste cada comisión, y los* ***de control y vigilancia que preste el Superintendente****, las entidades sometidas a su regulación, control y vigilancia,* ***estarán*** *sujetas a dos contribuciones, que se liquidarán y pagarán cada año conforme a las siguientes reglas:*
>
> *85.1.* ***Para definir los costos de los servicios que presten*** *las Comisiones y* ***la Superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, en el período anual respectivo****.*
>
> *85.2. La superintendencia y las comisiones presupuestarán sus gastos cada año y cobrarán dentro de los límites que enseguida se señalan,* ***solamente la tarifa que arroje el valor necesario para cubrir su presupuesto anual****. La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia y de las Comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su estudio fijarán la tarifa correspondiente.*

*85.3.* (Numeral modificado por el parágrafo del artículo 132 de la Ley 812 de 2003) ***Si*** *en algún momento las Comisiones o la Superintendencia* ***tuvieren excedentes****,* ***deberán transferirlos al Fondo Empresarial de que trata el presente artículo****.* (Se refiere al Art. 132 de la Ley 812 de 2003[18]).

*85.4.* ***El cálculo de la suma a cargo de cada contribuyente****, en cuanto a los costos de regulación,* ***se hará teniendo en cuenta los costos*** *de la comisión que regula el sector en el cual se desempeña; y el de los costos* ***de vigilancia, atendiendo a los de la Superintendencia****.*

*85.5. La liquidación y recaudo de las contribuciones correspondientes al servicio de regulación se efectuará por las comisiones respectivas y las correspondientes al servicio de inspección, control y vigilancia estarán a cargo de la Superintendencia.*

*85.6. Una vez en firme las liquidaciones deberán ser canceladas dentro del mes siguiente. Se aplicará el mismo régimen de sanción por mora aplicable al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de las demás sanciones de que trata esta Ley.*

***Parágrafo 1o****. Las Comisiones y* ***la Superintendencia se financiarán exclusivamente con las contribuciones a las que se refiere este artículo*** *y con la venta de sus publicaciones. Sin embargo, el gobierno incluirá en el presupuesto de la Nación apropiaciones suficientes para el funcionamiento de las Comisiones y de la Superintendencia durante los dos primeros años.*

***Parágrafo 2o****.* ***Al fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los gastos de funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello; y en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a éstos. Estos rubros podrán ser adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir faltantes presupuestales de las comisiones y la superintendencia***" (Se vuelve a resaltar).

De conformidad con lo anterior, si se quiere optar por el método de interpretación gramatical, como ha sido la tendencia de la Sección Cuarta a la que me dirijo, se debe atender a la literalidad de todo el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y no solamente a la de su parágrafo 2°, como lo sugiere la demandante. Atendiendo tal método de interpretación, se advierte el verdadero sentido de la disposición, a saber:

La contribución tiene como fin específico el de recuperar los costos del servicio de vigilancia y control; uno de sus márgenes objetivos para calcularla es el de la estimación de los gastos de funcionamiento y la depreciación, amortización u obsolescencia de los activos en el período anual respectivo de la Superintendencia, y **que sea necesaria únicamente para cubrir su presupuesto durante dicho periodo**; si la Superintendencia tuviere excedentes debe reembolsarlos al Fondo Empresarial de que trata el artículo 132 de la Ley 812 de 2003; su cálculo **se hará atendiendo los costos de vigilancia en que incurra la Superintendencia**; y es la **única fuente de financiación** de dicha entidad, además de la venta de sus publicaciones.

En consecuencia, no se debe restringir la interpretación gramatical a un aparte de la norma, parágrafo 2°, desechando dicho método a todo su contexto, lo cual permite desentrañar su sentido primordial, que no es otro que el de garantizar la financiación del ente de control, única y exclusivamente a lo que sus costos demanden, a tal punto que si para el respectivo periodo goza de excedentes debe rembolsarlos al Fondo Empresarial.

[18] El artículo 132 de la Ley 812 de 2003 le dio facultades a la SSPD para constituir un fondo empresarial, como patrimonio autónomo, con el objeto, entre varios, de apoyar a las empresas que contribuyen al Fondo, en los procesos de liquidación ordenados por la misma Superintendencia; financiar las Actividades profesionales requeridas para prestar apoyo económico, técnico y logístico de la Superintendencia para analizar y desarrollar los procesos de toma de posesión

Consecuente con el método de interpretación gramatical, no se debe obviar la supremacía del bloque Constitucional, en atención a que Colombia no solamente es un Estado social de derecho sino un Estado "Constitucional", en el que la hermenéutica ha evolucionado desde el simple método textualista a los métodos finalistas, en los que prima el objetivo normativo.

La Corte Constitucional, en sentencia C-415/12, del 6 de junio de 2012, por medio de la cual declaró la asequibilidad del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, adujo que "*La supremacía de la Constitución Política sobre el resto de prescripciones del sistema de derecho nacional, es un principio estructurante del orden jurídico: el conjunto de prescripciones que integran el derecho positivo, se ordena en un sistema normativo, en virtud de la unidad y coherencia que le imprimen los valores, principios y reglas establecidas en la Constitución. En otras palabras, el orden jurídico de la sociedad política se estructura a partir de la Carta Fundamental. Por eso, la posición de supremacía de la Constitución sobre las restantes normas que integran el orden jurídico, estriba en que aquélla determina la estructura básica del Estado*…".

En ese orden de ideas, con el pretexto de una interpretación gramatical de un solo aparte normativo, no se puede desestimar el bloque Constitucional fundante del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que, como ya se adujo, lo integran los artículos 150, numeral 12; 338, inciso 2; y 370 de la Carta, antes transcritos. El ordenamiento jurídico, antes esbozado, protege la finalidad social del Estado de asegurar la prestación eficiente, a todos los habitantes del territorio nacional, de los servicios públicos domiciliarios, eficiencia que solo se garantiza con **el ejercicio de los deberes de regulación, control y vigilancia permanente sobre los mismos**.

Sin abandonar el método de interpretación gramatical de la norma, propuesto por la demandante, éste se debe complementar con el método de interpretación sistemático, conforme al cual, según el artículo 30 del Código Civil, "***El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía***" (Se subraya).

"***No en pocas ocasiones el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la necesidad de acudir a la interpretación de tipo sistemático de la ley, y de no quedarse en la interpretación estrictamente literal****; es decir,* ***observar el contexto de la ley para ilustrar el sentido de cada una de sus partes*** *y permitir, por lo tanto, que entre todas ellas exista la debida correspondencia y armonía y que "los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto" (artículo 30 del Código Civil)*"[19] (Se resalta)

En conclusión, respecto del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se debe apreciar su verdadero espíritu y finalidad, que no es otro, se reitera hasta la saciedad, que garantizar que una entidad como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cumpla con su función Constitucional, delegataria del Presidente de la República, de ejercer el control, la inspección y vigilancia de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios (Art. 370 C. P.). Así se contempló en la exposición de motivos de la susodicha ley, numerales 6.5. y 6.6., a saber:

*"(…) 6.5. El proyecto, en desarrollo del artículo 370 de la Constitución, propone la creación de una Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (art. 74), cuya función no consiste en dictar reglas, sino en verificar, en casos concretos, si las entidades que prestan los servicios públicos acatan o no las reglas aplicables.*

*6.6. El proyecto,* ***para no gravar al fisco nacional, propone que sean las mismas empresas de servicios públicos las que atiendan los gastos de las comisiones de regulación y de la Superintendencia*** *(art. 80); las normas respectivas se han redactado teniendo a la vista las innovaciones que introdujo en materia fiscal el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución*" (Se resalta).

[19] Con. de E., Sec. Primera, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, 3 de diciembre de 2004, radicado 05001-23-31-000-2004-0126-01 –Pl

Así las cosas, no se puede considerar que la Superintendencia demandada desatendió el mandato constitucional del artículo 338, amén de que no estableció las reglas para la estimación de la contribución; simplemente aplicó y ejerció las preexistentes. Y una de dichas reglas, prevista con sabiduría por el legislador, fue la del parágrafo segundo del ampliamente explicado artículo 85 de la Ley 142 de 1994, aplicable, como también quedó explicado con creces, para los eventuales faltantes presupuestales. Dicha falta presupuestal no solo quedó plasmada en el acto general objeto de demanda, sino que se acreditó fácticamente a través del estudio de la contribución especial año 2021, el cual hace parte de los antecedentes administrativos que acompañan el acto, y que se adjuntan en la misma fecha de esta contestación. Como también hacen parte de dichos antecedentes las síntesis de los argumentos esbozados por varios prestadores, dentro de los cuales no se hizo presente la hoy accionante, antes de la expedición del acto, contenidos en el documento denominado “PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.

## IV. EXCEPCIONES DE MERITO

Propongo las siguientes excepciones perentorias definitivas o de mérito, contra las pretensiones incoadas en la demanda a nombre de mi representada, sin que ello implique reconocimiento de derecho alguno.

**AUSENCIA DE VICIOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS, POR CUANTO LOS MOTIVOS EN LOS QUE SE FUNDAN SON CONSISTENTES Y CONGRUENTES ACORDES CON LA NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA APLICABLE**

Debido que la mi mandante, es decir, LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, actuó de conformidad dentro del marco legal establecido para la resolución de este tipo de asuntos, es decir, de acuerdo a las normas legales como la Ley 142 de 1994 y la jurisprudencia aplicable al caso en concreto, los cuales fueron citados en el presente escrito, demostrando que el acto acusado goza de plena legalidad y, por ende, se encuentra ausente de todo vicio.

Además, debido al trámite realizado en los actos administrativos aquí acusados, son derivados de un acto administrativo de carácter general en cuento a la fijación de contribuciones especiales a cargo de las empresas prestadoras de servicio público que se encuentra bajo la supervisión, vigilancia y control de la Superintendencia, fueron dentro del marco del debido proceso y de conformidad con el derecho de contradicción, regido por el principio de legalidad y constitucional que igualmente es aplicable a la normativa Plan de Desarrollo Nacional para la asignación de este tipo de rubros.

**EXISTENCIA EN DEBIDA FORMA LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL ESTABLECIDA EN EL ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL RESOLUCIÓN NO. 20211000355215 DE 2021, EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES DE CARÁCTER PARTICULAR ATACADAS POR LA DEMANDANTE**

En el presente caso, y como se dijo en el anterior medio exceptivo de mérito, la presunción legal y constitucional respecto a la norma de carácter nacional, se estima que la carga probatoria la propia motivación de cada uno de los actos generales, en otras palabras, la presunción constitucional más que la legal se encuentran respaldada en las LEYES DEL PRESUPUESTO NACIONAL, a saber: Ley 2063 del 28/11/2020, en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación No. 1805 del 31/12/2020. Además, como quedó ampliamente analizado, el Consejo de Estado ha esbozado correspondiente al año gravable 2016 y 2017, razón por la cual las conclusiones **para el 2021 no son diferentes.**

Por virtud de los **PRINCIPIOS DE IGUALDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, CONFIANZA "LEGÍTIMA Y BUENA FE DEPOSITADA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**, los jueces están obligados a respetar el precedente judicial, amén de las similitudes fácticas y jurídicas que caracterizan el caso objeto de decisión. Por tanto, el señor juez de conocimiento está en la obligación de aplicar la Resolución general No. **20211000355215** del 29 de julio de 2021 cuya motivación no difiere en nada de la esbozada para al acto general correspondiente

al año 2016 y 2017, referidas a la legalidad del acto y a la prueba del presupuesto fáctico para que opere la aplicación excepcional del parágrafo 2º del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

En tal sentido, es claro que la propia ley previó un mecanismo para garantizar que la Superintendencia pudiese contar con medios de financiación de su presupuesto para funcionamiento, consistente en recuperar los costos de prestación del servicio mediante una contribución, de manera tal que la base gravable siempre fuera suficiente para la recuperación de tales costos, ya sea simplemente con la aplicación de lo previsto inicialmente en el inciso segundo del artículo 85.2 y de manera complementaria, los rubros establecidos en el parágrafo 2 del citado artículo 85. Con lo anterior se cumple el principio de reserva de ley, toda vez que fue el propio legislador quien estableció los componentes de la base gravable.

Se reitera que mediante Resolución SSPD **20211000355215** del 29 de julio de 2021, la Superservicios estableció la tarifa, la base de liquidación, el procedimiento para el recaudo y otras disposiciones.

Ahora bien, los rubros que sirvieron para conformar la base a la cual se aplica la tarifa de la contribución, están integrados por las erogaciones efectivas que cumplen con los requisitos sustanciales que ha mencionado el Consejo de Estado en su jurisprudencia, sin que para ello se hayan tenido en cuenta los números del catálogo de cuentas que en su momento existían y actualmente no operan en virtud de la aplicación de las NIIF, esto es, que estén directa y necesariamente relacionadas con el servicio público domiciliario.

En vista de lo expuesto, se concluye que el argumento no está llamado a prosperar, pues los faltantes presupuestales de la Superservicios se cubren con los rubros de que trata el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, una vez el Congreso de la República ha fijado el presupuesto para la Superintendencia y ésta ha determinado que al multiplicar la sumatoria de los gastos de funcionamiento por la tarifa máxima del 1%, el resultado es insuficiente para cubrir el presupuesto aprobado por el Congreso de la República.

Aunado a lo anterior y ante la ocurrencia del faltante presupuestal, ampliamente justificado, la Superservicios procedió a dar aplicación estricta a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, teniendo en cuenta que éste permite, de manera excepcional (parágrafo 2) que la base gravable se engrose con otros rubros, siempre que la entidad acredite la existencia de un faltante presupuestal. En conclusión, el argumento y las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.

## IX.- PETICIÓN

Como corolario de todo lo anterior y de lo expuesto por la Superintendencia en cada uno de los actos administrativos, cuyos planteamientos nuevamente reitero, le solicito muy respetuosamente a ese Despacho al momento de proferir su fallo se **DENIEGUEN** las súplicas de la demanda y se condene en costas, agencias en derecho y demás gastos procesales a la sociedad demandante.

## X.- PRUEBAS

Solicito se tengan como pruebas los antecedentes administrativos que serán incorporados con el presente escrito en formato pdf. con 144 folios

## XI.- ANEXOS

Archivo en pdf. correspondiente a los antecedentes administrativos.

## XII. NOTIFICACIONES

Le ruego disponga notificar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en las siguientes direcciones electrónicas:

notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co

dfpedraza@superservicios.gov.co
pedrazadario@hotmail.com

Atentamente,



**DARÍO FERNANDO PEDRAZA LÓPEZ**
CC. No. 74.183.748 de Sogamoso Boyacá
T.P. 125.057 del C.S. de la J.
Proyectó: Dario Fernando Pedraza Lopez. – Apoderado Judicial
Revisó: Cristian Burbano – Profesional Especializado



PERILLA & LEÓN
ABOGADOS ASOCIADOS

**Doctora,**
**LILIA APARICIO MILLÁN**
**JUEZ CUARENTA Y UNO (41) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**
admin41bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
**E. S. D.**

Medio de control: **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Demandante: **MUNICIPIO DE TENA**
Demandado: **MUNICIPIO DEL COLEGIO**
Radicación: 11001 33 37 041 **2023** 00**062** 00

Asunto: **CONTESTACIÓN DE DEMANDA**

**FRANCIA MARCELA PERILLA RAMOS**, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía No. 53.105.587 de Bogotá D.C., portadora de la tarjeta profesional No. 158.331 del Consejo Superior de la Judicatura, con dirección de correo electrónico marcela.perilla@perillaleon.com.co, actuando en mi condición de apoderada judicial del **MUNICIPIO DEL COLEGIO,** conforme al poder conferido por el Representante Legal y Alcalde del Municipio del Colegio, **ANDRÉS HERNANDO GUERRERO PUERO**, el cual se adjuntó previamente, por medio del presente escrito, respetuosamente me permito presentar en término escrito de ***CONTESTACIÓN DE DEMANDA*** en el proceso instaurado por el **MUNICIPIO DE TENA**, siguiendo para tal efecto la siguiente estructura.

## I. CONSIDERACIONES PREVIAS:

1. El veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023) este Honorable Despacho profirió auto mediante el cual admitió la demanda promovida por el Municipio de Tena en contra del Municipio del Colegio, y ordenó notificar dicha providencia de manera personal a la dirección: notificacionesjudiciales@elcolegio-cundinamarca.gov.co

2. El once (11) de abril de dos mil veintitrés (2023) se registró constancia secretarial en el sistema de consulta, en la que se dejó la siguiente anotación: "*SE NOTIFICA AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA, DEMANDA, ANEXOS A LAS PARTES, DEFENSA JUDICIAL Y PROCURADURIA. SE ENVIA LINK*"

3. Adicionalmente, se dejó la siguiente anotación: "*SE NOTIFICA PERSONALMENTE ADMISORIO. ARTICULO 199 DEL CPACA*", y donde se estableció como fecha de inicio del término el día catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023) y fecha de vencimiento del término el día veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

4. Pese a que la parte demandada no fue efectivamente notificada, debido a que la dirección electrónica notificacionesjudiciales@elcolegio-cundinamarca.gov.co fue deshabilitada por parte del Municipio desde el año dos mil veinte (2020), se evidenció las anteriores anotaciones en el sistema de consulta.

5. Por lo anterior, el día diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023) se procedió a radicar ante el despacho el poder, y se solicitó el acceso al expediente digital del proceso de la referencia.

6. El día veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023) la parte actora procedió a radicar ante este Honorable despacho solicitud de corrección de la dirección de notificaciones judiciales, adjuntando el respectivo certificado donde se deja constancia de que la dirección electrónica notificacionesjudiciales@elcolegio-cundinamarca.gov.co fue deshabilitada por parte del Municipio desde el año dos mil veinte (2020), y que actualmente la única dirección electrónica de notificaciones judiciales es asesorjuridico@elcolegio-cundinamarca.gov.co

7. Pese a la solicitud de acceso al expediente digital que fue radicada ante el despacho, la parte actora no tuvo acceso efectivo al mismo, con lo cual, procedió a contestar la demanda que fue comunicada por parte del apoderado del Municipio de Tena, el señor **ORLANDO NIÑO ACOSTA**, en el mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Conforme a las anteriores consideraciones, se tiene que la presente contestación de demanda se radica en el término legal respectivo, esto teniendo en cuenta que según la anotación realizada en el sistema de consulta, el trámite de notificación judicial a la parte demandada se realizó el día once (11) de abril de dos mil veintitrés (2023), y según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, se entendería que la notificación se entendió surtirá el día tres (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), esto, en el caso de que se hubiera tenido efectivo acceso al mensaje desde la fecha en que se envió, pues la norma en cuestión dispone:

*"La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y* ***los términos empezarán a contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje****."*

(Negrilla fuera del texto original)

Por lo tanto, el término de traslado inició a correr el día catorce (14) de abril hasta el veintinueve (29) de mayo de la presente anualidad.

## II. PRONUNCIAMIENTO A LAS PRETENSIONES:

De manera respetuosa, manifiesto que me **OPONGO** a la prosperidad de cualquier pretensión que endilgue responsabilidad sobre el **MUNICIPIO DEL COLEGIO**.

1. **FRENTE A LA PRIMERA PRETENSIÓN: ME OPONGO** a que se declare la nulidad del Acto Administrativo del Oficio Externo SGDI No. 0857 del cinco (5) de septiembre de dos mil veintidós (2022), mediante el cual se dio respuesta negativa al derecho de petición radicado el veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022), donde se solicitó la declaratoria de prescripción de las acciones de cobro de las cuotas partes pensionales y la pérdida de fuerza ejecutoria, lo anterior, por cuanto la petición fue resuelta de forma desfavorable fundada en que:

    - Las acciones de cobro persuasivo que se han ejercido por parte del Municipio de El Colegio no son resultado de una decisión caprichosa de la entidad territorial, sino que surgen de la obligación que tiene el Municipio de Tena de concurrir al pago de la cuota parte pensional causada por el señor ALFONSO CANTOR LOMBANA.
    - Que la administración notificó y puso en conocimiento en debida forma del contenido de los proyectos de resolución del reconocimiento de la pensión y del reajuste de la mesada pensional, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 33 de 1985.
    - Que no es posible aducir la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos de reconocimiento de la pensión de jubilación, y de la sustitución pensional.
    - Que la administración ha desplegado las actuaciones necesarias para la ejecución de los actos administrativos.

- Que los actos administrativos que fundamentan las respectivas cuentas de cobro se encuentran vigentes y poseen plena fuerza ejecutoria.

2. **FRENTE A LA SEGUNDA PRETENSIÓN: ME OPONGO** a que se declare la prescripción de la obligación de cobro de las cuotas partes pensionales respecto de la pensión de sustitución reconocida a la señora YINA ALVARADO SUÁREZ.

3. **FRENTE A LA TERCERA PRETENSIÓN: ME OPONGO** a que se declare que el Municipio de Tena no está obligado a reconocer cuotas partes pensionales a futuro respecto de la sustitución de pensión reconocida a la señora YINA ALVARADO SUÁREZ, por cuanto:
   - Previo al reconocimiento de la pensión de jubilación del señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, el Municipio del Colegio consultó y notificó de manera previa al Municipio de Tena el proyecto de resolución de reconocimiento.
   - Puso en conocimiento del Municipio de Tena el reconocimiento de la sustitución pensional de la señora YINA ALVARADO SUÁREZ.

4. **FRENTE A LA CUARTA PRETENSIÓN: ME OPONGO** a que se efectúe condena en costas en contra de mi representada, por cuanto, tal y como se ha mencionado a lo largo de la presente contestación, no existe responsabilidad e incumplimiento por parte de la entidad territorial Municipio del Colegio.

## III. PRONUNCIAMENTO A LOS HECHOS

1. **PRIMERO: ES CIERTO**, la Secretaría de Hacienda del Municipio del Colegio ha presentado cuentas de cobro por concepto de las cuotas partes pensionales a la que está obligado el Municipio de Tena, en virtud de la pensión de jubilación que en principio fue reconocida al señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, y posteriormente, por el reconocimiento de la sustitución pensional a su cónyuge, la señora YINA ALVARADO SUÁREZ, como consecuencia del fallecimiento del primero.

2. **SEGUNDO: ES CIERTO** que las cuotas partes sobre las cuales se ha realizado el cobro se relacionan con la sustitución pensional reconocida a la señora YINA

ALVARADO SUÁREZ, beneficiaria de la pensión de jubilación que inicialmente se reconoció al señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, prestación económica de la cual derivó su derecho, y dentro de la cual se tiene como cuota partista al Municipio de Tena.

3. **TERCERO: NO ES CIERTO** que en la cuenta de cobro que se presentó el Municipio del Colegio al Municipio de Tena por concepto de cuotas partes pensionales, informó del reconocimiento de la pensión de jubilación del señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, puesto que previo a expedir la resolución de reconocimiento se surtió el respectivo trámite, pues se tiene que:

    - El trece (13) de noviembre de mil novecientos ochenta y siete (1987) el Municipio del Colegio elaboró el "Proyecto de Resolución de Pensión de Alfonso Cantor Lombana".
    - Dicha resolución fue efectivamente comunicada y notificada al Municipio de Tena el día doce (12) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1988), tal y como consta en el recibo de consignación – certificados No. 263.
    - Vencido el término de quince (15) días hábiles que tenía la entidad territorial para pronunciarse, y ante su silencio, el que se tradujo en la aceptación de la resolución, el Municipio del Colegio procedió a expedir la Resolución No. 014 del veintinueve (29) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), mediante la cual se reconoció la pensión mensual vitalicia de jubilación al señor ALFONSO CANTOR LOMBANA.

4. **CUARTO: ES PARCIALMENTE CIERTO** que en la cuenta de cobro también se informó del fallecimiento del señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, y del reconocimiento de la pensión de sustitución en favor de la señora YINA ALVARADO SUÁREZ, puesto que se debe precisar que fue el día diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2018) que se remitió el Oficio Externo SGDI No. 151 del nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018), con referencia "Derecho de petición", mediante el cual el Municipio del Colegio puso de presente al Municipio de Tena el reconocimiento de la sustitución pensional a la señora YINA ALVARADO SUÁREZ mediante la Resolución No. 0689 de dos mil cuatro (2004), y en consecuencia solicitó a la entidad territorial realizar el pago de las cuotas partes pensionales a su cargo.

5. **QUINTO: NO ES CIERTO** que al Municipio de Tena no se le haya consultado el reconocimiento y pago de las cuotas partes pensionales, puesto que:

- Como se señaló anteriormente, el doce (12) de febrero de mil novecientos ochenta y ocho (1988) el Municipio del Colegio comunicó y notificó al Municipio de Tena el "Proyecto de Resolución de Pensión de Alfonso Cantor Lombana", y frente al silencio administrativo en que incurrió la entidad, procedió a expedir la Resolución No. 014 del veintinueve (29) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), mediante la cual se reconoció la pensión mensual vitalicia de jubilación al señor ALFONSO CANTOR LOMBANA.

- A su vez, el treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1988) se remitió al Municipio de Tena el Oficio No. 13, mediante el cual se anexó el "*Proyecto de Reajuste a la pensión de jubilación del señor ALFONSO CANTOR LOMBANA*", en donde de manera expresa se le indicó a la entidad territorial que se remitía dicho documento para su estudio frente a la aceptación en la participación de la misma, y que en para el efecto se concedía un término de quince (15) días.
- Dicha comunicación fue efectivamente notificada a la Entidad Territorial, como consta en el recibo de consignación – certificado No. 2111.

- Ante el silencio administrativo positivo en que incurrió la entidad, se entendió su aceptación al proyecto que fue remitido.

Así las cosas, es claro que el Municipio de Tena ha sido efectivamente notificada de todas las decisiones relativas al reconocimiento pensional y reliquidación de la mesada del señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, como las actuaciones posteriores ocurridas luego del fallecimiento del causante.

6. **SEXTO: NO ES CIERTO** que una vez el Municipio de Tena tuvo conocimiento de la cuenta de cobro haya hecho uso del derecho de objetar la misma, con fundamento en la prescripción, puesto que frente al Oficio Externado SGDI No. 151 del nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual el Municipio de El Colegio allegó cuenta de cobro de la cuota parte pensional, la entidad actora procedió a radicar recurso de reposición alegando que no existía notificación de los proyectos de resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación y de la sustitución pensional, y que en virtud de ello, no se contaba con titulo valor por ejecutar.

7. **SÉPTIMO: ES PARCIALMENTE CIERTO** que mi poderdante mediante oficio del cinco (5) de septiembre de dos mil veintidós (2022) decidió pronunciarse sobre la acción de prescripción que presentó el municipio de Tena, negando la solicitud presentada, pues si bien es cierto que efectivamente el municipio de El Colegio expidió dicha decisión, lo cierto es que en realidad se estaba dando

alcance a la petición presentada por parte de la entidad actora el día veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022), lo anterior teniendo en cuenta que previamente se había radicado otra solicitud.

8. **OCTAVO: ES CIERTO** que el Municipio de Tena alegó la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos mediante los cuales se reconoció la pensión de jubilación del señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, tal y como se evidencia en la solicitud radicada ante el Municipio de El Colegio el veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022).

9. **NOVENO: NO ME CONSTA** si en los archivos del Municipio de Tena reposan los antecedentes del reconocimiento pensional del señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, puesto que se está haciendo referencia a hechos que son ajenos a mi representada.

   Sin embargo, se resalta que, en relación con la notificación del proyecto de resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación, y el proyecto de reajuste de la mesada pensional del señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, se cuenta con la respectiva constancia de entrega al municipio de Tena, la cual fue certificada por la empresa "Adpostal", mediante los Recibos de consignación – certificados No. 263 y 2111, documentos que fueron aportados junto con la contestación de la presente demanda.

10. **DÉCIMO: NO ME CONSTA** si en los archivos del Municipio de Tena reposan los antecedentes del reconocimiento de la sustitución pensional a la señora YINA ALVARADO SUÁREZ, puesto que se está haciendo referencia a hechos que son ajenos a mi representada.

    Sin embargo, se resalta que desde la remisión el Oficio Externo SGDI No. 151 el día diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2018), se puso de presente y se adjuntó la Resolución No. 0689 de dos mil cuatro (2004).

11. **DÉCIMO PRIMERO: ES CIERTO** que en el Oficio SGDI No. 0857 del cinco (5) de septiembre de dos mil veintidós (2022) el Municipio de El Colegio hace mención de que mediante Resolución No. 014 de mil novecientos ochenta y ocho (1988) se reconoció pensión de jubilación al señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, sin embargo, se aclara que como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, no fue en esta ocasión que se realizó la notificación de dicho administrativo, sino que el mismo había sido previamente notificado desde la comunicación del proyecto de resolución, y las posteriores cuentas de cobro que se allegaron al Municipio de Tena.

12. **DÉCIMO SEGUNDO: NO ME CONSTA** si en el archivo del Municipio de Tena reposan los documentos relacionados con el cobro de las cuotas partes

pensionales que se adeuda al señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, puesto que se está haciendo referencia a hechos que son ajenos a mi representada.

Sin embargo, se pone de presente que tal y como se ha relacionado, el Municipio de El Colegio ha allegado en debida forma y en reiteradas ocasiones las respectivas resoluciones y cuentas de cobro tanto de la pensión de jubilación del señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, como de la sustitución pensional de la señora YINA ALVARADO SUÁREZ.

13. **DÉCIMO TERCERO: NO ES CIERTO** que el Municipio de Tena desconoce de cualquier tipo de notificación que se haya realizado por concepto de liquidación y cobro de cuotas partes pensionales del causante ALFONSO CANTOR LOMBANA.

    Sin embargo, se destaca que dentro de la presente contestación se adjuntaron los medios de prueba que demuestran que desde la comunicación del Proyecto de Resolución del reconocimiento de la pensión de jubilación del trabajador, el Municipio de El Colegio comunicó y notificó en debida forma del documento al Municipio de Tena, así como posteriormente allegó en reiteradas ocasiones los actos administrativos que dieron fundamento a cada una de las cuentas de cobro que se ha allegado a la entidad deudora, con lo cual, este punto más allá de tratarse de un hecho se configura como una apreciación subjetiva respecto de una situación que se alega y que no se encuentra debidamente fundamentada.

14. **DÉCIMO CUARTO: NO ES CIERTO** que pese a que el Municipio de Tena haya alegado la prescripción y la perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que hubiese reconocido las cuotas partes pensionales, no se le puso de presente nunca las constancias de notificación o de comunicación que se libraron en esa época, pues como se señaló y se reitera a lo largo de todo el escrito de la contestación:

    - Se cuenta con el Recibo de consignación – certificación No. 263 emitido por la empresa de mensajería "Adpostal", donde se certificó la entrega del proyecto de Resolución de reconocimiento de la pensión de vejez del señor ALFONSO CANTOR LOMABANA.

    - Se cuenta con el Recibo de consignación – certificación No. 2111 emitido por la empresa de mensajería "Adpostal", donde se certificó la entrega del proyecto de reajuste de la liquidación de la mesada pensional del señor ALFONSO CANTOR LOMABANA.

    - Que el veinticuatro (24) de abril de dos mil ocho (2008) el Municipio de El Colegio remitió el Oficio SHM No. 0398, mediante el cual se hizo

referencia a la cuenta que estaba pendiente de cobro por concepto de cuotas partes pensionales adeudadas en virtud de la pensión reconocida al señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, y que se adjuntaron las respectivas constancias.

- Que el diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2018) se remitió al Municipio de Tena el Oficio Externo SGDI No. 151, mediante el cual el Municipio de El Colegio allegó cuenta de cobro por concepto de pago de la cuota parte pensional por concurrencia que correspondía a dicha entidad, adjuntando los respectivos actos administrativos que sustentaban la decisión.

- Que el diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018) el apoderado del Municipio de Tena allegó recurso de reposición contra el Oficio Externo SGDI No. 151, reforzando así que la entidad territorial tenía pleno conocimiento de la respectiva cuenta de cobro y de los actos administrativos que la sustentan.

- Que mediante acto administrativo remitido el quince (15) de junio de dos mil dieciocho (2018) al Municipio de Tena se resolvió de manera negativa el recurso interpuesto, sustentado entre otros motivos, en que los proyectos de resolución si habían sido comunicados y notificados a dicha entidad, y donde se adjuntó la respectiva constancia.

- Que en petición allegada el dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020) el Municipio de Tena hace referencia expresa que ha revisado las cuentas de cobro y anexos que se remiten con las mismas, tanto así que hace referencia a que uno de los documentos da cuenta del fallecimiento del causante de la pensión de jubilación, el señor ALFONSO CANTOR LOMBANA.

- Que mediante oficio de octubre de dos mil veinte (2020), mediante el cual se dio respuesta a la comunicación del dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020), el Municipio de El Colegio reiteró los argumentos facticos y jurídicos que sustentaban sus decisión, haciendo referencia expresa que no resultaba de recibo que el Municipio de Tena manifestada no tener conocimiento de los actos administrativos y decisiones adoptadas en el presente caso, máxime cuando se remitió en diversas ocasiones los documentos. En esta ocasión, se adjuntó nuevamente copia de todos los documentos que dieron origen a las cuotas partes reconocidas al señor ALFONSO CANTOR LOMBANA.

- Que en respuesta al oficio allegado por el Municipio de Tena al Municipio de El Colegio el día veintisiete (27) de diciembre de dos mil

veinte (2020) mediante el cual manifestó no aceptó las cuentas de cobro del mes de julio y agosto de dos mil veinte (2020), el cuatro (4) de enero de dos mil veintiuno (2021), se indicó expresamente lo siguiente:

*"El Municipio de El Colegio – Departamento de Cundinamarca, ha enviado en su momento los documentos al Municipio de Tena y se le dio aplicación a la figura de la prescripción, en su momento oportuno (…)"*

- Que finalmente, mediante el Oficio Externo SGDI No. 0857 del cinco (5) de septiembre de dos mil veintidós (2022), en respuesta a la solicitud de declaratoria de prescripción y solicitud de declaratoria de perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, se reiteró nuevamente al Municipio de Tena que no resultaba de recibo aducir que no había tenido conocimiento del procedimiento efectuado al momento de expedir la resolución de pensión del señor ALFONSO CANTOR LOMABANA, esto sumado que desde comunicaciones anteriores ya se había indicado los hechos que sustentaban la decisión, siendo claro que si se había dado cumplimiento a lo establecido en el numeral primero del artículo 2 de la Ley 33 de 1985.

Conforme a lo anterior, resulta claro que además de haber notificado en su momento los proyectos de resolución tanto del reconocimiento de la pensión, como del reajuste de la mesada, posteriormente y en reiteradas ocasiones el Municipio de El Colegio allegó y comunicó en debida forma cada acto administrativo que sustenta el cobro de las cuotas partes pensionales, y no es admisible aducir que nunca se la han puesto de presente las constancias de notificación.

15. **DÉCIMO QUINTO: NO ES CIERTO** que el Municipio de Tena no tenga conocimiento de cuando falleció el señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, puesto que como se señaló a detalle en el hecho inmediatamente anterior todos los documentos le fueron puestos en conocimiento, esto sumado a que en diversas comunicaciones que radicó ante el Municipio de El Colegio y que obran como medio de prueba de la contestación, el Municipio de Tena hizo referencia expresa a que de los documentos allegados se dio cuenta del fallecimiento del señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, máxime cuando se allegó en diversas ocasiones la Resolución No. 0689 de dos mil cuatro (2004), en donde se hace relación a dicho suceso.

16. **DÉCIMO SEXTO: NO ES CIERTO** que el Municipio de Tena no tenga conocimiento de cuándo y mediante qué acto administrativo se reconoció la sustitución pensional a la señora YINA ALVARADO SUÁREZ, pues en diversas ocasiones se allegó la Resolución No. 0689 de dos mil cuatro (2004).

17. **DÉCIMO SÉPTIMO: ES CIERTO** que el Municipio de Tena en diversas ocasiones solicitó la declaratoria de prescripción y pérdida de fuerza ejecutoria del acto que reconoció las cuotas partes pensionales, esto es la resolución de reconocimiento de la pensión de vejez del señor ALFONSO CANTOR LOMBANA.

18. **DÉCIMO OCTAVO: NO ES CIERTO** que frente a las solicitudes presentadas por el Municipio de Tena solo se haya obtenido respuesta de fondo por parte del Municipio de El Colegio mediante el Oficio del cinco (5) de septiembre de dos mil veintidós (2022), pues se tiene que de manera previa mi poderdante emitió respuesta a dichas solicitudes mediante la respuesta al recurso de reposición interpuesto contra el oficio SGDI No. 151 remitida el quince (15) de junio de dos mil dieciocho (2018), el oficio DA de octubre de dos mil veinte (2020), y la confirmación de cuenta de cobro por concurrencia del cuatro (4) de enero de dos mil veintidós (2022), documentos que se anexan como medio de prueba dentro de la presente contestación de la demanda.

19. **DÉCIMO NOVENO: ME ABSTENGO** de realizar pronunciamiento algo, ya que no se está haciendo referencia a un hecho, sino que se trata de una apreciación subjetiva, sobre todo teniendo en cuenta que en los hechos anteriores se explicó de manera detallada los motivos por los cuales se afirma que el Municipio de Tena si fue notificado y si tiene conocimiento de los actos administrativos que motivan el cobro de las cuotas partes pensionales por concurrencia.

## IV. EXCEPCIONES PREVIAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 175 del C.P.A.C.A y lo dispuesto en el artículo 110 del Código General del Proceso, las excepciones previas se formularán por escrito separado adjunto a la presente contestación

## V. EXCEPCIONES DE MÉRITO

### A) LEGALIDAD Y FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN PENSIONAL EN CABEZA DEL MUNICIPIO DE TENA:

Se parte por indicar que, en el caso en cuestión se solicitó la declaratoria de nulidad del Oficio Externo SGDI No. 0857 del cinco (5) de septiembre de dos mil veintidós (2022), mediante el cual se negó la solicitud de declaratoria de prescripción y de declaratoria de perdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos de reconocimiento de la pensión de jubilación del señor ALFONSO CANTOR LOMABANA, y de reconocimiento de la sustitución pensional de la señora

YINA ALVARADO SUÁREZ, y como consecuencia de ello, se declare la prescripción de la obligación de cobro de cuotas partes pensionales de la cual es titular el Municipio de Tena, y que a su vez se declare que dicha entidad no está obligada a reconocer cuotas partes pensionales a futuro respecto de la sustitución pensional reconocida a la señora YINA ALVARADO, como consecuencia del fallecimiento del causante, titular de la pensión de jubilación, el señor ALFONSO CANTOR.

Téngase en cuenta que el documento en mención NO es el acto administrativo mediante el cual se determinó la obligación pensional a cargo de la parte actora, toda vez que este no es el acto administrativo de reconocimiento de la pensión de vejez de la cual es cuota partista el municipio.

En ese sentido se tiene que, previo a la expedición de la Ley 100 de 1993, se encontraba vigente la Ley 33 de 1985, la cual en sus artículos 1 y 2 establecía lo siguiente:

> *"Artículo 1°. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio."*

> *"Artículo 2°. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince (15) días para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por ellos."*

En virtud de lo anterior, el señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, una vez cumplidos los requisitos de ley, solicitó a la CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL MUNICIPAL DE EL COLEGIO el reconocimiento de la pensión de jubilación, motivo por el cual previo a reconocer la prestación económica, y teniendo en cuenta que el trabajador había prestado sus servicios ante diferentes entidades públicas, se procedió a dar cumplimiento al inciso primero del artículo 2 de la Ley 33 de 1985, esto es comunicar y notificar a las demás entidades deudoras del proyecto de liquidación, con e fin de correr el respectivo traslado para objetarlo.

Puntualmente, el Proyecto de Resolución de Pensión de Alfonso Cantor Lombana se expidió el treinta (30) de noviembre de mil novecientos ochenta y siete (1987), y en las consideraciones de dicho documento se dejó expuesto que el afiliado prestó sus servicios al Estado a través de distintas entidades, entre ellas, el Municipio de Tena, como Secretario de la alcaldía en período comprendido entre el once (11) de septiembre de mil novecientos setenta y seis (1976) al treinta (30) de noviembre de mil novecientos setenta y seis (1976) y el primero (1) de enero de mil novecientos noventa y siete (1977) y el quince (15) de noviembre de mil novecientos setenta y siete (1977), arrojando un total de cuatrocientos catorce (414) días, que equivalían al cinco punto ochenta y nueve (5,89 %) por ciento de la mesada pensional.

Contrario a lo señalado por la parte actora, el documento en mención si fue efectivamente notificado, tal y como consta en el Recibido de Consignación - certificado No. 263 de la empresa de mensajería "Adpostal", documento que se adjuntó como medio de prueba, sin embargo, y vencidos los quince (15) días hábiles dispuestos por la norma, se tiene que el Municipio de Tena se abstuvo de realizar pronunciamiento alguno, y en consecuencia, se configuró el silencio administrativo positivo, lo que se tradujo en la aceptación del contenido de la liquidación y el nacimiento de la obligación en cabeza del Municipio.

Así entonces, el Municipio de El Colegio procedió a expedir la Resolución No. 014 de mil novecientos ochenta y ocho (1988) mediante la cual reconoció la prestación en favor del señor ALFONSO CANTOR LOMBONA.

Posteriormente, se tiene que el treinta (30) de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988) el Municipio de el Colegio remitió al Municipio de Tena el Oficio No. 13, mediante el cual se adjuntó el proyecto de Reajuste de la pensión de jubilación del señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, documento que fue debidamente notificado, tal y como consta en el Recibo de Consignación – Certificado No. 2111 expedido por la empresa de mensajería "Adpostal", documento que no fue objetado, y que por lo tanto fue expedido en dichos términos.

Luego, una vez definidas las obligaciones de las entidades deudoras frente a la prestación económica del señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, el Municipio de el Colegio procedió a realizar el pago del 100% de la mesada pensional, bajo la premisa de posteriormente ejercer las acciones de recobro frente a las demás entidades obligadas.

De igual manera, y luego del fallecimiento del señor Alfonso, se procedió a reconocer la sustitución pensional de su cónyuge, la señora YINA ALVARADO SUÁREZ, pues la misma acreditó el cumplimiento de los requisitos legales, situación que se concretó mediante la Resolución No. 0689 de dos mil cuatro (2004)

Así entonces se reitera que la parte actora incurre en un error sustancial al solicitar la declaratoria de prescripción y no reconocimiento de obligaciones que no se encuentran contenidas en el Oficio Externado No. 0857 del cinco (5) de septiembre de dos mil veintidós (2022), sino como se expuso anteriormente, se encuentran contenidas dentro de actos administrativos que están en firme, que cuentan con plena presunción de legalidad.

**B) FUERZA EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL:**

Respecto de la solicitud de declaratoria de perdida de ejecutoria de los actos administrativos de reconocimiento de la pensión de jubilación, y de reconocimiento de la sustitución pensional, se tiene que, en un caso de estudio similar, la Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección "A" del Consejo de Estado, con Magistrado Ponente Dr. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, y radicación No. 25000-23-25-000-2011-00852-01(1517-13), del diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015) se indicó lo siguiente:

> *"En torno a la pérdida de fuerza ejecutoria a que alude la demanda, debe precisarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 66 del C.C.A. tal fenómeno surge, entre otras razones, cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondían para ejecutarlos.*
>
> *La Sala considera que no hay lugar a declarar la pérdida de fuerza ejecutoria invocada, en primer término porque ella se pretende respecto de los actos administrativos de reconocimiento pensional, decisiones que no son materia de cuestionamiento en el proceso que nos ocupa, lo que impide el pronunciamiento de esta jurisdicción, respecto de cada acto individualmente considerado; además, porque el hecho de que la entidad pagadora no hubiera adelantado la acción de recobro ante la obligada a una de las cuotas partes pensionales, en momento alguno da lugar a extinguir la obligación del reconocimiento y pago de la mesada pensional, razón por la cual no prospera el cargo."*

Así las cosas, es claro el problema jurídico no se centra sobre los respectivos reconocimientos de las prestaciones económicas en mención, sino que se da respecto de la obligación de las entidades deudoras al concurrir en el pago de las cuotas partes pensionales a las que se encuentran obligadas, con lo cual, el contenido de los mentados actos administrativos estaría fuera del alcance del juzgador, tal y como lo señaló la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Adicionalmente, se destaca el aparte de la cita que hace referencia que el no ejercicio de las acciones de recobro no se traducen en la extinción de la obligación del reconocimiento y pago de la mesada pensional, situación que ni siquiera se configura en el caso en cuestión, pues como se ha señalado a lo largo del presente escrito, el Municipio de El Colegio ha adelantado la gestión de reconocimiento y pago de las mesadas pensionales que en un primer momento devengó el señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, y posteriormente su beneficiaria, la señora YINA ALVARADO SUÁREZ, sumando a esto que, tal y como se evidencia en el expediente administrativo, la entidad si ha adelantado las gestiones de cobro tendientes a obtener el cumplimiento de la obligación por parte del Municipio de Tena.

**C) LA NO EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN EN EL PAGO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES**

Luego de establecer la clara diferenciación entre las consecuencias de la prescripción y de la perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, debe señalarse de manera inequívoca que, sin que ello implique ninguna aceptación por parte de mi poderdante, la jurisprudencia de la Corte Constitucional fue enfática al señalar que la prescripción del derecho al recobro implica que se extingue el derecho subjetivo a solicitar las sumas adeudadas por otra entidad deudora, mas no se traduce en la extinción de la obligación en la concurrencia en el pago de las demás mesadas. Así, en sentencia C-895 de 2009 indicó:

> *"(…) los créditos que se derivan del pago concurrente de cada mesada pensional individualmente considerada sí pueden extinguirse por esta vía (derecho al recobro), en tanto corresponden a obligaciones económicas de tracto sucesivo o naturaleza periódica entre las diferentes entidades responsables de contribuir al pago pensional (…).*
> *6.3.- En tercer lugar, la Corte considera que la prescripción del derecho al recobro no significa autorizar un destino diferente de los recursos de la seguridad*

*social, pues las expresiones demandadas se limitan a reconocer, sin más, el término de prescripción de las obligaciones crediticias. Lo que se extingue es entonces el derecho subjetivo de la entidad a recobrar, pero en ningún momento se autoriza un destino de los recursos para otros fines. (…).*

*6.4.- En cuarto lugar, la Sala tampoco encuentra que la norma vulnere el principio de sostenibilidad del sistema pensional. En efecto,* ***la prescripción del derecho al recobro de ciertas mesadas –las no reclamadas oportunamente- de ninguna manera extingue la obligación de concurrir al pago de las demás mesadas, ni libera a las entidades de su obligación futura de concurrencia en el pago. (…).***

*6.5.- Finalmente, debe recordarse que tanto la Legislación como la jurisprudencia han señalado de forma insistente que bajo ninguna circunstancia el pensionado puede asumir las consecuencias ante la falta de pago o recobro de las cuotas partes pensionales. Es por ello por lo que la existencia de un término de prescripción en nada afecta el derecho del ex trabajador, quien es en últimas el destinatario de la seguridad social"*

(Negrilla fuera del texto original)

Conforme a lo anterior, es claro que lo pretendido por la parte actora carece de sustento tanto factico como legal, pues si bien es cierto que ante la inactividad en el cobro de las cuotas partes pensionales puede llegar a alegarse la operancia de la prescripción, lo cierto es que de suyo dicha circunstancia no se traduce en que a futuro se extinga la obligación de concurrencia en el pago de la cuota parte de la que es deudora la entidad territorial.

**D) FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD:**

En caso de no tramitarse como previa la excepción planteada en el acápite de "EXCEPCIONES PREVIAS", respetuosamente solicito al Despacho que se tramite la misma como excepción de mérito:

El numeral segundo del artículo 161 del CPACA dispone lo siguiente:

*"2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto."*

De igual manera, el artículo 74 del CPACA dispone lo siguiente:

*"Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:*

*1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.*
*2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.*

*No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.*
*Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial."*

Téngase en cuenta que en el caso en cuestión se presentó medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho respecto del acto administrativo configurado mediante el Oficio Externo SGDI No. 0857 del cinco (5) de septiembre de dos mil veintidós (2022), mediante el cual el Municipio de El Colegio dio respuesta negativa al derecho de petición radicado el veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022), donde se solicitó la declaratoria de prescripción de las acciones de cobro de las cuotas partes pensionales y la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos de reconocimiento de pensión de jubilación del señor Alfonso Cantor Lombana, y la sustitución pensional de la señora YINA ALVARADO SUÁREZ.

Sin embargo, no se evidencia ni se allega constancia de que la parte demandante, previo a interposición de la demanda, haya agotado la vía gubernativa dispuesta frente a los actos administrativos, esto es, la presentación de recursos de reposición frente a la decisión adoptada por la administración frente a la cual se presentan inconformidades.

Al respecto se tiene que, el Consejo de Estado ha decantado esta figura bajo la teoría del indebido agotamiento de la actuación administrativa previa, la cual comprende la presentación de reclamación administrativa y agotamiento de los recursos en sede gubernativa. Así, mediante sentencia de la Sección Segunda, con M.P. Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS, Radicación No. 05001-23-33-000-2014-01929-01(0056-16), del primero (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019), se señaló lo siguiente:

*"La Sala estima, que no le asiste razón al apoderado judicial de la parte demandante al considerar que no es obligatorio agotar la reclamación previa*

*ante la autoridad administrativa, teniendo en cuenta que, constituye un requisito sine qua non agotar dicha actuación antes de acceder a la jurisdicción contenciosa para quien pretenda demandar un acto administrativo de contenido particular y concreto, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; en tal sentido,* ***se precisa que el cumplimiento de tal requisito no solamente comprende la interposición de los recursos en sede gubernativa, sino que también es obligatorio presentar la solicitud de reconocimiento del derecho****, la cual debe tramitarse ante la entidad pública llamada a conceder el mismo, pues* ***estos elementos conforman el agotamiento en sede administrativa*** *conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1755 del 2015 en concordancia con los artículos 74 y 76 del CPACA.»*

(Negrilla fuera del texto original)

**E) ENRIQUECIMIENTO INJUSTO**

Sin que signifique el reconocimiento de derecho alguno, significaría un enriquecimiento injusto reconocimiento o declaratoria de lo pretendido por la parte actora, toda vez que no existe causa, legitimación ni fundamento jurídico o fáctico que la justifique.

**F) PRESCRIPCIÓN**

Sin que suponga la aceptación de ninguna clase de derecho en cabeza de la parte actora, y las pretensiones que se reclaman, se propone esta excepción ante el caso en que se reconozcan acreencias o derechos en cabeza de la parte actora, a cargo de mi representada.

**G) COMPENSACIÓN**

Sin que esto implique el reconocimiento de pago alguno a favor del demandante, solicito señor juez muy respetuosamente que, en el evento de declararse alguna condena en contra de mi representada, sean tenidos en cuenta los pagos que se le hayan efectuado a la aquí demandante, así como los que se logren probar dentro del proceso.

**H) EXCEPCIÓN GENÉRICA O INNOMINADA**

Respetuosamente le solicito a la señora juez declarar probada cualquier excepción que desestime los fundamentos de hecho o de derecho de la presente demanda y/o las excepciones que se prueben en el curso del proceso.

## VI. HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO LA DEFENSA

### A) HECHOS DE LA DEFENSA

1. El señor ALFONSO CANTOR LOMBANA para el año de mil novecientos ochenta y siete (1987) cumplió con siete mil doscientos días de servicios prestados a entidades oficiales, y alcanzó la edad de cincuenta (50) años, razón por la que solicitó al Municipio de El Colegio el reconocimiento de la pensión de jubilación.

2. El trece (13) de noviembre de mil novecientos ochenta y siete (1987) el Municipio de El Colegio procedió a elaborar el "Proyecto de resolución de pensión de Alfonso Cantor Lombana", documento en el cual realizó la respectiva liquidación de la prestación, teniendo en cuenta las entidades públicas dentro de las cuales se había prestado el servicio, y el porcentaje que a cada una de ellas correspondía, entre ellas, el Municipio de Tena.

3. El proyecto de resolución fue notificado al Municipio de Tena el día doce (12) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1988), tal y como consta en el recibo de consignación – certificado No. 263 expedido por la empresa de mensajería "Adpostal".

4. Vencido el término de quince (15) días dispuesto para que el Municipio de Tena se pronunciara frente al proyecto de liquidación, y ante el silencio administrativo positivo en que incurrió, se entendió que dicha entidad aceptaba el contenido del documento.

5. Conforme a lo anterior, el veintinueve (29) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1988) el Municipio de El Colegio expidió la Resolución No. 014, mediante la cual reconoció la pensión de jubilación al señor ALFONSO CANTOR LOMBANA, y de manera expresa, en su artículo 2°, se estableció que una de las entidades que concurría al pago de la prestación era el Municipio de Tena.

6. Posteriormente, mediante Oficio No. 13 del treinta (30) de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988) el Municipio de El Colegio remitió al municipio de Tena comunicación mediante la cual adjuntó el proyecto de reajuste a la pensión de jubilación del señor ALFONSO CANTOR LOMBANA.

7. Dicha comunicación fue notificada al Municipio de Tena, tal y como consta en el recibo de consignación – certificado No. 2111.

8. El tres (3) de noviembre de dos mil cuatro (2004) el Municipio de El Colegio expidió la Resolución No. 0689, mediante la cual reconoció la sustitución pensional de la beneficiaria del causante ALFONSO CANTOR LOMBANA, la señora YINA ALVARADO SUÁREZ, por haber acreditado el cumplimiento de los requisitos legales dispuestos para ello.

9. El veintitrés (23) de abril de dos mil ocho (2008) el Municipio de El Colegio expidió el Oficio SHM-0398, a través del cual se dirigió al alcalde del Municipio de Tena, y solicitó allegar copia de los pagos realizados por concepto de la cuota parte pensional que le corresponde a dicho municipio respecto de la prestación reconocida al señor ALFONSO CANTOR LOMBANA.

10. Dicha comunicación se remitió el veinticuatro (24) de abril de dos mil ocho (2008).

11. El diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2018) se remitió al Municipio de Tena el Oficio Externo SGDI No. 151, mediante el cual allegó cuenta de cobro por concepto de cuotas partes pensionales, junto con sus respectivos anexos.

12. El nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018) el Municipio de Tena presentó recurso de reposición frente a la cuenta de cobro allegada el diez (10) de abril de dos mil veintitrés (2023).

13. El quince (15) de junio de dos mil dieciocho (2018) el Municipio de El Colegio remitió respuesta negativa al recurso de reposición.

14. El siete (7) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) el Municipio de El Colegio remitió el Oficio Externo SGDI No. 499 mediante el cual requirió al Municipio de Tena a cancelar la obligación contenida en la cuenta de cobro de fecha del nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018).

15. El Municipio de El Colegio siguió allegando ante el Municipio de Tena las respectivas cuentas de cobro, como consta en el Oficio Externo SGDI No. 500, remitido al Municipio de Tena el día siete (7) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).

16. El dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020) el Municipio de Tena allegó comunicación mediante la cual manifestó no aceptar la cuenta de

cobro allegada, y solicitó declarar la prescripción y perdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos.

17. El veintiséis (26) de octubre de dos mil veinte (2020) el municipio de El Colegio remitió cuenta de cobro por concepto de la cuota parte pensional al Municipio de Tena.

18. Mediante oficio de octubre de dos mil veinte (2020) el Municipio de El Colegio procedió a dar respuesta a la comunicación remitida por el Municipio de Tena el día dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020), determinado que lo pretendido no prosperaba por los motivos expuestos en dicho documento.

19. En el mismo mes de octubre de dos mil veinte (2020) el Municipio de Tena allegó comunicación mediante la cual manifestó no aceptar la cuenta de cobro radicada el veintiséis (26) de octubre de la misma anualidad.

20. El Municipio de El Colegio siguió allegando ante el Municipio de Tena las respectivas cuentas de cobro por concepto de cuotas partes pensionales, como se evidencia en documentos allegados como medio de prueba:

    - El veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021) se remitió la cuenta de cobro correspondiente al período comprendido entre el primero (1) de enero al veintiocho (28) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
    - El cuatro (4) de mayo de dos mil veintiuno (2021) se remitió la cuenta de cobro correspondiente al período comprendido entre el primero (1) de marzo al treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021).
    - El veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) se remitió la cuenta de cobro correspondiente al período comprendido entre primero (1) de septiembre al treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

21. El veintisiete (27) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) el Municipio de Tena allegó comunicación mediante la cual manifestó no aceptar la cuenta de cobro radicada para el mes de julio y agosto de esa anualidad.

22. El cuatro (4) de enero de dos mil veintidós (2022) el Municipio de El Colegio procedió a dar respuesta a la comunicación remitida por el Municipio de Tena, determinando que lo pretendido no prosperaba por los motivos expuestos en dicho documento, y que conforme a ello se confirma el cobro pretendido.

23. El Municipio de El Colegio siguió allegando ante el Municipio de Tena las respectivas cuentas de cobro por concepto de cuotas partes pensionales, como se evidencia en documentos allegados como medio de prueba:

    - El ocho (8) de marzo de dos mil veintidós (2022) se remitió la cuenta de cobro.
    - El cinco (5) de abril de dos mil veintidós (2022) se remitió la cuenta de cobro.

24. El veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós (2022) el Municipio de Tena allegó comunicación mediante la cual manifestó no aceptar la cuenta de cobro radicada para el mes enero y febrero de esa anualidad.

25. El Municipio de El Colegio siguió allegando ante el Municipio de Tena las respectivas cuentas de cobro por concepto de cuotas partes pensionales, como se evidencia en documentos allegados como medio de prueba:

    - El veintiuno (21) de junio de dos mil veintidós (2022) se remitió cuenta de cobro por el período correspondiente al dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022).

26. El veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022) el Municipio de Tena allegó comunicación mediante la cual manifestó no aceptar la cuenta de cobro radicada para los meses de enero, febrero, mayo y junio de esa anualidad, y solicitó se expidiera aun acto administrativo que resolviera la prescripción alegada y la declaratoria de perdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos.

27. El cinco (5) de septiembre de dos mil veintidós (2022) el Municipio de El Colegio expidió el Oficio Externo SGDI No. 0857 mediante el cual se dio respuesta a la solicitud radicada el veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022), oportunidad en la que se manifestó no acceder a la solicitud de prescripción, ni tampoco a la solicitud de declaratoria de perdida de fuerza de ejecutoria, y conforme a ello, se solicitó al Municipio de Tena efectuar los respectivos pagos por concepto de cuotas partes pensionales.

28. El ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022) se notificó la anterior decisión mediante remisión de mensaje a la dirección de correo electrónico alcaldia@tena-cundinamarca.gov.co

29. El Municipio de El Colegio siguió allegando ante el Municipio de Tena las respectivas cuentas de cobro por concepto de cuotas partes pensionales, como se evidencia en documentos allegados como medio de prueba:

- Oficio del diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós (2022), contentivo de la cuenta de cobro correspondiente al período comprendido entre el primero (1) de julio al treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022).
- Oficio del tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022), contentivo de la cuenta de cobro correspondiente al período comprendido entre el primero (1) de septiembre al treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022).
- Oficio del dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022), contentivo de la cuenta de cobro correspondiente al período comprendido entre el primero (1) de septiembre al treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022).
- Oficio del primero (1) de marzo de dos mil veintitrés (2023), contentivo de la cuenta de cobro correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1) de enero al veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).
- Oficio del dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023), contentivo de la cuenta de cobro correspondiente al período comprendido entre el primero (1) de marzo al treinta (30) de abril de dos mil veintitrés (2023).

## B) FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO DE LA DEFENSA

**LEGALIDAD Y FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN PENSIONAL EN CABEZA DEL MUNICIPIO DE TENA:**

El artículo 29 de la Ley 6 de 1945 disponía lo siguiente:

> ***"Artículo 29.*** *Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público, se acumularan para el computo del tiempo, en relación con la jubilación, y el monto de la pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido y al salario o remuneración devengados en cada una de aquellas. Los trabajadores cuyos salarios o remuneración se paguen con cargo a fondos especiales con aporte a varias entidades de derecho público, gozaran de las prestaciones más favorables que estas reconozcan a sus propios trabajadores, con cargo al mismo fondo especial.*

***Parágrafo 1º.*** *Cuando el favorecido con la pensión de jubilación haya servido diez años, lo menos, en empleos o cargos públicos nacionales, el total de la pensión le será cubierto por la Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales, sin perjuicio del oportuno reembolso de su mayor costo por cuenta de las entidades obligadas a reconocerlos, en los términos del artículo 3o. del Decreto número 2567 de 1946 (agosto 31).*"

El artículo 3 del Decreto 2567 de 1945 disponía que:

"*La Caja Nacional de Previsión, además de las prestaciones oficiales consagradas en los artículos 17 de la Ley 6° de 1945 y 11 del Decreto No. 1660 del mismo año, deberá atender a cualesquiera otros beneficios o prestaciones adicionales a que sus afiliados tengan derecho por razón de disposiciones especiales, convenciones colectivas, o fallo arbitrales, atendidos directamente por el Ministerio, establecimiento, institución o empresa oficial, y sin perjuicio del oportuno reembolso de su mayor costo por parte de la entidad obligada a reconocerlos*".

Posteriormente, mediante el Decreto 1848 de 1969 se reglamentó el Decreto 3135 de 1968, norma por medio de la cual se previó la integración de la seguridad social entre el sector público y privado, y se reguló el sistema prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales, norma en la cual dispuso en su artículo 72 lo siguiente:

"***Artículo 72º.-*** *Acumulación del tiempo de servicios****.*** *Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, se acumularán para el cómputo del tiempo requerido para la pensión de jubilación, En este caso, el monto de la pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido en cada una de aquellas entidades, establecimientos, empresas o sociedades de economía mixta.*"

Finalmente, Ley 33 de 1985 se dispuso reglas en relación con el funcionamiento de las Cajas de Previsión y prestaciones sociales para el sector público, estableciendo de manera en su artículo 2 lo siguiente:

"***Artículo 2º.*** *La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los*

*organismos deudores, los que dispondrán del término de quince (15) días para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por ellos.*
*Para los efectos previstos en este artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará anualmente las compensaciones a que haya lugar, con cargo a los giros que les correspondan a los organismos o Cajas, por concepto de aportes del Presupuesto Nacional; cuando se trate de entidades del orden departamental, intendencial, comisarial, municipal o del Distrito Especial de Bogotá, la compensación anual se efectuará con cargo a las correspondientes transferencias de impuestos nacionales."*

En ese sentido, y teniendo en cuenta que la Resolución mediante la cual se reconoció la prestación de pensión de jubilación del señor ALFONSO CANTOR LOMBANA se profirió en cumplimiento de las normas que regulaban dicha situación para esa época, se tendría que la misma goza de plena presunción de legalidad y firmeza dentro del ordenamiento jurídico.

**FUERZA EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL:**

Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección "A" del Consejo de Estado, con Magistrado Ponente Dr. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, y radicación No. 25000-23-25-000-2011-00852-01(1517-13), del diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015):

*"En torno a la pérdida de fuerza ejecutoria a que alude la demanda, debe precisarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 66 del C.C.A. tal fenómeno surge, entre otras razones, cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondían para ejecutarlos.*

*La Sala considera que no hay lugar a declarar la pérdida de fuerza ejecutoria invocada, en primer término porque ella se pretende respecto de los actos administrativos de reconocimiento pensional, decisiones que no son materia de cuestionamiento en el proceso que nos ocupa, lo que impide el pronunciamiento de esta jurisdicción, respecto de cada acto individualmente considerado; además, porque el hecho de que la entidad pagadora no hubiera adelantado la acción de recobro ante la obligada a una de las cuotas partes pensionales, en momento alguno da lugar a extinguir la obligación del reconocimiento y pago de la mesada pensional, razón por la cual no prospera el cargo."*

**LA NO EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN EN EL PAGO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES**

Sentencia C-895 de 2009 de la Corte Constitucional:

> *"(…) los créditos que se derivan del pago concurrente de cada mesada pensional individualmente considerada sí pueden extinguirse por esta vía (derecho al recobro), en tanto corresponden a obligaciones económicas de tracto sucesivo o naturaleza periódica entre las diferentes entidades responsables de contribuir al pago pensional (…).*
> *6.3.- En tercer lugar, la Corte considera que la prescripción del derecho al recobro no significa autorizar un destino diferente de los recursos de la seguridad social, pues las expresiones demandadas se limitan a reconocer, sin más, el término de prescripción de las obligaciones crediticias. Lo que se extingue es entonces el derecho subjetivo de la entidad a recobrar, pero en ningún momento se autoriza un destino de los recursos para otros fines. (…).*
> *6.4.- En cuarto lugar, la Sala tampoco encuentra que la norma vulnere el principio de sostenibilidad del sistema pensional. En efecto,* ***la prescripción del derecho al recobro de ciertas mesadas –las no reclamadas oportunamente- de ninguna manera extingue la obligación de concurrir al pago de las demás mesadas, ni libera a las entidades de su obligación futura de concurrencia en el pago. (…).***
> *6.5.- Finalmente, debe recordarse que tanto la Legislación como la jurisprudencia han señalado de forma insistente que bajo ninguna circunstancia el pensionado puede asumir las consecuencias ante la falta de pago o recobro de las cuotas partes pensionales. Es por ello por lo que la existencia de un término de prescripción en nada afecta el derecho del ex trabajador, quien es en últimas el destinatario de la seguridad social"*
>
> (Negrilla fuera del texto original)

## VII. MEDIOS DE PRUEBA

### A. <u>DOCUMENTALES</u>

En cumplimiento de la orden judicial dispuesta en el numeral tercero del auto proferido por este Honorable despacho el día veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023), me permito allegar el expediente administrativo del despacho, documentos que se pretenden hacer valer como medios de prueba dentro del presente proceso:

1. Proyecto de resolución_202305180929, del 13 de noviembre de 1987 (4 folios)
2. Recibo de consignación certificado No. 263 – Tena, del 12 de febrero de 1988 (1 folio)
3. Resolución No. 014 de 1988 - Reconocimiento Pensión de Jubilación (4 folios)
4. Comunicación dirigida a la CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL del Municipio de Tena relativa al reajuste de pensión, del 30 de noviembre de 1988 (1 folio)
5. Recibo de consignación certificado No. 2111 – Tena (1 folio)
6. Solicitud de sustitución pensional, del 4 de julio de 2004 (1 folio)
7. Acta de declaración con fines extraprocesales No. 1845 (2 folios)
8. Cedula de ciudadanía de Yina Alvarado Suárez (1 folio)
9. Certificado estado cedula 40365778, de YINA ALVARADO SUAREZ (2 folios)
10. Registro Civil de Matrimonio No. 3065942 (1 folio)
11. Registro Civil de Defunción No. 04737389 (1 folio)
12. Cedula de ciudadanía Alfonso Cantor Lombana (1 folio)
13. Oficio SG No. 1333 dirigido al ESPECTADOR, del 22 de agosto de 2004 (1 folio)
14. Oficio SG No. 1443 dirigido a la Secretaría de Hacienda, del 10 de septiembre de 2004 (1 folio)
15. Recibo de caja del espectador, del 14 de septiembre de 2004 (1 folio)
16. Publicaciones en aviso del ESPECTADOR, del 2004 (2 folios)
17. Resolución 0689 de 2004 – Reconocimiento de Sustitución Pensional (2 folios)
18. Comunicación dirigida al Municipio de Tena, del 23 de abril de 2008 (1 folio)
19. Detalle del Liquidador de cuotas partes del PASIVOCOL – FONPET, del señor ALFONSO CANTOR LOMABANA, con fecha del 2 de abril de 2018 (6 folios)
20. Oficio Externo SGDI No. 151del 9 de abril de 2018 (3 folios)
21. Recurso de reposición interpuesto por el Municipio de Tena contra cuenta de cobro y poder, con fecha de radicación del 10 de mayo de 2018 (5 folios)
22. Oficio Externo SGDI No. 239 del 24 de mayo de 2018 (1 folio)
23. Respuesta recurso de reposición cuenta de cobro SGDI No. 151 del 15 de junio de 2018 (4 folios)

24. Oficio SH No. 1739 del 29 de junio de 2018, junto con sus anexos (4 folios)
25. Oficio externo SGDI No. 499, del 6 de noviembre de 2018 (1 folio)
26. Oficio externo SGDI No. 500 del 6 de noviembre de 2018 (5 folios)
27. Guía de envió No. 987725833 del 7 de noviembre de 2018 (1 folio)
28. Cálculo de liquidación de cuotas partes vencidas de PASIVOCOL, a julio de 2019(3 folios)
29. Cálculo de liquidación de cuotas partes vencidas de PASIVOCOL, a agosto de 2019 (1 folio)
30. Mensaje de datos remitido el 30 de agosto de 2019, a través del cual se envió cuenta de cobro al Municipio de Tena, junto con sus anexos (5 folios)
31. Oficio del Municipio de Tena dirigido a la Secretaría de Hacienda del Municipio del Colegio, del 16 de septiembre de 2020 (6 folios)
32. Certificación cuenta bancaria, del 2 de septiembre de 2020 (1 folio)
33. Mensaje de datos remitido el 26 de octubre de 2020, a través del cual se envió cuenta de cobro al Municipio de Tena (1 folio)
34. Oficio de octubre de 2020, dirigido al Municipio de Tena (6 folios)
35. Oficio del Municipio de Tena dirigido a la Secretaría de Hacienda del Municipio del Colegio, de octubre de 2020 (9 folios)
36. Cuenta de cobro y anexos, del 24 de marzo de 2021 (4 folios)
37. Cuenta de cobro y anexos, del 4 de mayo de 2021 (4 folios)
38. Cuenta de cobro y anexos, del 29 de julio de 2021 (4 folios)
39. Cuenta de cobro y anexos, del 23 de septiembre de 2021 (5 folios)
40. Oficio del Municipio de Tena dirigido a la Secretaría de Hacienda del Municipio del Colegio del 27 de diciembre de 2021 (17 folios)
41. Comunicación del Municipio del Colegio dirigida al Municipio de Tena del 4 de enero de 2022 (1 folio)
42. Mensajes de datos remitidos los días 8 de marzo y 5 de abril de 2022, relativos a cuentas de cobro de la cuota parte pensional, dirigidos al Municipio de Tena (2 folios)
43. Comunicación del Municipio de Tena dirigida al Municipio del Colegio, del 29 de marzo de 2022 (14 folios)
44. Cuenta de cobro del 16 de mayo de 2022 y anexos (7 folios)
45. Mensajes de datos remitidos los días 21 de julio, 25 de julio y 26 de julio de 2022, relativos a cuentas de cobro de la cuota parte pensional, dirigidos al Municipio de Tena (2 folios)

46. Comunicación del Municipio de Tena del 25 de julio de 2022 - Solicitud de expedición de acto administrativo que resuelva la prescripción alegada (12 folios)
47. Oficio Externo SGDI No. 0857, del 5 de septiembre de 2022 (4 folios)
48. Mensajes de datos remitido el 8 de septiembre de 2022, mediante el cual se notificó el Oficio Externo SGDI No. 0857 (1 folio)
49. Cuenta de cobro y anexos, del 19 de septiembre de 2022 (6 folios)
50. Cuenta de cobro y anexos, del 3 de noviembre de 2022 (7 folios)
51. Cuenta de cobro y anexos, del 16 de diciembre de 2022 (7 folios)
52. Cuenta de cobro y anexos, del 1 de marzo de 2023 (6 folios)
53. Cuenta de cobro y anexos, del 2 de mayo de 2023 (14 folios)

## VIII. ANEXOS

1. Poder debidamente conferido.
2. Copia de la cédula de ciudadanía de la abogada suscrita.
3. Copia de la tarjeta profesional de la abogada suscrita.
4. Documentos señalados en el acápite de pruebas.

## IX. NOTIFICACIONES

**DEMANDANTE**

El Municipio de Tena recibirá notificaciones judiciales en la dirección Diagonal 3 No. 3-15 del perímetro urbano del Municipio de Tena, y en el correo electrónico alcaldia@tena-cundinamarca.gov.co y gobierno@tena-cundinamarca.gov.co

El apoderado de la parte demandante, el señor ORLANDO NIÑO ACOSTA, recibirá notificaciones en la Carrera 7 No. 12- B 65 Oficina 309 de la ciudad de Bogotá D.C., al número de teléfono 3118983858, y en el correo electrónico ninoacostaorlando@yahoo.com

**DEMANDADA**

El Municipio del Colegio recibirá notificaciones judiciales en la dirección Carrera 7 No. 9-36 Palacio Municipal del Colegio, y en el correo electrónico asesorjuridico@elcolegio-cundinamarca.gov.co

La apoderada del Municipio del Colegio recibirá notificaciones en la Calle 12 No, 7 – 32 Oficinas 609 – 610 de la ciudad de Bogotá, en el número celular 3144779767 y en la dirección de correo electrónico marcela.perilla@perillaleon.com.co

De la Señora Juez,



**FRANCIA MARCELA PERILLA RAMOS**
**C.C. No. 53.105.587**
**T.P. No. 158.331 del C.S.J.**

**Doctora,**
**LILIA APARICIO MILLÁN**
**JUEZ CUARENTA Y UNO (41) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**
admin41bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
**E. S. D.**

Medio de control: **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Demandante: **MUNICIPIO DE TENA**
Demandado: **MUNICIPIO DEL COLEGIO**
Radicación: 11001 33 37 041 **2023** 00**062** 00

Asunto: **ESCRITO DE EXCEPCIONES PREVIAS**

**FRANCIA MARCELA PERILLA RAMOS**, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía No. 53.105.587 de Bogotá D.C., portadora de la tarjeta profesional No. 158.331 del Consejo Superior de la Judicatura, con dirección de correo electrónico marcela.perilla@perillaleon.com.co, actuando en mi condición de apoderada judicial del **MUNICIPIO DEL COLEGIO**, conforme al poder conferido por el Representante Legal y Alcalde del Municipio del Colegio, **ANDRÉS HERNANDO GUERRERO PUERO**, el cual se adjuntó previamente, por medio del presente escrito, respetuosamente me permito presentar en término escrito contentivo de **EXCEPCIONES PREVIAS:**

**A) FALTA DE AGOTAMIENTO DE REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD:**

El numeral segundo del artículo 161 del CPACA dispone lo siguiente:

> *"2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto."*

De igual manera, el artículo 74 del CPACA dispone lo siguiente:

> *"Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:*

*1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.*

*2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.*

*No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.*
*Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial."*

Téngase en cuenta que en el caso en cuestión se presentó medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho respecto del acto administrativo configurado mediante el Oficio Externo SGDI No. 0857 del cinco (5) de septiembre de dos mil veintidós (2022), mediante el cual el Municipio de El Colegio dio respuesta negativa al derecho de petición radicado el veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022), donde se solicitó la declaratoria de prescripción de las acciones de cobro de las cuotas partes pensionales y la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos de reconocimiento de pensión de jubilación del señor Alfonso Cantor Lombana, y la sustitución pensional de la señora YINA ALVARADO SUÁREZ.

Sin embargo, no se evidencia ni se allega constancia de que la parte demandante, previo a interposición de la demanda, haya agotado la vía gubernativa dispuesta frente a los actos administrativos, esto es, la presentación de recursos de reposición frente a la decisión adoptada por la administración frente a la cual se presentan inconformidades.

Al respecto se tiene que, el Consejo de Estado ha decantado esta figura bajo la teoría del indebido agotamiento de la actuación administrativa previa, la cual comprende la presentación de reclamación administrativa y agotamiento de los recursos en sede gubernativa. Así, mediante sentencia de la Sección Segunda, con M.P. Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS, Radicación No. 05001-23-33-000-2014-01929-01(0056-16), del primero (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019), se señaló lo siguiente:

*"La Sala estima, que no le asiste razón al apoderado judicial de la parte demandante al considerar que no es obligatorio agotar la reclamación previa ante la autoridad administrativa, teniendo en cuenta que, constituye un requisito sine qua non agotar dicha actuación antes de acceder a la jurisdicción contenciosa para quien pretenda demandar un acto administrativo de contenido particular y concreto, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; en tal sentido,* ***se precisa que el cumplimiento de tal requisito no solamente comprende la interposición de los recursos en sede gubernativa, sino que también es obligatorio presentar la solicitud de reconocimiento del derecho****, la cual debe tramitarse ante la entidad pública llamada a conceder el mismo, pues* ***estos elementos conforman el agotamiento en sede administrativa*** *conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1755 del 2015 en concordancia con los artículos 74 y 76 del CPACA.»*

(Negrilla fuera del texto original)

De acuerdo a todo lo anterior, se solicita señora juez resuelva la excepción previa planteada y conforme a ello, se ordene la terminación del presente proceso.

De la señora Juez,

**FRANCIA MARCELA PERILLA RAMOS**
C.C. No. 53.105.587
T.P. No. 158.331 del C. S. J.

Señores:
Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá **- Sección Cuarta -**
**Dra. Lilia Aparicio Millán**
Juez
correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Bogota D.C.

| | |
|---|---|
| Expediente: | No. 11001333704120230006500 |
| Medio de Control: | Nulidad Y Restablecimiento |
| Actor: | **Institución Universitaria Latina – UNILATINA.** |
| Demandado: | Ministerio de Salud y Protección Social - Otros |

**REFERENCIA** **CONTESTACIÓN DEMANDA.**

**CARLOS ANDRÉS GARCÍA SAENZ,** mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.115.748 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., Abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 223.034 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación de la **NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**, de acuerdo con el poder que se me ha conferido, **estando en la oportunidad procesal** ya que la demanda y medidas fueron notificadas el 12 de abril de 2023 en Orfeo No. 202342300828132, me permito presentar **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA,** en los siguientes términos:

## I. A LAS PRETENSIONES:

**1.** Pese a que el acto administrativo identificado con el Radicado GITCC – 2022 01320245421 del 20 de diciembre de 2022, no fue emitido por esta cartera ministerial, **ME OPONGO.** Ya que la Ley 100 de 1993 señaló claramente en su artículo 17 *"Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen."*

**2. y 2.1. ME OPONGO**. Por lo que es preciso manifestar que no existe soporte factico ni jurídico para endilgar responsabilidades a mi poderdante, sobre situaciones ajenas a sus competencias, teniendo en cuenta que los actos administrativos demandados, al igual que la actuación derivada del mismo, fue surtida por una entidad totalmente diferente al ente ministerial que represento.

**3. ME OPONGO** Pues no existe en todo el ordenamiento jurídico una norma que consagre la **SOLIDARIDAD** entre el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que no es dable presumir tal solidaridad, que no deriva de ninguna norma positiva.

Las fuentes de las obligaciones pasivas solo lo son en virtud de la voluntad de las partes y de la ley. La voluntad de las partes debe expresarse diáfanamente en los contratos o en negocios jurídicos válidos. De ahí concluimos que la **solidaridad por pasiva no se presume**, y que debe establecerse como se ha indicado.

## II. A LOS HECHOS:

En su orden, me pronuncio de la siguiente manera:

**1. NO ME CONSTA.** Que se pruebe, la situación planteada es totalmente desconocida para el Ministerio de Salud y Protección Social, por cuanto este **ente ministerial no ha sostenido ninguna clase de relación contractual o prestacional con la demandante.** A su vez desconocemos los actos administrativos emitidos por el **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES**

**EN LIQUIDICACIÓN**, así como los pormenores que se hayan podido suscitar entre el demandante y dicha entidad.

**2. NO ME CONSTA.** Que se pruebe, la situación planteada es totalmente desconocida para el Ministerio de Salud y Protección Social, por cuanto este **ente ministerial no ha sostenido ninguna clase de relación contractual o prestacional con la demandante.** A su vez desconocemos los actos administrativos emitidos por el **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDICACIÓN**, así como los pormenores que se hayan podido suscitar entre el demandante y dicha entidad.

**3. NO ME CONSTA.** Que se pruebe, la situación planteada es totalmente desconocida para el Ministerio de Salud y Protección Social, por cuanto este **ente ministerial no ha sostenido ninguna clase de relación contractual o prestacional con la demandante.** A su vez desconocemos los actos administrativos emitidos por el **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDICACIÓN**, así como los pormenores que se hayan podido suscitar entre el demandante y dicha entidad.

**4**. **NO ME CONSTA.** Que se pruebe, la situación planteada es totalmente desconocida para el Ministerio de Salud y Protección Social, por cuanto este **ente ministerial no ha sostenido ninguna clase de relación contractual o prestacional con la demandante.** A su vez desconocemos los actos administrativos emitidos por el **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDICACIÓN**, así como los pormenores que se hayan podido suscitar entre el demandante y dicha entidad.

**5. ES CIERTO.** Y se precisa que el Decreto 1591 de 1989 ordenó la creación del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, como **establecimiento Público del Orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente**, y de la misma manera en el Decreto en mención literal b) del artículo 2 y literal d) del artículo 3, se determina que este establecimiento público organizará y administrará las prestaciones asistenciales a que tengan derecho los empleados y los pensionados de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia en Liquidación, y efectuará el reconocimiento y pago de las demás prestaciones sociales de los empleados de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia. De igual manera, el Decreto 0553 de 2015 establece las competencias administrativas al fondo, para adelantar los procesos de cobro coactivo iniciados por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación.

**6. NO ME CONSTA.** Se precisa que esta cartera **NO expidió los actos administrativos, ni las respuestas enunciadas;** se desconocen los pormenores que se hayan podido suscitar entre el demandante y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, como **establecimiento Público del Orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.**

**7. NO ME CONSTA.** Se precisa que esta cartera **NO expidió las respuestas enunciadas;** se desconocen los pormenores que se hayan podido suscitar entre el demandante y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, como **establecimiento Público del Orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.**

**8. NO ME CONSTA.** Se precisa que esta cartera **NO expidió las respuestas enunciadas;** se desconocen los pormenores que se hayan podido suscitar entre el demandante y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, como **establecimiento Público del Orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.**

**9. NO ME CONSTA.** Se precisa que esta cartera **NO expidió los actos administrativos, ni las respuestas enunciadas;** se desconocen los pormenores que se hayan podido suscitar entre el demandante y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, como

**establecimiento Público del Orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.**

## III. ARGUMENTOS DE DEFENSA.

**DE LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA:**

De conformidad con la Constitución Política vigente, Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República Unitaria, Descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, como lo afirma el artículo primero de nuestra carta magna.

La descentralización es el proceso político - jurídico - administrativo por medio del cual se otorga competencia o funciones a personas públicas diferentes a los órganos centrales del Estado, para que ejerzan en su propio nombre y bajo su responsabilidad las tareas que la ley les asigne.

La descentralización tiende a buscar entre otras, las siguientes metas:

**1).** Reducir la excesiva concentración del poder de decisión existente en los órganos centrales de la administración;

**2).** Robustecer y vitalizar la autonomía seccional mediante procesos de descentralización para permitir a las autoridades regionales, la adopción oportuna de respuestas a las necesidades de las diferentes comunidades; y

**3).** Fortalecer las atribuciones constitucionales de gobernadores y alcaldes para dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos esenciales a nivel local. Y el servicio público de la salud, es esencial, según lo disponen las normas que rigen la materia.

**DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**

El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el literal b) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, expidió el Decreto 4107 de 2011 "*Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra del Sector Administrativo de Salud y Protección Social".*

Dicha norma, en su artículo 1, establece que el Ministerio de Salud y Protección Social tendrá como objetivos, dentro del marco de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública, y promoción social en salud, y participar en la formulación de las políticas en materia de pensiones, beneficios económicos periódicos y riesgos profesionales, lo cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el sector administrativo.

Así mismo, determina que el Ministerio de Salud y Protección Social dirigirá, orientará, coordinará y evaluará el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Profesionales, en lo de su competencia, adicionalmente formulará, establecerá y definirá los lineamientos relacionados con los sistemas de información de la Protección Social.

De acuerdo con el Decreto 4107 de 2011, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene además los siguientes objetivos y funciones:

> *"Artículo 1°. Objetivos. El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá como objetivos, dentro del marco de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública, y promoción social en salud, y participar en la formulación de las políticas en materia de pensiones, beneficios económicos periódicos y riesgos profesionales, lo cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el sector administrativo.*
> *El Ministerio de Salud y Protección Social dirigirá, orientará, coordinará y evaluará el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos*

*Profesionales, en lo de su competencia, adicionalmente formulará, establecerá y definirá los lineamientos relacionados con los sistemas de información de la Protección Social.*
*Artículo 2°. Funciones. El Ministerio de Salud y Protección Social, además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 cumplirá las siguientes:*

*1. Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar los planes, programas y proyectos del Sector Administrativo de Salud y Protección Social.*
*2. Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar los planes, programas y proyectos en materia de Salud y Protección Social.*
*3. Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar la ejecución, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional en materia de salud, salud pública, riesgos profesionales, y de control de los riesgos provenientes de enfermedades comunes, ambientales, sanitarias y psicosociales, que afecten a las personas, grupos, familias o comunidades.*
*4. Formular, adoptar, coordinar la ejecución y evaluar estrategias de promoción de la salud y la calidad de vida, y de prevención y control de enfermedades transmisibles y de las enfermedades crónicas no transmisibles.*
*5. Dirigir y orientar el sistema de vigilancia en salud pública.*
*6. Formular, adoptar y coordinar las acciones del Gobierno Nacional en materia de salud en situaciones de emergencia o desastres naturales.*
*7. Promover e impartir directrices encaminadas a fortalecer la investigación, indagación, consecución, difusión y aplicación de los avances nacionales e internacionales, en temas tales como cuidado, promoción, protección, desarrollo de la salud y la calidad de vida y prevención de las enfermedades.*
*8. Formular y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de protección de los usuarios, de promoción y prevención, de aseguramiento en salud y riesgos profesionales, de prestación de servicios y atención primaria, de financiamiento y de sistemas de información, así como los demás componentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.*
*9. Formular, adoptar y evaluar la política farmacéutica, de medicamentos, de dispositivos, de insumos y tecnología biomédica, y establecer y desarrollar mecanismos y estrategias dirigidas a optimizar la utilización de los mismos.*
*10. Establecer los mecanismos para adelantar negociaciones de precios de medicamentos, insumos y dispositivos médicos.*
*11. Formular y evaluar la política de talento humano en salud, en coordinación con las entidades competentes, que oriente la formación, ejercicio y gestión de las profesiones y ocupaciones en salud.*
*12. Dirigir, organizar, coordinar y evaluar el servicio social obligatorio de los profesionales y ocupaciones del área de la salud.*
*13. Definir los requisitos que deben cumplir las entidades promotoras de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud para obtener la habilitación y acreditación.*
*14. Regular la oferta pública y privada de servicios de salud, la organización de redes de prestación de servicios y establecer las normas para la prestación de servicios y de la garantía de la calidad de los mismos, de conformidad con la ley.*
*15. Participar en la formulación y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de pensiones, beneficios económicos y otras prestaciones.*
*16. Participar en la formulación y evaluación de la política para la definición de los sistemas de afiliación, protección al usuario, aseguramiento y sistemas de información en pensiones.*
*17. Formular la política de salud relacionada con el aseguramiento en riesgos profesionales y coordinar con el Ministerio de Trabajo su aplicación.*
*18. Formular y evaluar la política para la definición de los sistemas de afiliación, garantía de la prestación de los servicios de salud y sistemas de información en Riesgos Profesionales.*



Carrera 13 No. 32-76 Código Postal 110311 Bogotá D.C
PBX: (57-1) 3305000 - Línea gratuita: 018000-910097 Fax: (57-1) 3305050 www.minsalud.gov.co

*19. Formular y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de promoción social a cargo del Ministerio.*
*20. Realizar los estudios y el análisis de viabilidad, estabilidad y equilibrio financiero de los recursos asignados a la salud y promoción social a cargo del Ministerio.*
*21. Administrar los recursos que destine el Gobierno Nacional para promover la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando quiera que no exista norma especial que los regule o reglamente, ni la administración se encuentre asignada a otra entidad.*
*22. Constituir con otras personas jurídicas de derecho público o privado, asociaciones, fundaciones o entidades que apoyen o promuevan el cumplimiento de las funciones o fines inherentes al Ministerio de Salud y Protección Social, así mismo, destinar recursos de su presupuesto para la creación, funcionamiento e inversión del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud de que trata el artículo 92 de la Ley 1438 de 2011 o al de las asociaciones, fundaciones o entidades que constituya.*
*23. Definir y reglamentar los sistemas de información del Sistema de Protección Social que comprende afiliación, recaudo, y aportes parafiscales. La administración de los sistemas de información de salud se hará en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.*
*24. Promover acciones para la divulgación del reconocimiento y goce de los derechos de las personas en materia de salud, promoción social, y en el cuidado, protección y mejoramiento de la calidad de vida.*
*25. Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la participación de las organizaciones comunitarias, las entidades no gubernamentales, las instituciones asociativas, solidarias, mutuales y demás participantes en el desarrollo de las acciones de salud.*
*26. Promover la articulación de las acciones del Estado, la sociedad, la familia, el individuo y los demás responsables de la ejecución de las actividades de salud, riesgos profesionales y promoción social a cargo del Ministerio.*
*27. Promover el estudio, elaboración, seguimiento, firma, aprobación, revisión jurídica y la ratificación de los tratados o convenios internacionales relacionados con salud, y promoción social a cargo del Ministerio, en coordinación con las entidades competentes en la materia.*
*28. Proponer y desarrollar, en el marco de sus competencias, estudios técnicos e investigaciones para la formulación, implementación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos en materia de salud y promoción social a cargo del Ministerio.*
*29. Asistir técnicamente en materia de salud, y promoción social a cargo del Ministerio, a las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios.*
*30. Preparar las normas, regulaciones y reglamentos de salud y promoción social en salud, aseguramiento en salud y riesgos profesionales, en el marco de sus competencias.*
*31. Administrar los fondos, cuentas y recursos de administración especial de protección social a cargo del Ministerio.*
*32. Las demás funciones asignadas por la Constitución y la ley."*

Dentro del marco de las funciones asignadas al Ministerio de Salud, **no se encuentra prevista la de ejercer inspección, control y vigilancia a los establecimientos públicos del orden nacional**, como se explicará más adelante.

**DEL FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**

Es importante precisar al operador jurídico de ahora en adelante "Fondo" fue creado mediante Decreto No. 1591 de 1989, como un **Establecimiento Público del orden nacional, con personería Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente**, otorgándosele como objeto el señalado en el artículo 7º de la Ley 21 de 1988 de una parte, y la organización y administración de las prestaciones asistenciales a que tengan derecho los empleados y los pensionados de los Extintos Ferrocarriles.



Carrera 13 No. 32-76 Código Postal 110311 Bogotá D.C
PBX: (57-1) 3305000 - Línea gratuita: 018000-910097 Fax: (57-1) 3305050 www.minsalud.gov.co

Con el Decreto No. 0489 del 13 de marzo de 1996, el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y Protección Social), **autoriza** al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para que continúe prestando servicios de salud, pero como ENTIDAD ADAPTADA al Sistema General de Seguridad Social en Salud y mediante Decreto No. 1128 del 29 de junio de 1999, lo adscribe a dicho Ministerio.

En este orden de ideas, es importante destacar que el Fondo es un establecimiento público que **no depende administrativamente ni financieramente del Ministerio de Salud y Protección Social**, y cuyas funciones se suscriben a continuación:

- Pagar las pensiones legales y convencionales de los ex empleados de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
- Atender las demás prestaciones económicas y asistenciales de las personas a que se refiere el literal anterior.
- Efectuar el reconocimiento y pago de las pensiones de cualquier naturaleza de los empleados que adquieran ese derecho en la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia en Liquidación.
- Efectuar el reconocimiento y pago de las demás prestaciones sociales de los empleados de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia en Liquidación.
- Cancelar al organismo de previsión social o a la entidad o empresa empleadora que haya hecho el pago de pensiones a empleados que hayan laborado en la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, la cuota parte que le corresponda por el tiempo servido en esta entidad y, repetir contra terceros las cuotas partes pensionales a favor de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia o del Fondo mismo.
- Efectuar el pago de las indemnizaciones que se establezcan en ejercicio de las facultades a que se refiere la Ley 21 de 1988.
- Efectuar el pago de las sumas reconocidas por sentencias condenatorias laborales ejecutoriadas o que se ejecutoríen a cargo de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
- Reconocer y pagar las demás prestaciones y beneficios que le correspondan o se establezcan en ejercicio de las facultades a que se refiere la Ley 21 de 1988.
- Expedir con la aprobación del Gobierno Nacional, reglamentos generales para la atención de las prestaciones y demás obligaciones a su cargo.
- Realizar inversiones que garanticen seguridad, rentabilidad y liquidez a su patrimonio, con el fin de que pueda cumplir oportunamente sus obligaciones.
- Ejercitar o impugnar las acciones judiciales y administrativas necesarias para la defensa y protección de los intereses de la Nación, de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia y del Fondo mismo, derivadas del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 21 de 1988 o de las que se generen como consecuencia del desarrollo de las facultades de que trata la citada ley.
- Administrar los bienes del Fondo. Para dicho efecto podrá entre otras funciones, adquirir, enajenar, arrendar y gravar tanto los muebles como los inmuebles.
- Las demás que se deriven de la ley o de sus estatutos.



Carrera 13 No. 32-76 Código Postal 110311 Bogotá D.C
PBX: (57-1) 3305000 - Línea gratuita: 018000-910097 Fax: (57-1) 3305050 www.minsalud.gov.co

El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia – FPS - FNC, actualmente enfoca su objeto social en el desarrollo de tres (3) actividades como los son:

1. Administración pensional y reconocimiento prestacional legal y convencional a los ex trabajadores, pensionados y beneficiarios de las liquidadas empresas Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Álcalis de Colombia.

2. Administración del servicio de salud a los pensionados y beneficiarios de las empresas liquidadas Ferrocarriles Nacionales y Puertos de Colombia, y por último,

3. **El cobro coactivo de las cuotas partes generadas** por el pago de nómina de pensionados de la empresa liquidada Ferrocarriles Nacionales. Así mismo, según designación efectuada por el Decreto 553 de 2015 **asumió la competencia para continuar los proceso de cobro coactivo que venía adelantando el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, al cierre del proceso liquidatorio y mediante Decreto 494 de marzo de 2019** *"Por medio del cual se adiciona una parte al Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con la asignación de competencias administrativas para el cobro de las cuotas partes pensionales activas de las entidades liquidadas, adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud y Protección Social*", el FPS-FNC adquirió competencia para sustanciar la gestión de cobro, por cuotas partes del Ministerio de Salud.

**DEL CONTROL TUTELAR**

Respecto de éste control tutelar mencionado, ha de indicarse que, se encuentra previsto en el artículo 103 y siguientes de la ley 489 de 1998, de la siguiente forma:

> *"Artículo 103. Titularidad del control. El Presidente de la República como suprema autoridad administrativa y los ministros y directores de Departamento Administrativo, ejercerán control administrativo sobre los organismos o entidades que conforman la Administración Pública.*
>
> *Artículo 104. Orientación y la finalidad. El control administrativo que de acuerdo con la ley corresponde a los ministros y directores de los departamentos administrativos se orientará a constatar y asegurar que las actividades y funciones de los organismos y entidades que integran el respectivo sector administrativo se cumplan en armonía con las políticas gubernamentales, dentro de los principios de la presente ley y de conformidad con los planes y programas adoptados.*
>
> ***Artículo 105. Control administrativo. El control administrativo sobre las entidades descentralizadas no comprenderá la autorización o aprobación de los actos específicos que conforme a la ley competa expedir a los órganos internos de esos organismos y entidades".****(negrilla fuera de texto).*

De conformidad con la norma transcrita, si bien existe un control tutelar sobre las entidades descentralizadas que hacen parte de un Ministerio o Departamento Administrativo, carácter que en su momento ostenta el **Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia,** éste se encuentra destinado solo a asegurar y constatar que las funciones que adquieran ellas por especialidad se cumplan en armonía con las políticas gubernamentales, sin tener facultad legal para extender su autoridad respecto a su autonomía administrativa y presupuestal.

De lo anterior se desprende que la relación jurídica que existe entre el **fondo** y el Ministerio de Salud y Protección Social no es otra que la de la adscripción, figura que hace relación al grado de autonomía de que gozan los entes descentralizados por servicios[1] y que conlleva el control de tutela o control administrativo ejercido por las entidades del sector central sobre las descentralizadas, con el fin de que estas últimas encausen su actividad dentro del derrotero que exigen las metas y objetivos del poder ejecutivo, lo cual no implica la existencia de relación

[1] Sentencia C- 666 de 2000.



Carrera 13 No. 32-76 Código Postal 110311 Bogotá D.C
PBX: (57-1) 3305000 - Línea gratuita: 018000-910097 Fax: (57-1) 3305050 www.minsalud.gov.co

jerárquica o de subordinación entre **fondo** y mi representada, por el contrario se trataba de entidades autónomas e independientes que no pueden confundirse.

Si bien es cierto el literal h del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que los Ministerios actuarán como superior inmediato de los Superintendentes y Representantes Legales de Entidades descentralizadas adscritas o vinculadas, sin perjuicio de la función nominadora, también es cierto que dicha disposición fue declarada exequible por la Honorable Corte Constitucional de forma condicionada mediante Sentencia C-727 de 2000, bajo el entendido de que esta superioridad le confiere el control administrativo que es propio de la figura de la descentralización, y que debe entenderse dentro del contexto normativo completo de la Ley 489:

> *"…Para la Corte la presencia de un superior inmediato que ejerce un control administrativo, no implica que en su cabeza se radiquen las facultades de nombramiento y remoción del representante legal de las entidades descentralizadas, ni toca con la toma de decisiones que operen dentro de las competencias legales del organismo, pues una interpretación contraria desvirtuaría el mecanismo de la descentralización. Hace referencia, más bien y sobre todo, a la armonización y coordinación de políticas administrativas, como lo ordena la Constitución. En este sentido, tal control administrativo desarrolla plenamente el artículo 208 superior…"*

**EL CONCEPTO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y SU OBLIGACIÓN:**

Los conceptos por aportes patrono-laborales, son una forma de financiamiento de una prestación pensional, asociada al tiempo de servicios prestados por trabajador.

Nótese que la Ley 100 de 1993 señaló claramente en su artículo 22 *"**OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR**. El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y **trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador**, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno.*

*El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador."* Negrilla fuera del texto original.

Más adelante preciso en su artículo 24. "*Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo."* (Ver Sentencia de la Corte T-502 de 2020)

**DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES**

En este contexto, se trae a colación la Sentencia de la Corte Constitucional C - 895 de 02 de diciembre de 2009, con algunos apartes de relevancia jurídica:

> ***"(…) La protección constitucional de los recursos destinados a la seguridad social***
>
> *3.1.- El artículo 48 de la Constitución reconoce a **la seguridad social la doble condición de derecho irrenunciable** y de servicio público prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado. La seguridad social se dirige así a "propiciar la prosperidad de los asociados con apoyo en los programas que desarrollen los distintos gobiernos, los cuales deben estar dirigidos a permitir que el individuo y su familia pueda afrontar adecuadamente las contingencias derivadas de las enfermedades, la invalidez, el desempleo, el sub-empleo y las consecuencias de la muerte; a brindarle una adecuada protección a ciertos estados propios de la naturaleza humana como la maternidad y la vejez; y a ofrecerle unas condiciones*

*mínimas de existencia y recreación social que le permitan desarrollarse física y sicológicamente en forma libre y adecuada, facilitando de este modo su total integración a la sociedad".*

*3.2.- Con el propósito último de asegurar estándares mínimos en la realización de este derecho, el Constituyente previó el destino exclusivo de los fondos de la seguridad social, al señalar de manera expresa que "no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella" (art.48 CP).*

*Teniendo en cuenta este mandato superior, la jurisprudencia ha reconocido de manera uniforme y pacífica que los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social,* ***tanto en salud como en pensiones****, con independencia de la denominación que de ellos se haga (cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, copagos, tarifas, deducibles, bonificaciones, etc.), no pueden ser utilizados para propósitos distintos a los relacionados con la seguridad social debido a su naturaleza parafiscal. Al referirse al alcance del artículo 48 de la Constitución en este aspecto, la Corte ha explicado lo siguiente:*

*"En relación con dicho precepto superior [artículo 48 CP] la Corte Constitucional en numerosas decisiones de tutela ha estado llamada a examinar el tratamiento que se debe dar a los recursos de la seguridad social que se encuentren depositados en entidades financieras en liquidación para asegurar precisamente el mandato de destinación y utilización exclusiva de los recursos de las instituciones de seguridad social.*

*Al respecto la Corte ha hecho énfasis en i)* ***la naturaleza parafiscal de los recursos de la seguridad social tanto en materia de salud como en pensiones*** *ii) en el tratamiento particular que debe dársele a dichos recursos en los procesos de liquidación de las entidades financieras y iii) en la imposibilidad de asimilar el caso de los depósitos de recursos parafiscales de la seguridad social en las entidades financieras con las indemnizaciones debidas por concepto de contratos de reaseguro de las enfermedades de alto costo.*

*3.1.2 Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud (C-577/97, C-542/98, T-569/99, C-1707/00)* ***como en pensiones*** *(C-179/97), llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (C-086/02, C-789/02)"[4]. (Resaltado fuera de texto).*

*De esta manera, es claro que los recursos destinados a la seguridad social, ya sea que provengan de aportes directos de los empleadores, de los trabajadores, del Estado o de cualquier otro actor del sistema, tienen necesariamente destinación específica. Lo anterior, como ya lo ha explicado la jurisprudencia de esta Corporación, no significa que los fondos de la seguridad social deban reinvertirse de manera individual en quien efectuó el aporte, puesto que "la destinación específica de los recursos de que se habla debe entenderse de manera global como la necesidad de invertirlos nuevamente en el sistema, en beneficio de todos aquellos que se favorecen de él".*

*3.3.- Así mismo, la prohibición de destinación diferente guarda relación directa con el principio de sostenibilidad del sistema de pensiones, incorporado al artículo 48 Superior en el Acto Legislativo 1 de 2005, según el cual "el Estado garantizará los derechos,* ***la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional****, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas".*

*En efecto, en virtud de este principio se exige al Legislador que cualquier regulación legal futura **preserve el equilibrio financiero del sistema de pensiones**, lo que coincide con el mandato de destinación específica, que en esencia busca "precaver su desviación y la consecuente desfinanciación del sistema". De esta manera, sólo será posible diseñar un sistema que sea potencialmente viable en términos económicos, si se garantiza como mínimo que los recursos de la seguridad social tendrán ese único destino, evitando un desfinanciamiento para asumir otro tipo de obligaciones o prestaciones a cargo del Estado.*

*3.4.- En este orden de ideas, la Corte concluye que el artículo 48 de la Constitución fija al Legislador límites de regulación, no sólo en cuanto al destino de los recursos de la seguridad social en general, **sino específicamente en cuanto se refiere a la sostenibilidad financiera del sistema pensional**. Y es desde esta perspectiva que deberá examinarse la validez constitucional de las expresiones aquí demandadas."* Negrilla fuera del texto original.

Por lo expuesto anteriormente, queda totalmente claro que, para garantizar la conformación material de un derecho pensional de carácter **irrenunciable e imprescriptible**, las administradoras **y entidades que asuman responsabilidades del Sistema General de Pensiones** acudiendo a las facultades de que trata el artículo 57 de la Ley 100 de 1993 para efectos del cobro coactivo, **podrán hacerse exigibles aquellos aportes correspondientes a los tiempos servidos por los trabajadores afiliados al Sistema durante toda la vida laboral**.

## IV. EXCEPCIONES

Me permito proponer las siguientes excepciones:

**1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.**

Consistente en que el Ministerio de Salud y Protección Social no tuvo directa ni solidariamente que ver con la expedición del acto administrativo demandado y la presunta relación existente entre el demandante (parte pasiva) y el **Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia (parte activa respecto a la emisión del acto administrativo que aquí se debate).**

En el presente caso, los presuntos hechos se relacionan particularmente con el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia, no con la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social, razón por la cual no puede legalmente ser vinculada como parte pasiva. El Ministerio de Salud y Protección Social **no puede responder por actos administrativos emitidos por otra entidad**, en la que fungió una entidad descentralizada como es el **fondo**, que goza de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, lo cual le permitía un ejercicio autónomo de sus facultades legales y constitucionales y la asunción de sus responsabilidades.

De conformidad con lo anterior, no puede predicarse que exista el nexo causal entre el actuar del Ministerio y las situaciones de hecho en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, que permitan inferir responsabilidad alguna de la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social.

No debe perderse de vista que la legitimidad en la causa es un presupuesto procesal de la demanda que se colma al dirigir la pretensión contra quien por ser sujeto de la relación jurídica sustancial se pretende derivar responsabilidad.

En el presente caso, las peticiones adelantadas dentro de la demanda, no son por cuenta del Ministerio de Salud y Protección Social; por lo tanto, no puede legalmente ser vinculado como sujeto de la relación procesal ni por parte activa, ni por pasiva.

No siendo una obligación de la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social, exigir los procesos coactivos por conceptos aportes patronales de las actuaciones que realizaba el **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDICACIÓN**, no hay razón legal alguna para que se afirme que en el presente caso se dan los presupuestos constitutivos de responsabilidad.

Corolario a lo citado, no puede predicarse que exista el nexo causal entre el actuar del Ministerio de Salud y Protección Social y lo pretendido por la demandante. Así las cosas, si durante el debate se llegare a probar derecho a las pretensiones de la demandante, la misma no puede declararse en cabeza de La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social.

No debe perderse de vista que la legitimidad en la causa es un presupuesto procesal de la demanda que se colma al dirigir la pretensión contra quien por ser sujeto de la relación jurídica sustancial se pretende derivar responsabilidad, frente a este tema el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, Consejero ponente doctor MAURICIO FAJARDO GOMEZ, Radicación número: 52001-23-31-000-1997-08625-01 (19753) de veintiocho (28) de julio de dos mil once (2011), Actor: Carlos Julio Pineda Solís, Demandado: Nación-Consejo Superior de la Judicatura, ha precisado:

> *"(...) toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.*
>
> *De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores[2].*
>
> *En suma,* ***en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda*** *o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra[3].(...)" (negrilla fuera de texto original).*

Además, mirando el asunto desde la perspectiva del nexo causal se recalca que éste primer término consiste en la determinación de la causa eficiente y determinante en la producción de un presunto daño. La jurisprudencia y la doctrina han indicado que, para poder atribuir un resultado a una persona, ya sea natural o jurídica, como producto de su acción es indispensable definir si aquél aparece ligado a ésta por una relación de causa a efecto, no simplemente desde el punto de vista fáctico sino jurídico.

---

[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.

[3] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación número: 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación número: 66001-23-31-000-1996-03263-01(15352).



Carrera 13 No. 32-76 Código Postal 110311 Bogotá D.C
PBX: (57-1) 3305000 - Línea gratuita: 018000-910097 Fax: (57-1) 3305050 www.minsalud.gov.co

No teniendo el Ministerio de Salud y Protección Social participación en la expedición del acto administrativo demandado en virtud del cual la parte demandante solicita el restablecimiento de sus derechos, mal puede pretenderse afirmar que mi representando debe asumir algún tipo de responsabilidad, máxime si se tiene en cuenta que el mismo fue expedido por una entidad se repite que goza de personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, calidades que impiden a este Ministerio revocar o modificar las decisiones emitidas por susodicho FONDO, máxime si se tiene en cuenta que dichas decisiones gozan de presunción de legalidad, es decir se considera que el acto administrativo fue expedido en desarrollo de las facultades legales y administrativas que le fueron otorgadas al FONDO.

En conclusión, el Ministerio de Salud y Protección Social como órgano de dirección en materia de salud pública, solo está llamado a desarrollar las atribuciones que por mandato constitucional y legal le han sido conferidas, por lo tanto, este ente Ministerial no se encuentra legitimado desde ningún punto de vista en el caso objeto de estudio.

**2. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN YA QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO FUE EMITIDO POR OTRA ENTIDAD.**

El Ministerio de Salud y Protección Social no es responsable de las actuaciones administrativas proferidas por el **Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia**, entidad que profirió el acto administrativo aquí demandado, por cuanto dicha entidad tiene plena autonomía para tomar las decisiones que correspondan para el ejercicio de sus funciones, igualmente la jurisprudencia ha señalado las características de estas entidades así:

La Honorable Corte Constitucional en sentencia C-784 de 18 de agosto de 2004, Magistrado ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis establece el régimen jurídico aplicable a las entidades descentralizadas y la autonomía que les es reconocida:

> *"Al respecto cabe recordar que la formulación del Estado colombiano como "una República unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales" tiene un valor central dentro de la estructura política trazada a partir de la expedición de la Constitución de 1991.*
>
> *En este sentido la Corte ha explicado que la descentralización administrativa obedece a "una concepción política y a una técnica y modelo de organización y funcionamiento de la rama ejecutiva del poder público, la cual implica la concreción o asunción, bajo un régimen de autonomía, por organismos que son personas jurídicas, de funciones o potestades propias del Estado o de actividades que comportan la actuación de éste en el campo de la actividad privada, o la gestión y satisfacción de necesidades regionales y locales*".

Vale la pena anotar que el acto administrativo objeto de la presente Litis fue proferido **Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia**, y no por esta cartera ministerial.

Una vez efectuado el análisis correspondiente de los fundamentos de hecho del presente Medio de Control, se tiene que el acto administrativo que aquí se demanda y respecto del cual se pretende el restablecimiento de los derechos que el demandante estima vulnerado, es de vital importancia resaltar **que este no fue proferido por el Ministerio de Salud y Protección Social**, por tal razón, si bien lo acá debatido trata de la negativa del **fondo**, también lo es, que la entidad a la que defiendo no tuvo injerencia alguna, en la expedición del acto administrativo aquí demandado, ni conocimiento de las circunstancias que rodearon el trámite de dicho acto administrativo.

En este orden de ideas, en ningún momento mí prohijada fue parte o tuvo conocimiento de las gestiones adelantadas que dieron lugar al acto administrativo atacado, por lo que desconocemos en forma absoluta las circunstancias de hecho o de derecho que rodeó la expedición del mismo, pues este Ministerio no fue la entidad que los expidió.

Por lo anterior, no le asiste legitimación en la causa por pasiva al Ministerio de Salud y Protección Social, para revocar el acto administrativo objeto de Litis y restablecer el derecho pretendido por la parte demandante, toda vez que el mismos, se repite, fue expedido por el **fondo**, persona jurídica capaz de adquirir derechos y obligaciones de acuerdo a las disposiciones normativas que definieron sus funciones y competencias, no sería éste el llamado a responder por los presuntos perjuicios causados al demandante si a ello hubiere lugar.

**3. INEXISTENCIA DE LA SOLIDARIDAD ENTRE LAS DEMANDADAS.**

No existe en todo el ordenamiento jurídico una norma que consagre la solidaridad entre el **Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia** y el Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que no es dable presumir tal solidaridad, que no deriva de ninguna norma positiva.

Las fuentes de las obligaciones pasivas solo lo son en virtud de la voluntad de las partes y de la ley**.** La voluntad de las partes debe expresarse diáfanamente en los contratos o en negocios jurídicos válidos. De ahí concluimos que la **SOLIDARIDAD POR PASIVA NO SE PRESUME**, y que debe establecerse como se ha indicado.

En cuanto a la segunda fuente, tenemos que es la ley, por si misma y de pleno derecho la que la establece.

De conformidad con lo establecido en la ley 151 de 1959, en el decreto ley 3130 de 1968 y más recientemente, en la ley 489 de 1998, las empresas y establecimientos públicos descentralizados, cualquiera sea la forma de administración adoptada, son parte de la administración pública; sus bienes y rentas, por su origen, son desmembración del patrimonio público y están afectos a la prestación de servicios públicos; y disponen, además de personería jurídica y autonomía administrativa, de patrimonio propio, aportado directa o indirectamente por el Estado (la Nación, en el nivel central). Por lo demás, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado, como integrantes de la rama ejecutiva del poder público, gozan de los mismos privilegios y prerrogativas que se reconocen a la Nación (Ley 489, artículos 80 y 87).

Adicionalmente no puede predicarse la existencia de sucesión ni sustitución procesal, al no existir los elementos de la naturaleza de estas instituciones que la ley establece.

**4. LA INNOMINADA**

Me permito solicitar al señor Juez que, si de la valoración de las condiciones fácticas que se observan en este proceso, logra determinar la existencia de hechos que constituyan una excepción, se sirva reconocerla de forma oficiosa como corresponda, conforme a lo dispuesto por el artículo 282 del Código General del Proceso.

> ***"ARTÍCULO 282. RESOLUCIÓN SOBRE EXCEPCIONES.*** *En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.*
>
> *Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada.*
> *Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella excepción resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia.*
>
> *(…)"*

Por tanto, si después de la valoración del proceso y de las pruebas, aparece probada cualquier otra excepción, solicito declararla acorde con la norma transcrita.

## V. PETICION

Conforme a las razones esbozadas en precedencia, con todo respeto le solicito a la **señora Juez**, declarar probadas las excepciones propuestas y exonerar al Ministerio de Salud y Protección Social de toda responsabilidad en el caso que se analiza y en consecuencia condenar en costas a la parte demandante.

## VI. PRUEBAS

Téngase como pruebas las aportadas al proceso por la parte demandante, en cuanto a derecho correspondan.

## VII. ANEXOS

Me permito adjuntar copia de la Escritura Pública Poder General Número 9381 otorgada el 29 de agosto de 2022, avalada en la Notaria 38 del Círculo de Bogotá D.C., legalmente suscrita por el Director Jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social.

En la citada escritura se destacan los apartes de la Resolución No. 1960 de 2014 "*Por medio del cual se efectúan unas delegaciones y se regula la constitución de apoderados para la representación judicial y extrajudicial del Ministerio de Salud y Protección Social",* así como lo relacionado con el Decreto No. 4107 de 2011, en lo que atañe a las funciones del Ministerio de Salud y Protección Social, al igual que la Resolución 1488 de 2022 "*Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario",* como también el Acta de posesión del Doctor GABRIEL BUSTAMANTE PEÑA, Director Jurídico.

## VIII. NOTIFICACIONES

La demandada, Nación - Ministerio de Salud y Protección Social, y el suscrito apoderado, recibiremos notificaciones en la Carrera 13 No. 32-76 Piso 10, Edificio Urano, Bogotá D.C.
Correo electrónico: notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co
cgarcias@minsalud.gov.co el cual se encuentra en el registro de abogados https://sirna.ramajudicial.gov.co y/o en c.andres.abogado@gmail.com **Celular: 3125188373**

De la Honorable Juez, con el debido respeto.

**CARLOS ANDRÉS GARCÍA SAENZ**
C.C. No. 80.115.748 de Bogotá D.C.
T.P. No. 223.034 del C. S. de la J.
Correo electrónico: cgarcias@minsalud.gov.co

*Carrera 7 No. 17-01 Oficina 709*
*Edif. Antiguo Colseguros - Bogotá D.C.*
*Tel. 601 – 7462015 – 3147417613*
*www.trujillopolania.com*

Señor(s):
**JUZGADO 41 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO - SECCIÓN CUARTA DE BOGOTÁ D.C.**
E.S.D.

**Ref. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
**Radicación:** 11001333704120230006500
**Demandante:** INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA LATINA - UNILATINA
**Demandado: FPS - FONDO DE PASIVO SOCIAL - FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**

**MARIA CAMILA CAMARGO RUEDA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la Ciudad de Bogotá D.C., identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 1.090.492.389, expedida en Cúcuta – Norte de Santander, Abogada titulada e inscrita, portadora de la Tarjeta Profesional 340.484 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada del **FPS- FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**, con **Nit. 800.112.806-2**, conforme al poder legalmente conferido allegado al proceso, estando dentro del término de legal, me permito contestar demanda en los siguientes términos:

## FRENTE A LOS HECHOS

1. **NO ES CIERTO,** toda vez que, el mandamiento de pago No. 0250 del 15 de febrero de 2001 se hizo conforme a la liquidación certificada de la deuda No. 210 y 01210, como se mencionan en cada una respectivamente, la primera por favor de $145.225.277 y $1.753.834, así mismo en el mismo auto se señala que: *"Esta deuda es por conceptos de aportes Patrono-laborales en mora y/o extemporáneos, incluyendo el valor de los intereses liquidados hasta la fecha indicada anteriormente, valor que deberá liquidarse al momento del pago a la tasa que esté vigente según las normas legales.*

   *Que dicha obligación es clara, expresa y exigible, por lo que es procedente librar mandamiento de pago, para que, mediante los trámites del proceso administrativo coactivo, contenido en el libro V del estatuto Tributario, de acuerdo con lo normado por el artículo 54 de la ley 383 de 1997, se obtenga su pago".*

   Así mismo no es de recibo por parte de la Entidad que el demandante indique que solo hasta el 05 de octubre de 2022 tuvo conocimiento de las liquidaciones certificadas, ya que según consta en el expediente del proceso de cobro coactivo el mandamiento de pago en cita fue notificado al ejecutado hoy aquí demandante el día 14 de mayo de 2001.

2. **ES CIERTO,** conforme se puede evidenciar en la documentación contenida en el expediente del cobro coactivo y que es aportado a la presente contestación.

3. **ES CIERTO,** conforme se puede evidenciar en la documentación contenida en el expediente del cobro coactivo y que es aportado a la presente contestación.

4. **ES CIERTO,** conforme se puede evidenciar en la documentación contenida en el expediente del cobro coactivo y que es aportado a la presente contestación.

5. **ES CIERTO,** conforme se puede evidenciar en la documentación contenida en el expediente del cobro coactivo y que es aportado a la presente contestación.

6. **ES CIERTO,** toda vez que a la fecha el ejecutado hoy aquí demandante no ha efectuado el pago por concepto del proceso de cobro coactivo iniciado, es por ello, que la Contaduría General de la Nación lo certifica en el boletín de deudores morosos, argumento este que dio a conocer el **FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA** en memorial con radicado C.C – 20201340210061 del 26 de noviembre de 2020.

7. **ES CIERTO,** conforme se puede evidenciar en la documentación contenida en el expediente del cobro coactivo y que es aportado a la presente contestación.

8. **ES CIERTO,** conforme se puede evidenciar en la documentación contenida en el expediente del cobro coactivo y que es aportado a la presente contestación.

9. **NO ES CIERTO,** toda vez que el acto administrativo referente al mandamiento de pago es un acto de tramite el cual no es susceptible del fenómeno de perdida de la fuerza de ejecutoria, debido a que dicho fenómeno solo opera frente a los actos administrativo de carácter definitivo; es de destacar que el mandamiento de pago posee esa naturaleza de acto de tramite en razón a que inicia el procedimiento de cobro coactivo.

**SOBRE LAS PRETENSIONES.**

1. Me permito manifestar que me opongo a la pretensión que indica *"Se declare la nulidad del acto administrativo identificado con el Radicado GITCC – 2022 01320245421 del 20 de diciembre de 2022, por el cual la funcionaria ejecutora – jefe Oficina Asesora Jurídica del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, negó la solicitud de pérdida de ejecutoria del Mandamiento de Pago 0250 del 15 de febrero de 2001, emitido por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contra UNILATINA, en cuantía de $146.979.111."* Al respecto fundamento mi oposición frente a esta pretensión toda vez que el acto administrativo del cual se pretende la nulidad actuó en derecho al negar la pérdida de ejecutoria del mandamiento de pago máxime cuando se han librado actuaciones administrativas tendientes a lograr la ejecución del proceso coactivo como lo es la expedición del auto que ordena seguir adelante con la ejecución.

**2.** Me permito manifestar que me opongo a la pretensión que indica *"A título de restablecimiento del derecho se declare la pérdida de ejecutoria del Mandamiento de Pago 0250 del 15 de febrero de 2001, expedido por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contra UNILATINA, en cuantía de $146.979.111."* Fundamento mi oposición a esta pretensión toda vez que el mandamiento de pago debe considerarse como un acto de tramite ya que busca dar impulso al proceso de cobro coactivo, frente al cual **no** opera la perdida de ejecutoria debido a que es predicable sobre aquello actos administrativos de carácter definitivo, por lo cual seria viable declara la nulidad frente a un fenómeno que a todas luces no es aplicable al acto de mandamiento de pago.

**2.1** Me opongo a la pretensión "Se ordene a la parte demandada retirar a UNILATINA del Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME.", por consiguiente, solicito al señor juez despacharla desfavorable como consecuencia de la improsperidad de la pretensión anterior.

**3.** Me opongo a la pretensión *"Se condene a la parte demandada al pago de las costas que se causen con ocasión de la presentación de la demanda y el proceso mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 361 y normas concordantes del CGP"* Al respecto fundamento mi oposición con base en las mismas razones expuestas en las manifestaciones a las pretensiones anteriores.

**FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO DE LA DEFENSA**

Que, haciendo revisión exhaustiva del expediente de cobro coactivo No. 411 iniciado contra **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA LATINA - UNILATINA** Demandado por concepto de cuotas partes pensionales ISS Patrono en calidad deudor; se puede establecer que se hizo efectivo el cobro coactivo con la notificación del Mandamiento No. 0250 del 15 de febrero de 2001, por la suma de **CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS ($146.979.111) M/CTE** por concepto de cuotas partes pensionales ISS patrono, adeudados por la **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA LATINA - UNILATINA** y conforme al Auto JC No. 790 del 29 de junio de 2022 " Por medio del cual se ordena seguir adelante con la ejecución dentro de un procedimiento administrativo de Cobro Coactivo" por la suma de **CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS ($146.979.111) M/CTE.**

El ejecutado **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA LATINA - UNILATINA** peticionó al **FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES DE COLOMBIA** el 25 de noviembre de 2022 para que este declarara la excepción perdida de ejecutoria del mandamiento de pago No. 0250 del 15 de febrero de 2001, a lo que el Fondo mediante oficio con Radicado No. *GITCC*_*20220132024542l*del 20 de diciembre de 2022 le indica que no es viable entre otros argumentos debido a que:

En lo concerniente a la solicitud de perdida de ejecutoria de las acciones contenidas en el proceso de la referencia es necesario reiterar que los actos procesales dictados en desarrollo del trámite de ejecución se encuentran en firme y cuentan con presunción de legalidad. El proceso administrativo de cobro coactivo en aras de garantizar el derecho de contradicción y seguridad jurídica establece etapas procesales especiales las cuales son perentorias y preclusivas, razón por lo cual, no le es dable al deudor, acudir a herramientas jurídicas para revivir términos y oportunidades procesales agotadas en el desarrollo mismo del proceso.

Sobre el particular el artículo 829 del Decreto 624 de 1989 establece lo siguiente:

> ***Artículo 829. EJECUTORIA DE LOS ACTOS.*** *Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:*
> *1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.*
> *2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.*
> *3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y*
> *4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.*

Prosiguiendo en indicar que el numeral 3 del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece expresamente que los actos administrativos sobre los cuales, una vez en firme, no se hayan adelantado actuaciones correspondientes a su ejecución, pierden su fuerza de ejecutoria, no obstante lo anterior, es evidente que en el caso en concreto, no se han producido los presupuestos de que trata la disposición en comento, pues con posterioridad a la firmeza del Mandamiento de Pago, se han realizado diferentes actuaciones administrativas tendientes a obtener su ejecución, como la expedición de la Auto No. 790 de fecha 29 de junio de 2022, a través de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución.

De conformidad con lo establecido por la honorable Sala de Lo contencioso Administrativo Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia de radicado 25985, Consejera Ponente Myriam Stella Gutiérrez Argüello, dispuso frente a perdida de ejecutoria del acto administrativo de mandamiento de pago:

> *"La pérdida de ejecutoriedad no es predicable del mandamiento de pago, en tanto no se trata de un acto de carácter definitivo creador de situaciones jurídicas por sí mismo, sino que constituye un acto necesario para la ejecución del acto administrativo definitivo y ejecutable.*
>
> *Según lo señaló esta Sección, el mandamiento de pago debe considerarse un acto de trámite porque se limita a iniciar el procedimiento de cobro coactivo."*

Frente al mismo asunto el honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de octubre de 2006 dentro del proceso 2000-00959 (14438), Consejero Ponente Juan Ángel Palacio Hincapié, se decantó que:

*"la pérdida de fuerza ejecutoria solo procede frente a los actos administrativos que tienen carácter ejecutivo y ejecutorio, como son los títulos ejecutivos, pero no frente a los actos expedidos en el cobro coactivo, como el mandamiento de pago"*

Sumado a lo anterior, el Artículo 66 del Código Contencioso Administrativo dispone que

> ***ARTICULO 66 PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA*** *Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:*
> *1. Por suspensión provisional.*
> *2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.*
> ***3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.***
> *4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.*
> *5. Cuando pierdan su vigencia.*

En dicho articulo se refiere claramente a los actos administrativos de carácter definitivos ya que estos crean, extinguen o modifican una situación jurídica y poseen firmeza por su propia naturaleza.

En este orden de ideas es pertinente destacar que el fenómeno de la perdida de ejecutoria al poseer el efecto de hacer imposible ejecutar un acto administrativo, se tiene per sé que es determinante que sea aplicable frente a aquellos actos definitivos.

Por lo cual se tiene plena claridad que el acto administrativo de mandamiento de pago al ser un acto de tramite no crea, extingue o modifica situaciones jurídicas, sino que en el proceso de cobro coactivo exclusivamente efectúa la labora de ser ese acto de inicio por lo cual no es susceptible de la aplicabilidad de dicho fenómeno de la perdida de la ejecutoria.

Además de ello se tiene que tener de presente que por la naturaleza de los créditos a favor sujetos a cobro mediante el proceso de cobro coactivo son por concepto de aportes patrono – laborales en mora o extemporáneos, los cuales hacen parte de los aportes a la seguridad social que los empleadores dejan de cancelar afectan directamente a los trabajadores que cotizaban al fondo común de la Seguridad Social Integral (SSI), es decir, a un grupo en específico, aquellos al régimen de prima media con prestación definida, es decir *a los aportes de los afiliados y sus rendimientos que constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia.*

Por su parte el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo señala:

> ***"ARTICULO 14. CARACTER DE ORDEN PÚBLICO. IRRENUNCIABILIDAD.*** *Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley".*

Carrera 7 No. 17-01 Oficina 709
Edif. Antiguo Colseguros - Bogotá D.C.
Tel. 601 – 7462015 – 3147417613
www.trujillopolania.com

El Derecho de la Seguridad Social Integral por encontrarse íntimamente relacionado con el trabajo humano, también configura un régimen jurídico de orden público cuyos derechos y prerrogativas por mandato legal, son irrenunciables y no pueden ser modificados por convenio entre particulares.

La naturaleza jurídica de las cuotas partes pensionales es de carácter laboral por lo tanto corresponden a créditos privilegiados, tal como lo ha señalado la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-895/09, indicando lo siguiente:

> *"En esa medida, la obligación de concurrencia de las diferentes entidades para contribuir al pago pensional a través del sistema de cuota parte no puede extinguirse mediante la prescripción, porque tiene un vínculo directo con el derecho, también imprescriptible, al reconocimiento de la pensión. Sin embargo, los créditos que se derivan del pago concurrente de cada mesada pensional individualmente considerada sí pueden extinguirse por esta vía (derecho al recobro), en tanto corresponden a obligaciones económicas de tracto sucesivo o naturaleza periódica entre las diferentes entidades responsables de contribuir al pago pensional. No en vano el artículo 126 de la Ley 100 de 1993 señaló expresamente que los créditos causados o exigibles por concepto de cuotas partes pensionales "pertenecen a la primera clase del artículo 2495 del Código Civil y tienen el mismo privilegio que los créditos por concepto de salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones laborales".*

Los recursos destinados a la seguridad social, ya sea que provengan de aportes directos de los empleadores, de los trabajadores, del Estado o de cualquier otro actor del sistema, tienen necesariamente destinación específica, que no significa que los fondos de la seguridad social deban reinvertirse de manera individual en quien efectuó el aporte, puesto que la destinación específica de los recursos de que se habla debe entenderse de manera global como la necesidad de invertirlos nuevamente en el sistema, en beneficio de todos aquellos que se favorecen de él.

En este orden de ideas, los aportes a la seguridad social que los empleadores dejan de cancelar afectan directamente a los trabajadores que cotizaban al fondo común de la Seguridad Social Integral (SSI), es decir, a un grupo en específico.

Los aportes patrono laborales (Pensión, Salud y ARL) de los cuales efectuaba el cobro el extinto ISS, y que hoy el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia asume por competencia, corresponden a aquellos realizados al régimen de prima media con prestación definida, es decir *a los aportes de los afiliados y sus rendimientos que constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia.*

Con fundamento en lo expuesto, la naturaleza jurídica del acto administrativo de mandamiento de pago se tiene que dejar por sentado que no es susceptible del fenómeno de la perdida de la ejecutoria dado a que como lo ha indicado el Consejo de Estado no es un acto de carácter definitivo.

Ahora si se procede a decretar la nulidad del acto administrativo y restablecimiento del derecho se tendría dejaría en vela los créditos a favor pertenecientes al fondo común de la Seguridad Social Integral (SSI), es decir, perjudicando a un grupo en específico, ya que dichos valores son aportes patronales dejados de cancelar al sistema de seguridad Social.

Es claro para el Fondo De Pasivo Social De Ferrocarriles Nacionales De Colombia que este medio de control no está llamado a prosperar, por las razones anteriormente expuestas.

**PETICIONES**

1. Solicito al señor juez que se despachen desfavorablemente las suplicas de la demanda por los argumentos esgrimidos.

2. Se condene en costas, costos y agencias en derecho que genere el presente proceso a la parte actora.

**EXCEPCIONES DE MÉRITO**

**1. BUENA FÉ DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.**

La entidad aquí demandada ha actuado de buena fe, conforme a dicha actuación como principio regulado por el artículo 83 de la Constitución Política y exige que "*las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas"*.

Al respecto, la Corte Constitucional la ha definido como "*el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos*".

La Corte Suprema de Justicia, también ha indicado en la sentencia de tutela del 08 de junio de 2017, en dicha oportunidad consideró sobre la buena fe simple, que equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, y corresponde al Estado desvirtuarla:

> *"nuestro ordenamiento constitucional y, especialmente, el régimen civil ha desarrollado además del concepto de buena fe como mandato constitucional general, la figura de buena fe simple como principio y forma de conducta. Esta equivales a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, es la que se exige normalmente a las personas en todas sus actuaciones"*

Con base en lo anterior, la entidad aquí demandada ha actuado de buena fe, toda vez que ha actuado de manera legal y ajustada a pleno derecho continuando con el cobro coactivo que a todas luces protege al trabajador para su adquisición de derecho pensional.

**2. FALTA DE FUNDAMENTO FÁCTICO Y JURÍDICO QUE SOPORTE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.**

A partir de los hechos establecidos en el escrito de demanda, con los cuales se pretende sustentar las pretensiones, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, no encuentra ninguna imputación que deba ser destinada en su contra, ya que ninguno de los hechos relatados en la demanda refiere un incumplimiento de las obligaciones a su cargo, por cuanto la Entidad ha obrado en debida y diligente forma, en atención de los principios constitucionales y legales sobre los procedimientos de Cobro Coactivo.

Es pertinente mencionar que la carga de definir con precisión y claridad los fundamentos fácticos de la demanda corresponde a quien la impetra, solo así se garantiza el debido proceso de la contraparte.

De manera que el contenido de dicha afirmación genérica solo podía ser llenado por la parte actora, que, sin embargo, no lo hizo, aun cuando es de su cargo cumplir con el principio de preclusión y la regla de señalamiento que le imponen exhibir de manera clara y precisa lo que se pide y con fundamento en qué se pide, carga que, en virtud del principio de congruencia, no puede ser suplida por el juez, son pena de vulnerar el derecho de defensa y contradicción de la contraparte.

**3. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CONCEPTOS PARAFISCALES**

La naturaleza jurídica de las cuotas partes pensionales es de carácter laboral, por lo tanto corresponden a créditos privilegiados la obligación, por lo tanto la obligación asumida por el **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA LATINA - UNILATINA** hacia el Extinto ISS – hoy Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, es de tipo PARAFISCAL, pues al tener los aportes pensionales plena e indiscutible relación con el derecho imprescriptible e irrenunciable a la pensión, motivo por el cual, los fenómenos jurídicos extintivos de derechos no afectan su reconocimiento y cobro.

**4.EXCEPCIONES GENÉRICAS:**

Las demás demostradas dentro del proceso

*Carrera 7 No. 17-01 Oficina 709*
*Edif. Antiguo Colseguros - Bogotá D.C.*
*Tel. 601 – 7462015 – 3147417613*
*www.trujillopolania.com*

**PRUEBAS**

Sírvase señor Juez decretar y tener como pruebas los siguientes documentos:

- Expediente cobro coactivo 411 (digital).

La entidad demandada queda atenta y facilitará toda clase de documentación que su señoría pueda requerir para dirimir el conflicto expuesto.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Ley 111 de 1996, Decreto 624 de 1989, normas y jurisprudencia citadas y demás normas concordantes y aplicables al presente caso.

**ANEXOS**

1. Memorial de poder otorgado por mi mandante
2. Resoluciones que acreditan el poder otorgado
3. Documentos relacionados en el acápite de pruebas

**NOTIFICACIONES**

La suscrita apoderada, recibirá notificaciones únicamente en la en la Carrera 7 No. 17-01, Oficina 709, Bogotá D.C. Teléfonos. 3188171069, correos electrónicos mariacamargodefensajudicial@gmail.com – mariacamargo1995@gmail.com.

Cordialmente,



**MARIA CAMILA CAMARGO RUEDA**
C.C 1.090.492.389 de Cúcuta – Norte de Santander
T.P 340.484 C.S.J
Tel: 3188171069
e-mail:mariacamargo1995@gmail.com – mariacamargodefensajudicial@gmail.com